

UNA TRAGEDIA SIN HÉROES

La derrota de los partidos y el origen de los independientes.
Perú, 1980-1992.

Nicolás Lynch

Febrero de 1999

A Corinne

Indice

Prefacio	7
PRIMERA PARTE: El enfoque.....	11
I. Cómo estudiar a los partidos políticos.....	12
1. Los partidos y la crisis de la política.	12
2. La razón normativa	15
3. El objeto de estudio.....	16
4. La ilusión electoral.....	18
5. Entre las estructuras y los actores	20
6. El concepto de partido político	28
7. Partidos y sistemas de partido.....	33
8. Sistemas de partido y sistemas electorales	37
9. Sistemas de partido y tipo de régimen.	40
10. El tipo de partido y la particularidad latinoamericana.....	44
11. Crisis de los partidos y representación política.	50
12. Los Aoutsiders@ como alternativa a la crisis de representación	59
13. Partidos, institucionalización y consolidación democráticas.....	69
SEGUNDA PARTE: La fractura	73
II. El horizonte histórico de los partidos en el Perú.....	74
1. Los partidos como variable dependiente	74
2. Los elementos de la fractura histórica	79
3. De la democracia conservadora al populismo sin partido.	86
4. El nuevo escenario: la Asamblea Constituyente de 1978.	91
TERCERA PARTE: Los actores	99
III. Los partidos hacia la crisis: consideraciones previas	100
1. Los partidos como variable independiente	100
2.)Polarización inevitable?.....	102
3. La agudización de la desigualdad social.....	105
4. El cambiante electorado de los ochentas	108
5.)Qué le interesa ver a la gente en los partidos?	115
IV. El regreso del populismo conservador.....	126
1. Belaúnde: un caudillo congelado.....	126
2. Las recetas del FMI y sus descontentos.....	129
3. La violencia desconocida.....	138
4. Coaliciones imposibles.	142
5. El saldo negativo.....	143

V. El fracaso del centro paradigmático.....	148
1. El joven que sabía más que su partido.....	148
2. La heterodoxia personalizada.	152
3. Cuando los vaivenes matan.....	159
4. Yo mismo soy.	163
5. El viraje hacia el abismo.	170
VI. Izquierda Unida o la democracia como coartada.....	173
1. Una creación pragmática.	173
2. El problema de la ambigüedad ideológica.....	175
3. La convivencia de dos formas de representación.	176
4. Entre la denuncia y la propuesta.	181
5. La incapacidad de dirección política.	185
VII. Los que golpean desde afuera	193
1. Partidos revolucionarios antisistémicos.....	193
2. Guerra y democracia.	194
3. La incidencia de los grupos armados.	197
VIII. El reino de los independientes	201
1. Los independientes que se convirtieron en <i>insiders</i>	201
2. El <i>outsider</i> de éxito limitado.....	205
3. El cielo es el límite.....	209
4. <i>Outsider</i> + poderes fácticos: de coalición de gobierno a régimen político.....	212
Conclusión	224
Bibliografía	231

Lista de cuadros

Cuadro No. 1 Participación de cada componente del Índice de Desarrollo Humano.	106
Cuadro No. 2 Ingreso Nacional por tipo de ingreso. 1970-1989 (%).	107

Cuadro No. 3: Votación nacional por partido (1978 - 1990).....	110
Cuadro No. 4: Porcentaje de votantes en relación a la población (1872 - 1990).....	112
Cuadro No. 5: Perú: huelgas, trabajadores afectados y horas-hombre perdidas, 1979-1994.....	117
Cuadro No.6: Perú: Devaluación e inflación, 1980-1993.....	119
Cuadro No. 7: Perú: Acciones subversivas a nivel nacional, en Lima y Ayacucho.	120
Cuadro No. 8: Propuesta de concertación formulada por Alan García a los partidos.....	121
Cuadro No. 9: Acuerdo de principios para facilitar la gestión del próximo presidente.....	122
Cuadro No. 10: Temas a considerarse en dicho acuerdo.	122
Cuadro No. 11:)Todos los sectores políticos firmarían dicho acuerdo?	123
Cuadro No. 12: Indicadores básicos del sector externo. 1978-1982.....	129
Cuadro No.13: Deuda externa total, 1978-1994	131
Cuadro No. 14: Índice de sueldos y salarios reales	133
Cuadro No. 15: PEA en Lima Metropolitana según nivel de empleo.....	133
Cuadro No. 16 Paros Nacionales 1977-1984.	135
Cuadro N1 17: Ciclos de actividad huelgística 1969 - 1984.....	135
Cuadro N1 18: PEA asalariada y no asalariada en Lima Metroplitana	136
Cuadro N1 19: PEA ocupada en Lima Metropolitana por categoría de ocupación	136
Cuadro N1 20: PEA en Lima Metropolitana según segmentación del mercado de trabajo	137
Cuadro No.21: Muertes registradas en acciones subversivas, según víctima, 1980-1995.....	140
Cuadro N1 22: Perú: Estado de Emergencia 1981 - 1995.	141
Cuadro No.23: Personalidades con más poder en el Perú	145
Cuadro N1 24: Evaluación del gobierno de Fernando Belaúnde	146
Cuadro N1 25: Simpatía por partidos u organizaciones políticas	150
Cuadro N1 26: Indicadores macroeconómicos del sector externo 1982-1990.....	155
Cuadro N1 27: Tasa de crecimiento real.....	155
Caudro N1 28: Principal responsable de la crisis económica del país.	157
Cuadro No.29: Explicaciones de la crisis económica en el gobierno de Alan García.	159
Cuadro N1 30: Perú: Personas desaparecidas registradas, 1981 - 1994.	161
Cuadro N1 31: Credibilidad de los políticos	166
Cuadro N1 32: Imagen de los partidos y organizaciones políticas	168
Cuadro No.33: Imagen de personalidades.	169
Cuadro No.34: Preferencia electoral según candidatos presidenciales	191
Cuadro No. 35:Causas de la crisis de Izquierda Unida	191
Cuadro No.36: Aprobación de Ricardo Belmont como Alcalde de Lima	208
Cuadro No.37: Aprobación de Alberto Fujimori como Presidente de la República	214
Cuadro No.38:)Quién legisla en el Perú?	215
Cuadro No.39: Critica de Fujimori al parlamento	217
Cuadro No.40: Intenciones del Presidente Fujimori al enfrentarse al parlamento	217
Cuadro No.41: Aprobación de la ruptura del régimen constitucional	218
Cuadro No.42: Nivel de confianza en instituciones	220
Cuadro No.43: Necesidad de diálogo entre Fujimori y los partidos	221

Lista de Siglas

ANP	Asamblea Nacional Popular
AP	Acción Popular
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
ARI	Alianza Revolucionaria de Izquierda
ASI	Acuerdo Socialista
FREDEMO	Frente Democrático
FOCEP	Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular
IDH	Indice de Desarrollo Humano
IS	Izquierda Socialista
IU	Izquierda Unida
MRTA	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PAP	Partido Aprista Peruano
PBI	Producto Bruto Interno
PCP	Partido Comunista Peruano
PPC	Partido Popular Peruano
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSR	Partido Socialista Revolucionario
PUM	Partido Unificado Mariateguista
UDP	Unidad Democrático Popular
UNIR	Unión de Izquierda Revolucionaria

Prefacio

APartido@ y por extensión Apolítica@ han pasado a formar parte del léxico de palabras prohibidas en el Perú de la década de 1990. No eran, sin embargo, voces que antes hubieran gozado de mayor prestigio. Partido y política como instituciones o situaciones sufrieron el descrédito y la satanización del Perú oligárquico que buscaba detener la impronta masiva de sucesivos populismos y varias izquierdas. Fueron denostados también por el régimen militar velasquista quizás en reclamo por no haber cumplido con sus promesas de cambio social. Pero nunca como en estos últimos años su prestigio cayó tan bajo, llevando a algunos a creer que las cosas que ellos nombran deberían resignificarse y volverse a nombrar para que en algún sentido, quizás nuevo, vuelvan a existir partidos y política en el Perú. Ahora bien, este último desprestigio es indudable que se debe a la pobre actuación que los partidos políticos tuvieron durante la vigencia del orden democrático entre el 28 de julio de 1980 y el 5 de abril de 1992.

Pero este desprestigio no es, ni mucho menos, monopolio peruano. Los partidos están en crisis en el mundo porque se ha establecido una grave distancia, más allá de sus causas específicas, entre la ciudadanía y los intermediarios que administran la representación que son los partidos mismos. En América Latina esta crisis se expresa como el largo final del ciclo populista que cumplió con su rol democratizador pero encara hoy la alternativa de transformarse o desaparecer en las manos más insospechadas. El Perú en este contexto no es sino un ejemplo extremo en cuyo dramatismo quizás puedan verse con mayor claridad los rasgos de una crisis y de repente de una reconversión partidaria.

Este libro está dedicado a explicar la crisis de los partidos en el docenio democrático (1980-1992) y su fracaso en convertirse en los sujetos de un régimen estable, buscando asimismo entender cómo en el vacío dejado por las formaciones partidarias surgen los llamados independientes o *outsiders*. Como dice el título se trata de AUna tragedia sin héroes@. Si en el canon de la tragedia en la tradición occidental los obstáculos derrotan al héroe que trata de

vencerlos, en el Perú del docenio democrático los obstáculos barrieron a los actores pero sin que estos demostraran alguna superioridad sobre las circunstancias. Podemos decir entonces que nuestra tragedia partidaria, en todo su dramatismo e importancia nacional, fue una tragedia sin grandeza, con caracteres que no supieron aprovechar la oportunidad que la historia, es decir la transición democrática de fines de la década de 1970 y la Constitución aprobada en 1979, les había dado. Frente a este argumento se nos ha dicho que la democracia es un asunto de personajes simples que reniega de la heroicidad. De personajes simples quizás será la tarea de su funcionamiento una vez establecida, pero echarla andar en países con circunstancias tan negativas como el Perú requiere en alguna medida de caracteres que por lo menos estuvieran a la altura de las circunstancias, los que no existieron en los doce años señalados.

Dos tipos de explicaciones suelen darse a las crisis de los partidos políticos. La primera los descarta como variable independiente cuya interacción explique la lucha por el poder, la segunda, más bien, se agota en la explicación de la interacción coyuntural sin importarle el fondo histórico y estructural de la misma. En estas páginas se ensaya un enfoque alternativo, tratando de entender la interacción coyuntural entre los actores partidarios pero a partir de la inserción de los mismos en una fractura histórica específica. Del fracaso de esta interacción como eficacia política es que este libro plantea que surgen los independientes. Estos últimos, sin embargo, no son considerados como sujetos providenciales que vienen a cumplir un rol de salvadores, sino como elementos catalizadores de una coalición de actores con intereses específicos, denominados Apoderes fácticos@, que se había venido formando en el proceso de crisis de los partidos políticos. Los independientes y en especial el más exitoso de ellos: Alberto Fujimori, terminan expresando la voluntad de un nuevo régimen político autoritario apoyado por los intereses que no podían predominar en democracia y por la frustración de los ciudadanos ante la actuación partidaria.

No es entonces que la impronta independiente marque el fin de los partidos políticos en general, porque ello sería hacer de enterradores apresurados de una forma política que todavía no encuentra reemplazo en el mundo, sino que marca sencillamente el fin de un ciclo partidario, el de los partidos populistas. Este no es, por lo demás, el primer ciclo partidario que termina en el Perú, sino el segundo, si tomamos en cuenta a los partidos de notables de la República Aristocrática (1895-1919) que no pudieron superar la crisis de 1930.

El presente es un estudio de caso pero que ha buscado desarrollar un enfoque teórico significativo para proceder al análisis a partir de una instancia crítica lo más articulada posible. Desde este enfoque es que se ha recogido información específica sobre el proceso de interacción política privilegiando como fuentes principales la entrevista oral con políticos, líderes de opinión y académicos, la recolección de encuestas de opinión y estadísticas electorales hechas sobre el período de estudio, así como también la Aobservación participante@ del autor que vivió los hechos en la doble y casi imposible condición de militante y analista político.

Como en todo estudio de esta envergadura, que tarda varios años desde su concepción como proyecto de investigación hasta su finalización como libro escrito, hay la necesidad de señalar con precisión los límites del período a estudiar. En este caso se escogieron los límites que señalan la vigencia del orden democrático legislado en la Constitución de 1979, es decir el período que va del 28 de julio de 1980 al 5 de abril de 1992, con las referencias antecedentes y consecuentes necesarias para su comprensión. Recortar el período de estudio de esta manera tiene ventajas y desventajas, por un lado las ventajas del rigor académico para comprender una coyuntura específica y por otro las desventajas de alejarnos un tanto del presente autoritario, aún irresuelto cuando se escriben estas líneas. Optar por la primera alternativa, sin embargo, creo que permite dar mejor cuenta de uno de los problemas centrales todavía irresueltos en la política peruana contemporánea: la crisis de los partidos políticos en la década pasada y el vacío que permite el surgimiento de los independientes, dejando para otros trabajos y/o autores el explicar a los independientes en el poder y sus proyecciones a futuro. Si los siguientes capítulos dan alguna luz para mejor proceder a la formación de un sistema de partidos en el Perú este libro habrá cumplido con creces su cometido.

El autor agradece a las siguientes personas que aceptaron ser entrevistadas para esta investigación: Alberto Adrianzén, Javier Barreda, Alberto Borea, Manuel Córdova, Carlos Ferrero, Lourdes Flores, Carlos Franco, Javier Diez Canseco, Félix Jiménez, Mirko Lauer, Guido Lombardi, Sinesio López, Nicolás Lúcar, Alberto Massa, Hugo Otero, Valentín Paniagua, Henry Pease, Santiago Pedraglio, Víctor Andrés Ponce, Guillermo Rochabrún, Alvaro Rojas, Federico Salazar, Juan Carlos Tafur, Javier Tantaleán, Carlos Tapia, Alfredo Torres y Sandro Ventura . Hay algunas otras que pidieron que su identidad no fuera revelada, asimismo, los nombrados no siempre accedieron a que su nombre apareciera como parte del texto. De igual forma, queremos

también agradecer a las empresas APOYO, DATUM e IMASEN, que nos permitieron consultar sus archivos para obtener la mayor parte de las encuestas aquí citadas. Quisiera manifestar mi deuda con mis compañeros de investigación del área de gobernabilidad en GRADE, en particular con Francisco Sagasti, promotor inicial de esta investigación, pero también con Max Hernández y Pepi Patrón, cuyo aliento y colaboración fueron invalorables para realizar el trabajo de campo y escribir los primeros borradores durante todo el año de 1995. Asimismo, la asistencia de Fernando Bravo y Carlos Vargas fue muy importante para llevar a buen fin esta primera etapa de la investigación. La acogida que me brindaron los Departamentos de Sociología y Ciencia Política de la Graduate Faculty del New School for Social Research, durante los ciclos de primavera y verano de 1997, así como el School for Advanced International Studies (SAIS) de Johns Hopkins University durante el ciclo de primavera de 1997, fueron también muy importantes para profundizar en el tema al tener la oportunidad de dar cursos relativos a la problemática de los partidos. Mis recuerdos a Andrew Arato y José Casanova en el New School y a Riordam Roett en SAIS. Asimismo, una mención a mis colegas de la Unidad de Post-grado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo tesón para sacar adelante lo imposible se convirtió también en mi tesón para terminar este libro.

Quisiera hacer una mención especial a Carlos Franco, Sinesio López, Alberto Adrianzén y Cristóbal Aljovín y Mauricio Moulder, quienes tuvieron el tiempo para revisar diversas versiones parciales o totales de este trabajo y hacer múltiples sugerencias. Las gracias también a Corinne, mi lectora y consejera infatigable, quien de cerca y de lejos siempre supo que este libro se iba a terminar. Señalo, por último, mi exclusiva responsabilidad sobre las siguientes páginas.

Lima, febrero de 1999.

PRIMERA PARTE: El enfoque

I. Cómo estudiar a los partidos políticos

1. Los partidos y la crisis de la política.

La actual crisis por la que atraviezan los partidos en el planeta está inmersa en una crisis mayor de la actividad política que define la crisis partidaria y le indica sus posibilidades futuras. Los partidos en las distintas latitudes son señalados por el dedo acusador de ciudadanos decepcionados porque no suelen presentar soluciones a los problemas contemporáneos sino tratan nada más de sobrevivir de la mejor manera para seguir gozando de los beneficios del poder, llámese éste gobierno y oposición. Esta ineficacia, sin embargo, no depende exclusivamente de las formaciones partidarias. Ellas están inmersas en un cambio de época que afecta a la actividad política misma, cambiando nuestras relaciones con el ejercicio del poder, más allá de si este es autoritario o democrático, y redefiniendo las formas de participación y representación de los individuos en la política. Ello, sin embargo, no quiere decir que la necesidad de mecanismos efectivos de mediación política que propicien una participación de los ciudadanos no siga vigente, sino que esta debe darse tomando en cuenta que la política se ha convertido en el pariente pobre de la vida social. Su reconstrucción como una esfera en la que pueda volver a jugarse el destino de la sociedad depende de asumir la crisis de los antiguos partidos y abrir las posibilidades de su campo de acción a los ciudadanos afectados por las decisiones que se toman en él.

La crisis de la política está definida por dos cuestiones que marcan el cambio de época y le van a dar contexto y sentido: la caída del muro de Berlín como símbolo del fracaso comunista y la globalización de las relaciones humanas, impulsada desde una óptica neoliberal. Esta última va a ser la que buscará afectar la actividad y la jerarquía de la política incidiendo en procesos que ya se encontraban en curso. La crisis de la política tiene, a su vez, dos características: la crisis de la forma elitista de hacer política, que como diría Schumpeter (1942) se define por la competencia entre los políticos por el voto ciudadano y la pérdida de centralidad de la actividad misma, dejando de ser la esfera privilegiada de la toma de decisiones. A esto se refiere Norbert

Lechner (1996), como Ael descentramiento de la política@, al desplazarse sus funciones a otras esferas de la vida social.

La caída del muro de Berlín significa una exposición mayor de los problemas de la democracia representativa, en particular del carácter elitista de este régimen político. La globalización, por su parte, debido al enfoque neoliberal que le da impulso, busca quitarle a la política el rol organizador de la vida social que ha tenido desde los inicios de la sociedad moderna. Este rol organizador de la política, a diferencia de lo que creen algunos, fue resaltado y no subordinado por la teoría contractualista del Estado (Hobbes 1986, Adrianzén 1996)), siendo más bien puesto en duda por una vertiente del liberalismo clásico que inaugura John Locke (1980) y que retoman algunos fundamentalistas liberales contemporáneos, o neoliberales (Hayek 1940, 1960; Nozick, 1974). Esto permite señalar la existencia de un liberalismo político y uno antipolítico, pudiendo rastrearse mejor los elementos autoritarios de la concepción liberal en esta vertiente antipolítica¹.

Hay la tentación también de ver una de las características de esta crisis de la política, me refiero a su descentramiento, pero obviando la otra que es la elitización de su práctica. Esto sucede porque son intereses diferentes los que se mueven en cada proceso, por una parte están los ciudadanos afectados por la falta de soluciones que produce la dinámica elitista. Por otra, están los poderes fácticos que buscan imponer la lógica del mercado como el nuevo ordenamiento de la vida social, bajo el supuesto de que están volviendo las cosas a un Aorden natural@ que habría trastocado la perniciosa influencia de la política. Esta tentación de obviar la crítica al elitismo, como el virus moderno de la democracia representativa, es resultado del descrédito de la crítica comunista a la democracia cuyo fracaso histórico se quiere aprovechar para quitar legitimidad a los puntos de vista críticos que impulsan la participación de la población y el control de los representantes en las democracias contemporáneas.

¹Este liberalismo antipolítico ha ganado espacio importante desde los inicios del estado moderno, pudiendo rastrearse su influencia principalmente en la relación entre el estado y la esfera económica, lo que ha llevado, por ejemplo, a creer que los bancos centrales, o más en general, el manejo de la política económica, deben estar por encima de las autoridades elegidas.

La crisis de la política es, en realidad, una confluencia de ambos aspectos, la elitización de su quehacer y el descentramiento de la misma. Los partidos, como las entidades de intermediación por excelencia entre la sociedad y el Estado, pierden la confianza de los ciudadanos porque dejan de ser útiles como canales de representación. Sucede lo que Kay Lawson (1988) denomina el fracaso del vínculo. Este fracaso se produce por una dinámica elitista propia de la democracia representativa (Bachrach 1967, Held 1986), anterior al actual proceso de globalización y cuya expansión y profundidad no eran claramente percibidos a causa de la guerra fría. Pero esta ruptura se percibe mejor cuando el neoliberalismo busca imponer la lógica del mercado como la única ordenadora del conjunto de la vida social. En este momento los partidos pierden casi toda su capacidad de ofrecer soluciones a las demandas de la población porque dejan de tener acceso a los recursos que les habían permitido atender estas demandas en el pasado.

Ahora bien, el que se produzca una crisis de la política como ordenadora de la vida social no quiere decir que los poderes que antes buscaban ejercerse en la competencia partidaria no se sigan ejerciendo. Se produce, más bien, lo que se llama la Ainformalización de la política@ (Lechner 1996) que privilegia los acuerdos extrainstitucionales en perjuicio de la institucionalidad existente, de manera tal que los actores, en particular los más poderosos, no tengan una obligación legal que los comprometa. La nueva esfera Apor excelencia@ desde la que se busca hacer política es el mercado, cuyas igualdades formales y desigualdades reales son lo suficientemente dramáticas para entender el nuevo modelo de relación entre los actores que se busca imponer. Pero el mercado encuentra sus límites como asignador de recursos políticos ya que la racionalidad táctico-estratégica de la sociedad política no es asimilable, ni menos subordinable, a la racionalidad costo-beneficio de la sociedad económica (Cohen y Arato 1992).

La gravedad de esta crisis, sin embargo, tiene mucho que ver con la fortaleza de los sistemas de partidos. Allí donde estos sistemas están establecidos son capaces de manejar la crisis y reestructurarse para atender las demandas de la población. En cambio, donde los sistemas de partidos están todavía en proceso de constitución, como sucede en América Latina, los efectos pueden ser devastadores, llegando en sus extremos, como es el caso del Perú, a un colapso del inicial sistema partidario. Ahora bien, en América Latina la pérdida de importancia de los partidos no da paso a la superación del elitismo en la actividad política, sino más bien, a buscar

eliminar a los organismos de intermediación para centralizar el ejercicio del poder en caudillos que expresen a la coalición de Apoderados fácticos@ interesados en imponer la lógica del mercado. Se marcha del antiguo elitismo de la política partidaria a un super elitismo de la antipolítica de los tecnócratas y los empresarios, es decir, de aquellos que hacen política buscando negar la competencia y la publicidad democráticas.

Es importante resaltar las graves dificultades de los partidos políticos en América Latina para enfrentar las transformaciones de la política. Estas dificultades contrastan con la agilidad de los denominados poderes fácticos para asumir, en diferente medida, el control de los estados y subordinar o eliminar a los partidos. Quizás, la convergencia de los dos procesos: elitización y descentramiento, haya quitado fuerza a los partidos, que en buena medida ya tenían su legitimidad social cuestionada, al ser, en muy pocos casos, comunidades democráticas de ciudadanos. El actual proceso de globalización agarra, por lo demás, a los partidos políticos cuando estos se hallaban en un proceso de transición. Podríamos decir, que en el curso de las dos o tres décadas anteriores al impacto de la globalización, la forma de representación dominante en América Latina, que era la representación populista, había sufrido un proceso de agotamiento en sus posibilidades de canalización y expresión. Las formaciones políticas que encarnaban esta forma de representación, los partidos populistas, estaban en un momento de tránsito que los llevaría a desaparecer, transformarse en máquinas clientelistas o convertirse en partidos basados en la representación democrática. En este momento es que llega la impronta neoliberal dificultando la transición mencionada y buscando, más bien, nuevas formas de concentración del poder en ámbitos y formas hasta el momento desconocidos.

2. La razón normativa

)Qué actitud asumir al hacer un estudio sobre los partidos políticos en estas condiciones? Una moneda corriente es el escepticismo frente al papel que pueda haber a los partidos en estos días. Un escepticismo que recorre tanto a la opinión pública como a la opinión especializada en diferentes países, y que mira con distancia e incluso desdén el interés por analizar estos temas. La democracia moderna no conoce, sin embargo, otra forma de representación política en las sociedades complejas. Las alternativas que se han bosquejado, ya sea por el lado de los

movimientos sociales o de los caudillos plebiscitarios, no se han acercado siquiera a la función partidaria de traducir las demandas particulares en propuestas políticas generales. Asumimos, por ello, una razón normativa: el carácter indispensable de los partidos políticos como formas de intermediación entre la ciudadanía y el estado en las sociedades de masas, las cuales por su propia naturaleza hacen muy difícil la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos a nivel nacional e incluso regional. Los partidos, por ello, califican a la democracia representativa de nuestro tiempo como una democracia de partidos.

Esta razón normativa quizás encuentre mayor asidero aún en los países donde la democracia se encuentra en proceso de consolidación y los partidos aparecen como el único canal de participación real de la ciudadanía y quizás si una herramienta privilegiada de democratización, pero una rápida constatación empírica nos puede hacer ver también que todas las democracias desarrolladas son democracias de partidos. Es más, en varias de estas democracias cuyos arreglos constitucionales vigentes nacen en décadas recientes, los partidos son considerados como una institución fundamental del régimen político con lugar privilegiado en la carta magna.

Las consideraciones anteriores no quitan, sin embargo, que los partidos, como entidades especializadas, hayan sido y sean también los portadores del virus que corroe las democracias: la elitización de la política y su alejamiento de las mayorías ciudadanas, lo que se traduce en falta de transparencia en la toma de decisiones y eventualmente en corrupción. Sin embargo, los partidos también han demostrado, en duros momentos de su historia, capacidad de rearticularse con diversas formas de participación ciudadana que balancean sus tendencias a la elitización excluyente del quehacer político.

Ello nos hace proceder al estudio de los partidos buscando los elementos de aprendizaje democrático en los actores políticos de manera tal que nos brinden pistas para proceder a una refundación partidaria en el contexto de las nuevas exigencias de la representación ciudadana.

3. El objeto de estudio

El presente es un trabajo sobre la crisis de los partidos políticos en el Perú en el período de vigencia democrática entre 1980 y 1992. La unidad de análisis son los partidos políticos, en

plural, es decir como un conjunto en el que las diferentes partes interactúan. Cabría la tentación de llamar a esto sistema de partidos, pero la poca afirmación institucional de los mismos y de su mutua interacción, hace que nos resistamos al uso pleno del término, tal como lo hace, por ejemplo Giovanni Sartori (1992) para referirse a los partidos en las democracias establecidas. A lo más, nos atrevemos a hablar de proto-sistema de partidos cuando nos referimos al período específico que nos ocupa. Sin embargo, recuperamos del enfoque sistémico la importancia de la interacción tanto en el análisis del período inmediato como en el estudio de sus antecedentes. Es decir, refiriéndonos a unos actores políticos que interactúan con otros, sean o no partidos, en una interacción que tiene resultados y por lo tanto produce juicios en la ciudadanía.

Se privilegia, asimismo, el estudio de los partidos democráticos en la coyuntura señalada por considerar que de estos actores depende la consolidación o el fracaso del régimen político en cuestión. En este sentido, se toma también en cuenta a los partidos insurgentes o anti-sistémicos, pero como una influencia negativa externa a la interacción de los actores en el régimen democrático, sin que formen por ello parte específica del objeto de estudio.

El trabajo, por otra parte, busca hacerse en una doble dimensión: histórica y coyuntural. Teniendo como objeto a los partidos en un período reciente, se trata de entender el horizonte histórico en el que estuvieron inscritos, para poder dar mejor cuenta de su actuación coyuntural. En cuanto al análisis de los partidos en el período 1980-1992, el estudio se hace en función de la capacidad de los actores partidarios, desde el gobierno y la oposición, para enfrentar los problemas cruciales del momento: la crisis económica y la violencia política. Asimismo, el recorte preciso del período de estudio no significa que no nos interesen las proyecciones anteriores y posteriores a las fechas señaladas. Por el contrario, creemos encontrar en el período 1980-1992 la fuerza explicativa para entender la crisis partidaria y poder postular la refundación de un futuro sistema de partidos.

Por último, se busca entender, el papel de los independientes o *Aoutsiders*², como los nuevos actores políticos que ocupan el espacio que dejan los partidos y eventualmente terminan de apartarlos de la escena política. Su instalación como los nuevos actores que dan forma a la

²Independiente es como se ha caracterizado en el Perú a los nuevos actores políticos que vienen de fuera del sistema de partidos y que, en el análisis político reciente, se denomina también utilizando la palabra inglesa *Aoutsider*. En este libro utilizaré indistintamente ambos términos como sinónimos.

política, sin embargo, no presagia una mayor institucionalidad de la vida democrática ni tampoco una participación mayor de la ciudadanía en los asuntos públicos, generándose más bien la exacerbación del proceso de elitización política que ya estaba en curso en la década de 1980.

4. La ilusión electoral.

Una ilusión electoral@ recorre los estudios actuales sobre partidos políticos en América Latina. Quizás producto de la influencia de los análisis sobre las transiciones y los procesos de consolidación, urgidos buena parte de ellos por un optimismo que no les permite voltear la cara ni tampoco mirar a los lados, para ver la historia y/o el presente de nuestra región. Un buen ejemplo de esta ilusión es la introducción AParty Systems in Latin America@ que Scott Mainwaring y Timothy R. Scully escriben al libro ABuilding Democratic Institutions@ (1995), en ella se intenta hacer un estudio del proceso de institucionalización partidaria actual en América Latina a partir del análisis estadístico de resultados electorales en los últimos treinta y pico de años. Ciertamente que este enfoque es una superación frente al anterior afán clasificatorio de textos como el de Torcuato Di Tella (1993) o Alfredo Ramos Jiménez (1995), que finalmente solo quedan en un listado de organizaciones políticas en la historia de la región, interesantes como guías orientadoras pero sin poder explicativo propio. Sin embargo, el sesgo en Mainwaring y Scully al pretender explicar la institucionalización partidaria a partir de cifras electorales, se coloca con tal vehemencia en el presente democrático-electoral que olvida de donde proceden las instituciones partidarias en América Latina.

Esta ilusión tiene asidero en la presente estabilidad democrática, que viene de la década de 1980 y que en muchos casos ya contabiliza varias elecciones con sus correspondientes cambios de mando seguidos. Sin embargo, es un enfoque que -continuando con la metáfora visual- solo mira a sus pies, porque en la mayor parte del continente, incluídos los doce países Amedianos y grandes@ que se priorizan en el trabajo, la característica saltante es la inestabilidad política, donde las elecciones libres no siempre han sido la regla. Es más, la asociación partidos-elecciones, si bien normativamente deseable, tampoco es la regla más allá de la presente coyuntura. Los partidos en América Latina, incluso en países que tradicionalmente se consideraban estables como Colombia o México -para no hablar de Centroamérica- están, en

promedio, más ligados a episodios de confrontación que tienen que ver con la lucha anti-autoritaria, que con una dinámica de competencia y cooperación democráticas.

Ese es el grave riesgo de mirar a los partidos desde momentos de estabilidad democrática: se puede tender a confundir la historia con la coyuntura, o peor todavía, dejar la historia con el propósito de hacer hablar a la coyuntura un guión prefijado. El sesgo es, por ello, de tal magnitud que le disminuye drásticamente poder explicativo a este tipo de análisis y crea más bien el espejismo de una democracia política inexistente. Frente a este sesgo, electoral y presentista, hay necesidad de intentar nuevos enfoques más de acuerdo con la realidad de la región.

En el Perú, la ilusión electoral en los análisis sobre el tema ha sido menor. Entre los estudios sobre partidos destacan los artículos de Julio Cotler (1988) y Sinesio López (1991,1994,1995), que combinan el análisis de coyuntura con la ubicación de la interacción partidaria en un horizonte histórico mayor. Cotler, en especial, desarrolla la idea de la formación de identidades políticas cerradas a partir de los jefes partidarios carismáticos que tendían a integrar segmentariamente a algún sector social. Esta característica, de indudable matriz estructural, estaría para él a la base de la hostilidad entre las diversas alternativas políticas en los períodos democráticos. López, por su parte, elabora las ideas sobre las incursiones democratizadoras de las clases medias y populares en el estado oligárquico en crisis, que moldearían a los partidos en el proceso de lucha anti-oligárquico y señalarían las características del proceso de democratización. La idea de incursión, ciertamente distinta a la de interacción competitiva, marcaría también el estilo confrontacional propio de los partidos en nuestra democracia, a lo que López agrega una tendencia a la negociación en el momento de agotamiento del populismo. Curiosamente, en el único libro de pretensión académica sobre el tema en el Perú (Tuesta 1995), se prioriza la descripción de la dinámica institucional pero sin ofrecer un modelo explicativo desarrollado. Quizás el mérito mayor de Tuesta sea haber tomado a los partidos como variables independientes que se integran en un ámbito sistémico, más allá del episódico relato aislado.

Hay también algunos otros trabajos que buscan caracterizar fenómenos puntuales que afectan el proceso de intermediación y organización partidarias en la década de 1980, resaltando las dificultades de relación entre los partidos y la ciudadanía (Adrianzén 1992 y 1993, Crabtree

1994, Grompone 1991, Pásara 1994). Entre ellos destaca la recuperación inicial de la noción de Asistema@ que hace Adrianzén en su artículo de 1993, como la forma adecuada de afrontar el análisis de los partidos en la década de 1980; así como también las afirmaciones de Grompone en su texto de 1991 sobre las formas que asume la poca capacidad de recepción de los partidos respecto a las demandas ciudadanas, para proceder a una adecuada agregación de intereses.

Quizás una excepción, en cuanto relevancia del tema electoral, entre los que han tratado el tema, sea el texto señalado de Julio Cotler que busca rescatar el valor de las elecciones en la década de 1980, aunque su perspectiva sea más la de subrayar la participación ciudadana en sucesivos comicios, en un clima de aguda violencia política, que el caracterizar a las elecciones como la característica ordenadora de la coyuntura y de un eventual sistema de partidos.

El reto actual es hacer hablar a la historia desde la coyuntura, buscando que el análisis de la interacción político-partidaria de cuenta de actores ubicados en un período mayor, cuyos problemas y posibilidades vienen, todavía, de la confrontación anti-autoritaria que ha marcado la historia de América Latina. Se podrá decir que esta es una visión que surge de observar el proceso regional desde el Perú, caso extremo de precariedad democrática y partidaria en la América actual, pero quizás las virtudes de observar un caso extremo puedan permitir avizorar los problemas de las nuevas y de las renovadas democracias latinoamericanas.

5. Entre las estructuras y los actores

El análisis de la crisis de los partidos políticos en el Perú en el período 1980-1992 es un tema que despierta la tentación de ser estudiado desde diversos enfoques teórico-metodológicos. Por un lado podría caber la posibilidad de abordar el tema como el estudio de un período de estabilidad democrática, sin prestar mayor atención al marco histórico-estructural en que se encuentra inscrito. Por lo demás, esta tentación se podría justificar si recordamos que se trata del período más largo de estabilidad democrática en la historia republicana del Perú y del único que se desarrolla en condiciones de sufragio universal³. De hecho, esta forma de abordar el análisis

³Es importante señalar que el período democrático que transcurre entre 1980 y 1992 es el único en la historia republicana del Perú en el que no existieron exclusiones formales para los electores ni para las opciones políticas. Así lo establecía la Constitución de 1979 que estuvo en vigencia entre el 28 de julio de 1980 y el cinco de abril de

de períodos recientes es la tendencia actual en el estudio de las coyunturas políticas contemporáneas en América Latina. Pero, de otro lado, si atendemos al rasgo más saltante del escenario histórico mayor: la inestabilidad política; que es, contradictoriamente, lo que pasa en coyunturas más recientes, podría caber la tentación de regresar a la crítica estructural en boga hasta fines de los años setenta.)Cómo superar esta impase? Pues intentando construir un enfoque sintético, que apueste a recoger elementos de los distintos enfoques y pueda así dar mejor cuenta del objeto de estudio.

El debate sobre el enfoque a usar para estudiar a los partidos políticos en el Perú no tiene que ver solo con la realidad de este país o de la América Latina en su conjunto sino que atiende a un debate fundamental en la Ciencia Política contemporánea. Me refiero a la discusión entre las tendencias estructuralistas, institucionalistas y competitivas en el análisis político en general y más precisamente en el análisis de la dinámica partidaria.

La coyuntura teórica es propicia para un intento de síntesis porque se empieza a salir en el debate mundial de la época en que predominaban, de manera unilateral, los enfoques estructurales primero y luego los enfoques competitivos. Los primeros representados por los trabajos de Barrington Moore (1966) o, más específicamente en cuanto a partidos se refiere, de Lipset y Rokkan (1967) y que fueron predominantes en las décadas de 1960 y 1970. Estas corrientes tuvieron particular incidencia en América Latina, por su parentesco, aunque a veces no fuera muy cercano, con el marxismo y la teoría de la dependencia. Las segundas, las corrientes competitivas, importantes desde fines de la década de 1970 y en boga hasta hace muy poco tiempo, cuyo representante más caracterizado, en lo que análisis de partidos se refiere, es Giovanni Sartori (1968, 1992). Estas corrientes competitivas llegaron a América Latina en los debates sobre la quiebra de los regímenes democráticos, donde destacaban los aportes de Juan Linz (1978) y posteriormente en los debates sobre las transiciones a la democracia donde son figuras centrales Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter (1986).

Sartori (1968) sintetiza bien la discrepancia entre ambos enfoques cuando señala que los análisis estructurales, que él prefiere denominar sociológicos, entienden a los partidos como

1992.

variables dependientes y los análisis competitivos, que él considera los propios de la ciencia política, los consideran variables independientes.

Hay tres esfuerzos de síntesis que refiriéndose al análisis político global es, sin embargo, preciso destacar porque inspiran desde distintas ópticas este trabajo. Primero, el artículo precursor de Terry Lynn Karl (1996), luego el libro de Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), donde desde una perspectiva estructural se trata de rescatar los aportes de la tendencia competitiva o de interacción entre actores; así como al libro de Linz y Stepan (1996) que viniendo de un marco teórico que privilegia la interacción entre actores retoma, en forma innovadora, la importancia de los condicionantes estructurales.

El caso peruano es un excelente ejemplo para desarrollar un enfoque sintético porque, de manera extrema en relación con el resto de América Latina, presenta las características de confrontación y ausencia de un sistema de partidos, que en mayor o menor medida atraviezan la región, haciendo necesaria la combinación de la determinación estructural, cuyo impacto todavía no ha terminado de definir un sistema partidario, con el análisis competitivo de interacción entre actores, en los raros momentos de funcionamiento de una democracia representativa.

Pasemos ahora a señalar las características de cada uno de estos enfoques resaltando los elementos que nos permiten desarrollar una síntesis.

El enfoque estructural o sociológico, privilegia el análisis de las fracturas históricas fundamentales en una sociedad, los conflictos que ellas implican y su traducción político-partidaria. Su mejor expresión la constituye el artículo de Lipset y Rokkan *Cleavage structures, party systems and voter alignments*, publicado en 1967. Este enfoque es fundamental para entender las condiciones históricas de surgimiento de un sistema de partidos y las características de los mismos cuando no existe un régimen democrático consolidado o cuando este es muy débil. En regímenes consolidados, donde la posibilidad de nuevas fracturas históricas es remota, o en el análisis de períodos significativos de estabilidad democrática representativa, la eficacia del enfoque estructural o sociológico es menor, por lo que se desarrollan otras alternativas.

Este es el caso del enfoque competitivo que privilegia el análisis sistémico de competencia y cooperación entre actores políticos en una coyuntura determinada. Tomando una frase de Juan Linz (1978) en texto fundamental para esta perspectiva contemporánea, el escritor

español nos dirá Así el análisis estructural explica *por qué* estas cosas suceden, este modelo tratará de explicar *cómo* es que estos cambios ocurren. El análisis de interacción entre actores se hizo popular en el estudio de las transiciones a la democracia en la década de 1980, debido a que, según Schmitter y O'Donnell (1986), permitía capturar el alto grado de incertidumbre característico de los procesos de transición, que ocurría debido al cálculo político de corto plazo de los actores involucrados. Según estos autores, las opciones tomadas por los actores políticas dependían más de reacciones subjetivas frente a las opciones posibles que de las condiciones objetivas globales en que se desenvolvían estos procesos.

En una de las refutaciones más importantes del enfoque estructural, Giovanni Sartori (1968) señalará como inaceptable la pretensión de que los partidos representen grupos sociales o reflejen sus puntos de vista, señalando más bien que lo que si se puede afirmar es que traduzcan los conflictos sociales en el plano de la política. Esta diferencia entre representar y traducir vendrá a ser crucial para Sartori y tendrá consecuencias en la manera de definir al partido político como tal. Si entendemos que el partido representa intereses sociales tenderemos a una concepción instrumental del mismo, mientras que si lo concebimos como una entidad que traduce lo que sucede en la sociedad podremos asumirlo como una organización más compleja, con una autonomía de elaboración y acción frente a los que pudieran ser sus referentes sociales. Sartori, por lo demás, no niega completamente el condicionamiento social de los partidos, sino que prefiere limitarlo a múltiples y no necesarias influencias.

Sin embargo, el tipo de análisis competitivo es criticado como descriptivo, porque asume como dada una cierta situación de interacción; presentista, porque no toma en cuenta el proceso histórico global; y portador del peligro de excesivo voluntarismo (Karl 1996) por restringirse al análisis de la opción subjetiva de los actores.

Queda por señalar el enfoque institucional, que resalta la importancia de las instituciones como mediadoras en la lucha política (Ikenberry 1988), así como los efectos que puede tener un cambio en las reglas de juego institucionales sobre la conducta de los actores. Es preciso, sin embargo, como nos señala Alan Ware (1996), distinguir entre el viejo institucionalismo, de carácter jurídico-constitucional, que tendía a reducir el análisis político al estudio de los aspectos legales, y el nuevo institucionalismo que entiende a las instituciones, más allá de su carácter de reglas formales, como condicionantes de extrema importancia en la conducta política de los

actores. Este enfoque lleva en algunos casos a entender las instituciones como actores políticos en si mismos, destacando el papel que esta última tendencia le asigna al estado, como institución que tiene un rol de primer orden. Conviene agregar también, como nos dice Ware, que muchas veces se considera a la competencia entre los actores, en el afán de negar la primacía de las condiciones sociales, como una variante del enfoque institucional, aunque esta supuesta variante, en lugar de tomar en cuenta a una gama de instituciones, se concentre en una sola : la competitividad.

En cuanto a los esfuerzos de síntesis tenemos a Terry Lynn Karl (1996) en la propuesta más Aneutral@ entre los diferentes enfoques, señalando que los actores políticos tienen posibilidades de acción contingente en el corto plazo en función de patrones institucionales que median su interacción, los que a su vez están condicionados por factores estructurales que corresponden a determinado tipo de formación clasista. Es decir, que la acción contingente de los actores no es libre sino que está determinada por cierta estructura de clase. Una posición similar tienen Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), haciendo particular hincapié en el carácter clasista de la sociedad civil y la importancia de la institucionalidad política para administrar el conflicto entre las distintas clases. Insisten, sin embargo, en el carácter o referencia clasista de los actores políticos y en la relación entre desarrollo capitalista y democracia. Aceptan, además, la pertinencia del análisis de interacción entre actores pero restringen su eficacia al corto plazo.

Por último, están Linz y Stepan (1996), que a diferencia de los dos anteriores desarrollan la síntesis a partir de un enfoque básicamente de interacción competitiva. Ellos establecen para el estudio del proceso de transición y consolidación democráticas cinco Aarenas@ que deben ser tomadas en cuenta: el estado, la sociedad civil, la sociedad política, el imperio de la ley y la sociedad económica. No se señala una determinación de unas por otras ni la preeminencia de alguna de ellas, sin embargo, el análisis va más allá de la interacción entre actores y busca, más bien, establecer las esferas en que esta interacción se produce, así como el desarrollo consistente del conjunto, llegando a decir que la democracia más que un régimen es un sistema interactivo.

Desde una perspectiva similar a la Linz y Stepan, pero con un desarrollo teórico menor de su propuesta de síntesis, está Guillermo O'Donnell, en el texto denominado ADelegative Democracy@ (1994). En este artículo, O'Donnell busca analizar las razones por las cuales varias de las democracias latinoamericanas no han podido consolidarse como democracias

representativas. Aquí, a diferencia de sus reflexiones de los ochentas sobre las transiciones a la democracia, O'Donnell hace referencia a factores históricos de largo plazo y a la severidad de los problemas socio-económicos heredados como más importantes que las características del régimen autoritario para determinar el proceso de transición y el ulterior resultado democrático. Asimismo, esta sola mención a elementos estructurales negados en su análisis de las transiciones, lo lleva a relativizar la interacción entre los actores como el factor central a tomar en cuenta en el análisis político. La solución a la relación entre estructuras y actores parecería sugerirla recurriendo al enfoque institucional y señalando que son las instituciones democráticas las que proveen un nivel crucial de mediación y agregación entre unas y otros. Tal es la importancia con que O'Donnell retoma los elementos estructurales y en especial su traducción institucional, que ello lo lleva a calificar las democracias no consolidadas como democracias delegativas, y no, necesariamente, representativas, como postulara en la década de 1980.

Luego de recorrer los distintos enfoques pasamos a señalar algunas características del caso peruano de un enfoque de síntesis en el estudio del mismo. Esta necesidad tiene un punto de partida: la originalidad del objeto de estudio. Se trata de un período relativamente corto de estabilidad democrática -doce años- inscrito en el horizonte de una fractura histórica, la de 1930, cuyas consecuencias, en términos de actores políticos, se agotan sin haber cambiado sustantivamente la sociedad.

La fractura histórica de 1930, expresión de la crisis histórica de la dominación oligárquica, produjo nuevos actores políticos: el populismo⁴ y el socialismo, que expusieron la falta de legitimidad de la oligarquía, pero no pudieron terminar con las bases materiales de esta dominación, ni tampoco con su traducción política: la sucesión de dictaduras militares que azotaron al país, solo interrumpidas por cortos períodos democráticos. El Perú sufrió así un largo proceso de crisis del Estado Oligárquico, que duró de 1930 a 1968, pero que ningún actor político, a pesar de sucesivas incursiones democratizadoras, fue capaz de convertir en un tipo de Estado diferente.

⁴Uso el término populismo en el sentido amplio y académico del término, para referirme a los movimientos nacional-populares que surgieron en el Perú entre 1930 y 1960, entre los cuales los más importantes fueron el Partido Aprista Peruano (PAP) y Acción Popular (AP).

Quizás un elemento explicativo importante en este freno a la democratización social y política haya sido, empleando la tesis de Barrington Moore (1966), la permanencia de una agricultura terrateniente tradicional basada en la ligazón, por razones extra-económicas, del campesino a la tierra. Este tipo de agricultura reprodujo a la clase anti-democrática por excelencia: los terratenientes, más allá de la crisis de 1930. Esta clase mantuvo así a un sector importante del campesinado en condiciones de servidumbre hasta bien avanzado el siglo, siendo eliminados como grupo social recién con la Reforma Agraria que se desarrolla a partir de 1968. Esta persistencia de la servidumbre restó condiciones estructurales para el desarrollo de la ciudadanía, la cual se basa, al menos formalmente, en la libre movilidad de las personas. Al mismo tiempo, la migración campo-ciudad, produce un gran proceso de urbanización que no tiene como contrapartida una industrialización de similar magnitud, que se exprese en la proletarización masiva del campesinado, sino una masa empobrecida urbana que produce el denominado sector informal.

La consecuencia de una fractura histórica sin resolución política clara a nivel estatal trajo, eventualmente, una institucionalidad democrática restringida y muy débil que se expresó, cuando fue el caso, en gobiernos elegidos pero estrictamente limitados o directamente controlados por la oligarquía. La mejor expresión de esta precariedad institucional democrática fue la llegada tardía del sufragio universal, recién legislado en la Constitución de 1979, y no por iniciativa de los partidos políticos, sino de los militares que convocaron a la Asamblea Constituyente. El sufragio universal, llega así medio siglo más tarde que la crisis histórica del orden oligárquico y solo después de la Reforma Agraria.

Es muy importante señalar que esta tardanza en la eliminación del binomio terrateniente-campesino siervo y en la instauración del sufragio universal significó el mayor fracaso de los partidos que tienen su origen en la fractura histórica de los años treinta, presagiando los problemas posteriores que ocurrirían en la década de 1980. Esto es particularmente cierto en el caso de los dos grandes partidos populistas: el Partido Aprista Peruano (PAP) y Acción Popular (AP), cuya incapacidad para afrontar la solución de estas cuestiones cruciales los llevaría a su agotamiento como alternativas de cambio, dando paso a que otros actores, militares en este caso, encaren los problemas señalados.

La tardanza en la eliminación de la clase terrateniente tradicional y en el advenimiento del sufragio universal, así como el desarrollo de una urbanización sin industrialización, produjo una sociedad civil débil y relativamente pequeña y una sociedad política exhausta, al estar formada mayormente por actores agotados, y anclada, en casi todos los casos, en un horizonte histórico que llegaba a su fin. Asimismo, el orden estatal en que se producían estas interacciones no se consolidaba como un orden post-oligárquico con bases sociales y políticas claras, y menos todavía se podía afirmar que se trataba de un estado democrático.

En estas condiciones, tenemos que en el período 1980-1992 se produce una interacción entre los actores políticos que expresa muy directamente las condicionantes estructurales en que se hallan inmersos. Se trata de una interacción donde junto con escasa cooperación y casi nula competencia se dan también aguda confrontación entre los actores y deslealtad frente al régimen democrático recién establecido. De igual forma, existen partidos anti-sistema tanto dentro como fuera de la escena electoral, lo que motiva respuestas brutales de los aparatos represivos del estado y un drástico recorte del espacio de la política en favor del espacio de la guerra. Todas estas características hacen muy precario el respeto al imperio de la ley como base de la convivencia democrática.

Por último, los partidos no pueden o no quieren ponerse de acuerdo sobre alternativas para enfrentar los problemas fundamentales de la época: la crisis económica y la violencia política. Ambas cuestiones claves que tocaban, como dirían Linz y Stepan, al necesario consenso para constituir una Asociación económica@ y, como añadiría Weber, al indispensable monopolio estatal en el ejercicio de la violencia. Estos problemas llevaría a una aguda falta de legitimidad del régimen democrático y explicarían cómo cierto tipo de interacción lleva a la ruptura del régimen democrático.

Hay necesidad entonces de un enfoque que entienda a los actores en el período de estudio como sujetos que expresan muy directamente las condicionantes estructurales del régimen político. Ello no los anula como partes de un sistema donde toman opciones políticas determinadas y asumen responsabilidades, sino más bien los pone en una perspectiva mayor que ayuda a explicar cómo cierto tipo de interacción lleva a la ruptura del régimen democrático.

6. El concepto de partido político

Una de las razones del desprestigio de los partidos en los albores del estado moderno era la confusión, práctica y semántica, entre facción y partido. Es decir, el considerar a los partidos como sinónimos de facciones, o, en otras palabras, como grupos que luchaban por intereses particulares. Este punto, resaltado por Sartori (1992), señala que mientras el estado constitucional no está plenamente establecido en un determinado país, los partidos son considerados una amenaza para el bienestar general. Tal fue el temperamento de las élites políticas en diversos momentos de cambio: opinaron así los revolucionarios franceses y estadounidenses a fines del siglo XVIII y, qué duda cabe, los bolcheviques que protagonizaron la revolución rusa. Pero a este punto, de establecimiento del estado constitucional, se agrega, siempre de acuerdo con Sartori, la hegemonía de la concepción democrático-liberal, que va a significar no solo la tolerancia sino la valoración positiva de la diversidad y el disenso, configurando lo que se denominará el pluralismo político. Si consideramos que en el Perú no se ha estabilizado jamás durante la república un estado constitucional, ni menos todavía un orden político democrático-liberal, podemos afirmar que los partidos fácilmente pueden haberse considerado como una amenaza, más todavía cuando en su mayor parte se han caracterizado por cuestionar el orden imperante y se han asumido como partidos con planteamientos totalizadores (Cotler 1988)⁵, cuya existencia debía prefigurar el nuevo estado por el cual luchaban.

Por lo demás, tomando el criterio de Edmund Burke (1839) para distinguir facción de partido, que no por inicial dejó de desbrozar el camino para la plasmación teórica del concepto, tenemos que facción se caracteriza por ser un grupo de individuos que desde un punto de vista particular persiguen intereses particulares, mientras partido es un grupo de individuos que desde un punto de vista particular tienen una propuesta sobre los intereses generales de la sociedad. A la luz de esta distinción podemos decir que entre nosotros, así como en buena parte de América

⁵Es muy importante la insistencia de Julio Cotler en este punto, que él a su vez recoge de Giorgio Alberti (1991), porque la concepción totalizante en los partidos atenta directamente contra el necesario carácter pluralista de la democracia representativa e impide que se establezca cooperación a la vez que competencia entre los actores políticos.

Latina, los movimientos o partidos nacional-populares se asumieron como grupos que desde un punto de vista supuestamente general y excluyente, que asumía la representación de las mayorías sociales, levantaban una propuesta de reorganización total de la sociedad.

La apreciación de los partidos como tales presenta entonces un doble problema: el carácter pre-constitucional o no constitucional del Perú en la mayor parte de su historia republicana, así como la emergencia de movimientos nacional-populares y/o de izquierda de carácter totalizador, que desarrollaban identidades cerradas y hostiles entre sí. El hecho de que estos partidos no entendieran sus propuestas como los planteamientos de un grupo para el conjunto, sino como la expresión de un grupo que representaba al conjunto (Ael partido del pueblo@, Ael partido de la clase obrera@), les hacía imposible asumir la interacción con los otros partidos como una competencia democrática y por lo tanto como base de un orden plural. Es más, el hecho de que muchos de estos partidos se organizaran alrededor de un jefe carismático que estaba llamado a interpretar lo que demandaran las mayorías sociales, hacía aún más difícil la interacción democrática y el pluralismo.

La posibilidad de evolución de estos partidos de carácter totalizante a formaciones democráticas se veía restringida en el Perú, y en diferentes grados en América Latina, por la ausencia de una revolución democrática, anterior o paralela a los partidos mismos, que les diera las condiciones para esta evolución. En los casos de Europa Occidental y los Estados Unidos, las revoluciones democráticas que precedieron a los sistemas de partidos permitieron la evolución tanto de los partidos de notables como de los partidos de masas, que en muchos casos tenían una visión totalizante en sus inicios, hacia su desarrollo como partidos pluralistas. En el Perú, en cambio, el pluralismo tuvo, y quizás en alguna medida todavía tiene, la dificultad de los rezagos oligárquicos propios de la sociedad tradicional, donde la política sigue considerándose un asunto exclusivo de arreglo entre notables, que necesita de jefes para ser realizada.

Porsupuesto que la definición de Burke es aún parcial y no nos releva de la necesidad de dar una definición sobre el partido político que podamos usar en el presente trabajo. Trataremos de construir una definición yendo de lo más simple a lo complejo.)Qué es un partido político? Podemos empezar con una definición mínima y Acrudamente realista@ como diría Sartori, la de Schattschneider (1942) : AUn partido político es un intento organizado de conseguir poder político@. La virtud de esta definición es su simpleza, pero aquí todavía no tenemos diferencias

entre facción, partido y/o movimiento social, ni tampoco encontramos sentido normativo alguno. Además, conseguir poder político puede significar diferentes cosas: conseguir cargos de gobierno a través de elecciones, dar golpes de estado, destruir el estado y pretender construir uno nuevo en el caso de ciertas opciones revolucionarias, en fin.

La segunda pregunta sería ¿por qué la gente se organiza? Aquí podemos usar la definición de Weber (1979), para quien la organización partidaria A...va siempre dirigida a un fin metódicamente establecido, tanto si se trata de un fin Aobjetivo@ -realización de un programa con propósitos ideales o materiales- como de un fin Apersonal@- prebendas, poder y, como consecuencia de ello, honor para sus jefes y secuaces o todo esto a la vez.@ O sea, la gente se organiza para luchar por un programa o por un jefe, y muchas veces por ambos. Aquí, nos encontramos nuevamente con la posibilidad, en el caso de las organizaciones desarrolladas en torno a un jefe, de una organización sin fines normativos, contradiciendo lo señalado, líneas arriba, por Burke. Es difícil zanjar claramente esta polémica, sobre si deben o no existir fines normativos para considerar a un partido en cuanto tal. Podríamos quizás señalar, en favor de la definición de Burke, que los jefes de partidos estructurados en torno a su figura, suelen tener, por lo menos en el discurso, un conjunto de objetivos a alcanzar en relación con lo que consideran el bienestar general. Por lo demás, es imposible que todos los partidos no tengan algo de cada cosa, aunque una ocupe el centro de la organización y la otra exista tan solo en pequeña proporción.

La tercera pregunta sería ¿qué hacen los partidos políticos? Hemos priorizado cuatro actividades fundamentales: 1) Movilizan a la población, en apoyo u oposición a determinadas políticas. Sartori subrayará que en los regímenes democráticos la movilización promovida por los partidos es una forma de *expresión* política y en los regímenes autoritarios es una forma de *represión* política. 2) Seleccionan al personal que ocupa los cargos públicos. En los regímenes democráticos esto significa la elección de candidatos para los cargos públicos y en los regímenes autoritarios el nombramiento Aa dedo@ de cierta gente. 3) Agregan y combinan intereses de diferentes sectores de la sociedad de manera tal que los hacen compatibles unos con otros. En este aspecto cabe señalar que la satisfacción de los intereses del mayor número posible de ciudadanos, lo que Alan Ware (1988) denomina la Aoptimalización del interés@, es muy difícil de lograr sin competencia electoral, justamente porque ella obliga a los partidos, en función del objetivo de ganar las elecciones, a hacer su alternativa lo más atractiva para el mayor número de

personas y grupos sociales. 4) Tratan de influenciar la conducta del gobierno, y de esta forma la política en general, ya sea desde la oposición o desde el gobierno mismo. En los regímenes democráticos esta influencia debería buscar traducir las demandas de la población en propuestas de política. Hay que señalar que no todos los partidos desean en todo momento ser gobierno, hay partidos que se desarrollan como partidos de oposición, tanto dentro como fuera del régimen democrático.

La cuarta pregunta sería ¿cómo luchan por el poder político? La respuesta depende, nuevamente, del régimen en que se esté. En un régimen autoritario, no totalitario, sería a través de la confrontación partido vs. estado o partido-estado, y eventualmente se podría hablar de competencia al interior del partido único o partido-estado, aunque esto sea un asunto controvertido y dependa del grado de autoritarismo del régimen. En una democracia, en cambio, la forma de luchar por el poder es a través de la competencia y la cooperación entre los actores políticos. Joseph Schumpeter (1942) nos da la definición clásica al respecto: AUn partido no es un grupo de gente que promueva el bienestar público....un partido es un grupo cuyos miembros acuerdan competir por el poder político@. Aunque deberíamos anotar, que la competencia por si misma no tiene un efecto democrático (Ware 1988) sino cuando permite a los electores efectivamente escoger entre alternativas diferentes presentadas por distintos partidos. La discusión sobre el efecto democrático de la competencia es importante porque hay muchos autores, particularmente los partidarios del elitismo político como Schumpeter y Sartori, que circunscriben su efecto a limitar la acción del gobierno, subordinando a este propósito la posibilidad de escoger de los electores.

Nos queda entonces, la necesidad de Aarmar@ una definición de trabajo sobre el partido político para el propósito del presente libro. Haciendo una apretada síntesis de los criterios expuestos y ya, de por si, resumidos, diremos que un partido es una organización cuyo propósito fundamental, por razones personales y/o programáticas, es conseguir el poder político y que en función de este objetivo busca agregar y compatibilizar intereses sociales, movilizar a la población, seleccionar candidatos a puestos públicos -si es que se ubica dentro del régimen democrático en funciones- e influir en distintos momentos y de diferente manera en la situación política.

Resalta en la definición señalada que no hemos considerado el hecho electoral como parte de nuestra definición y queremos remarcar este aspecto cuando, una vez más, se importa acríticamente la definición mínima de Sartori sobre partido, para analizar el fenómeno en América Latina. Tal es el caso del citado texto de Manwaring y Scully que toma la definición de Sartori: AUn partido es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos@, para proponer una ligera variante de la misma diciendo que : Aun grupo político que presentaría candidatos para puestos públicos pero que no puede hacerlo porque está proscrito o porque no hay elecciones es también un partido.@ A pesar de que se reconoce que las elecciones no son una realidad cotidiana en la región, se insiste en proceder a una definición en torno al hecho electoral. Sartori, inclusive, asevera en su libro sobre partidos (1992) que su definición tiene sentido para las democracias de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, dejando a otros criterios las democracias en países en desarrollo. Pareciera, sin embargo, que la voluntad normativa de algunos analistas insiste en ir más allá de lo que soportan las tradiciones históricas de regiones diferentes al mundo occidental desarrollado.

Por otra parte, la amplitud de nuestra definición nos sirve para dar cuenta de la herencia política actual de los partidos, tanto en América Latina como en el Perú. Decimos esto porque en los partidos que hoy conocemos y en la actividad partidaria en general el antecedente inmediato son los partidos de confrontación, tanto populistas como de izquierda marxista, que aparecen en respuesta a la crisis oligárquica y que tienen que enfrentar, en distintos momentos, dictaduras militares. Estos son los partidos de los procesos de democratización en América Latina, de las transiciones y eventuales consolidaciones o fracasos de las mismas. Estos partidos, por ello, no pueden ser analizados solo desde una perspectiva electoral, deben, por el contrario, estudiarse tomando en cuenta la herencia que portan, tanto en sus componentes ideológicos como de tradición histórica.

Además, y en la coyuntura concreta del Perú en la década de 1980 fueron muy importantes, por su influencia en la situación política, los grupos alzados en armas, que se comportaron abiertamente como grupos que desde fuera del sistema pretendían destruirlo, conformando, como veremos más adelante, los denominados partidos anti-sistema. Estos grupos no solo no participaban en elecciones sino que denunciaban a las mismas como una farsa y, en

muchos casos, desarrollaron campañas nacionales para amedrentar a los ciudadanos e impedir que voten. Durante los años de violencia política hubo mucha resistencia a calificar a estas agrupaciones como partidos políticos, quizás porque se pretendía asociar la idea de partido con legalidad y democracia. Sin embargo, es indudable que estos grupos actuaron como partidos, buscando movilizar a la población e influyendo en el curso de los acontecimientos. El que sus objetivos y procedimientos fueron altamente cuestionables por querer destruir la democracia por la vía de las armas, no los invalida como partidos políticos, simplemente los califica, siguiendo a Sartori y Linz, como partidos anti-sistema, abiertamente desleales con el régimen democrático.

7. Partidos y sistemas de partido

Pero no son los partidos como unidades aisladas los que nos interesan. En términos modernos son los partidos, en plural, y en su su interacción, el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, la referencia no es tampoco a cualquier tipo de interacción sino a la interacción que se da en los marcos de un régimen formalmente democrático, porque lo que interesa es ver en qué medida el tipo de interacción entre los partidos permitió o no afirmar la democracia.

Este paso del singular partido al plural partidos, tomados como conjunto, que se recoge de Duverger (1957), Sartori (1992) y para el caso peruano de Adrianzén (1993), es una precisión fundamental porque nos lleva a pensar ya no en un partido, sino en un sistema de partidos, o sea en un conjunto de actores políticos que se desarrollan en interdependencia recíproca. La idea de sistema es la idea de varias partes de un todo que se relacionan una con la otra. En el caso de un sistema de partidos tenemos varias partes de un todo pluralista, un todo que reconoce la diferencia entre las partes, a diferencia de un todo monista que niega esta diferencia. Por ello, observamos que las partes tienen características propias y el todo también tiene las suyas, no habiendo identidad necesaria entre el todo y la suma de las partes. La idea de sistema nos conduce, aunque no inmediatamente, a la idea de régimen democrático. Nos conduce, digo, porque la democracia supone no uno sino varios partidos que interactúen, compitiendo, democráticamente. Pero, la alusión no es directa porque no toda interacción es democrática, ni se da necesariamente en los marcos de un régimen de este tipo.

Ahora bien, calificar de sistema establecido, en términos democráticos, al conjunto de partidos peruanos en la década de 1980 quizás pudiera resultar excesivo, por las dificultades de la interacción entre ellos que más tarde serían una de las causas de su crisis. Por esta razón Mainwaring y Scully (1995) tratan al Perú como un "sistema incipiente" al compararlo con otras experiencias latinoamericanas. La extrema precariedad del conjunto, sin embargo, hace difícil aceptar que tal sistema existe o existió, por lo que es preferible, al analizar a los actores partidarios en el marco de un régimen democrático, hablar de un proto-sistema o un intento de construir un sistema de partidos, lo que nos mantiene en la perspectiva sistémica para tratar al conjunto pero sin afirmar la cuestionable existencia de una institucionalidad establecida. Señalo esto a diferencia de Adrianzén (1993) y sobre todo de Tuesta (1995) que dan por sentado la existencia de un sistema de partidos en el Perú entre 1978 y 1992, y proceden al análisis de la crisis del mismo como quien estudia el derrumbe de un edificio terminado.

La idea de sistema, asimismo, nos lleva a otra precisión. Si se quiere dar cuenta del conjunto hay necesidad de analizar el carácter de las relaciones entre las partes, es decir, la interacción. Caracterizando la interacción se puede avanzar sustantivamente en dar cuenta del rol de los partidos en la coyuntura estudiada. Este asunto de la interacción se torna fundamental para el estudio de los partidos peruanos porque, como se verá más adelante, la crisis de los partidos se da en el tránsito de partidos hechos para la confrontación a convertirse en partidos que buscan la competencia y la cooperación y eventualmente el compromiso. Cuando algunos de nuestros entrevistados reclaman el poco tiempo que han tenido los partidos en el Perú para desarrollarse, se están refiriendo al poco tiempo que han tenido para desarrollarse como partidos democráticos, es decir, como partidos en competencia democrática.

El carácter excluyente del orden oligárquico generó su contrario partidario, necesariamente también excluyente, desarrollando una relación vía la confrontación. La particularidad de esta relación es que no se confrontaban partidos democráticos o potencialmente democráticos, en el sentido pluralista del término, con partidos oligárquicos, sino partidos no democráticos, en particular el PAP y el Partido Comunista Peruano (PCP), que buscaban prefigurar en sí mismos el nuevo orden que pretendían, con el Estado, en especial con los organismos represivos del Estado y en particular con el Ejército. El rol más importante de los partidos anti-oligárquicos es encabezar lo que Sinesio López (1991) llama las "grandes

incursiones democratizadoras@ en el Estado Oligárquico, que permitieron, paulatinamente, abrir la vida política y dar derechos de participación electoral a la mayoría de la población adulta. Este proceso democratizador, sin embargo, ni fue hecho por partidos plenamente democráticos ni terminó destruyendo el orden oligárquico, por lo que, si bien en el curso del mismo se concedieron derechos políticos, no se gestaron las condiciones para que los partidos superaran el carácter confrontacional de su conducta. Los intentos de competencia democrática son entonces intentos de competir con hábitos confrontacionales, no con hábitos de compromiso, lo que acelera la crisis de los partidos y hace precarios los períodos democráticos.

Ahora bien, cuando analizamos una interacción sistémica de partidos hay necesidad de seguir un conjunto de pautas, al respecto tenemos el influyente modelo de Giovanni Sartori (1992), que usaremos con algunas modificaciones introducidas por Alan Ware (1996). El modelo de Sartori supera modelos anteriores de la ciencia política que tenían como básico el criterio numérico, entre los cuales el paradigma era el presentado por Maurice Duverger (1957) en su obra *Los Partidos Políticos@*. Sartori parte señalando que no solo es importante contar, sino que lo más importante es cómo contar, prestando atención a los partidos que son verdaderamente influyentes en cada lugar. La influencia, según este autor, está determinada por dos criterios: la capacidad de los partidos para ser gobierno o socios de una coalición de gobierno y/o la capacidad de los partidos para chantajear al gobierno desde la oposición. Este tamiz nos señala el número de partidos que importan, proporcionándonos una clasificación, es decir un ordenamiento de acuerdo a un criterio. Pero Sartori insiste en que hay que pasar de una clasificación a una tipología, es decir a un ordenamiento de acuerdo a dos criterios, por ello agrega a la contabilidad numérica el elemento ideológico. Al respecto señala que la ideología hay que entenderla en este caso como una característica junto con su opuesto, el pragmatismo, lo que nos permitiría, cuando analizamos un sistema, observar un continuo que va de partidos más ideológicos a partidos más pragmáticos. La ideología, así, se entiende para Sartori como distancia ideológica entre las partes del sistema e intensidad ideológica en cada una de las partes. La observación de una tipología, en un caso específico, califica para el autor la forma de competencia en un determinado sistema, pero, sobre todo, su dirección. Si la competencia tiene una dirección centrípeta el sistema tiende a la estabilidad, pero si tiene una dirección centrífuga tiende a la crisis y al eventual colapso.

A esto agregamos dos observaciones de Ware, la primera relacionada con la penetración de los partidos en la sociedad y la segunda con la legitimidad que los actores le otorgan al régimen político. En cuanto a la primera, Ware nos señala que cuando existe gran penetración de los partidos en la sociedad es difícil que surjan nuevas formaciones políticas y viceversa. Sin embargo, habría que diferenciar entre penetración en la sociedad en su conjunto e identificación de un grupo social o comunidad determinada con un partido político. Muchas veces puede faltar lo primero y darse lo segundo, Ware pone el caso del Partido Comunista en la Cuarta República Francesa y Cotler resalta el mismo fenómeno con los partidos en el Perú, en particular con el PAP y los partidos de izquierda. Mientras que respecto de lo segundo, el autor inglés señala la importancia de la lealtad de los actores políticos para la estabilidad del régimen. Apunta, sin embargo, a diferencia de Sartori, que la deslealtad no solo tiene como causa la distancia ideológica sino que también puede originarse en animadversiones de otro origen, como en las rivalidades personales producto de la cultura política o en los conflictos que surgen por el distinto origen regional o étnico de los actores políticos. Esta cuestión de lealtad con el régimen va a ser crucial en el Perú, convirtiéndose en uno de los elementos que finalmente lleva al colapso del conjunto del sistema de partidos.

Si buscamos aplicar este modelo sistémico al análisis del caso peruano no solo debemos contar de manera calificada, sino hacerlo tomando en cuenta la inserción real de los partidos en la sociedad, cuya situación está relacionada con la ubicación de los partidos en relación a una determinada fractura histórica. Al respecto, es fundamental la discrepancia que anotamos en un trabajo anterior (Lynch 1995) entre sociedad civil y sociedad política en el período de estudio, justamente porque esta discrepancia nos remite al horizonte histórico mayor y sirve de contexto explicativo para entender cómo funcionan elementos como el número de partidos, la intensidad y la distancia ideológicas, así como los conflictos interpersonales al nivel de la élite política.

En el caso peruano encontramos que contar, sencillamente, no nos ayuda mucho ya que si nos remitimos al número de actores políticos tenemos cinco formaciones relevantes: Acción Popular, el Partido Popular Cristiano (PPC), el Movimiento Libertad, el Partido Aprista e Izquierda Unida. Sin embargo, para efectos prácticos hubieron tres grandes formaciones: el centro-derecha, en el que se ubicaron, en distintos momentos, los tres primeros grupos; el Partido Aprista, en el centro-izquierda y la Izquierda Unida, en una clara posición de izquierda

marxista. Podríamos hablar entonces de un sistema multipartidario de pluralismo limitado, que por su número quizás hubiera podido tener una tendencia a la moderación. Pero si atendemos al origen de estas formaciones y a la herencia ideológica y de cultura política que ello implica, con las respectivas consecuencias en términos de lealtad al régimen, encontramos, por el contrario, un sistema multipartidario de pluralismo altamente polarizado, cuya dirección, a pesar de encontrarse en una etapa de formación, era centrífuga y no centrípeta. Este sistema de pluralismo polarizado aparece, además, en condiciones de extrema volatilidad, es decir, sin un partido o grupo de partidos que ocupen, como diría Sartori, el centro político. Con la atingencia de que no nos referimos aquí al centro ideológico, equidistante de izquierda y derecha, sino al centro espacial del sistema, que permite el equilibrio temporal entre las opciones polarizadas. La ausencia de este seguro relativo, que permitió la duración en el tiempo de otros sistemas polarizados, entre los que se distingue el italiano entre 1947 y 1976, hace del caso peruano un proto-sistema abiertamente condenado a estallar.

8. Sistemas de partido y sistemas electorales.

En este acápite y en el siguiente nos referiremos a la influencia de dos formas institucionales, el sistema electoral y el tipo de régimen, en el sistema de partidos. En ambos casos nuestra intención no es estudiar a estas instituciones por si mismas, en el sentido del viejo institucionalismo jurídico, sino, tal como señala el nuevo institucionalismo (Thelen y Steinmo 1992) en su capacidad mediadora en la interacción entre los actores partidarios. Esto nos lleva a entender y a operativizar en nuestro análisis la influencia de ambas instituciones como mediación en el proceso tanto histórico como coyuntural.

Aunque este libro se dedicará muy poco a los sistemas electorales propiamente tales, consideramos importante referirnos a ellos en relación a los sistemas de partidos porque suele confundirse a los primeros con los segundos, o suele creerse que unos son una simple prolongación de los otros.

En primer lugar, nos toca distinguirlos conceptualmente. Ya hemos definido los sistemas de partido como la interacción de competencia y cooperación entre dos o más partidos en torno a la lucha por y la retención del poder político. Definamos ahora los sistemas electorales. Como

diría Dieter Nohlen (1994), los sistemas electorales no son otra cosa que la manera como se traducen los votos en escaños, o -siguiendo la precisión de Sartori (1994)- como en los sistemas presidencialistas los votos eligen, además, al presidente de la república. Es indudable, entonces, que existe una relación entre ambos y que esta relación, en general, es importante, porque en los regímenes democráticos los ciudadanos votan, en la mayoría de los casos, por candidatos que pertenecen a determinados partidos. Los mecanismos que norman la traducción de la voluntad ciudadana en puestos públicos elegidos deben pues afectar a las organizaciones a las que pertenecen o están ligados los candidatos y viceversa.

Sin embargo, es importante detenernos en la relación porque puede haber la tentación interpretando a uno de los clásicos sobre el tema (Duverger 1957), de creer que los sistemas electorales crean o modifican sustancialmente los sistemas de partido. Esto no es exactamente lo que cree Duverger, quien prefiere nada más señalar tendencias, pero sus fórmulas: 1o., la representación proporcional tiende a un sistema de partidos rígidos, independientes y estables... 2o., el escrutinio mayoritario de dos vueltas tiende a un sistema de partidos, múltiples, flexibles, dependientes y relativamente estables... 3o., el escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende a un sistema dualista... han sido vistas y usadas como la llave para construir sistemas de partidos de uno u otro tipo. Lo que Duverger señala en realidad es la existencia de factores nacionales y generales, poniendo entre los primeros el contexto histórico y la estructura económica y social en que se desarrollan los partidos y señalando que el más importante entre los segundos es el régimen electoral. No sistematiza, sin embargo, las variables históricas y económico-sociales como si hacen enfoques posteriores (Lipset y Rokkan 1967), por lo que la importancia de lo que denomina régimen electoral crece en su marco analítico, lo que lleva a considerarlo (Sartori 1994) como un partidario de la causalidad del sistema electoral respecto del sistema de partidos.

Hay, sin embargo, enfoques más cautos y precisos. Tomemos, por ejemplo a Dieter Nohlen (1994), quien busca ensayar un enfoque sintético. Partiendo de considerar la importancia del sistema electoral, Nohlen señala que el punto de partida para considerar sus efectos deben ser las condiciones históricas y socio-políticas del país y que la valoración de un sistema electoral determinado depende de los intereses de los partidos en juego, y más profundamente de las fuerzas sociales que estos expresan. Se niega, sin embargo, a darle importancia decisiva a unos

factores sobre otros, o a señalar una relación de causalidad entre los sistemas de partido y los sistemas electorales. Dice, más bien, que existiría una Acausalidad circular@ donde los efectos a su vez repercutirían en las causas. Señala, por último, la necesidad de integrar las pautas del análisis histórico-estructural con las del análisis interactivo para tener una idea clara de cómo funcionan en cada realidad los efectos del sistema electoral.

Sartori (1994) por su parte, será quien determine con mayor exactitud, en términos teóricos generales, la relación entre los sistemas de partido y los sistemas electorales. Aceptando que hay una mutua influencia entre ambos, Sartori, sin embargo, hace hincapié en la importancia de analizar las características propias de cada uno de los sistemas. De los sistemas de partido le interesa su grado de estructuración y de los sistemas electorales la calidad fuerte o débil de los mismos en relación al tipo de representación, mayoritaria o proporcional, que adoptan. Prioriza entre los dos el grado de estructuración de los sistemas de partido, porque el efecto del sistema electoral será significativo allí donde existe una estructuración relativa del sistema partidario, mientras tal efecto no será importante allí donde exista un nulo o bajo nivel de estructuración del sistema partidario. De esta manera Sartori afirma la influencia del sistema electoral en los sistemas de partido y en la vida política en general, pero lo hace resaltando la importancia del grado de desarrollo del sistema de partidos y, así, del nivel de inserción histórica de los partidos en la sociedad, aspecto este último que parece olvidado en otros escritos suyos.

La precisión de Sartori es especialmente atendible para el caso latinoamericano, y en particular para el Perú, porque permite discernir entre el efecto de los sistemas electorales en democracias establecidas y el efecto en democracias en proceso de consolidación. En las primeras, el efecto será definitivamente mayor, pudiendo establecer variaciones de magnitud en la vida política de un país, mientras que en las segundas su efecto será, más bien, marginal. En el Perú, por ejemplo, las grandes reformas del sistema electoral, en 1931, 1963 y 1978-1979, acompañaron lo que Sinesio López denomina las grandes incursiones democratizadoras en el Estado Oligárquico. Es cierto que tuvieron un importante efecto en la coyuntura inmediata, en particular permitiendo la participación, vía elecciones, de nuevas fuerzas políticas en el parlamento y el Poder Ejecutivo, incluso detalles como la distorsión en la distribución de escaños y el voto preferencial, que señala Tuesta (1995), influyeron en la formación de mayorías y la composición del parlamento en el período de estudio. Pero ello no nos puede llevar a decir que

determinaron la formación del sistema de partidos en cada uno de esos momentos históricos.⁶ Incluso especialistas en el tema, como Valentín Paniagua, en entrevista que le hicieramos, señala que hasta 1963 no se puede considerar que hubo AVerdad electoral@ en el país, señalando el escaso impacto que hasta fecha tan avanzada en el siglo tuvo el sistema electoral en el Perú. Es más, estas reformas fueron promulgadas por gobiernos militares que buscaban la democratización del país, pero en ninguno de los casos dieron lugar a un régimen democrático estable, terminando, más bien, los períodos que abrieron con nuevos golpes de estado y nuevos regímenes militares o tutelados por las Fuerzas Armadas.

9.Sistemas de partido y tipo de régimen.

Al igual que en el caso de los sistemas electorales, lo que nos interesa en esta sección son los efectos del tipo de régimen político en la interacción entre los partidos en el período de estudio. Un importante debate reciente (Linz 1994, Sartori 1994, Mainwaring 1997) trae nuevamente a primer plano el papel de la instituciones en la política. Este debate se focaliza en los efectos del tipo de régimen y pone especial acento en la crítica al presidencialismo en general, aunque resaltando sus ejemplos latinoamericanos. El sentido de la discusión es poner de relieve la influencia de una institución, el presidencialismo, en las otras instituciones y en los procesos políticos en curso. Entre las instituciones influidas una que se destaca es el sistema de

⁶La reforma de 1931 estableció el sufragio universal de la población adulta masculina y alfabeto, el voto secreto, directo y obligatorio, una autoridad electoral autónoma y la confección de un Registro Electoral independiente de los registros tributarios y de conscripción militar, así como la representación de minorías a través del sistema de las listas incompletas. La reforma de 1962, por su parte, estableció la cédula única de votación, el escrutinio irreversible en mesa y la representación proporcional vía la cifra repartidora. Asimismo, respetó la ampliación del voto a las mujeres que ya había sido legislado en 1955. La de 1978, amplió el voto a los jóvenes mayores de 18 años e incluyó el voto preferencial dentro de la cifra repartidora. Además, la Asamblea Constituyente que siguió a esta reforma dió, finalmente, el voto a los analfabetos.

partidos cuya consistencia y configuración en una democracia están estrechamente ligadas a las características que adopte el régimen político.

El debate se centra en el contraste entre las dos opciones clásicas: presidencialismo y parlamentarismo y el efecto que cada una de ellas produce en el sistema de partidos. Juan Linz (1994), argumenta que el presidencialismo latinoamericano al afirmar el protagonismo presidencial y opacar el rol del parlamento, deja de lado a los partidos políticos como colectivos de decisión e impide su desarrollo como mecanismos que traducen la opinión pública en iniciativas legislativas. El presidencialismo, dirá entonces Linz, necesita de personalidades pero no de partidos, relegando a estos últimos al rol de maquinarias electorales. Sartori (1994), aunque coincide en muchas críticas al presidencialismo, es más cauto al respecto, señalando que al no existir partidos fuertes sería más bien peligroso introducir el parlamentarismo y proponiendo, por ello, una salida intermedia. En ambos autores es clara la influencia institucional, aunque, como vemos, no estén de acuerdo con el sentido de la misma. Considero, sin embargo, que continuar en esta línea argumental sería caer en un círculo vicioso, por lo que creo necesario introducir un elemento de referencia estructural.

Tal como lo señalábamos para el caso de los sistemas electorales, la influencia del tipo de régimen en los sistemas de partido depende del grado de consolidación del régimen democrático como tal y de los partidos como actores democráticos dentro del mismo. En el caso latinoamericano los períodos largos de estabilidad democrática no han sido la regla, por lo que el efecto del tipo de régimen en el sistema de partidos es una cuestión que varía de país a país. En el Perú, cuya tradición democrático-constitucional es más bien débil, podríamos empezar por establecer una influencia en sentido contrario. Es decir, una influencia del liderazgo político, expresado en personalidades y/o partidos, en el tipo de régimen. El origen es la tradición caudillista que marca el período oligárquico pero se prolonga luego en el populismo y en las nuevas formas de liderazgo caudillista que este supone. En el caso del Perú contemporáneo es la proyección del Ajefe@ partidario como líder carismático y candidato permanente a la Presidencia de la República. Este jefe no entiende su actuación como autoridad de otra forma que no sea la máxima acumulación de poder y el mínimo control por parte de otros sobre su actividad. Así actúa en su partido y así supone que debe actuar si ocupa un cargo público. Podríamos decir entonces que es el caudillismo, en sus versiones tanto aristocráticas como

populistas, el que promueve el presidencialismo y entiende la Presidencia de la República como una especie de Atrofeo mayor@ de la actividad política. Este caudillismo, que se expresa en el presidencialismo de todas las constituciones republicanas sin excepción, tiene su máxima expresión en la proyección del liderazgo populista en este siglo, coincidente con el desarrollo de los partidos modernos de 1930 en adelante.

Este tipo de presidencialismo ha tenido dos expresiones bajo gobiernos democráticos en la etapa posterior a 1930: el bloqueo a la actividad del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo y el hiper-presidencialismo. El primer caso sucedió durante el gobierno de Bustamante (1945-1948) y el primer gobierno de Belaúnde (1963-1968), y no es sino la reacción de un parlamento fragmentado, donde el gobierno está en minoría o se vuelve una minoría, frente a la posibilidad de éxito de las políticas presidenciales. El segundo caso, corresponde al período de estudio 1980-1992, y a los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-1992) y consiste en la exageración de los poderes presidenciales al punto de subordinar o intentar subordinar al parlamento y separarse, a la vez, de su propio partido. Lo que nos interesa aquí es el segundo caso, de hiperpresidencialismo.

La principal característica de los presidentes peruanos en el período de estudio fue, como dice Cynthia McClintock (1994), que se creían Asalvadores@ o AMesías@ que tenían el encargo providencial de llevar al pueblo peruano a alguna tierra prometida. Esta característica, que se fue agudizando conforme corría el período, encontró a su representante paradigmático en Alberto Fujimori. En lugar de ponerse más receptivos, los presidentes de este período tendieron a encerrarse en sí mismos, haciendo la debacle inevitable. El Congreso, por otra parte, de acuerdo al régimen presidencialista legislado en la Constitución de 1979, no tenía forma, aunque lo hubiera querido, de deponer -salvo circunstancias extraordinarias- al Presidente, debiendo soportar su desgaste hasta el final del período. Esto fue factible sin una crisis de régimen mientras los presidentes gozaron de amplias mayorías en las cámaras, como fue el caso de Belaúnde y García, pero llevó a un enfrentamiento que terminó en golpe de estado cuando Fujimori se negó a entenderse con un parlamento que, sin llegar a la sumisión, paradójicamente, lo apoyaba. Una característica significativa de cómo estos presidentes subordinaron al parlamento en el período fue el reiterado uso de la legislación delegada como una forma de

aprobar leyes. A través de esta facultad constitucional los presidentes aprobaron no solo el mayor número de normas con rango de ley sino también las más importantes (Lynch 1992).

Pero además y contra lo que cree McClintock , este tipo de hiperpresidencialismo lleva a la polarización política. Una forma de polarización donde los partidos de oposición legal, más por cálculo táctico de corto plazo que por razones ideológicas antisistémicas, responden descartando toda posibilidad de cooperación con el presidente en funciones y desarrollando una conducta que tiende a exacerbar la competencia, erosionar las políticas del Ejecutivo y deteriorarlo de tal modo que anule al partido gobierno como alternativa para las siguientes elecciones. Esta actitud tiene visos de tragedia en un contexto como el de la década de 1980 cuando el país sufría una aguda crisis económica y el régimen político era efectivamente desafiado por grupos armados abiertamente antisistémicos.

Tal como afirma Linz (1994), el presidencialismo y en especial su exagerada versión peruana, dan las mejores condiciones para la elección de un *Aoutsider* como Presidente de la República. Al promover una elección que pone por delante las cualidades personales y no el programa del candidato es más fácil que personas sin entrenamiento político ni objetivos claros puedan arribar al máximo cargo del país, abriéndose el camino al oportunismo político y, a la postre, a la burla de la voluntad popular. En el caso peruano, este efecto presidencialista lo podemos observar en la elección de Alberto Fujimori en 1990, donde al entorno institucional se agrega una tradición política que estimula el aprecio por los caudillos providenciales y una crisis partidaria que libra del último freno orgánico a las figuras que vienen de fuera del sistema y se enorgullecen de llamarse independientes.

En este contexto, podemos establecer una secuencia en la que la representación populista que se expresa en partidos de ese signo promueve el presidencialismo y éste, a su vez, limita el protagonismo partidario, al punto de extinguir a los partidos como alternativas de expresión y recambio políticos. En este sentido, el *outsider* que sucede a los partidos se nutre de los deshechos de esta representación populista y, por ello, expresa lo peor del hiperpresidencialismo.

10. El tipo de partido y la particularidad latinoamericana.

Es difícil homologar el desarrollo de los partidos en Europa Occidental con el de aquellos en América Latina. Sin embargo, es difícil también escapar a la tentación de seguir el molde europeo occidental que informa la teoría sobre el tema. Quizás lo más interesante sea contrastar los tipos de partido y las situaciones a las que cada uno de ellos responde. El partido de representación individual, en las palabras de Sigumund Neuman (1956), o de coordinación parlamentaria como señala Sartori (1992), es la primera forma que se conoce de partido político. Se trata de un partido que responde a las formas iniciales de democracia representativa de sufragio restringido, donde el mercado político era reducido y los representantes eran más representantes individuales de un pequeño grupo de electores, que gozaban de un mandato bastante libre y eran generalmente elegidos por sus conexiones sociales. Estos representantes llegan a la forma partidaria por una necesidad de su trabajo parlamentario más que para organizar sus conexiones políticas externas, de allí que muchos autores prefieran llamarlos clubs antes que partidos propiamente dichos. Recordemos al respecto el caso de los agrupamientos durante la revolución francesa: el Aclub de los girondinos@ o el Aclub bretón @ que se transforma luego en los jacobinos.

A este tipo de partido le sucede el partido de masas, llamado también por Neuman el partido de integración democrática. Este es un tipo de agrupamiento que responde a la necesidad de organizar a la ciudadanía para participar en un mercado político drásticamente desarrollado como resultado de la progresiva ampliación del sufragio. Neuman se refiere a este como partido de integración por la intención que tiene de influir en la vida diaria de sus militantes, así como por el esfuerzo de integración colectiva en la vida política de sectores importantes, en general anteriormente marginados, de la ciudadanía. El ejemplo característico está dado por los partidos socialistas europeos. Asimismo, contrapone este tipo de integración democrática a la integración totalitaria que sería la promovida por los partidos comunistas y fascistas, con la consecuencia de finalizar con el pluralismo y la democracia constitucional.

El partido de masas, o de integración democrática, sin embargo, fue superado una vez culminado el tránsito de las sociedades agrarias a industriales y producida la integración de los sectores anteriormente marginados. De igual manera, el auge económico posterior a la segunda guerra mundial desdibujó las claras líneas de división clasista propias del capitalismo inicial y llevó a los partidos de masas a competir en un mercado político mucho más duro, donde debían

buscar expresar las demandas no solo de sus clientelas tradicionales sino de una amplia gama de sectores sociales si querían tener posibilidades acceder al gobierno. Esto llevo a la aparición de lo que Otto Kirchheimer (1966) llama el *Catch-all party*⁷. Muy brevemente diríamos que este es el partido que se caracteriza por disminuir la importancia de la ideología, destacar el atractivo personal de sus líderes, disminuir el papel de los miembros individuales, quitar énfasis a cualquier filiación clasista y cortejar a una variedad de grupos de interés. Esta forma, la del *catch all party*, sería la forma de crisis, como ya lo avizora el propio Kirchheimer, de la institución partido en las democracias representativas de los países capitalistas desarrollados.)Cuál sería la cuestión clave de esta crisis? Tal como señala Alessandro Pizzorno (1981), la carencia de alternativas políticas reales en las democracias desarrolladas. Esto sucede por la desaparición de propuestas de solución específicas a los problemas concretos y su reemplazo por planteamientos gaseosos -en el afán de captar el voto del mayor número posible de electores- que cada vez hacen más indistinguibles a unos partidos de otros. Junto con estos fenómenos se produce una mayor elitización de la clase política, cuya propia reproducción como tal pasa a ser su preocupación fundamental. En estas condiciones aumentan las posibilidades del ejercicio corrupto del poder y los escándalos consiguientes, lo que suscita grandes reacciones ciudadanas que tienden a condenar el sistema de partidos en su conjunto.

⁷*Catch all party*, es el término inglés para el partido que agrupa a todos y que ha sido traducido al español como el partido Aagarratodo@.

En América Latina la diferencia fundamental está en los tiempos y la dinámica de los procesos de democratización. Los partidos de notables de la época de las democracias oligárquicas eran, en su mayor parte, formaciones políticas episódicas que respondían a los diversos bandos de las guerras civiles posteriores a las guerras de independencia y que cumplieron, en el mejor de los casos, una imprescindible tarea de centralización estatal. Su definición no estaba, entonces, en referencia a las tareas de coordinación parlamentaria, eran más bien etiquetas que adoptaban grupos de élite generalmente asociados a algún caudillo civil o militar. Tuvieron alguna relevancia allí donde lograron organizar regímenes tempranos de contestación política, es decir regímenes donde era posible que deliberen puntos de vista opuestos. Aunque, es preciso decirlo, se trató de regímenes excluyentes, donde el ejercicio democrático estaba limitado a los partidos que expresaban los intereses de la élites terratenientes y donde el derecho al voto era calificado de acuerdo a la posición social de los individuos⁸. Su duración se limitó a la época de dominación oligárquica, perdiendo importancia luego de la quiebra de los regímenes de este tipo. Sin embargo, donde estos regímenes logran hacer la transición a democracias más amplias, incluyendo nuevos sectores políticos y expresando nuevos sectores sociales, como es el caso de Uruguay y Chile, logran establecer democracias de aliento con una duración importante en el siglo XX; o, donde los viejos partidos oligárquicos se las arreglan para representar, ellos mismos, a nuevos sectores sociales, como en Colombia, logran prolongar versiones de la antigua democracia oligárquica hasta bien entrado el presente siglo. Sin

⁸Mucho se ha discutido sobre la consideración de estas democracias oligárquicas como antecedentes válidos de las democracias representativas modernas basadas en el sufragio universal, para el caso peruano es interesante revisar la discusión comentada extensamente por Pedro Planas (1994) en su libro *ALa República Autocrática@*. Sin embargo, podemos llegar a una conclusión inicial sobre el tema, basándonos en Huntington (1991) así como en Rueschmayer, Stephens y Stephens (1992), señalando que aquellos países que tuvieron regímenes importantes en el tiempo de contestación política temprana, en general, gozaron de más facilidad para establecer una continuidad o transición políticas con regímenes democráticos más amplios o de pleno sufragio universal.

embargo, a diferencia de los partidos de notables europeos, no eran en su mayoría agrupaciones que pertenecieran a un régimen político incurso en un proceso de democratización. Los regímenes de los que directa o indirectamente formaron parte eran regímenes cerrados que debieron ser abiertos por los movimientos y/o partidos anti-oligárquicos, en la mayoría de los casos a través de enfrentamientos violentos.

Los partidos anti-oligárquicos, nacional-populares o populistas, fueron grandes partidos de masas, pero que, a diferencia de los partidos de masas europeos, me refiero a la socialdemocracia, se agruparon en torno a un líder y un discurso, más que en torno a un programa y a una organización. Fueron partidos cuyo rol consistió en terminar con el viejo orden oligárquico y buscar construir estados-nación en América Latina, partidos cuyo discurso se articuló, como señala Laclau (1977), en torno a las contradicciones pueblo-oligarquía y nación-imperialismo. En este sentido, cumplieron un gran rol histórico democratizador. Por la trascendencia de las tareas planteadas se asumían como fundadores de un nuevo orden cuya propia organización prefiguraban. Ello les daba, como señalamos líneas arriba, una perspectiva totalizante y no plural de la política, lo que estará en la raíz de su ambivalencia frente a la democracia. En el proceso promovían la participación de nuevos sectores sociales populares en la política, sin embargo, como resalta Gino Germani (1965), esta participación no se traducían en una integración estable y masiva en la sociedad porque el populismo no promovía una institucionalización representativa, sino, eventualmente, la formación de una comunidad carismática de seguidores a un caudillo y/o una red clientelística dependiente de la jefatura política. Se trataba, entonces, de organizaciones no democráticas, que privilegiaban la confrontación, y que, dependiendo del curso de cada realidad política, podían convertirse en organizaciones abiertamente anti-democráticas o evolucionar a convertirse en partidos democráticos. Los partidos de masas europeos, en cambio, eran claramente, como señala Neuman, partidos de integración democrática, cuya práctica política los hizo convertirse de partidos revolucionarios en reformistas y desarrollar una clara perspectiva de institucionalización democrático-representativa. La distinta suerte de cada experiencia nacional para proceder a democratizar el viejo orden, así como la diferente influencia de las antiguas fuerzas oligárquicas, ya sea a través de partidos sobrevivientes o de las fuerzas armadas, señalaran las posibilidades de los partidos nacional-populares para convertirse en fuerzas democráticas.

Es difícil señalar que en América Latina se haya desarrollado el *Acatch-all party*, en el sentido europeo o norteamericano del término. El *catch-all party* no es solo un fenómeno político, también es un fenómeno económico y social, producto de las condiciones de igualación de status causadas por una drástica redistribución del ingreso ocurrida luego de la Segunda Guerra Mundial en los países industriales desarrollados. Este fenómeno contrasta con la persistente y radical desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina. Sin embargo, el predominio populista ha dado paso a diferentes tipos de mixturas, evoluciones y nuevas formas políticas, que surgen del combate a las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980 y de los procesos de inacabada transición a la democracia. Los partidos populistas en su mayoría han sufrido un profundo proceso de transformación para adecuarse a los nuevos tiempos democráticos y, a la vez, para tomar una actitud frente a las políticas económicas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales. En algunos casos han cambiado para asumir estas políticas como su nuevo programa, como ha sido el caso del peronismo en la Argentina, del PRI en México, de Acción Democrática durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y del MNR en Bolivia, en otros, también han cambiado, pero para enfrentarse al neoliberalismo desde una perspectiva renovada, como es el caso de esiciones peronistas y priístas en sus respectivos países. Pero allí donde el populismo fue resistente al cambio, o este fue muy superficial, como en el Partido Aprista Peruano (PAP), las consecuencias fueron devastadoras. Sin embargo, en términos de sistemas de partido, quizás si el elemento más importante sea, en unos y otros, la cultura de confrontación que pervive en estas formaciones e impide la estabilización de los respectivos sistemas de partido como sistemas democráticos.

Además de las transformaciones sufridas por los partidos populistas existen también otros tipos de partidos, como es el caso de los partidos demócratas cristianos, importantes en Venezuela, Chile y Costa Rica, con una capacidad también significativa de adaptarse a los tiempos, y los partidos neoliberales, siempre ligados en su surgimiento y desarrollo a viejas herencias oligárquicas, destacando en los ochentas el FPL en Brasil, el Movimiento Libertad en el Perú y los partidos de la nueva derecha chilena, Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente. Sin embargo, en ningún caso logran convertirse en paradigmas de partidos de masas ni menos de *catch all party* latinoamericano. Por otra parte, el partido socialdemócrata de cierto éxito-prototipo del partido de masas en occidente- es más bien raro en el contexto

latinoamericano, con la excepción de Chile y el intento postrero de algunos partidos populistas de convertirse a la socialdemocracia .

También es importante mencionar a los partidos de la izquierda marxista, que desde una visión panorámica tienen, más bien, una importancia menor. Sin embargo, su influencia fue significativa en las décadas de 1960 y 1970, al influjo de la revolución cubana y de diversos tipos de movimientos sociales que ocurrieron en la región. Más allá de su prédica anti-capitalista, la función que cumplieron estos grupos fue principalmente anti-oligárquica y anti-autoritaria, jugando un rol significativo en su lucha contra las diversas formas de dictadura, particularmente militar, que tuvo América Latina en el siglo XX. Especial mención cabe a los frentes izquierdistas que convertidos en organizaciones guerrilleras participaron en guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, guerras que tuvieron su punto más alto en la década de 1980 y que llevaron, en los años siguientes, a la instauración de regímenes democráticos a través de diversos tipos de acuerdos de paz. Igualmente, es importante mencionar al gobierno de Allende en la década de 1970 y la Izquierda Unida del Perú en la década de 1980, que en diferentes contextos democráticos tuvieron una influencia de excepción, confirmando, de diversas maneras en su excepcionalidad, la regla del predominio populista. Sin embargo, tampoco podemos decir que la izquierda marxista desarrolla en América Latina, salvo en coyuntura específicas, partidos de masas que puedan compararse con las impulsadas por los partidos nacional-populares.

Si el punto de crisis en los partidos de las democracias establecidas es la indefinición y falta de soluciones del *catch all party* frente a los problemas, el punto de crisis en la forma por excelencia del partido latinoamericano: el partido populista, es la incapacidad de integrar a los nuevos participantes en la política en instituciones democrático-representativas. No hace esta integración el populismo deviniendo en prácticas clientelistas masivas y lo hace menos la izquierda marxista que buscaba destruir lo poco que hubiera de democracia representativa. Tampoco lo hacen los partidos conservadores, en sus formas tradicional o neoliberal, que tienden más bien a apoyar la construcción de regímenes de democracia restringida. En ambos casos, del *catch all party* y del partido populista, se trata de alternativas que expresan un punto de agotamiento en el desarrollo de un ciclo partidario, llegando a ser ineficaces en expresar y traducir las demandas populares. En ambos casos, aunque de diferente manera, son las élites

dirigentes las que son vistas como impidiendo la participación ciudadana a través de los partidos y privilegiando su posición de grupo de poder. El partido populista, sin embargo, tendrá mayores dificultades para reconvertirse como partido democrático por su poca costumbre de competencia política en función de la representación, lo cual no solo tiene que ver con su propia cultura política sino con graves problemas estructurales pendientes que dieron origen a estas formaciones como partidos anti-oligárquicos.

De la crisis peruana nos ocuparemos con detalle en el próximo capítulo, aunque sea fácil percibir que tiene elementos importantes de la crisis partidaria latinoamericana. Quizás los aspectos fundamentales de distinción se den por el lado de los tiempos políticos. En el Perú la crisis oligárquica de principios de la década de 1930 cancela los partidos aristocráticos de notables pero prolonga la influencia de la oligarquía a través de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, los diversos populismos se agotan en su tarea democratizadora antes de alcanzar sus objetivos y dejan, paradójicamente, buena parte de su programa para que lo realice un gobierno militar. Por último, al docenio democrático llegan, en términos de edad histórica, formaciones o muy jóvenes, como es el caso de Izquierda Unida, para la que doce años no es tiempo suficiente de aprendizaje, o muy viejas, como es el caso de AP y el PAP, cuyo significado histórico era de otro tiempo y cuya capacidad de maniobra política se mostró insuficiente para enfrentar los problemas de la consolidación democrática.

11. Crisis de los partidos y representación política.

Asumir la crisis de los partidos como objeto de estudio, nos obliga a definir el sentido en que usamos la palabra crisis. Si seguimos a Gianfranco Pasquino (1982) definimos crisis en el análisis político como el momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema. Para definir la ruptura tenemos que observar el sistema y su modo de funcionamiento regular. Asimismo, si queremos determinar el tipo de crisis, veremos que nos atañen los dos tipos fundamentales, la crisis genética y la crisis de funcionamiento. Pero, ¿qué significa crisis genética y qué significa crisis de funcionamiento en relación a los términos que hemos estado usando? Crisis genética, refiere a la crisis estructural, y tiene que ver con la capacidad de representación social de los partidos políticos. Crisis de funcionamiento, en cambio, tiene que ver con la capacidad de

interacción sistémica entre los actores políticos y toca, también, la capacidad de representación política de los actores en una coyuntura o período específico. Las crisis política suelen expresarse como crisis de funcionamiento, por ello empezamos señalando el modo regular: la vigencia de los partidos políticos está dada por su capacidad para darle forma a la vida política de un país (Mainwaring y Scully 1995). En una democracia esto significa la capacidad de los actores políticos para construir un sistema de partidos democrático y hacer que este constituya el escenario fundamental.

En el caso peruano la crisis se expresa también como una crisis de funcionamiento, definiéndose por la incapacidad, creciente en la década de 1980, por parte de los partidos políticos, de darle forma a la vida política del país. Es importante remarcar que esta incapacidad no se define por contraste con una vigencia anterior, sino más bien con la promesa de una democracia de partidos que no se llega a cristalizar. Esto nos hace ver que la crisis de funcionamiento tiene como antecedente una crisis genética. Se trata de partidos que vienen de otro escenario no democrático o semi-democrático y están acostumbrados a otra forma de interacción.

De igual manera, esta crisis de funcionamiento se da por sobrecarga del proto-sistema partidario: sus posibilidades de interacción democrática eran muy pobres como para poder responder, con soluciones de consenso, a las demandas que la situación imponía. Esta incapacidad se expresa en el distanciamiento del electorado de los partidos y en el predominio de ciertas fuerzas no democráticas como los partidos anti-sistema que desarrollaban prácticas terroristas y determinados grupos de interés, como los militares y los organismos financieros internacionales⁹, que desarrollan una capacidad de influencia decisiva sobre el poder político.

⁹Podría parecer errado denominar grupos de interés, término que la literatura anglosajona generalmente usa para caracterizar a grupos privados, a entidades como las Fuerzas Armadas o los organismos financieros internacionales. Los primeros, porque son una organización eminentemente estatal y los segundos porque son, a su vez, también organizaciones formadas por estados. Sin embargo, en el caso de las Fuerzas Armadas peruanas, su comportamiento, por el nivel todavía inicial de formación estatal, semeja más el de un grupo con intereses propias que el de una organización subordinada a intereses públicos que eventualmente pudiera defender el estado. En el caso de los organismos financieros internacionales, la debilidad también del estado peruano los lleva a comportarse como un centro de influencia que poco a poco se vuelve dominante. No se trata entonces de grupos de interés en una polis constituida, sino de grupos de interés en una polis en formación.

Podemos decir que la crisis se gesta conforme los partidos van perdiendo capacidad, tanto de gobernar como de ser oposición, y llega a su momento de ruptura cuando aparecen los independientes y apoyándose en una coalición de grupos de interés, les quitan toda capacidad de protagonismo en la política nacional. Este momento estaría dado por el autogolpe del cinco de abril de 1992. A la etapa inaugurada por el momento de ruptura analistas como Sinesio López (1995) y Martín Tanaka (1995) la prefieren calificar como el "colapso" de los partidos políticos, para remarcar quizás el carácter irreversible de la situación partidaria.

Si ahora hablamos de crisis, por contraste diremos que para hablar de recuperación de los partidos políticos como sistema de competencia democrática, deberemos esperar al momento en que los partidos sean las entidades que predominen para darle forma a la vida política del país.

En el Perú, cobra especial relevancia, por la situación de distancia reiterada que expresan los gobernados frente a los gobernantes, el problema de la crisis de representación. Es más, la crisis de los partidos ha sido caracterizada como una Acrisis de representación@ (López 1991, 1994), pero sin entrar al detalle de la misma. Esta falta de detalle ha motivado que se produzcan refutaciones sesgadas (Rochabrún 1994) que rechazan la existencia de representación política en el Perú y por lo tanto de cualquier crisis de la misma. Señala este punto de vista que en el Perú solo habría habido intermediación, pero nunca representación política, arguyendo que la distancia ya indicada entre líderes políticos y ciudadanos es el elemento clave que permite concluir no solo la crisis sino la inexistencia de representación. Por ello, procederé a señalar las diversas dimensiones del concepto Arepresentación@ y las distintas acepciones del mismo que tienen que ver con nuestra materia de estudio.

Negar la existencia de representación política basándose en la distancia entre gobernantes y gobernados supone entender representación únicamente como responsabilidad frente a los electores, o lo que la ciencia política anglosajona denomina *accountability*. Es decir, tal como nos señala Hanna Fenichel Pitkin (1967) en su libro sobre el tema, tomar en cuenta solo una de las dimensiones de la representación política, la dación de cuenta de los representantes a los representados. En el extremo este punto de vista entiende a los representantes como mandatarios o agentes que deben cumplir instrucciones de los representados, desnaturalizándose la idea misma de representación. Pero el concepto de representación es mucho más complejo. Pitkin nos

habla del él en todos sus extremos: representación como autorización, como dación de cuentas, como semejanza, como identidad, como representación de intereses, etc.

Antes que nada, y para evitar problemas, en especial con la caracterización de los independientes o *outsiders*, debemos considerar que representación no siempre se asoció con democracia. Tenemos el caso de los reyes que representaban a sus pueblos y de los embajadores que hacían lo propio con sus países, pasando por los caudillos carismáticos que, vía la representación como identificación, también representan. Con lo cual no desmerecemos el carácter representativo de la democracia moderna, ni el hecho de que la profundización de la representación signifique al fin y al cabo democratización. Establecemos, nada más, la distinción conceptual para no caer en falsas sinonimias.

Primero, tenemos a la representación como autorización, como remarcan Hobbes y Schumpeter, cuando a los representados solo les toca autorizar a sus representantes para que ellos ejerzan su función tal como les parezca. Concepción similar tiene Edmund Burke cuando señala que de lo que se trata es de representar intereses que no tienen que ver con tal cual individuo sino con comunidades enteras y eventualmente con la nación en su conjunto, por lo que los representantes, una vez elegidos, son los que deciden de acuerdo a su información, inteligencia y buen entender. Esta concepción es la que en el siglo XX adoptan la mayoría de los teóricos elitistas de la democracia, inspirados en particular en Joseph Schumpeter (1942).

Una variante de este punto de vista es lo que Pitkin entiende como la concepción específicamente liberal, cuyo representante más preclaro sería James Madison en sus clásicos escritos de los *A Federalist Papers*. Para Madison se trata de representar personas que tienen intereses específicos, donde los representantes no necesariamente tienen, como en Burke, mejor conciencia de esos intereses que los representados. Al ser estos intereses parciales y específicos, y no depender de la ilustración de los representantes el que puedan compatibilizarse, hay necesidad para este pensador de construir instituciones que tengan los mecanismos necesarios para evitar los entrampamientos propios de la competencia entre intereses distintos y muchas veces opuestos. Esta teoría es la que inspira en el presente siglo al denominado elitismo pluralista norteamericano, en particular a los primeros libros de Robert Dahl (1956), donde la democracia es definida no como un régimen de mayoría sino de competencia entre múltiples minorías.

Pero también existen las concepciones descriptivas de la representación que inciden en la necesidad de la semejanza entre representantes y representados, ya se trate de semejanza étnica, clasista, profesional, de género o de procedencia regional. Algunos autores, como Sartori (1992) y siguiéndolo a él este autor en texto anterior (Lynch 1995), disminuyen la pertinencia estrictamente política de esta tipo de representación y prefieren denominarla Asocial@ o Asociológica@, a pesar de que la representación por semejanza vuelve a ocupar, desde distintos enfoques, una y otra vez, el debate de la teoría política contemporánea. Este tipo de concepciones han estado generalmente asociadas con aquellos puntos de vista que promueven una mayor cercanía entre gobernantes y gobernados y que creen que compartir características entre ambos grupos puede permitir que los representantes tomen más en cuenta a los representados a la hora de decidir. Tenemos el caso de las propuestas sobre democracia funcional, cuyo ejemplo más cercano lo tenemos en Haya de la Torre y los iniciales planteamientos apristas, así como las Aasambleas populares@ de los fallidos intentos de Asocialismo real@ que subrayaron especialmente este aspecto. Sin embargo, también existen tendencias más modernas, en especial en países con comunidades étnicas claramente diferenciadas, que señalan la necesidad de un Acuoteo@ para cada comunidad en la elección de las respectivas instancias legislativas.

Una versión distorsionada de esta forma de representación descriptiva podría ser también la representación corporativa que intentan los partidos de la izquierda radical en el Perú en las décadas de 1970 y 1980. En este caso, en oposición a la democracia que pone en vigencia la Constitución de 1979, postulan la articulación corporativa de diversos movimientos sociales en una perspectiva revolucionaria. Los representantes, en este proceso articulador, vendrían a ser los pequeños partidos que tenían trabajo político en tal o cual sector. Esta concepción corporativa de la representación, sería, tal como veremos más adelante, uno de los problemas más serios a enfrentar por el régimen democrático en el período 1980-1992.

Tenemos, asimismo, concepciones simbólicas de la representación, donde el representante simbolizaría la Aunidad del pueblo@. Puede tratarse de representantes no elegidos, como el caso de los reyes o los dictadores, pero también de representantes elegidos, como el caso de los presidentes en las democracias parlamentarias. En el caso latinoamericano, la representación populista como forma de identificación de las masas movilizadas con la persona de un líder, podría también considerarse una variedad de la forma de representación simbólica.

Esta representación se basa en un criterio no necesariamente racional, la gente cree en determinados personajes como símbolos que representan al conjunto. Se pueden encontrar orígenes para esta creencia como la tradición, el carisma, algún hecho histórico particular que consagra a un personaje o, incluso, las elecciones para el caso de los presidentes en regímenes parlamentarios, pero la creencia en el símbolo es fundamental. Quizás la situación extrema en el caso de la representación simbólica la constituya el fascismo, donde una inmensa maquinaria política, usando elementos de tradición, historia y carisma, hace a la gente creer en el líder. Esto, sin embargo, no quita que toda forma de representación tenga algo de simbólica.

Observamos pues una tensión fundamental cuando hablamos de representación, por un lado se quiere independizar al representante del representado, por otro, se quiere sujetar al representante a los deseos del representado. La experiencia de la democracia representativa moderna indica, por una parte, que la sujeción del representante por el representado desnaturaliza la función del primero y se contradice con la característica central de la representación que es ser un mecanismo que facilita la expresión de muchos a través de unos pocos en una sociedad compleja. Asimismo, esta sujeción iría contra la necesaria autonomía que el representante debe tener para poder llevar adelante el ejercicio de su función y ser capaz, tanto él como el partido al que pertenezca, de cambiar de opinión en el curso del debate con otros representantes y partidos, sino la deliberación perdería su sentido y el intercambio de opiniones se convertiría en un simple diálogo de sordos.

Pero la independencia absoluta del representante frente al representado tampoco es una virtud en la democracia moderna y más bien su persistencia y conversión en eje de muchos regímenes políticos ha llevado a la crisis de los mismos. Esta independencia absoluta o casi absoluta conduce a la conformación de élites cuyo principal interés es reelegirse continuamente, desligándose de las demandas de los ciudadanos e impidiendo que puedan desarrollarse alternativas efectivas a los problemas de la población. Es más, la tendencia a la independencia absoluta de los representantes está a la raíz de las últimas crisis en diversas democracias desarrolladas en el mundo, como son los casos de Italia, Japón y el propio Estados Unidos.

Hay necesidad de pensar entonces en un concepto de representación política que combine autonomía de los representantes con disposición para que estos puedan rendir cuentas a los representados, vía mecanismos institucionales que promuevan la participación de los ciudadanos.

Este tipo de representación, donde se expresan demandas y estas se traducen en propuestas de política que se someten a debate entre los representantes, es representación en el sentido sustantivo del término. Será muy difícil determinar seguramente cuánto de cada elemento debe existir para que haya representación política. Más difícil todavía si introducimos elementos de la llamada representación simbólica o de la representación por semejanza. Por ello, de lo que se trata es de analizar la realidad en cuestión tomando en cuenta esta definición general para ver si existen los elementos de autonomía y dación de cuentas, y al mismo tiempo si otros elementos, simbólicos o de semejanza, afectan de alguna manera el proceso de representación.

En el caso peruano el problema mayor de representación que existió se dió por el lado de la dación de cuenta, *accountability* o control de los representantes por los representados, problema directamente ligado al carácter genético de la crisis de representación pero también a los problemas de la coyuntura motivo de estudio. Ello no quita que también existiera un grave problema de eficacia en el ejercicio de la acción autónoma del representante, relacionado con el primero, pero subordinado en importancia.

El problema de la dación de cuenta tiene que ver con la gran distancia entre sociedad civil y sociedad política en el período de estudio, originada por la multiplicación ciudadana y la renovación casi total del cuerpo de electores entre 1963, año de la última elección general anterior a la transición democrática y 1978, año de la elección a la Asamblea Constituyente. Esta multiplicación ciudadana está más ligada a los años del reformismo militar que a un sistema de partidos políticos, cuya actividad, por lo demás, estuvo parcialmente recesada durante el gobierno militar. Esta situación no desarrolla entre los ciudadanos una identidad con una sociedad política específica. A esto se agregaban las instituciones constitucionales de 1979 que proponían una estructura democrático-representativa, con muchos adelantos en el papel frente a otros textos constitucionales, pero que favorecía el manejo de la representación por los partidos políticos, sin señalar mecanismos específicos de control para la ciudadanía. Debemos señalar también en este punto la creciente falta de semejanza étnico social entre representantes y representados, que se hace más aguda en tanto la multiplicación ciudadana es más importante y las élites políticas tienden a ser las mismas o a reproducirse de los mismos círculos sociales (López 1994).

En cuanto a la falta de eficacia en la solución de los problemas, que caracteriza la acción del representante, esta se debe tanto a la magnitud de las cuestiones a enfrentar en un mundo cambiante, caracterizado por la crisis de paradigmas y la globalización, así como a la perspectiva de corto plazo predominante que lleva a un importante déficit en términos de interacción competitiva entre los actores políticos. El tipo de partido dominante en la época, era heredero de los grupos de notables de los tiempos de la crisis del Estado Oligárquico, que semejaba más a un jefe con su séquito que desarrollaba una política clientelista con sus seguidores que a una agrupación de estructuras organizadas, propuestas programáticas y dirigentes elegidos. Esta debilidad en la acción de representar produce también una profunda deslealtad con el régimen democrático y lleva finalmente a la inviabilidad del mismo.

Pero los ciudadanos no solo se representan individualmente a través de los partidos, se organizan también, como nos dice Robert Dahl (1956), en grupos que articulan intereses y que suelen competir entre sí por influir al poder, tanto directamente como a través de los partidos. ¿Qué es un grupo de interés? Tomando la caracterización de Alessandro Pizzorno (1981) sobre la definición inicial que tuvieron los grupos de interés, el autor italiano nos dice que estos son grupos creados por la libre iniciativa de sus miembros que tienen objetivos específicos y explícitos de acción colectiva. En su desarrollo, sin embargo, algunos de estos grupos se complejizan, llegando a tener objetivos múltiples y organizaciones nacionales que los promueven. Por ello se dice que es función central de los partidos intentar agregar intereses, tanto organizados como dispersos, para ganar elecciones y poder gobernar.

Los grupos de interés tuvieron una suerte dispar en el Perú de la década de 1980. Mientras unos, como los sindicatos y las organizaciones campesinas, barriales y regionales, que podría considerarse representaban intereses mayoritarios, disminuyeron su influencia respecto de la que habían tenido durante el período militar, otros fueron articulándose crecientemente en el curso de esos años para influir al poder político, tanto directamente como a través de los partidos. Me refiero a lo que más tarde se denominaría como "poderes fácticos": principalmente las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios y la tecnocracia ligada a los organismos financieros internacionales, por su naturaleza representantes de intereses poderosos pero minoritarios.

Asimismo, el Perú tuvo durante el período de estudio los dos problemas que suelen motivar los grupos de interés en los sistemas políticos. Por un lado, organizaciones partidarias

que buscaron controlar a los grupos de interés denominados "populares", como fue el caso del PAP e Izquierda Unida (IU), por otro, los grupos de interés denominados "poderes fácticos" que buscaron controlar partidos y gobiernos, en particular la alianza denominada FREDEMO y el gobierno de Fujimori. Ambas identidades entre grupos de interés con partidos y gobiernos distorsionan el proceso democrático. Pero es particularmente distorsionador, como lo señala la teoría neo-pluralista (Dahl 1985) y lo reafirma la experiencia peruana última, la influencia de los grupos de interés con grandes recursos, económicos o de fuerza militar, que finalmente suelen jugar sus cartas al discurso y la práctica anti-partido.

El proto sistema de partidos peruanos se movía entonces en un contexto que estaba determinado por ambas fuerzas: ciudadanos-electores y poderes fácticos.)A quién representaba y en qué proporción? Es muy difícil de determinar. Quizás podríamos decir que si para medir la influencia de los ciudadanos-electores podemos recoger las estadísticas electorales o incluso las encuestas, para calibrar la influencia de los poderes fácticos nos debemos referir al testimonio de los actores y a las políticas que se implementaron.

)Podemos entonces afirmar que lo que se dió en el Perú fue un problema de crisis de representación? Ciertamente que sí. Fue un problema de crisis de las prácticas populistas que se mostraron incapaces de construir un sistema de representación democrático. Como nos señala Bernard Manin (1992) al referirse a las crisis de representación en Europa Occidental, el pasaje de los partidos de notables parlamentarios a los partidos de masas a fines del siglo XIX, implicó la crisis de una forma oligárquica de representación para ser reemplazada por otra basada en el sufragio universal. Así también, la crisis de los partidos de masas latinoamericanos en su forma populista, se produce con el advenimiento de la última ola democratizadora de la década de 1980 en la región, cuando sus sistemas clientelistas se muestran insuficientes para satisfacer a la ciudadanía y la población busca nuevas forma de relacionarse con el poder político que le sean más útiles para enfrentar sus problemas cotidianos.

Ciertamente, esta situación, en el caso latinoamericano, se da en un contexto en el que cambia el modelo económico de acumulación Ahacia adentro@ que permitía rentas extraordinarias al Estado y estimulaba el clientelismo. Esto significa que hay menos dinero para atender a los clientes tradicionales del Estado y la sociedad política, motivando su retracción como apoyo de las políticas y movimientos nacional-populares. Pero este cambio también es

estimulado porque en la última ola democratizadora latinoamericana, en particular en países de populismo tardío como el Perú, se incorporan nuevos ciudadanos (Lynch 1995) a los que jamás alcanzaron las antiguas redes clientelistas desarrolladas por el populismo, lo que los lleva a buscar nuevas formas de canalizar sus demandas.

El Perú es quizás el caso extremo de esta crisis donde los partidos no son capaces de reconvertirse y marchan a una situación de colapso, dando paso a los denominados independientes o *outsiders*, que desarrollan una fuerza desconocida en comparación con otros lugares del continente. Los *outsiders*, también significan una forma de representación, tal como pasaremos a ver en las siguientes líneas, cuán democrática, ello es objeto de aguda controversia, pero no por ello menos representativa. Se equivocan entonces, en toda la línea, aquellos que niegan la crisis de representación porque esta no significa la crisis de un sistema que represente a toda la población adulta. Las crisis de representación son siempre las crisis del sistema de representación, sea elitista o de masas, que existe en una sociedad determinada.

12. Los *Aoutsiders* como alternativa a la crisis de representación

Como diría Kay Lawson (1988) las alternativas a los partidos políticos aparecen cuando el vínculo o intermediación establecida por ellos falla en establecer una relación aceptable entre los ciudadanos y el poder. Cuando decimos aceptable nos estamos refiriendo a un tipo de relación que satisfaga las necesidades de legitimación que los individuos asumen una determinada forma de poder político debe tener. Estas alternativas a la crisis de representación, vía los partidos políticos, en las diferentes partes del mundo han sido principalmente dos: los denominados movimientos sociales y el surgimiento de independientes o *outsiders*. No podemos decir que unos u otros hayan sido exclusivos de tal o cual parte del mundo. Tenemos de ambos tanto en las democracias establecidas como en las que están en proceso de consolidación. Silvio Berlusconi en Italia, Ross Perot en los Estados Unidos, Alberto Fujimori en el Perú, Irene Sáenz en Venezuela, APalito@ Ortega en la Argentina; los movimientos por los derechos humanos en la América Latina que iniciaron las transiciones a la democracia en los setentas y los ochentas, los movimientos ecologistas, feministas y pacifistas en los Estados Unidos y Europa Occidental,

los foros cívicos contra el totalitarismo comunista en Europa Oriental, etc, etc. Además, en cada caso hay diferentes variedades y distinto grado de éxito político.

Detrás de cada una de estas alternativas hay diagnósticos en alguna medida también diferentes. Quienes promueven a los movimientos sociales suelen apuntar al carácter elitista de las democracias modernas, o, estar enfrentando regímenes autoritarios. La alternativa, en este caso, es una relación más directa con el poder vía la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que afectan a la población. Quienes resaltan la irrupción de los *outsiders*, por otra parte, suelen considerar a los partidos en si mismos como la fuente de los problemas de la democracia, resaltando la necesidad de la población de una Acomunicación directa@ con quien toma las decisiones políticas. Tenemos entonces que, como ilusión o realidad, lo que se buscaría es una relación más cercana de la ciudadanía con el poder.

Si tomamos el caso de los movimientos sociales, es decir de la acción colectiva y organizada de un conjunto de personas con un propósito específico, vemos que adquieren relevancia política porque los partidos no han podido, querido o sabido, levantar esa reivindicación o conjunto de reivindicaciones y plantear una solución al respecto¹⁰. En este sentido, los movimientos sociales ganan vigencia política en forma rápida y puntual, dejando de lado a los partidos. Es más, estos movimientos suelen ganar simpatía más allá de sus miembros porque tienden a fortalecer el tejido social, dando consistencia a lo que se ha venido en llamar la Asociación civil@, o, el sector organizado de la sociedad, base de la interacción política en las democracias representativas.

En las democracias establecidas es posible distinguir entre lo que se ha dado en llamar Aviejos@ y Anuevos@ movimientos sociales. Por viejos entendemos a los movimientos sociales empeñados en la redistribución de la riqueza, entre los cuales el caso típico es el del movimiento

¹⁰A veces se tiende a confundir movimiento social con grupo de interés, pero si bien el primero está incluido en el segundo, la característica que distingue a los movimientos sociales es la importancia de la movilización colectiva de sus miembros para conseguir sus objetivos. Por ello, generalmente se usa la denominación movimiento social para referirse a los movimientos surgidos de la sociedad civil que luchan por una agenda específica de demandas y concitan la participación directa de los que conforman el movimiento.

obrero. Por nuevos a los movimientos sociales empeñados en la reivindicación de la identidad de una comunidad específica, como son los movimientos feministas, homosexuales, anti-racistas, etc. En los países donde se combaten regímenes autoritarios, o en las democracias en proceso de consolidación, es difícil establecer esta diferencia entre movimientos nuevos y viejos y los que suelen predominar son los movimientos por la redistribución de los recursos. Sin embargo, en ambos casos, se trata de organizaciones cuya incursión política tiene un éxito coyuntural con una alta credibilidad respecto de las cuestiones que postulan pero con una escasa capacidad de construcción institucional y con una, también escasa, capacidad de comunicación, en el mediano plazo, con audiencias que vayan más allá de sus seguidores originales. Su capacidad de durar como organizaciones específicamente políticas es, más bien, limitada, mostrando así las características inherentes a su naturaleza de movimientos con propósitos específicos.

En América Latina esta situación es aún más aguda por la tradicional falta de separación, como señala Alain Touraine (1987), entre Estado y sociedad. En esta región la organización social tiende a ser una prolongación del Estado, lo que lleva, por oposición, cuando aparecen movimientos sociales relativamente autónomos, a una escasa articulación entre las esferas social y política. Esto produce, como observa Fernando Henrique Cardoso (1981), dos lógicas, una de los movimientos sociales y otra del poder, siendo sus encuentros eventuales y más bien catastróficos, donde el poder espera la derrota de los movimientos sociales para proceder a la cooptación de los mismos.

El hecho de que los movimientos sociales persistan como movimientos con propósitos específicos nos devuelve a la definición de partido de Edmund Burke, cuando señala que partido es un grupo de individuos que desde un punto de vista particular tienen una propuesta sobre los intereses generales de la sociedad. Eventualmente, entonces, la vigencia de los partidos podría ser restaurada debido a la imposibilidad de que los movimientos, como entidades que permanecen en la particularidad, reemplacen a los partidos que son organizaciones permanentes que establecen la relación entre lo particular y lo general y entre los ciudadanos y el poder político. Esto no significa, sin embargo, que la impronta de los movimientos sociales no haya significado una democratización de la política en general y de los partidos en particular, propiciando, además, el fortalecimiento de la sociedad civil y la adopción de nuevos mecanismos participativos en el marco de las instituciones representativas.

Pero la alternativa que más nos interesa, por la importancia que ha tenido en el Perú en los últimos años, es la de los denominados independientes o *outsiders*. ¿Qué es un *outsider*? En general, es un individuo que viene de fuera del sistema de partidos y de la sociedad política, con un prestigio ganado en otra actividad, diferente de la política, y por estas razones, en una situación de crisis de una forma de representación, la gente se inclina a confiar en ella o él. Contrariamente a lo que se ha dicho de manera espontánea sí constituye una forma de representación política, aunque esta forma no sea, necesariamente, democrática. Es una forma de representación por identificación, o de representación simbólica, en la que los individuos tienden a identificarse directamente con el líder que consideran, por no estar mezclado con los políticos tradicionales, capaz de solucionar sus problemas.

El *outsider* desarrolla un discurso condenatorio de la política y los políticos, a los que señala como la causa de los males que vivimos. Busca aparecer, de esta forma, incluso cuando desarrolla su papel como líder, ajeno a la política misma. En otras palabras, es un político que dice que no hace política y que señala que nada se puede conseguir a través de la actividad política. Por lo tanto, no le queda otro camino que hacer política en las sombras, huyendo del escrutinio público. Su relación con la población no la entiende como un acto deliberativo, de intercambio de opiniones sobre los temas del poder, sino como un acto de relaciones públicas, para dar o recibir cosas, o, a lo sumo, comunicar decisiones ya tomadas a la ciudadanía. Es un político, entonces, que desarrolla una actitud antipolítica.

Hay diferentes tipos de *outsiders*. Tenemos, por una parte, personajes como Alberto Fujimori, un completo *outsider* a la sociedad política en el Perú al final de la década de 1980, que gana la elección presidencial incluso contra los medios de comunicación masiva que apoyaban al candidato rival. Otro *outsider* como Fernando Collor de Melo es prácticamente Afabricado@ como candidato ganador por las grandes cadenas de televisión brasileñas a principios de la década de 1990. Igualmente, suceden cosas como la candidatura de Mario Vargas Llosa, en el Perú, como reacción a típicas políticas populistas, que terminó siendo absorbida por los partidos de la derecha tradicional, o sea un *outsider* que terminó de *insider*. Por último, tenemos el caso de artistas como APalito@ Ortega, que son llamados por un partido político, el peronista en este caso, para postular a un puesto de elección popular en razón de su prestigio obtenido como

cantante. Es decir, el caso de un partido que se aprovecha del fenómeno *outsider* para levantar sus bonos.

El *outsider* propone una relación "directa" pero no deliberativa con la ciudadanía, por encima de las instituciones representativas, que albergarían a los políticos, y al margen de las reglas de juego. La ciudadanía, por su parte, cansada de un régimen político poco eficaz pero formalmente basado en reglas, prefiere cambiar la vigencia de tales reglas por su confianza en la capacidad personal del líder (Perelli 1995). Para esta relación directa el *outsider* privilegia el uso de los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, que para algunos sería el nuevo vehículo de agregación de intereses, cultivando con esmero una imagen cercana a la mayoría ciudadana. Este *outsider*, además, aparece siendo eficaz, es decir, brindando soluciones, no importa a que precio, que los partidos no habían sabido ofrecer. Su fuente de legitimidad son por eso los resultados aparentes, fruto de la aplicación decidida de determinadas políticas. La legitimidad por resultados se convierte entonces en un soporte fundamental, generalmente por encima de la legitimidad legal-democrática que se obtiene en las urnas.

Así tenemos que este fenómeno, relativamente nuevo, puede significar diferentes cosas. Por un lado el surgimiento de nuevos líderes, especialmente locales y regionales, que nacen de la sociedad civil, para llenar el vacío dejado por el colapso partidario. Por otro, la nueva apariencia que deben tomar antiguos líderes partidarios, que se desligan de sus organizaciones originales, para volver a la actividad política con alguna perspectiva de éxito. Por último, la posibilidad, para todo género de aventureros de incursionar en la actividad política entendiéndola como un negocio particular. Pero en todos los casos se trata de aparecer como nuevos intermediarios que no tienen compromisos con el antiguo orden partidario establecido.

Hay diferentes explicaciones, de carácter más bien estructural, para entender el origen de los *outsiders*. Sergio Zermeno (1989) pone el énfasis en la crisis del Estado como agente dinamizador de la sociedad, y en particular del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que habría llevado a la desaparición de buena parte de la clase trabajadora industrial en América Latina e incluso al cuestionamiento de las nociones de Atrabajo@ y Alugar de trabajo@. Si nos atenemos a las cifras tenemos que entre 1980 y 1996, la cantidad de población económicamente activa en el sector informal pasa de 40% a 57% en el subcontinente y que ocho de cada diez nuevos trabajos en los noventa han sido creados en el sector informal

(OIT 1997). Esto lleva a una multiplicación de la población excluida del sector moderno de la economía y la sociedad, así como a una fortísima erosión de la base social de los partidos populistas y de izquierda. El trabajador informal, según Zermeño, ya no desarrolla una identidad en oposición a un patrón específico que es su adversario real o potencial y ocasionalmente reacciona con un tipo de violencia social sin proyecto claro. Esto llevaría a la identificación de individuos atomizados por la crisis con el líder incontaminado.

Carina Perelli (1995) y Oscar Landi (1995) subrayan los cambios de tipo cultural. Los viejos canales de intermediación, educación y agregación de demandas, como la educación cívica escolar, la prensa escrita y los partidos, se demuestran obsoletos, dando paso a medios masivos de comunicación como la televisión y a formas de medición de la opinión pública como las encuestas. Se desarrolla de esta forma una comunicación no *Ade masas@* sino *Amediática@*, sin interacciones sociales, que no se dirige a una clase sino a individuos atomizados. Esta nueva situación, paradójicamente, crea una cultura de imágenes en la que es posible observar lo que está pasando en distintas partes del planeta casi de manera simultánea a la ocurrencia de los hechos, y, a la vez, hace posible un acceso mucho mayor de los individuos a la información. En este nuevo contexto, los políticos ya no son necesarios en su antiguo papel de intermediarios, y para mantener su vigencia deben negociar su agenda con un nuevo poder dominante como son los medios de comunicación, convirtiéndose en los casos extremos en productos de los mismos. En estas condiciones la política se convierte en un espectáculo que se presenta a la población, más que afirmarse como un proceso en cual la población participe. Así, la política se va mudando de sus lugares habituales como el parlamento y los políticos elegidos van siendo reemplazados por los técnicos en la toma de las decisiones fundamentales del Estado.

Estos cambios, de tipo tanto socio-político como cultural, tienen un impacto distinto en los diferentes países, de acuerdo a la consistencia de los sistemas de partido y el nivel de institucionalización respectivo. En algunos casos los sistemas partidarios son capaces de absorber, o al menos convivir con el reto de los *outsiders* y la creciente influencia política de los medios, en otros, la debilidad del sistema partidario lleva a que sucumban frente a los *outsiders*, llevando al colapso al sistema de partidos, como fue el caso peruano que es motivo de nuestro estudio. Sin embargo, en los distintos ejemplos que podamos presentar, hay necesidad de la crisis de un sistema de representación anterior para que la alternativa de los *outsiders*, como intento de

una nueva forma de representación, sea viable. Generalmente, es la crisis del populismo, que promueve participación y clientelaje político pero escasa o baja institucionalización democrático-representativa. Esta es una crisis que se da en el proceso de consolidación de democracias jóvenes o con pocos años de restauradas y sucede en aquellos lugares donde es más difícil la evolución del Estado populista de clientes al Estado democrático de ciudadanos. Podríamos decir que los países con menor experiencia democrática o con menor experiencia ciudadana, en términos democrático-representativos, son más proclives al fenómeno de los *outsiders* en América Latina. Quizás los casos de Brasil, Perú o Argentina, por contraposición a los de Chile, Colombia o Uruguay, puedan ser un buen ejemplo al respecto.

En el Perú, el surgimiento del fenómeno de independientes o *outsiders* está directamente ligado a la crisis de los partidos en la década de 1980. El fenómeno empieza expresándose dentro del propio proto sistema partidario de la época, en la tradicional personalización de la política partidaria, en la proliferación de figuras AIndependientes@ que hacen política con los partidos, y en alcaldes distritales y provinciales que empiezan a presentarse claramente como Adistintos@ de los partidos. Pero alcanza su plenitud cuando los partidos se muestran agotados y dejan el espacio para que aparezca una persona totalmente diferente de los políticos tradicionales. Es el momento del surgimiento de Alberto Fujimori en las elecciones generales de 1990.

"Aparecer distintos" es lo que les permite a los *outsiders* generarse un espacio propio y finalmente terminar echando a los partidos del escenario político. Es por ello importante distinguir similitudes de diferencias y ver si realmente se trata de una especie distinta de la partidaria.

En ambos casos, partidos e independientes, son actores que luchan por el poder y en este proceso buscan cumplir con una función de intermediación política entre sociedad y Estado, es decir se constituyen en actores políticos. En contextos con un sistema partidario asentado la diferencia inmediata que saltaría a la vista sería una mayor densidad organizativa en los partidos y un definitivo sello personal entre los *outsiders*, pero es tal el grado de personalización de la política en el Perú que el sello personal también caracteriza a los partidos, por lo que solo podríamos decir que los *outsiders* llevan esta característica personal a su grado más extremo. El acento ideológico-programático quizás podría aparecer también como una diferencia, donde los partidos serían los apegados a determinados puntos de vista, más bien rígidos y pasados de moda,

y los *outsiders* desarrollarían un perfil pragmático. Sin embargo, no encontramos *outsiders* que se atrevan a salir del también rígido guión de la moda neo-liberal. Es, más bien, este último horizonte ideológico, al seguir las pautas de un orden secularmente dominante, el que aparece en sus recetas como pragmático, y encuentra a los *outsiders* entre sus portavoces más eficaces.

La diferencia entre partidos e independientes o *outsiders* estaría más bien dada -como ya señalamos- porque estos últimos aparecen, en momentos de crisis, como actores políticos por fuera del sistema o proto-sistema de interacción entre los partidos. Es el tipo de interacción, centrado en las ganancias de corto plazo para los partidos involucrados, lo que la ciudadanía identifica como una conducta negativa y causante de los problemas que vive el país, por lo tanto, quien se coloca por fuera de esta forma de interacción, en el momento adecuado, tiene más posibilidades de ser identificado positivamente por la población. Pero el colocarse por fuera del tipo de interacción señalado no lleva a los *outsiders* a formular un nuevo tipo de interacción democrática con otros sectores políticos, particularmente si se trata de actores partidarios. Por el contrario, lo que pretenden es "jugar solos" eliminando a otros posibles actores políticos, en el entendimiento de que no se trata de adversarios sino de enemigos.

En el caso peruano del *outsider* Fujimori, su elección como Presidente da paso también a la formación de una coalición que lo sostiene, formada por los denominados "poderes fácticos": altos mandos militares, empresarios y funcionarios de los organismos financieros internacionales. Esta coalición es de carácter excluyente, no pretendiendo integrar, sino más bien marginando, a diversos sectores sociales -particularmente populares- de la misma; y antipolítico, es decir, no se encuentra interesada en negociar sus puntos de vista sobre la conducción del Estado con otras fuerzas (Cotler 1994). Esta coalición afirma el fortalecimiento de los poderes fácticos (Ames 1994), que se habían venido desarrollando durante la década de 1980, pero que adquieren peso decisivo en la conducción del Estado en estas nuevas condiciones. El fortalecimiento de estos poderes fácticos y sus características antipolíticas, aunque también se producen en otros países de América Latina, adquieren en el Perú una relevancia particular por la extrema debilidad de los partidos, a los que la nueva coalición de poder tiende a sumir en una crisis aún más profunda.

Existe, a veces, la tentación de creer que la eficacia del *outsider* se debe a los poderes fácticos y no a sus propias características como nuevo fenómeno político. Es indudable que poco podría hacer el *outsider* sin su alianza con la coalición de poder señalada, pero es cierto también

que es su condición de *outsider* respecto del sistema político y el tipo de identificación que la población desarrollo con él lo que le permite aparecer como eficaz. De ninguna manera, por ello, podemos reducir la eficacia de los *outsiders* a la fuerza de los poderes fácticos.

Se puede establecer continuidad entre los presidentes caudillos¹¹, Fernando Belaúnde y Alan García, y el presidente *outsider* Alberto Fujimori. En todos los casos observamos el intento de establecer relaciones de clientela entre el líder y determinados sectores de la ciudadanía, insistiendo en el patrón de integración segmentada repetido por diferentes élites políticas en las últimas cuatro décadas (Cotler 1968). Al efecto usan, en diferente medida y en distintas formas, el aparato y los recursos del Estado para satisfacer a sus clientes. En este sentido hunden sus raíces en la tradición patrimonial oligárquica que se remonta a nuestros orígenes como república. Hay, sin embargo, diferencias sustantivas. En los primeros casos aparecen caudillos que juegan dentro de los límites que imponen reglas de juego que los anteceden y que no está en su arbitrio cambiarlas. En el segundo, el caudillo *outsider* cambia las reglas cuando no le convienen, no las negocia con los demás actores políticos y las vuelve a cambiar cuando le parece. Quizás lo que permite esta diferencia central es que los primeros aparecían como administradores de un orden en decadencia al que no pretendían cambiar ni reformar, agudizando más bien la crisis con su conducta, mientras que el segundo aparece como el fundador de un nuevo orden que cura las taras del anterior y permite recobrar la esperanza en un futuro ordenado y viable. Esta diferencia restringe drásticamente el espacio para la competencia política entre organizaciones partidarias porque lleva al extremo la incertidumbre -propia por lo demás de toda democracia- respecto a las

¹¹Empleamos aquí el término caudillo para designar al hombre fuerte que pretende encarnar al movimiento que dirige, reservándose el derecho a la comunicación directa con sus seguidores y a la interpretación, en última instancia, de los objetivos del movimiento. Si bien el caudillismo como fenómeno histórico se desarrolla en América Latina en el período posterior a las guerras de independencia, los regímenes oligárquicos, primero, y el populismo, posteriormente, tienden a prolongar muchas de sus características hasta el presente, haciendo en buena medida Antropomórfica@ la política de la región.

posibilidades de la oposición de convertirse en gobierno o tener, eventualmente, influencia en decisiones importantes.

Sin embargo, la calidad de *outsider* de una figura como Alberto Fujimori, en el contexto de América Latina, no aparece como indispensable para que encabezara un proceso de ajuste económico como el vivido en el Perú. Los ejemplos de Menem, surgido de las filas del peronismo en Argentina, del propio MNR en Bolivia, donde su líder histórico Víctor Paz Estensoro opta por el ajuste, y del PRI en México, -todos ejemplos de antiguos partidos populistas que se transforman- hacen ver que la figura de *outsider* anti-partido es más producto de la precaria institucionalización de los partidos en el Perú que de las necesidades políticas del proceso de ajuste. Un caso aparte podría ser el de Venezuela, donde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática, lleva adelante un proceso de ajuste que, sin embargo, fracasa y da lugar al surgimiento de un *outsider* anti-ajuste como es el caso de Hugo Chávez. Aquí, sin embargo, la corrupción producto de la bonanza petrolera juega un papel especial que no se repite en otros países de América Latina.

Tenemos entonces que los *outsiders* son una especie política, pero de apariencia y discurso antipolíticos. Una especie nacida de las limitaciones de los partidos, con importantes continuidades en las formas de hacer política, en especial en lo referente a la personalización de esta actividad y en particular en la relación con instituciones partidarias como la Ajefatura@ que eleva la condición del líder a instancia indiscutida e indiscutible. Estas continuidades, sin embargo, tienen un punto de ruptura cuando el *outsider* explota su condición de actor ajeno a la sociedad política en la que irrumpe, proponiendo una forma de representación alternativa a la partidaria o lo que hemos llamado representación como identificación de los individuos atomizados con el líder.

Esta forma de representación como identificación es, sin embargo, contraria a la interacción democrática entre los actores políticos porque propicia una línea de comunicación vertical y arbitraria entre el líder y la ciudadanía y promueve, a la vez, la destrucción de la comunicación horizontal, léase competencia y cooperación políticas, entre los colectivos agrupados como opinión organizada. Esto no significa que la representación como identificación no exista en los regímenes democráticos, particularmente cuando estos son regímenes presidenciales, el problema aparece cuando esta se convierte en la forma de representación más

importante. La predominancia de la representación como identificación resta drásticamente posibilidades de institucionalización al régimen democrático-representativo y señala que los *outsiders* pueden constituir una alternativa de intermediación en un momento de crisis, pero no parecen tener las características necesarias para establecer patrones de funcionamiento regular en un régimen plural, cuestión indispensable para consolidar la democracia.

El carácter anti-institucional, en términos democrático-representativos, de este tipo de representación los hace, además, una alternativa necesariamente autoritaria, por más ilusiones que puedan despertar en un primer momento, a la representación de tipo partidario, llevándolos a una dependencia cada vez mayor de los denominados poderes fácticos.

13. Partidos, institucionalización y consolidación democráticas

El estudio del origen de los partidos, la interacción entre los actores partidarios y su capacidad de representar a la ciudadanía adquiere sentido porque sus resultados pueden ser indicadores importantes del grado de institucionalización del sistema de partidos políticos. La institucionalización refiere a los partidos como conjunto y significa: la existencia de patrones relativamente permanentes de competencia interpartidaria que resultan en electorados estables para los partidos políticos, formas de relación con la ciudadanía que llevan a una fuerte identificación con el conjunto partidario y con los partidos específicos, un camino conocido y reglamentado de acceso al poder que suele ser por su certidumbre procedimental la vía democrática, y la preeminencia de las organizaciones sobre los jefes políticos¹². Para nuestro estudio la referencia es a la institucionalización en condiciones democráticas. Vale la salvedad, porque, aunque sea difícil cuando se trata de conjuntos de partidos que la institucionalización pueda darse en otras condiciones, cabría un debate en torno a la situación institucional de democracias restringidas o semi-autoritarias.

¹²Me baso para formular este criterio de institucionalización en las definiciones que hacen al respecto Mainwaring y Scully (1995), aunque, a diferencia de ellos, proceda al análisis de un solo conjunto partidario y combine información tanto cualitativa como cuantitativa.

La institucionalización afirma el poder de los partidos en la vida política nacional, permite la participación y la resolución ordenada de conflictos en la democracia y, al mismo tiempo, refuerza la influencia de los partidos en las instituciones políticas, en particular, en los poderes donde sus miembros son directamente elegidos para desempeñar cargos públicos, me refiero al Legislativo y el Ejecutivo. La institucionalización de los partidos está también en estrecha relación con la gobernabilidad democrática de un determinado país. A mayor institucionalización mayor y mejor manejo de los problemas de gobierno y logro más eficiente y eficaz de los objetivos del mismo (Sagasti, Patrón, Lynch, Hernández 1995). Por lo tanto, mayores posibilidades de consolidación democrática.

El Perú durante el período de estudio fue a contracorriente de lo que podía ser un proceso de institucionalización partidaria. Por ejemplo negativo quizás constituye un excelente caso de lo que no fue una institucionalización partidaria y, analizando las ausencias, de lo que eventualmente podría ser en el futuro. Hubo una promesa de institucionalización del conjunto de la vida política y dentro de ella de los partidos, contenida en la Constitución de 1979, que no solo no llegó a plasmarse sino que se convirtió en un agudo proceso de desinstitucionalización que arrasó con los partidos mismos. Podríamos decir que el proceso de desinstitucionalización velada que se dió en la década de 1980, dió paso a una desinstitucionalización abierta luego del golpe del cinco de abril de 1992, convirtiendo el gobierno arbitrario de las personas en la forma normal de proceder.

Pero la institucionalización partidaria, en particular en países en proceso de democratización, debemos analizarla en relación a un proceso mayor, el proceso de consolidación democrática.

La democracia, como dice Philippe Schmitter (1992) no es un requisito funcional ni un imperativo ético, tiene que ser "puesta en marcha" por alguien, es producto de una voluntad política determinada. Esta voluntad política en la democracia representativa son los partidos como mecanismos de mediación y articulación de intereses de individuos y grupos sociales. Pero así como los partidos ponen en marcha a la democracia ésta, a su vez, es el ámbito privilegiado del desarrollo partidario. Sin democracia o con una democracia restringida los partidos tienen poco desarrollo como mecanismos de mediación y articulación de intereses y más bien se desarrollan, cuando existen, como grupos de confrontación con el poder para lograr, justamente,

espacios democráticos. La relación partidos-democracia es entonces una relación fundamental, sin embargo, su planteamiento no constituye un argumento circular donde no podamos distinguir unos de la otra. Una cosa es la democracia como régimen político que se establece en un proceso determinado y otra el actor partidario que se constituye en protagonista de la misma. Es difícil establecer un relación causal de carácter general y, más bien, lo importante es, tomando en cuenta lo fundamental de esta relación, desarrollar el análisis de cada proceso concreto.

La relación partidos-democracia en el Perú actual es la relación entre los actores partidarios y la consolidación democrática. La consolidación en las democracias recientes es un proceso que sucede a la transición de un régimen autoritario a uno democrático. La consolidación implica un mínimo de condiciones materiales para el bienestar de la población, el funcionamiento regular de las instituciones y la solución de los problemas derivados de la denominada "herencia autoritaria", relativos a la violación de los derechos humanos y a legislación que protege privilegios de los antiguos gobernantes autoritarios (Huntington 1993) (O'Donnell 1994). Por su naturaleza procesal la consolidación democrática no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, pero se asume que se está produciendo cuando se dan avances consistentes en el logro de las características arriba señaladas. Para que la consolidación se realice es fundamental que existan partidos representativos que la lleven adelante, constituyendo las instituciones democráticas y haciéndolas funcionar.

Concluida la transición democrática con la instauración del nuevo gobierno consitucional el 28 de julio de 1980, terminó formalmente el período de transición democrática de fines de la década del setenta y empezó una etapa de consolidación. En ella, la cuestión institucional era fundamental. Juan Linz (1990) argumenta que quizás el elemento más importante para prevenir la interrupción de una consolidación democrática sea la legitimidad de que gocen las instituciones. Esta legitimidad sirve, de acuerdo con el politólogo español, hasta para prevenir los efectos desavastadores que puede tener en el régimen político la crisis económica, porque la confianza inicial en el régimen hace creíble para la ciudadanía que en los marcos democráticos se puedan encontrar soluciones y ello constituye una importante barrera al quiebre del orden constituído. Guillermo O'Donnell (1994) agrega, además, que las instituciones políticas democráticas son un nivel crucial de agregación y mediación entre factores estructurales, de un lado, e individuos y grupos del otro, organizándose estos últimos en múltiples identidades e

intereses. La capacidad de institucionalizarse de un régimen democrático es entonces la medida de su consolidación y los protagonistas de la misma son los actores partidarios. Si el juego político está claramente ordenado de acuerdo a determinadas reglas, los actores moderan sus expectativas en función del mediano y largo plazo, rompiendo con las cadenas del intercambio táctico de corto plazo que generalmente impide ver más allá de la propia comunidad partidaria. La institucionalización de los partidos adquiere, por ello, importancia central. Es muy difícil que partidos de jefes con hábitos confrontación más que de competencia puedan ser los protagonistas de una democracia estable.

La desinstitucionalización política producida en la década de 1980 está a la base del fracaso de la consolidación democrática en el Perú. Esta desinstitucionalización política tiene como eje el comportamiento de los actores partidarios, que se agota en la confrontación táctica de corto plazo tendiente a mejorar su situación relativa frente a los demás, y que los lleva a perder crecientemente la capacidad de representación de la ciudadanía y de los grupos de interés. Así como los partidos son los protagonistas de las consolidaciones exitosas, en el caso peruano fueron los protagonistas de una consolidación fracasada.

SEGUNDA PARTE: La fractura

II. El horizonte histórico de los partidos en el Perú.

1. Los partidos como variable dependiente

Para poder entender la crisis de los partidos políticos entre 1980 y 1992 hay necesidad de señalar el horizonte histórico¹³ en que se ubican los partidos que conforman el espectro político de la democracia peruana en el período de estudio. Es decir, hay necesidad de tomar, primero, a los partidos como variable dependiente¹⁴ en relación a una fractura histórica específica, para luego de señalado el contexto, pasar a considerarlos como variable independiente en su proceso de interacción mutua en el período señalado.

Por esta razón en el presente capítulo partimos de considerar las determinantes estructurales en el desarrollo de los partidos, que los configuran como formaciones políticas modernas que expresan una nueva época en el Perú, para luego pasar a señalar sus características específicas como partidos anti-oligárquicos y terminar, por último, exponiendo la interacción entre las formaciones partidarias que llegan a la Asamblea Constituyente de 1978. Esta última, es un escenario al que llegan formaciones exhaustas y se presentan también organizaciones nuevas,

¹³Los términos Ahorizonte histórico@ y Afractura histórica@ están inspirados en el texto de Lipset y Rokkan (1967) ACleavage structures, party systems and voter alignments@, donde estos autores señalan la importancia de ubicar a los partidos políticos como expresión o traducción de una fractura o clivaje histórico-estructural específico, que motiva un conflicto también estructural, con capacidad de expresarse políticamente.

¹⁴Tomamos los términos Avariable dependiente@ y Avariable independiente@ en el sentido que Giovanni Sartori les da en su texto: AThe Sociology of parties: a critical review@, publicado en 1968. En él Sartori busca diferenciar entre una sociología de la política y la ciencia política. La primera, se ocuparía, según este autor, de la influencia de las clases sociales y la estratificación en general en la conducta política, mientras que la segunda analizaría cómo los partidos y sistemas de partido intervienen independientemente como actores en el proceso político. En este sentido nos alejamos de la connotación estadística que el uso de estos términos pudiera tener.

por lo que es útil a considerar no solo como bisagra entre tiempos diferentes sino también como muestrario de los actores con que contaba la promesa democrática peruana al inicio del período de estudio.

Empecemos entonces por el contexto. Por fractura histórica entendemos el momento de cambio que señala el término de una época y el inicio de otra, modificándose los elementos del conflicto histórico-estructural y la expresión política del mismo. Esta fractura puede dar paso a un cambio que signifique una ruptura con el pasado, fundando o pretendiendo fundar una nueva sociedad política, o un cambio que sea una solución de continuidad con el mismo que tienda a integrar a los nuevos actores en la vieja sociedad política. En ambos casos estamos ante cambios que van a tener efectos importantes en sus respectivas sociedades, con la diferencia que el contraste entre continuidad y ruptura va a producir actores políticos que afectarán el futuro régimen democrático de manera distinta. La persistencia de elementos del antiguo régimen, por ejemplo, se opondrá siempre a una ampliación del espectro político que afecte sus intereses, aunque al mismo tiempo esta presencia pueda darle mayor estabilidad a la democracia. La ruptura, en cambio, ofrece la posibilidad de una sociedad política sin las ataduras del pasado, aunque, los riesgos para la estabilidad del nuevo régimen sean mayores. Pero existe también la posibilidad, como veremos más adelante, de que a pesar del desmantelamiento de la sociedad política anterior, los elementos del antiguo régimen encuentren formas de volver a aparecer prolongando tenazmente la defensa de sus intereses.

El horizonte histórico a que nos referimos está constituido por una fractura originada en la crisis que sucede en el Perú a principios de la década de 1930. Esta crisis produce una ruptura en muchos órdenes, y en particular produce una ruptura en términos de los partidos políticos. Los partidos pasan de ser organizaciones de élite a ser organizaciones de masas, apareciendo de esta manera los partidos modernos en el Perú. Pero, ¿qué califica esta modernidad? Que los últimos aspiran a integrar al conjunto de la población a la vida política, o sea, tienen una actitud política inclusiva, mientras que los primeros entendían la política como una competencia en los estrechos marcos de la sociedad oligárquica, a la que solo accedían las minorías dominantes, es decir tenían una actitud política excluyente de la abrumadora mayoría de la población.

Es interesante resaltar el carácter de ruptura que tiene la crisis de 1930 en relación a los partidos políticos por contraste con otros países cuyo pasaje de los partidos de élite oligárquicos a los partidos modernos de masas se dió por evolución y no por ruptura. Me refiero a los casos de Colombia, Chile y Uruguay, donde el régimen político evolucionó de oligárquico a democrático-representativo, ya sea porque el primero integró a los nuevos partidos de masas o porque los mismos partidos oligárquicos evolucionaron a partidos de masas. En los casos en que se produjo rupturas, como en Perú, Brasil y Bolivia, aparecieron nuevos partidos, generalmente confrontados con el orden oligárquico y en especial con los militares. El contraste es importante porque en los países en que se produjo evolución los sistemas de partidos democráticos que se formaron en las décadas siguientes tendieron a ser más fuertes y establecidos, A institucionalizados@ dirían Mainwaring y Scully, que en aquellos países donde hubo ruptura, en los que, más bien, predominó la confrontación entre populismo y militares.

Es difícil encontrar causas uniformes para los diferentes caminos hacia los partidos modernos en América Latina pero no se puede obviar que allí donde existieron oligarquías más tradicionales que, siguiendo el razonamiento de Barrington Moore (1973), necesitaban de mecanismos extra-económicos para retener a su fuerza de trabajo en el campo, se necesitó de propuestas políticas radicales que llevaran a la ruptura y eventual confrontación. Mientras que donde las oligarquías fueron modernizantes, predominando la fuerza de trabajo asalariada en la agricultura, la evolución predominó sobre la ruptura.

Podemos deducir entonces que la opción por la evolución o la ruptura no es un asunto de exclusiva voluntad política, sino que tiene también que ver con las características histórico-estructurales que brindan o no la posibilidad de individuos con disposición para convertirse en ciudadanos. Cuando esta posibilidad es negada por la necesidad de los terratenientes de mantener al campesino ligado a la tierra las posibilidades de la democracia por evolución se reducen, abriendo el paso al enfrentamiento, cuyos resultados pueden ser más expeditivos pero ciertamente más inciertos.

)Por qué se produce una ruptura y no una continuidad en el caso peruano? Porque en el Perú la oligarquía era de carácter más bien tradicional multiplicando los mecanismos extra-económicos para mantener sujeta la mano de obra a la tierra (Burga y Flores 1979, López 1997).

Esta situación permitió que se prolongaran, de manera relativamente intacta, las bases económicas de la dominación oligárquica hasta la segunda mitad del siglo. Otro factor importante que abonó en favor de la ruptura fue la discriminación étnica contra las mayorías indígenas y mestizas. Esta discriminación -el otro pilar de la dominación oligárquica en el Perú- hacía muy difícil remontar los abismos sociales y políticos de la época de manera evolutiva. La mantención de esta coerción extra-económica tuvo un efecto directo, tal como también sugiere Moore para otras latitudes, en la esfera política. La democracia oligárquica, denominada ARepública Aristocrática@, desarrolló un cierto grado de liberalización, restringida a la competencia entre las élites dominantes, pero no se abrió a la participación de los sectores medios ni populares que empezaban a movilizarse independientemente, ya que cualquier apertura hubiera afectado, directa o indirectamente, la coerción extraeconómica señalada. Esta falta de evolución hacia formas de contestación política más abiertas, la llevó a una crisis final, en 1919, lo que permitió una regresión autoritaria durante el gobierno de Augusto B. Leguía.

La otra cuestión fundamental en la crisis oligárquica fue el proceso de centralización estatal. La Republica Aristocrática, entre 1885 y 1919, significó un primer momento en este proceso de centralización logrando establecer una cierta continuidad administrativa a nivel del poder central. Pero el civilismo en el poder fracasó en derrotar el faccionalismo armado de los poderes regionales terratenientes (López 1997), lo que erosionó gravemente su poder. Leguía, en cambio, pacificó el país subordinando al poder gamonal y estableciendo la autoridad general del Estado. Habría que tomar en cuenta, sin embargo, que esta centralización agudizó de manera tal las contradicciones políticas, que creó las condiciones para el surgimiento de los nuevos partidos que protagonizarían la crisis siguiente.

Pero la centralización estatal, requisito fundamental para el desarrollo democrático (Rueschmeyer et. al. 1992, Linz y Stepan 1996), es un proceso que tuvo consecuencias más allá de las intenciones de los actores políticos que lo promovieron, concretamente, más allá de la voluntad del régimen de Leguía, que fue el actor más destacado en su impulso. Por una parte, como bien señala Cotler (1978), separó a las clases propietarias del manejo inmediato del Estado y le dió a este la autonomía necesaria para desarrollarse, pero, por otra, mostró las estrechas bases sociales del poder oligárquico al desatar la voluntad de participación de nuevos sectores

que aparecían producto del inicial desarrollo capitalista y del propio crecimiento estatal. Al mismo tiempo, desarrolló un orden político patrimonial, estableciendo relaciones de dependencia directa entre el poder estatal y diversos clientes regionales y sectoriales que debían favores y otorgaban apoyos en consecuencia. Esta forma patrimonial rompió con el sistema de clientela anterior entre gamonalismo y oligarquía costeña y buscó subordinar a unos y otros al poder estatal (Cotler 1978, Flores y Burga 1979, López 1997). Podemos decir entonces que Leguía contribuyó, contradictoriamente y a pesar suyo, a la fractura histórica de los años treinta, no solo por afirmación de lo que venía haciendo sino también por la negación de sus propios logros.

Es importante dejar establecido que lo que se produjo con la crisis de 1930 fue una ruptura ya que dos contribuciones al estudio de la época publicadas en la presente década (Adrianzén 1990 y Planas 1994) sugieren lo contrario. Pedro Planas, señala que habría sido la dictadura de Leguía y no el tipo de dominación oligárquica que tuvimos en el Perú, lo que habría impedido una continuidad entre la ARepública Aristocrática@ y un eventual régimen democrático posterior a 1930. Alberto Adrianzén, por su parte, argumenta que el populismo peruano encuentra su matriz en el Estado fundado por la ARepública Aristocrática@, estableciendo una continuidad con el carácter autoritario y elitista de este orden político y diferenciándose del mismo por razones de tipo más bien cultural, que opondrían una cultura Aseñorial@ a otra Ahuachafa@. Ambos argumentos pierden de vista la cuestión estructural, es decir, el sistema de dominación social que subyace a la dominación oligárquica. En el caso de Planas se obvia el cordón umbilical entre Leguía y la República Aristocrática, como dos formas políticas de un mismo sistema de dominación social. En el caso de Adrianzén, se absolutiza el carácter autoritario de la herencia oligárquica para explicar el autoritarismo populista, señalando que este vendría a ser la continuación plebeya del proyecto de la oligarquía. Aquí se pierde de vista que el autoritarismo populista también se debe a las necesidades de la confrontación violenta con una oligarquía reacia al cambio y que, paradójicamente, al basarse en la movilización social brinda posibilidades para un proceso de democratización, cuya magnitud depende de la gestación de actores independientes.

Más allá de su forma política, autoritaria o relativamente democrática, para que se hubiera producido una continuidad entre el régimen oligárquico y uno democrático

representativo habría habido necesidad de una modernización más acelerada de las bases estructurales, particularmente agrarias, de la oligarquía, que hubiera liberado la fuerza de trabajo necesaria para la industrialización y que, eventualmente, hubiera permitido contar con los ciudadanos necesarios para la democracia.

2. Los elementos de la fractura histórica

La fractura histórica producto de la crisis de los años treinta opuso fuerzas que expresaban el orden oligárquico imperante hasta el momento con las nacientes fuerzas anti-oligárquicas. Estas últimas buscaban traducir el afán de la nueva clase media y de sectores del proletariado, por participar en la vida política. Las fuerzas que expresaban las posiciones oligárquicas defendían el orden establecido y no dudaron en recurrir a la violencia para su propósito y las fuerzas anti-oligárquicas organizaban sus demandas alrededor de dos banderas principales: la reivindicación nacional-antimperialista y la reivindicación anti-feudal, sin levantar con claridad una nueva institucionalidad política democrática, alternativa a la imperante¹⁵.

¹⁵Cuando hablamos de alternativa democrática nos referimos a una alternativa democrático-liberal. El PAP tenía en su primera época, a pesar de su participación en el Congreso Constituyente de 1931, una alternativa de AEstado Antimperialista@ de defensa de la nación y democracia funcional basada en las clases productoras y el Partido Socialista, convertido en Comunista, una propuesta de revolución proletaria que fue adoptando los matices que ordenaba la Internacional Comunista. Estos planteamientos, sin embargo, no limitaban el efecto democratizador que tuvo la aparición de nuevas formaciones políticas aunque a la larga ello no significara la transformación de la sociedad.

La bandera más importante, sin embargo, va a ser la bandera nacional-antimperialista que reivindicaba la soberanía del país frente a la creciente penetración del capital imperialista, principalmente en explotaciones tipo enclave de agricultura y minería para la exportación. La bandera anti-feudal, si bien será demandada en la época, no se concretará en un pedido explícito de voto a los analfabetos, reforma agraria u otro tipo de política tendiente a cambiar las relaciones de propiedad en el campo¹⁶. Es sintomático, en este sentido, que la gran movilización campesina que tendrá efectos en la escena política, recién ocurrirá entre fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960, lo que subraya el carácter mesocrático y urbano del populismo en sus primeras décadas. La gran bandera democrática de la época será, más bien, la participación de los hombres adultos alfabetos, tanto en eventos electorales como en la movilización política cotidiana. Ella será la gran reivindicación inclusiva, que polarizará campos con una oligarquía que recurrirá reiteradamente al fraude y a la dictadura militar.

Esta fractura significó, como diría Sinesio López (1991a), la crisis histórica del orden oligárquico, es decir, el agotamiento de la legitimidad de su forma de dominación. En los términos de Gianfranco Pasquino (1982) una crisis genética que va a estar en la raíz del proceso político peruano en las décadas siguientes. Esto implicó que los representantes directos de la oligarquía, en términos de partidos y personalidades, pasaran a un segundo plano y que fueran los militares los que tuvieran que asumir en la esfera política la expresión de los intereses oligárquicos. La consecuencia inmediata de esta crisis de legitimidad fue que la violencia se convirtió, de manera abierta y desembozada, en el instrumento privilegiado de dominación y en la forma más importante de hacer política en general.

Esta fractura, sin embargo, no significó el final del orden oligárquico, es decir, su crisis política, sino el inicio de un proceso de democratización, aún inacabado, del Estado y de la propia actividad política más en general. La lucha contra este orden oligárquico y lo que va quedando del mismo marcará la vida política peruana en las décadas siguientes a 1930 y su falta

¹⁶Es interesante como la exclusión de la población analfabeta, aplastantemente indígena, del sufragio en la ley electoral promulgada a inicios de la ARepública Aristocrática@ (Planas 1994), era sustentada sobre la base de que los indígenas eran manipulados por el gamonalismo a la hora del voto. Parecería que similar criterio tenían todavía los contestatarios iniciales del orden oligárquico, ya que al no plantear -cualquiera fuera su razón- la necesidad inmediata de la Reforma Agraria habrían considerado inútil luchar por el voto para los analfabetos.

de éxitos contundentes impedirá la constitución definitiva de un Estado democrático en el Perú. La democratización es el incremento evolutivo de la participación política de la población. Este carácter evolutivo llevará al desarrollo de un orden político de transacciones permanentes y eventuales regresiones, entre fuerzas adversarias que expresarán no sólo disitintos puntos de vista ideológicos y políticos sino también diferentes corrientes históricas. La persistencia de las fuerzas del antiguo régimen luego de la fractura de 1930 hará imposible, por lo tanto, la estabilidad de los intentos democráticos

Se pueden distinguir tres períodos en esta democratización los cuales van a corresponder a determinados actores políticos característicos de las mismos, sin que el paso de un período al otro signifique, necesariamente, la desaparición de los actores que caracterizaron el período anterior. El primero, es el período que va de 1930 a 1956 y tiene como actor principal al PAP. El segundo, es el período que va entre 1956 y 1968, teniendo como nuevos protagonistas a AP, la Democracia Cristiana y su disidencia conservadora el PPC. Y el tercero, el que va entre 1968 y 1990, donde lo nuevo es el populismo militar que se plasma como gobierno y los partidos de la izquierda marxista que en la década de 1980 se agrupan en Izquierda Unida.

)Pero podemos decir que estos son los únicos partidos que existen de 1930 en adelante? De ninguna manera, existen muchos más, pero no tomamos a todos en cuenta. Nuestro criterio para contar lo tomamos aplicando al caso peruano los criterios que sugieren Sartori (1992) y Ware (1996), y que ya reseñáramos en el capítulo anterior. Es decir, tomamos en cuenta partidos que tengan influencia significativa en la vida política, ya sea por su capacidad de formar parte del gobierno, de chantajear al mismo desde la oposición, así como por su efectiva penetración en el tejido social. Las observaciones que hace Alan Ware sobre este último aspecto son especialmente atendibles en el análisis del caso peruano, porque Ware diferencia entre penetración en la sociedad en su conjunto e identificación de uno o algunos grupos con un partido político. Ello nos lleva a reflexionar sobre el drama del populismo peruano y la dificultad de sus formaciones partidarias para trascender sus ghettos de militantes y simpatizantes. Afinar la forma de contar nos reduce a las formaciones políticas más significativas permitiéndonos hacer un análisis de las tendencias fundamentales en cada período.

Una característica importante de estos actores políticos, en particular del PAP, era la de ser partidos afincados en segmentos delimitados de la población. Este tipo de asentamiento, si bien permitió la rápida organización de sectores específicos, impidió la conversión de estos partidos en organizaciones políticas de verdadera integración nacional. El caso paradigmático de esta situación es la demanda del sufragio universal. Ni el PAP ni Acción Popular reivindican el voto a los analfabetos, núcleo de la demanda por sufragio universal en el Perú, como una de las banderas políticas centrales del populismo. Recién en 1978 el PAP se suma al pedido de algunos partidos de izquierda marxista para que se produzca esta fundamental ampliación del sufragio, la que se incluye, con el voto aprista, en la Constitución de 1979. Esta expresión segmentada de sectores de la población es la que finalmente pondría límites a la hegemonía de los diversos partidos populistas en el país, haciéndoles difícil expresar vastas coaliciones de intereses e integrar a nuevos sectores populares y medios que van apareciendo como producto del proceso de modernización capitalista.

El carácter segmentado de este asentamiento partidario populista diferencia a los partidos peruanos tanto de los partidos europeos de integración democrática, la primera versión de partidos de masas en el mundo, que reseñara Sigmund Neuman (1956), como de los otros partidos populistas latinoamericanos, ya fuera en sus versiones predominantemente obreras y urbanas como fue el peronismo o en sus versiones campesinas como fue el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia. En el primer caso, los partidos europeos efectivamente integran a los excluidos en una nueva comunidad política, en el segundo, tanto el peronismo como el MNR forjan amplias coaliciones sociales que intentan formar una nueva comunidad política. En el caso peruano, ni el PAP ni AP, logran convertirse en el eje político de coaliciones sociales alternativas al orden oligárquico, formando más bien grandes ghettos que mantienen hegemonía política por períodos importantes pero sin trascender, salvo en momentos electorales, más allá de sus naturales confines partidarios.

El PAP como protagonista de todo un primer período de lucha anti-oligárquica entre 1930 y 1956 va a sentar la pauta de la forma de acción política de las fuerzas anti-oligárquicas en el período que va a ser la confrontación. Esta cultura política de confrontación va a tener una doble raíz, por un lado se debe a la respuesta violenta de la oligarquía, y en especial de su agente

político: las Fuerzas Armadas, a la aparición de un partido que planteaba la inclusión de los sectores populares en el quehacer político del país, por otro, a la ideología totalizante de este partido populista que se identificaba asimismo como un proto-estado y marginaba como interlocutores políticos válidos a todos aquellos que no comulgaran con sus planteamientos.

La Aintensidad ideológica@, tomando el término de Sartori (1992), va a ser una cuestión que distingue al PAP tanto frente a otros partidos populistas latinoamericanos como frente a los posteriores populismos peruanos. Esta intensidad ideológica, importante base para su solidez programática inicial, será, sin embargo, un punto de agudizará el distanciamiento de otras fuerzas políticas y alimentará su sectarismo. Este último, como elemento de la cultura política de confrontación se va a plasmar en lo que Cotler (1994) denomina Acerradas sub-culturas antioligárquicas@, que permitirán sobrevivir a los partidos populistas, y en particular al PAP, en los momentos de represión, pero que permanecerán como un lastre en las décadas siguientes y harán muy difícil la concreción de una comunidad política democrática.

Es importante remarcar que esta confrontación no se produce entre uno o varios partidos que representaran a los intereses oligárquicos y los partidos nacional-populares y de izquierda, sino entre estos últimos y el Estado oligárquico como tal. Esta confrontación se produce, más precisamente con las Fuerzas Armadas, que se convierten en frecuente titular directo del poder político una vez que la forma de dominación oligárquica es cuestionada abiertamente. El enfrentamiento paradigmático del primer ciclo populista es entre el PAP y el Ejército, producto del cual surge el famoso veto del segundo contra el primero. El hecho de ser una confrontación partidos-Estado dificulta seriamente la posibilidad de avanzar, luego de superado el período de confrontación, hacia un sistema democrático de partidos donde la competencia entre diversos grupos políticos reemplace al tipo de confrontación señalado. Es más, este tipo de confrontación partidos-Estado se va a repetir casi cada vez que un caudillo, grupo, coalición o partido, asume el control del aparato estatal, usando del mismo para su beneficio y perjudicando desde esta posición a sus oponentes. Se va a acentuar así una visión patrimonial del Estado, donde este no es el ámbito donde se desarrolla la lucha política sino, más bien, una de las partes involucradas, que debe buscar terminar con la otra para afirmar su dominación.

Al PAP le toca, como señala Sinesio López (1997), el período más duro de la lucha anti-oligárquica, cuando la lucha militar era inevitable por la intransigencia de quienes se negaban a abandonar sus posiciones de privilegio. La lógica de confrontación, sin embargo, evoluciona hacia una dinámica de confrontación-negociación que se hace patente en los sucesivos pactos que debe asumir el PAP para lograr y mantener la legalidad constitucional así como su propia legalidad. Esta evolución de confrontación a negociación es más clara en un segundo ciclo histórico populista, que va entre 1956 y 1968, cuando nuevas formaciones reformistas adquieren desde el principio un carácter más moderado y avanzan más rápidamente a entenderse con los remanentes de la oligarquía. Tal es el caso de Acción Popular, el partido más importante de esta etapa, que surge en 1956 de una explosión juvenil mesocrática que inicialmente condena el sectarismo y la conciliación apristas, para evolucionar rápidamente hacia posturas moderadas tanto en el programa como en las conductas políticas.

Pero la evolución hacia la negociación de los partidos populistas fracasa por su limitado efecto democratizador en la esfera política. Quizás un indicador de estas dificultades democratizadores sea la lentitud en la ampliación de la participación electoral. Esta pasa de un 2.5% de ciudadanos que votan en relación a la población total del país en 1919, a un 6% en 1931, un 15% en 1956 y un 18% en 1963. El gran salto recién se da luego del gobierno militar reformista, cuando en las elecciones de 1978, al rebajarse a 18 años la edad para votar, el porcentaje sube al 25%, y en 1980, cuando, luego de la concesión del voto a los analfabetos, la cifra sube al 31% (Tuesta 1995 y elaboración propia).

Por ello, los esfuerzos negociadores del populismo con la oligarquía son, más bien, negativamente señalados. Tal es el caso de la Aconvivencia@ que es el nombre que recibió el pacto del PAP con el segundo gobierno de Manuel Prado, para permitirle al primero su legalización como partido así como el reconocimiento de las organizaciones sindicales en las que tenía influencia. Y de la Asuperconvivencia@ que es el apelativo del pacto entre el PAP, los sectores conservadores de Acción Popular y algunos sectores políticos oligárquicos como el odriísmo, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, cuyo objetivo era lograr una gobernabilidad de carácter conservador en el país. Por más que líderes importantes de esta época como el aprista Ramiro Prialé se esforzaran en señalar que Aconvivencia no es pactar@, por estas

experiencias la negociación en política peruana es más bien identificada con el arreglo entre Anotables@ fuera de la luz pública, es decir, al margen de la participación ciudadana.

El fracaso los de esfuerzos negociadores de la convivencia y la supervconvivencia -en términos de su efecto democratizador- da lugar a una reacción más bien radical que privilegia la confrontación. Tal es el caso del populismo militar velasquista, entre 1968 y 1975, y de las fuerzas que conforman Izquierda Unida, entre 1978 y 1990, en el tercero y quizás si el último ciclo histórico del populismo. El populismo velasquista es una fuerza de gobierno que intenta reformas sociales a través de la dictadura política, Izquierda Unida, una coalición de grupos marxistas con una concepción también autoritaria de la política, que curiosamente, en reacción al velasquismo desarrolla una dinámica de representación corporativo-clasista, como diría Alberto Adrián (1990), de diversos movimientos sociales . Vuelve entonces la lógica de confrontación que subordina a la negociación y la relega, más bien, al nivel de conducta que busca un efecto coyuntural.

La falta de éxito político definitivo de las fuerzas populistas y de izquierda frente a los remanentes oligárquicos lleva a que fracasen los esfuerzos de constitución de una comunidad democrática, y, por lo tanto, a que se establezcan la competencia y cooperación como las formas regulares de la acción política. La persistencia hegemónica de estas fuerzas que se mueven en la dinámica confrontación-negociación, en lo que se suponía eran los sucesivos intentos democráticos, particularmente en el docenio que va de 1980 a 1992, las llevará a un grave desprestigio frente a la población y a la identificación de sus conductas políticas con formas de proceder que solo buscan satisfacer el interés personal.

El hecho de que no se establezca un régimen donde el o los partidos sean el eje de la actividad política , ya sea como partidos-estado en situaciones dictatoriales o en una dinámica de competencia-cooperación en los marcos de una comunidad democrática, es lo que no permite, para el período 1930-1968, hablar del establecimiento de un sistema de partidos en el Perú¹⁷.

¹⁷Tomamos como referencia para hacer esta afirmación la tipología que desarrolla Giovanni Sartori (1992), para quien el criterio fundamental para proceder a un análisis sistémico de los partidos políticos es que estos sean las entidades que en su interacción le den forma a la vida política de un determinado país. Por la situación de larga crisis política del Estado Oligárquico (1930-1968) esta situación no se produce en el Perú hasta bien avanzado el siglo, podríamos decir que hasta el docenio democrático 1980-1992 y aún en ese período es discutible la constitución plena de un sistema de partidos, prefiriendo este autor hablar, como ya lo señalamos en el capítulo anterior de un proto-

Señalamos esto a contrapelo de lo que parece sugerir Sinesio López (1997), cuando dice que el Perú habría pasado de una situación de partido predominante con el PAP de 1930 a 1956, a una situación de pluralismo polarizado entre 1956 y 1968.)Cómo podemos hablar de un sistema de partidos en períodos donde la democracia es la excepción y la interacción entre las partes esta basada en el ejercicio de la fuerza bruta? Es más, cuando el ejercicio político la mayor parte del tiempo oponía dictaduras militares con partidos políticos y particularmente el Ejército con el PAP. Ahora bien, que no exista sistema no quiere decir que no existan partidos ni que estos dejen de pugnar por constituir un sistema de interacción democrático entre ellos. Aunque esto último sea especialmente cierto de 1956 en adelante cuando el populismo paulatinamente busca la gobernabilidad conservadora.

Ahora bien,)qué tipo de partido produce este proceso? Pues, una formación política altamente personalizada, que desde una perspectiva ciertamente particular y a diferencia de los anteriores partidos aristocráticos, cumple con el rol fundamental de hablarle al país (Burke 1839). Cuenta, asimismo, con importante capacidad de movilización y penetración en sectores específicos, y, a la vez, una también importante capacidad de influencia en la vida política nacional. Aquí, sin embargo, hay algunas variantes entre el primer populismo, caracterizado por el PAP y el segundo, caracterizado por AP. En el primer caso, habrá una importancia mayor de la ideología y el propósito programático así como una importante estructura organizativa, mientras que en el segundo, ideología y programa serán la palabra del líder, y la organización no hará otra cosa que reproducir al líder nacional en múltiples cacicazgos regionales y locales, llevando a la definición de Andrés Townsend sobre AP como: Auna coalición de independientes@. Igualmente, la influencia política para el PAP de la primera época, será ejercida a través del chantaje, desde la oposición, las más de las veces ilegal, al régimen oligárquico, mientras que para AP la llegada rápida al gobierno, siete años después de fundada, le permite demostrar de inmediato sus posibilidades en el gobierno. En ambos casos, sin embargo, se trata de partidos de masas, cuyos aluviones, cada cual en su momento, resquebrajan el Estado Oligárquico, pero donde el vínculo representativo era por identificación y la democracia todavía una promesa discursiva.

sistema de partidos.

3. De la democracia conservadora al populismo sin partido.

La evolución de los dos partidos populistas más importantes, el PAP y Acción Popular, va a significar el agotamiento del populismo partidario en el Perú. El camino más largo lo recorre el PAP, entre 1930 y 1956, cuando va de la insurgencia a las elecciones para volver a la insurgencia y terminar pactando con la oligarquía a cambio de su propia legalidad. Mientras que Acción Popular en un período más corto, entre 1956 y 1963, no llega a la insurgencia pero sí toma las calles cuando cree que sus derechos democráticos han sido vulnerados y vuelve después al juego electoral donde termina también en la búsqueda de la gobernabilidad conservadora. En ambos casos, el objetivo parecería ser el establecimiento de una democracia que incluyera a los partidos populistas rechazados y a las opciones oligárquicas pero renunciando, como señalamos, a los programas de cambio social que fueran la razón de ser original de las formaciones populistas.

Esta conversión de agrupaciones totalizantes en partidos pluralistas podría, en principio, parecer interesante porque tendería a la afirmación -vía la competencia política- de una institucionalidad democrático-representativa en el país, superando la identificación entre partido y proyecto de Estado típica del populismo. Sin embargo, se trata de una conversión que al sacrificar la propuesta anti-oligárquica busca establecer una democracia incapaz del cambio y deja profundamente insatisfechos a quienes en su momento había movilizado el populismo. El afán de institucionalización es visto entonces como oportunismo político por lograr un acomodo que se opondría a las banderas que había enarbolado la movilización anterior. No se trata, por ello, de una institucionalización de la movilización, sino de buscar que la institucionalización promueva la desmovilización, pero no para lograr cambios por la vía institucional que podrían ser perturbados por una excesiva movilización, sino para sacar de la agenda política las demandas anti-oligárquicas.

El agotamiento de los partidos populistas está entonces íntimamente relacionado con su ineficaz renovadora y esta, a su vez, con el tipo de democracia que buscan construir en alianza con la oligarquía. Partidos y democracia van a ser, de esta manera, asociados con las posiciones

conservadoras que se oponen al cambio social. Este agotamiento va a producir también una crisis de representación, en el sentido populista de la misma, es decir, de la representación como identificación con un determinado líder. Esto se expresa en la época en el deterioro de la imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre y de Fernando Belaúnde. En el caso del primero este deterioro venía desde 1948 cuando se producen los primeros cuestionamientos significativos a su liderazgo, pero se agudizan de 1956 en adelante, cuando se produce explícitamente el viraje ideológico y político del PAP. En el caso de Belaúnde, se produce un deterioro dramático al final de su primer gobierno en torno al episodio de la negada solución del conflicto petrolero de La Brea y Pariñas. En términos orgánicos, esto también se expresa en las importantes rupturas que sufren tanto el PAP como Acción Popular, produciendo agrupaciones políticas que van a engrosar las filas izquierdistas.

Históricamente esta crisis de la representación populista va a ser definitiva. No volverán a existir movilizaciones tras un líder carismático anti-oligárquico, con una promesa de cambio e integración social, de la envergadura y proyecciones de las que promovieron, en su primera época, Haya de la Torre y Belaúnde respectivamente. El populismo posterior, me refiero al intento velasquista, al ser una política Adesde arriba@ no produjo la dinámica representativa, vía la movilización e identificación con el líder, del populismo partidario, produciendo un vacío representativo. Los intentos de montar una maquinaria política, que el velasquismo quiso llamar participación , derivaron más bien en una búsqueda del control estatal, de tipo corporativo, de los movimientos sociales lo que a la postre causaría una formidable reacción popular que ayudaría a terminar con el gobierno militar en su conjunto (Lynch 1992a).

Stepan (1978) y luego López (1997) califican al velasquismo como un proyecto de Acorporativismo orgánico@ donde el Estado busca organizar al conjunto de la sociedad por sectores atendiendo a la definición de ciertas características económicas y/o sociales. Lo interesante es que a este corporativismo orgánico se opone una izquierda radical que, más allá de su discurso revolucionario, buscaba también una representación corporativa de los movimientos sociales.

Pero lo importante es que esta crisis de la representación populista no abre paso a una representación democrática, donde los ciudadanos a la vez que autoricen también controlen a sus

representantes. La crisis de representación populista lleva más bien a la involución de los partidos a los que afecta, desarrollando los mismos una conducta política excluyente de las posiciones que ahora quedarían a su izquierda. Esta asociación de los partidos populistas con posiciones conservadoras se expresa claramente en el discurso y la acción de los primeros intentos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en la primera mitad de la década de 1960, así como en el golpe militar del tres de octubre de 1968 que va a traer como producto el denominado AGobierno Revolucionario de la Fuerza Armada@.

Esta crisis de la representación populista va también a cambiar el tipo de populismo partidario hasta entonces existente (Lynch 1990). Si en los partidos populistas, especialmente en el PAP y en menor medida en AP, había predominado hasta el momento la existencia de una comunidad carismática de militantes que creía en las cualidades extraordinarias del líder, luego de esta crisis los seguidores de los jefes políticos de estos partidos tenderán más a ser clientes en busca de alguna satisfacción material producto de la actividad política que creyentes en un líder y en un destino. Esto quiere decir que la institución de Ala jefatura@ continúa, ya sea en el caso del PAP con el Acompañero jefe@ o de AP con el Ajefe nato@, pero las características de la adhesión a la misma se redefinen. En esta dicotomía creyente-cliente radica, sin embargo, el eje del giro conservador de los partidos populistas. En ningún caso, la preferencia por la democracia representativa en desmedro de los programas de reforma social va acompañada por una democratización interna de sus organizaciones políticas. Es decir, en ningún caso se intenta la transformación de los partidos como comunidades carismáticas en los partidos como comunidades democráticas, y el consecuente pasaje de creyentes a ciudadanos. Esto no sucede, no solo porque hubiera cuestionado el liderzgo establecido sino también porque una democratización partidaria hubiera impedido el viraje conservador.

El gobierno militar de Velasco va a desarrollar como una de sus características definitorias un claro discurso anti-partido. De hecho, con el golpe de Estado de 1968, al clausurarse la democracia existente, los partidos quedan apartados del poder político, pero además en el proceso se empiezan a diseñar modelos participativos que no tomaban en cuenta a los partidos, ni a los existentes ni a los que se pudieran crear. Varios son, sin embargo, los

elementos de este discurso anti-partido. Por una parte está el ya señalado fracaso del reformismo partidario, del cual se resaltaba la forma partido de los actores que impulsaban el discurso reformista anterior, identificando su fracaso con el hecho de que hubieran sido grupos que habrían antepuesto intereses particulares o de corto plazo al cumplimiento de la promesa reformista. "El partido es para partir" habría dicho en alguna oportunidad Velasco (Kruijt 1990). Por otra parte, el carácter institucional y castrense de la entidad que lleva adelante el proyecto velasquista se basaba en la unidad de las Fuerzas Armadas, las cuales, por su propia naturaleza, se asumía que representaban los intereses de toda la nación. En estas condiciones las Fuerzas Armadas no iban a admitir ninguna organización que pudiera establecerles competencia y eventualmente aprovecharse de sus logros.

Esta situación coincide con los intelectuales que apoyaban al proceso velasquista y que plantean la denominada "teoría del no partido". En ella, además de las consideraciones señaladas, se desarrolla la idea de que los sectores populares beneficiados por las reformas debían expresarse directamente, sin intermediaciones partidarias. Anteriores militancias de diverso tipo, que habían tenido estos intelectuales (PCP, PAP, Democracia Cristiana, Socialprogresismo), los ponían en guardia sobre la naturaleza de las cúpulas partidarias y su rol en el fracaso de distintas opciones reformistas. Se temía, asimismo, como nos los señala Carlos Franco, que cualquier intento de organización partidaria, así fuera para "apoyar la revolución" afectaría la unidad de las Fuerzas Armadas, que constituía la garantía más importante de la continuidad del proceso.

La preocupación, sin embargo, de quienes sí creían que debía organizarse un "partido de la revolución peruana", agrupados en ese entonces en el confiscado diario "Expreso", tenía como argumento la necesidad de institucionalizar políticamente los cambios ocurridos a través de un intermediario reconocido por el liderazgo militar original pero que no fuera la Fuerza Armada, por la naturaleza castrense y apolítica que se suponía esta institución debería tener una vez asentado el proceso. Esta preocupación sólo se mostraría como válida luego de la caída de Velasco, cuando la Fuerza Armada opta por un camino distinto al reformista y los cambios efectuados carecen de una organización reconocida que los defienda. Para algunos este proyecto de organización fue en lo que pretendió convertirse el Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado luego de la caída de Velasco en noviembre de 1976. Sin embargo, este no pasaría de

representar a una de las corrientes de opinión dentro del velasquismo y a la postre solo se convertiría en un partido de izquierda más.

Es importante aclarar que en ningún caso, entre los que estaban a favor o en contra de formar un partido, había una preocupación pluralista sobre la necesidad de establecer en el país un sistema partidario de competencia democrática. La preocupación, a favor o en contra, era más bien totalizadora, se buscaba la mejor manera de representar al conjunto del pueblo, la nación o la sociedad peruana, sin lugar para ningún otro interlocutor válido que pudiera intermediar entre sociedad y Estado. Esta perspectiva totalizadora no era, por lo demás, extraña a la política peruana, la habían desarrollado, sobre todo, el PAP y el PCP desde la década del treinta, cuando asumían que su organización partidaria debía prefigurar el orden político que pretendían.

El discurso y la práctica anti-partido del velasquismo afectó de varias maneras a los partidos que constituían la sociedad política anterior al tres de octubre de 1968, me refiero principalmente al PAP, Acción Popular y el PPC. Por una parte, al ser organizaciones básicamente electorales, los obligó a una prolongada inactividad, lo que les restó oportunidades de interacción democrática. Quizás la excepción fuera el Partido Aprista, que, aunque de manera restringida, continuó con la dinámica de su aparato partidario y su influencia en las organizaciones sociales, incluso en las nuevas organizaciones que se promovieron para apoyar las reformas. Por otra, al ser dejados totalmente de lado en el proceso de reformas y ser constantemente agredidos en el discurso oficial, los partidos tendieron a alejarse del conjunto del proceso encerrándose en si mismos y mostrándose reacios a reconocer los cambios en la sociedad que se estaban propiciando "desde arriba". Este alejamiento del proceso de reformas les sería a la larga perjudicial porque no les permitiría entender los cambios operados en la sociedad civil a la que se supone debían representar. Esta falta de entendimiento será una de las raíces, en la década de 1980, de la nueva crisis de representación que va a ocurrir. Sin embargo, el alejamiento tuvo algún efecto positivo en el corto plazo. La ausencia de los partidos del escenario político dificultó el funcionamiento, a pesar de los novísimos esfuerzos que se hicieron al respecto, de mecanismos de participación política de la población que intentó el gobierno militar. Esta situación, imperceptible en el augue del velasquismo, se dejó sentir en su momento de crisis,

cuando los antiguos partidos vuelven a tener, progresivamente, un rol protagónico y son las únicas entidades significativas que saben hacer política electoral.

4. El nuevo escenario: la Asamblea Constituyente de 1978.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente por parte de los militares en julio de 1977 es la aceptación definitiva del fracaso de su proyecto de Ademocracia social de participación plena¹⁸. Vuelven, de alguna manera, a un régimen y a los actores que habían repudiado nueve años antes: la democracia representativa y los partidos políticos. Si bien se trataría de un diseño de democracia representativa que no contaría con las limitaciones, en términos de partidos y electores, respecto de la que había existido antes de 1968, en la práctica convocaba a los partidos que existían, que eran mayoritariamente los partidos de antes del gobierno militar, que se habían desempeñado en el agotado régimen de representación populista ya fracasado. Lo nuevo eran los partidos de izquierda, pero su interés por la representación, populista o democrática, era, más bien, instrumental. Durante el velasquismo se había desarrollado en contraposición al proyecto militar, buscando la representación corporativa de diferentes movimientos sociales para articularlos, más bien, en una persepectiva revolucionaria. Esta ausencia de organizaciones comprometidas, desde un inicio, con un proyecto democrático-representativo sería importante en el comportamiento de los actores políticos entre 1978 y 1992 y dificultaría seriamente la transformación de las formas de representación populistas o corporativas en formas de representación democráticas.

La Asamblea Constituyente es también el escenario de la transición a la democracia de fines de la década de 1970. En torno a su convocatoria y en el curso de su desarrollo es que se perfila el espectro político de la democracia peruana de la década siguiente. La interrogante en este punto es: ¿se gesta en ese escenario un sistema democrático de partidos?

¹⁸De esta manera caracterizó su proyecto político el velasquismo, buscando remarcar con estos énfasis que se trataba de una democracia de las organizaciones sociales que intervendrían directamente -léase sin intermediarios partidarios- en la toma de decisiones políticas.

A la Asamblea Constituyente llegan diversos tipos de formaciones políticas. Por un lado, partidos como Acción Popular y el PAP que, como señalamos, estaban agotados en términos de su eficacia renovadora, por otro, el PPC que a pesar de su origen socialcristiano ligado al segundo ciclo populista había asumido una identidad de Apartido de los gerentes@ y por último diversas formaciones izquierdistas que dos años más tarde formarían Izquierda Unida. Acción Popular y el PPC juegan a restaurar la gobernabilidad conservadora que habían ensayado al final del primer gobierno de Belaúnde, el PAP, en cambio, busca ser el partido de transición entre los militares y la democracia, y los partidos izquierdistas asumen, desde el principio, una actitud de confrontación, pero no solo táctica sino también estratégica, que se convierte en una actitud de desprecio al propio régimen democrático.

La actitud frente a la democracia era, entonces, diversa. Unos querían el régimen anterior a 1968, otros, un régimen que surgiera de un pacto con los militares y había también quien se negaba a la instauración de un régimen democrático. No era fácil en estas condiciones lograr el espectro político necesario para instaurar un sistema de partidos.

Las posibilidades de gestación de un sistema de partidos estaban, además, dadas por los alcances de la coalición democratizadora (O'Donnell 1980) formada a iniciativa de los militares para proceder a la transición. Las inclusiones y exclusiones en esta coalición van a determinar las características del espectro político y las posibilidades de que sus integrantes la conviertan en un sistema de interacción democrática.

Para llevar adelante la transición el gobierno militar de Morales Bermúdez desarrolla dos acciones que van a incidir en la formación de la coalición democratizadora algún tiempo más tarde. Primero, elimina del gobierno a los militares comprometidos con el velasquismo, y segundo, reprime los movimientos sociales que se oponen al desmantelamiento de las reformas. Ambas acciones que buscaban terminar con las consecuencias sociales y políticas del gobierno militar anterior, debilitan la posibilidad de una opción política velasquista futura y alejan el peligro de una mayor radicalización de los movimientos sociales, particularmente de los sindicales, influidos por la izquierda. Estas acciones permiten a los militares ganar la confianza de algunos interlocutores y alejarse de otros, echando las bases para lo que después va a ser la transición.

Una vez que los militares deciden iniciar el tránsito a la democracia no les queda otra cosa que voltear la cara a los mismos políticos civiles que habían arrojado del poder una década atrás, así, inician conversaciones con el PAP, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y, además, con el Partido Comunista. Los tres primeros expresaban al Perú anterior a 1968 y el último la importancia que la izquierda había ganado durante el velasquismo. Son excluidos el Partido Socialista Revolucionario y la izquierda radical, el primero por integrar militares velasquistas y la segunda por sus posiciones de drástico rechazo a cualquier salida democrática por apostar a una inminente crisis revolucionaria. Es importante, de parte de los militares que se piense en sujetos distintos de ellos mismos para hacer política, ello revela elementos de pluralismo, necesarios para proceder a una transición y consolidación democráticas, así como para construir un sistema de partidos. Sin embargo, se puede observar en el conjunto que se escoge que predominan los partidos contrarios a las reformas y a cualquier institucionalización política que se hubiera pretendido de las mismas. Podemos decir, que a pesar del corte pluralista de la apertura de la Fuerza Armada, se nota en ella un sesgo restaurador.

En las conversaciones se perfilan las posiciones de las distintas agrupaciones en la transición. Acción Popular desde un primer momento afirma una posición extrema de simple y llana restauración, exigiendo a los militares la convocatoria inmediata a elecciones con las reglas anteriores a 1968 y el regreso de estos a los cuarteles. El PAP y el PPC plantean figuras intermedias con diferentes plazos que tenían como objetivo una retirada negociada con los militares. El PAP, incluso, plantea la posibilidad de aceptar algunas de las reformas. El PC se muestra más preocupado por el destino del legado velasquista que por la salida electoral, afirmando un desinterés por la política electoral característico de la izquierda en la coyuntura.

La significativa disposición del PAP y del PPC, permitirá a los militares negociar para formar la coalición democratizadora que llevará adelante la transición. Las negociaciones entre estos dos partidos y las Fuerzas Armadas permiten la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente, un relativo acuerdo sobre las reglas de juego que regirían estos comicios y finalmente un acuerdo sobre el funcionamiento mismo de la Asamblea. Acción Popular, en línea con su postura inicial, rechaza las reglas de los comicios y no participa. La izquierda rechaza la idea de las elecciones pero se divide en torno a la participación, unos, los más moderados (PCP y

PSR) participan para defender las reformas velasquistas, otros (la nueva izquierda y los troskistas) lo hace por razones de agitación y propaganda, y por último, los maoístas ortodoxos (Patria Roja y Sendero Luminoso) rechazan el evento como una maniobra más de las clases dominantes.

Es interesante, sin embargo, la forma como participan los partidos de izquierda en la Asamblea Constituyente, porque ello nos permitirá observar la idea de representación que manejaban. La participación de la izquierda será, principalmente, de denuncia del trabajo que allí se venía realizando y de uso de la tribuna parlamentaria para la propaganda de su ideología y de las luchas, en ese entonces significativas, de distintos movimientos sociales. Esta participación, en términos políticos, será hegemonizada por los sectores más radicales del espectro izquierdista presente. El ejemplo más claro de esto es la súbdita presentación de la denominada Amoción roja@ en la primera sesión de la Asamblea. En esta moción, promovida por Vanguardia Revolucionaria y los grupos troskistas presentes, se planteaba que la Asamblea asumiera todos los poderes del Estado, por ser, en el momento, el único organismo elegido. Esta propuesta, que podía considerarse ingenua casi desde todo punto de vista, partía del supuesto, no solo del poder de la Asamblea, sino también del Apoder@ de los movimientos sociales de la época, de los cuales la izquierda se consideraba representante. En consonancia con esta actitud ninguno de los izquierdistas constituyentes, que sumaban 29 representantes de un total de 100, firmaron el texto final de la Carta Magna.

Pero, una excepción digna de mencionar es el proyecto de Constitución presentado por el Partido Socialista Revolucionario -grupo izquierdista considerado reformista por los más radicales- que planteaba una propuesta de democracia avanzada en los marcos del consenso representativo predominante sin postular la Adestrucción del estado burgués@ como si señalaban las formaciones radicales. Contrasta esta propuesta con el proyecto de Carta Magna de la Unidad Democrático Popular -coalición radical que incluía a Vanguardia Revolucionaria- en la que sí se levantaba una propuesta alternativa o Arevolucionaria@, en la terminología izquierdista de la época, a la democracia liberal.

La influencia marxista-leninista dominante en la izquierda, llevaba a la mayoría de los distintos grupos a considerarse representantes de los sectores trabajadores, campesinos, juveniles,

barriales, regionales, etc., en los que sus organizaciones tuvieran influencia. De esta manera, asumían la representación corporativa de dichos sectores, suponiendo que la mayor hegemonía de sus grupos sobre los mismos, haría transformarse esta representación corporativa en representación política, o, como se decía en aquel período, en representación de clase. La construcción de la representación política no se entendía, sin embargo, como la construcción de una representación democrática en los marcos de una institucionalidad de gobierno representativo y plural, sino como el desarrollo de la conciencia de clase de los sectores sociales en cuestión para organizarlos en una perspectiva revolucionaria. Se absolutizaba así la representación de clase en desmedro de la representación ciudadana, lo que llevaba, dado el poco desarrollo clasista de los movimientos sociales en cuestión, a que todo quedara en un esfuerzo de representación corporativa de tipo clientelista. Esta forma de representación corporativa continuará siendo un recurso de la izquierda marxista, agrupada en Izquierda Unida, en la década de 1980. La magnitud de su influencia como concepto de representación, tal como veremos más adelante, la llevará a convertirse en un ingrediente importante de la crisis de representación en esa década.

La negociación de los militares con el PAP y el PPC lleva, asimismo, a que estos se pongan de acuerdo dentro de la Asamblea, elaborando una Constitución de compromiso, tanto de ellos con los militares como entre ellos mismos. Quizás la Constitución no reconoce de manera explícita todas las reformas que los militares hubieran querido, pero sí el ánimo progresista que se heredaba del velasquismo. De igual manera, significa también un compromiso entre dos partidos que, al menos nominalmente, se precian de tener ideología. En consecuencia legislan, por primera vez en nuestra historia constitucional, un Estado Social de Derecho, no solo de nombre sino también con importantes contenidos e instituciones. Así, la Constitución de 1979 da máxima jerarquía a los derechos sociales, relativiza los derechos de propiedad, recoge el clamor descentralista, da el voto a los analfabetos y los mayores de 18 años, levanta el veto a los partidos de supuesta filiación internacional (PAP e izquierda) e incluye a los partidos en general como los vehículos principales de participación y representación políticas.

Se trata de una Constitución de transacción producto de una determinada correlación de fuerzas cuyo bloque hegemónico se plasma en la coalición democratizadora. Sin embargo, era

una Constitución cuyas provisiones normativas probablemente iban más allá de la capacidad de los actores que debían implementarlas. Quizás uno de los aspectos más significativos sea el referido a las reivindicaciones sociales que se plasman en esa Carta Fundamental. Los movimientos sociales que habían establecido en años anteriores estas reivindicaciones fueron drásticamente reprimidos por los gobernantes militares, justamente para dar paso a la transición, dándose la paradoja de que quienes eran los naturales portadores de estas demandas no figuraban ya más como actores para poder asumirlos como derechos. Esto es importante porque una de las características del régimen democrático en la década de 1980 es que, salvo algunos pequeños núcleos organizados, la ciudadanía en general no siente como suyos los derechos legislados en la Carta Magna, lo que revela, en términos de la sociedad en general, la poca capacidad inclusiva de la promesa democrática contenida en la Constitución de 1979.

Aquí podemos observar la contradicción entre la Aconstitución material@ (Lasalle 1976, Vergottini 1981) o sea la constitución como expresión de la correlación de fuerzas en un momento determinado y la constitución como texto escrito y programa de institucionalización democrática. La Constitución de 1979 es expresión de una determinada correlación de fuerzas, pero esta correlación no logra proyectarse de manera hegemónica en la década siguiente como el régimen político de la democracia. De allí que las provisiones de esta Carta Magna puedan ser, finalmente, tachadas de inadecuadas y dejadas de lado. La precariedad del proyecto institucional de 1979 nos hace también ver la dificultad de un diseño institucional para convertirse en instrumento de cambio cuando existe aún gran debilidad en los potenciales actores democráticos.

En cuanto a los excluidos de la coalición democratizadora, Acción Popular y los partidos de izquierda, es importante hacer algunas precisiones. En Acción Popular se mezclan dos tipos de consideraciones, por una parte fue el partido directamente afectado con el golpe de Estado de 1968, por lo tanto una simple "vuelta atrás" era una reivindicación a su anterior gobierno, por otra, rápidamente logra percibir que su acendrado anti-militarismo, sin la carga ideológica de la izquierda radical, sino más bien resumido en la figura carismática de su líder, captaba el ánimo anti-dictatorial prevaleciente en el momento. Al respecto cabe señalar la recuperación de imagen, en contraste con el final de su anterior gobierno, que había desarrollado Fernando Belaúnde. El ex-Presidente regresa al Perú con el aura del exilio, la consecuencia democrática y

sin competidores a la vista. Es importante señalar que, a pesar de los vaivenes de su movimiento, Belaúnde conservaría esta buena imagen a lo largo del docenio democrático.

El contexto favorable para AP lleva a Fernando Belaúnde a hacer una apuesta táctica de corto plazo, que a la postre le produciría grandes réditos políticos: no se presenta a las elecciones a la Asamblea Constituyente, donde aún no estaba en juego el gobierno efectivo y espera a las elecciones generales de 1980, donde su claro perfil anti-dictatorial y su discurso moderado lo llevan al triunfo. En la izquierda la carga ideológica era muy grande, ello los llevaba a hacer una apuesta por la revolución no por la democracia. Todo se debía subordinar al objetivo revolucionario, tanto las demandas del movimiento social como la eventual participación electoral. Estas diferencias de proyectos, marcadas explícitamente en el discurso público, hacían muy difícil un acercamiento con la Fuerza Armada que estaba de regreso de la experiencia reformista. Podemos señalar entonces que no solo hubo exclusión de la coalición democratizadora por voluntad explícita de algunos de los actores, sino que también hubo autoexclusión, por apuestas tácticas o consideraciones ideológicas distintas.

Pero las exclusiones de la coalición democratizadora no significan que los excluidos no se integren, en distintos momentos, al régimen político. Acción Popular lo hace en las elecciones generales de 1980 y la mayor parte de la izquierda con su participación en la Asamblea Constituyente. Esta discrepancia, sin embargo, entre los partidos que integran la coalición democratizadora (PAP y PPC) y el espectro político del régimen democrático (PAP, PPC, AP e izquierda) va a debilitar el carácter fundante de la transición como momento inicial de un sistema democrático de partidos. El resultado es que la gran mayoría de los actores políticos se integran al régimen democrático, pero solamente una parte de ellos el PAP y el PPC primero y luego AP, los primeros por ser protagonistas de la transición y el segundo por afinidad de trayectoria, asumen el régimen como suyo. Esto hace al régimen particularmente frágil frente a las iniciativas desleales de los actores. Un buen ejemplo son las jugadas tácticas de corto plazo, como la de Belaúnde frente a la Asamblea Constituyente, donde a riesgo de poner en juego la democracia, se esperan ganancias inmediatas. La deslealtad con el régimen político que nace con la transición se convertirá así en moneda corriente en la década de 1980, haciendo muy difícil la afirmación de un sistema democrático de partidos.

De igual manera, los problemas iniciales de la coalición democratizadora y el hecho de que se trata de partidos populistas agotados o que privilegian la representación corporativa va a afectar también el compromiso de los actores políticos con los contenidos más específicos de la Constitución aprobada. Más allá del respaldo genérico a la democracia AP, PPC y PAP, no van a desarrollar su labor de gobierno y/o oposición sobre la base del desarrollo del programa constitucional contenido en la Carta de 1979, tampoco lo harán los partidos agrupados en Izquierda Unida cuyo discurso explícito tenía como objetivo la instauración de un nuevo régimen político. Por ello, esta Carta no pasará de ser una referencia hecha por algunos políticos que sí eran conscientes del valor del documento, más que la agenda de construcción de la institucionalidad democrática.

TERCERA PARTE: Los actores

III. Los partidos hacia la crisis: consideraciones previas

1. Los partidos como variable independiente

En los siguientes capítulos procedemos al análisis de los actores políticos como variables independientes, es decir, de los actores políticos en su mutua interacción, como competencia, enfrentamiento y cooperación por el voto ciudadano para alcanzar posiciones de poder y eventualmente el gobierno. Por la precariedad de la democracia peruana en el período de estudio esta interacción no estaría dirigida solo ni principalmente a la competencia electoral o a la libre

deliberación de los asuntos públicos, existen también otras fuerzas denominadas Poderes fácticos que ejercen influencia, muchas veces decisiva, en los que vendrían a ser los problemas fundamentales de la década: la crisis económica y la violencia terrorista. Esta influencia, sin embargo, no se tratará haciendo un análisis específico de estos poderes fácticos, sino, más bien, a través de la influencia que ejercen en los actores partidarios o personalidades independientes que participan directamente en política. Los partidos revolucionarios anti-sistema, por otra parte, tampoco se consideran directamente en el análisis de la interacción partidaria, sino, al igual que en el caso de los poderes fácticos, como una influencia externa al sistema de interacción.

El análisis de la interacción entre los actores políticos democráticos se hace en función de la atención que desarrollan frente a las demandas de la población, en torno a los dos problemas señalados: la crisis económica y la violencia política. En particular, se analiza la incapacidad de respuesta, desde el gobierno y la oposición, a las demandas ciudadanas. Esta incapacidad va a configurar una crisis de representación, al suceder lo que Kay Lawson denominaría el fracaso del vínculo entre representantes y representados. Pero en este caso no se tratará solo del fracaso de una forma de representación populista que se inscribía en un horizonte histórico determinado, sino del fracaso de una forma de representación formal, donde el representante se supone que debía mostrar alguna capacidad para mantener su legitimidad frente al representado. Es entonces una crisis de representación coyuntural pero que tiene como telón de fondo las crisis de representación populistas anteriores, lo que lleva a un desenganche más radical entre ciudadanía y partidos.

Es importante insistir en que se trata, por una parte, de organizaciones políticas agotadas en su impulso de transformación nacional-popular lo que había llevado, a su vez, al agotamiento de la forma de representación populista que habían desarrollado. Y por otra, de Izquierda Unida, que incluía un conglomerado de pequeños partidos radicales y un líder formado en el populismo anti-oligárquico inicial. Los primeros buscaban articular la representación corporativa de distintos movimientos sociales en una perspectiva revolucionaria y, por lo tanto, no tenían interés en la democracia representativa, mientras el segundo intentaba integrar a IU al régimen democrático. Los populismos agotados venían de la democracia conservadora anterior a 1968 y de su sorda oposición al velasquismo, los partidos de la izquierda radical, de una actividad

sindical y movimientista de oposición a la dictadura militar. Estos últimos habían llenado el vacío dejado por el giro derechista de los principales partidos populistas en la década de 1960, afirmándose como un importante liderazgo transformador tanto de viejos como nuevos sectores sociales. Sin embargo, eran sangre nueva que llegaban al final del ciclo político largo inaugurado por la crisis de 1930. Eran, pues, unos y otros, formaciones políticas que iban en sentidos opuestos y con intereses y vitalidades diferentes. La primera experiencia conjunta de estas fuerzas políticas, la transición democrática entre 1977 y 1980, no sería suficiente para afirmar objetivos comunes. En estas condiciones era difícil plasmar la promesa constitucional contenida en la Carta de 1979.

En este sentido, en el afán de encontrar el cómo sucedieron las cosas en el contexto señalado, es útil la tipología de Juan Linz (1978) para caracterizar la actitud de los partidos políticos frente a un régimen democrático. Esta tipología distingue a los actores como leales, semi-leales y desleales, de acuerdo a su mayor, menor o nulo compromiso con la democracia. Pero en el caso peruano, es muy difícil, más allá del reclamo que pudieran hacer los actores mismos, encontrar partidos enteros que fueran leales o desleales al régimen democrático. La lealtad, deslealtad, y aún la semi-lealtad, son características que atraviezan a los diversos actores políticos y al hacerlo nos dan una idea de la novedad y la precariedad del régimen democrático. La actitud predominante, sin embargo, oscila entre la semi-lealtad y la deslealtad con la democracia. La interacción entre los partidos en el período es todavía un juego de intereses menores frente a las necesidades de construcción democrática entonces vigente que no brinda actores plenamente comprometidos con el régimen en cuestión.

Por último, cuando hablamos de actores en el período de estudio es difícil distinguir entre personalidades y partidos. Ya nos hemos referido al extremo grado de personalización de la política en el Perú como una característica que no solo define el actual período de predominio de los independientes, sino también los años de hegemonía partidaria. Más allá de la fuerza organizativa del partido en cuestión las formaciones políticas suelen distinguirse por su líder. Es más, si señalamos al líder para distinguir un período, un gobierno o un evento, muchas veces estamos refiriéndonos a una realidad más importante que el partido mismo en tanto capacidad para influir realmente y darle forma a la vida política del país. Esto es particularmente cierto

cuando se trata de Fernando Belaúnde y de Alan García, a pesar de la fuerza y extensión de sus propias organizaciones, no lo será tanto en el caso de Alfonso Barrantes, porque su liderazgo no estaba tan afirmado como los anteriores y aunque no llegara a ser disputado sí será constantemente cuestionado. En cuanto a Mario Vargas Llosa la situación es distinta por la corta vigencia del FREDEMO y los importantes líderes nacionales que esta coalición alberga en sus filas. En forma similar a IU se configura una situación difícil en la que conviven varios líderes que no disputan pero sí cuestionan, intermitentemente, el liderazgo de Vargas Llosa, aceptándolo finalmente a regañadientes.

2.)Polarización inevitable?

Visto desde el hoy de 1998, el docenio democrático se observa como un período de aguda polarización política, tanto desde dentro como desde fuera del incipiente sistema de partidos. Vemos gran distancia ideológica entre los actores, varios centros -en el sentido espacial y no ideológico del término- que se destruyen sucesivamente, una precaria inserción social y, lo que era más grave, el desafío constante y al final insoportable de los partidos revolucionarios antisistémicos que agredían al sistema desde fuera. Sin embargo, esta polarización no es percibida como tal por algunos de los más destacados analistas políticos del momento (López 1985, Cotler 1988), sino hasta bien entrada la década de 1980, quizás si hasta 1987 ó 1988, con motivo del intento del gobierno de Alan García de estatización de la banca.

Es probable que el error provenga de la forma de contar a los actores políticos. Si tomamos el modelo de Sartori (1992) sobre la clasificación de los sistemas de partido vamos a encontrar que este autor señala que de tres a cinco partidos viene a ser el número ideal para conformar un sistema estable de lo que se denomina pluralismo limitado o moderado. Si a esto agregamos la tradicional división de los actores políticos en el Perú en tres tercios, que en la escena política anterior a 1968 referían al PAP, AP y los residuos de los partidos oligárquicos, pues había el traslado fácil de ese esquema al Perú de los ochentas y se volvían a encontrar los tres tercios mencionados pero con actores ligeramente cambiados, estos eran: el PAP, AP-PPC e IU. Con tres agrupamientos y un sistema de representación proporcional que permite el acceso de

las minorías, parecían establecerse las pautas de una competencia cercana a la perfección y que podía generar estabilidad.

Sin embargo, este análisis pecaba de ligero, no creemos que tanto por falta de elementos de los observadores sino más bien por los buenos deseos de que finalmente funcionara una democracia en el Perú. El propio Sartori (1992) señala que para contar bien a los partidos y diferenciar con claridad los distintos sistemas no basta una clasificación por el número de actores, sino que es precisa la elaboración de una tipología, que tome en cuenta el factor ideológico. A esto último, Alan Ware (1996) agrega la necesidad de tomar en cuenta la penetración en la sociedad y la actitud frente al régimen político.

La primera cuestión a resaltar, por su importancia en el período, es el carácter de polis asediada que tenía el régimen en el docenio democrático. Las fuerzas sistémicas se hallaban en conflicto violento con las fuerzas antisistémicas y los límites de la polis no coincidían con los límites del sistema. Es decir, teníamos fuerzas antisistémicas dentro y fuera de la polis, con distinto signo ideológico y tanto en formaciones partidarias como en los denominados poderes fácticos. Lo más saltante de esta situación eran los dos partidos insurrectos contra la democracia, o partidos revolucionarios antisistémicos: Sendero Luminoso y el MRTA. Pero también habían organizaciones con un discurso claramente antisistémico y con una práctica ambivalente, como era el caso de IU. Además de concepciones y prácticas claramente antisistémicas dentro de las fuerzas de seguridad, que se expresaron en la denominada *Aguerra sucia*, y en grupos de tecnócratas, asociados a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que presionaban por la adopción de políticas económicas sin importar sus consecuencias para la convivencia en democracia.

Pero también existía una gran distancia ideológica entre los partidos legales. Por una parte estaban los que habían participado en la elaboración y aprobado la Constitución de 1979, como es el caso del PAP y el PPC, o la habían ratificado y puesto en práctica, como es el caso de AP. Por otra, las fuerzas que integraban IU, que se habían negado a firmar la Constitución de 1979 y en el caso de los partidos más radicales, como Patria Roja y el PUM, que se colocaban explícitamente al margen de la institucionalidad constitucional vigente. Al respecto, es

importante diferenciar entre aquellos izquierdistas que buscaban una Ademocracia avanzada@ a partir de la Constitución, perspectiva hacia la que evolucionan Alfonso Barrantes y sus seguidores, y aquellos que estaban en contra del orden constitucional y aspiraban a destruirlo, como los radicales aludidos. Por último, la radicalización liberal que sufre desde 1987 y muchas veces a pesar suyo, el centro-derecha de AP y PPC, con el surgimiento del movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa y posteriormente del FREDEMO que los incluye. Esta distancia ideológica, sin contar a los partidos insurrectos, es indudable que no contribuía a la construcción de un *Mainstream*®, es decir, a un conjunto de posiciones compartidas sobre los problemas fundamentales de la institucionalidad política y la economía del país.

Asimismo, en este contexto de partidos antisistémicos y distancias ideológicas, se destruyen sucesivamente las formaciones partidarias que logran o aspiraban a ser centros políticos en distintos momentos del período. Por centro no me refiero al grupo político que logra una posición equidistante de los demás por razones ideológicas, sino a aquel que constituye por su peso político específico el punto de equilibrio de todo el sistema, no importa si se trata de una posición más a la derecha o a la izquierda en determinado espectro partidario. En nuestro caso estamos refiriéndonos a AP primero, cuyo predominio dura nada más dos años y medio, naufragando entre sus indecisiones y el fenómeno del Niño, al PAP después, cuya formidable promesa dura tres años, entre 1984 y 1987, liquidándose con el intento de estatización de la banca y a IU, que sin ser gobierno, logra colocarse en la segunda mitad de la década de 1980 como el agrupamiento de recambio, hasta que es devorada por sus propias contradicciones internas.

Asimismo, tenemos también la aparición de oposiciones bilaterales (Sartori 1992), es decir la aparición de fuerzas que se oponen al probable centro político desde ángulos opuestos¹⁹. En un primer momento, el proto sistema de partidos tenía solo una oposición unilateral, desde la izquierda, conformada por IU, desde dentro, y Sendero Luminoso y el MRTA desde fuera. Pero desde 1987, con el intento aprista de estatización de la banca, el incipiente sistema partidario

¹⁹Para lo más importante de la teoría contemporánea sobre partidos, a partir sobre todo de las propuestas de Sartori, el desarrollo de oposiciones bilaterales en un sistema específico es la receta para el desastre, porque estimula a las fuerzas centrífugas y no permite que se generen alternativas que apuesten a la estabilidad.

pasa a tener una oposición bilateral, tanto desde la izquierda como desde la derecha, con la conformación de Libertad, primero, y del FREDEMO, después. Al igual que IU, el FREDEMO combinaba elementos democráticos con antidemocráticos, así como importantes lazos con poderes fácticos como militares, tecnócratas y grandes empresarios, que no estaban interesados en la democracia.

Por último, está el tipo de penetración en la sociedad que tenían los agrupamientos políticos. Hacia 1985 podría parecer también, por los aluviónicos resultados electorales de los ganadores y la fuerza de las identidades políticas, que nos encontrábamos ante partidos con una importante inserción social. Sin embargo, se trataba de identidades de ghetto, circunscritas a sectores sociales específicos, que arrastraban masivamente en momentos electorales pero cuya inserción no era amplia respecto del conjunto social sino retringida a la sociedad organizada.

Estas características nos hacen ver que a pesar del número pequeño de agrupamientos y la libertad e incluso facilidades de acceso al sistema, por las características de la reglamentación electoral; las fuerzas antisistémicas, la polarización ideológica y el tipo de penetración social restringida, conspiraban contra la estabilidad democrática, abonando, más bien, en favor de una polarización política cuyos elementos ya estaban todos presentes en la primera mitad de la década de 1980, pero que serían inevitables de ver de 1987 en adelante, cuando la crisis del gobierno de Alan García arrastra consigo a todos los actores del período.

3. La agudización de la desigualdad social

Entre las cuestiones que condicionan la estabilidad democrática y la constitución de un sistema de partidos quizás el elemento contextual más agudo que deben enfrentar los actores del docenio democrático sea el proceso de agudización de la desigualdad social en las últimas décadas y el contenido especialmente perverso de la misma. Este tipo de agudización va a hacer drásticamente más exigentes las demandas de la ciudadanía a los partidos agregando un elemento de particular importancia para explicar la crisis partidaria. Este proceso se puede observar con mucha claridad en la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre 1981 y 1993, que continúa una tendencia que venía de 1972 (Ver cuadro No.1). El IDH (Eguren et. al. 1997) está

compuesto por tres elementos: el nivel educativo, que incluye tasa de alfabetismo y tasa de matrícula, la esperanza de vida y la participación per cápita en el Producto Bruto Interno (PBI). El IDH como tal sube entre 1972, 1981 y 1993, de 0.539 a 0.677 y a 0.639 respectivamente, sin embargo, la participación de sus componentes es desigual. Vemos una subida en los componentes que conforman el nivel educativo y la esperanza de vida, mientras que se observa una disminución importante en aquel relativo a la participación per cápita en el PBI. O sea, que mientras tenemos una población más educada y saludable, debido principalmente a la iniciativa estatal de los últimos cuarenta años, esta población es también más pobre. La mezcla exactamente explosiva que llevará a una profunda frustración de expectativas y producirá, más rápidamente que en otros lugares de América Latina, un desencanto con la democracia. En aquellos lugares del Perú donde esta frustración es más aguda, como el caso de Ayacucho, Carlos Iván Degregori (1985, 1990) la pondrá como una de las causas de la violencia política que tendría su origen en ese departamento.

CUADRO No. 1 PARTICIPACIÓN DE CADA COMPONENTE DEL IDH

Año	IDH	Alfabetismo %	Tasa de matriculación %	Esperanza de vida %	PBI pc %
1972	0.539	29.8	0.1	31.4	38.6
1981	0.677	26.9	11.5	30.0	31.6
1993	0.693	27.9	11.8	33.1	27.1

Fuente: *Evaluación Social del Desarrollo Humano en el Perú*. Fernando Eguren López, Jannet Cano Pacheco y Alberto del Aguila Alfaro. Lima: Acción Ciudadana por el Desarrollo Humano contra la pobreza, 1997.

Esta agudización de la desigualdad social que se observa con claridad en la evolución del IDH, adquiere una imagen aún más precisa si revisamos la composición del ingreso nacional por tipo de ingreso entre 1970 y 1989 (Ver Cuadro No.2). Es decir si revisamos la variación

porcentual de la participación de las remuneraciones, el ingreso de los independientes y las utilidades en el ingreso nacional. Allí vemos cómo las remuneraciones bajan cerca de 10%, el ingreso de los independientes 3% y en cambio las utilidades suben en un 16%. De esta manera nos explicamos de mejor manera la baja de la participación per cápita en el PBI. Pero, además, nos damos cuenta cómo la desigualdad se hace más desigual en favor de los propietarios que tienen utilidades, que aumentan sus ingresos en una proporción mucho mayor que la abrumadora mayoría de los peruanos.

CUADRO No. 2. INGRESO NACIONAL POR TIPO DE INGRESO 1970-1989 (%).

Año	Remuneraciones	Ingreso de independientes	Utilidades de empresas
1970	42.5	27.71	24.46
1975	43.7	27.15	23.31
1980	37.8	24.40	35.67
1985	34.6	27.46	34.71
1989	33.36	24.65	40.68

Elaborado en base a Cuánto S.A. Perú 1991.

Tomado de: Vilsoso, Carmela. Sindicalismo Clasista: certezas e incertidumbres. Edaprospo, 1992.

Esta desigualdad, por otra parte, es algo que no sucede espontáneamente, sino que se debe a políticas económicas concretas que son inspiradas o abiertamente impuestas por el Fondo Monetario Internacional, bajo amenazas cada vez más serias de aislar al país económica y políticamente si no se cumplía con seguir esa inspiración o esos dictados. Cuando llega la democracia en 1980, el país ya había sufrido, luego del proceso vealsquista que promueve una importante redistribución, al menos en el sector urbano y moderno de la economía, cuatro ajustes (junio de 1975, enero de 1976, octubre de 1977 y mayo de 1978) de mayor o menor inspiración fondomonetarista y distinto éxito en la estabilización de la economía (Iguñiz, Basay y Rubio 1993). Estos ajustes económicos van a continuar en 1983, setiembre de 1988 y agosto de 1990, significando progresivamente (quizás con la excepción del ajuste Aheterodoxo@ de 1985) un

recorte relativo mayor de las remuneraciones y los ingresos independientes frente a las utilidades.

Se trata entonces de una ciudadanía que va a demandar insistentemente se detenga el deterioro de su situación material, en un contexto en el que el FMI, la tecnocracia y los grandes empresarios, presionan, cada vez con más éxito, a los distintos gobiernos para que continúen o implementen políticas que afecten el bienestar de las mayorías, ya que esa se considera ésta, por diagnosticar el problema como un Aexceso de demanda@, la única forma de superar la crisis económica.

De esta forma, todos los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, se debaten en una tensión que les reduce drásticamente el espacio para tomar decisiones políticas.

4. El cambiante electorado de los ochentas

En los doce años de vigencia democrática, entre 1980 y 1992, se produce una honda frustración política con este régimen. La democracia, por lo que promete como participación y representación y por las sucesivas ofertas electorales de los distintos partidos, causa gran expectativa en la población. Esta expectativa es de cambio social, es decir la población espera que el nuevo régimen político implemente reformas que mejoren su situación económica o al menos que la defiendan de su deterioro, particularmente vía empleo y mejores ingresos y nuevas oportunidades. Pero luego, cuando la crisis económica y la violencia terrorista llevan, en la segunda mitad de la década, a una situación de ingobernabilidad, que ponía en peligro la viabilidad del país y la sobrevivencia de las personas, la expectativa se transforma en una aguda necesidad de orden.

Hay la tentación de parte de algunos analistas entre los que se encuentran varios de nuestros entrevistados como Carlos Franco, Sinesio López y Alfredo Torres, de ver el problema de la frustración con el régimen democrático como una cuestión ajena a los partidos, de la cual ellos habrían sido víctimas. La causa de la frustración habría sido el agotamiento de la capacidad redistributiva del Estado o la llamada "crisis fiscal" por el agotamiento, a su vez, de un determinado modelo de desarrollo en crisis desde mediados de los años setenta. Es decir, que

junto al deterioro en los ingresos de la mayoría de la población señalado líneas arriba habría corrido también el empobrecimiento del Estado y su creciente falta de disposición para actuar como ente redistributivo. Esta situación habría dejado a los partidos sin recursos para satisfacer a sus clientelas y al público en general. Sin negar que la crisis fiscal es un elemento en la crisis de los partidos, nuestro propósito es ir más allá y ver específicamente el papel que jugaron los partidos mismos, en este contexto, para satisfacer las expectativas de la población. De allí la importancia de observar la relación entre partidos y electores, atendiendo a la cambiante naturaleza de ambos universos en el lapso que tratamos.

En el curso del período los ciudadanos van cambiando sus preferencias electorales, de acuerdo a la actuación que desarrollan los partidos, principalmente en el gobierno pero también en la oposición, en función de la satisfacción de sus expectativas. Este cambio de preferencias de un proceso electoral a otro llama la atención en el caso del Perú por la forma drástica en que sucede. A este cambio de preferencias en forma drástica es lo que denominaremos "volatilidad electoral", queriendo referir con ello al corto tiempo que la ciudadanía mantiene su preferencia por determinado partido político antes de ensayar el apoyo a una nueva perspectiva mayoritaria.

La volatilidad electoral la podemos percibir en el cuadro No. 3 donde se muestran los resultados electorales de los diversos partidos y frentes entre 1978 y 1990. Allí vemos cómo los partidos que triunfan en una elección son derrotados en la siguiente. Tenemos el caso del PAP, que es el que más continuamente se presenta como tal a elecciones en el período señalado. Gana primero en la Asamblea Constituyente, pierde luego en las elecciones de 1980, se recupera teniendo su pico en el triunfo de 1985, para luego decaer hasta la actualidad²⁰. Acción Popular tiene su punto más alto en las elecciones de 1980 para luego decaer en el resto del período. La izquierda, en cambio tiene una actuación desigual, dependiendo de cómo se presente. Sorprende en 1978 con un 29.3% de la votación, a pesar de que va fraccionada en varias listas, baja al 14.4% en las elecciones generales de 1980 al no concretar una candidatura unitaria y obtiene un apoyo ascendente, a partir de las elecciones municipales de 1980, hasta que se divide, a

²⁰ Habría que anotar que el triunfo en las elecciones para la Asamblea Constituyente no le da responsabilidad de gobierno y por lo tanto su descenso en votos y su pérdida de las elecciones generales de 1980 no corresponden tanto a una decepción del electorado por no llenar expectativas en la administración gubernamental como a la competencia con Acción Popular, a sus propios errores de campaña y a sus problemas internos.

principios de 1989, lo que incide decisivamente en su declive. El PPC tiene una actuación más bien pareja, tendiendo al descenso a partir de 1986, con la excepción de las elecciones de 1978, cuyo gran resultado se explica por la ausencia de Acción Popular.

CUADRO N1 3: VOTACION NACIONAL POR PARTIDO (1978 - 1990)

AÑOS	AP	PPC	FREDEMO 1)	PAP	IZQ. 2)	INDEPEND. 3)
1978 (a)	NP	32,4	--	25,6	32,9	9,1
1980	47,2	15,4	--	22,8	12,5	2,1
1980 (m)	34,9	20,6	--	16,3	28,3	NP
1983 (m)	11,9	21,2	--	27,2	36,5	3,3
1985	4,4	19,2	--	50,6	23,9	2,0
1986 (m)	NP	26,9	--	37,6	34,8	NP
1989 (m)	--	--	26,8	11,5	13,7	48,0
1990 (v)	--	--	39,5	13,8	11,0	35,7
1990 (v)	--	--	46,7	NP	NP	53,3

NP: No participó.

(m): Elecciones municipales.

(a): Elecciones constituyentes.

(v): Primera y segunda vuelta electoral.

1) AP y PPC participan en 1989 y 1990 conjuntamente con el Movimiento Libertad en las listas del FREDEMO.

2) La izquierda en 1978 es la suma del FOCEP, UDP, PCP, PSR; en 1980, UDP, PRT, FOCEP, UI. Entre las elecciones de 1980 (m) y 1986 (m) sólo IU. En 1989, la suma de IU y ASI; en 1990 IU más IS.

3) En esta columna se suma el resto de partidos y agrupaciones independientes. Sin embargo, el porcentaje mayor en Lima corresponde en 1989 (m) al Movimiento Obras.

FUENTE: Fernando Tuesta Soldevilla (1995) *Sistema de Partidos Políticos en el Perú. 1978-1995*. Fund. F. Ebert, Lima.

Esta volatilidad nos da una idea de la "vida útil" de los partidos en el período de estudio. Por vida útil me refiero al período en que cada uno de los partidos tuvo influencia real y preponderante en la vida política. El Partido Aprista tiene una influencia importante en todo el período de estudio, que ciertamente decae luego de su fracaso gubernamental, pero incluso en esos momentos (elecciones generales de 1990) se mantiene a niveles superiores que su predecesor Acción Popular. En Acción Popular tenemos una influencia más bien corta, de 1980 a 1985, que coincide con su período de gobierno. Luego ingresa al FREDEMO donde es una incógnita su peso específico, para finalmente diluirse hasta casi la insignificancia. La izquierda pasa de ser una simple "amenaza" para los demás actores a convertirse en jugador importante en 1983, con el triunfo de Alfonso Barrantes en las elecciones municipales a la alcaldía de Lima, situación expectante en la que se mantiene hasta su división en 1989, para luego entrar a un proceso de desaparición. El PPC es un actor menor, nunca tiene por si solo influencia significativa, salvo en alianzas con otros grupos, como es el caso de su coalición de gobierno con AP, entre 1980 y 1985, y su participación en el FREDEMO. Determinar la vida útil de cada actor nos sirve para precisar la dinámica de la crisis partidaria, que si bien como conjunto se procesa en el curso de los doce años señalados, tiene también dinámicas particulares que llevan al agotamiento de cada uno de los actores en momentos distintos, afectando cada uno de ellos, de manera especial, la crisis del conjunto.

Pero ¿qué electores y cuáles partidos son estos que sufren un grave desencuentro durante el período de estudio? Se trata, en la mayoría de los casos, tanto de nuevos electores como de viejos partidos políticos. Cuando hablamos de nuevos electores nos referimos a un hecho particularmente significativo porque entre 1978 y 1980 se levantan en el Perú las últimas barreras al sufragio universal, permitiéndose votar a los jóvenes, entre 18 y 21 años, a partir de las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978 y a los analfabetos a partir de las elecciones generales de 1980. De acuerdo al cuadro No. 4, entre las últimas elecciones generales de 1963 y las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978 el número de votantes crece en un 113% y si tomamos como referencia las elecciones generales de 1980, el crecimiento es de 162%. Pero, lo que es más importante, el porcentaje de votantes en relación a la población

total va de 18% en 1963 a 25% en 1978 y 31% en 1980. Es decir, tenemos un crecimiento tanto absoluto como relativo de los ciudadanos en una proporción tal que nos permite afirmar que la gran mayoría de electores son nuevos en la década de 1980 respecto a la década de 1960.

CUADRO N1 4: PORCENTAJE DE VOTANTES EN RELACION A LA POBLACION (1872 - 1990)

AÑOS	1872	1919	1939	1956	1963	1978	1980	1990
ELECTORES*					1954	4172	5121	7837
- Crecimiento %**						113	162	401
ELECTORES/ POBLADORES	0,3%	2,5%	8%	15%	18%	25%	31%	35%

* ELECTORES: Son los ciudadanos que emiten su voto (en miles).

** Crecimiento porcentual con respecto a 1963.

FUENTE: Fernando TUESTA S. *Sistema de Partidos Políticos en el Perú (1978-1995)*

F. F. Ebert, Lima.

El advenimiento del sufragio universal es de singular trascendencia porque no solo significa el aumento cuantitativo del cuerpo ciudadano sino la investidura a toda la población adulta del país con plenos derechos político-electoral. Esto implicaba un crecimiento y diversificación de las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos diferente de la existente antes de 1968. Implicaba también una mayor demanda de inclusión, es decir participación y beneficios, en el régimen político. Ello podría haber llevado, tal como señala Umberto Cerroni (1993) para el caso de Europa Occidental²¹, a un cambio en el carácter del Estado, que en nuestro caso podría haber sido el pasaje definitivo del Estado Oligárquico basado en un orden patrimonial al Estado Democrático moderno. La frustración de esta posibilidad lleva a que el sufragio universal no cumpla, en el período de estudio, plenamente con su cometido.

²¹Cerroni señala que la concesión del sufragio universal en Europa Occidental luego de la Primera Guerra Mundial permite el tránsito del Estado Liberal, que venía del siglo XIX, al Estado Social o de Bienestar.

Sinesio López (1997), sin embargo, señala que si bien el sufragio universal no produce un estado social, o al menos, un estado democrático, sí da origen a Izquierda Unida, una organización política de masas que busca expresar a los movimientos sociales desarrollados en los años setenta. Para López esta significación es aún más importante por cuanto Izquierda Unida expresaría también la tercera incursión democratizadora en el Estado, traduciendo parcialmente la gran explosión ciudadana de la época.

Pero, como señalamos, así como la mayoría de los ciudadanos eran nuevos, la mayoría de los partidos venía de otra época. El PAP, AP y el PPC, que juntos llegaron a sacar entre el 70 y el 80% de los votos válidos en la primera mitad del período de estudio, eran partidos de la escena política anterior a 1968. Alberto Borea señala la inamovilidad de esta clase política, que en muchos casos se prolonga hasta principios de la década de 1990, y Henry Pease dice que lo que más aumenta en ellos son las canas. En el caso del PAP y AP, más allá de sus diferencias de trayectoria, conservaban sus hábitos confrontacionales, encarnaban la personalización de la política en sus respectivos caudillos y el estilo propio de partidos mayoritarios. En AP esto se expresaría en "la eficacia del hermoso gesto" (Bourricaud 1989) de raigambre aristocrática, que usaban como gran recurso el líder y su séquito, en espera del reconocimiento espontáneo de los demás; en el PAP era el carisma de la jefatura (o su recuerdo) que con la promesa programática cautiva a propios y se impone a extraños. Ambos partidos tienen en la interpelación carismática de sus líderes el recurso fundamental de comunicación con la población. Sin embargo, el PAP agrega a esto una bien cimentada estructura organizativa nacional y la conducción, aunque bastante cuestionada desde los años sesenta, de importantes movimientos sociales. El PPC, si bien es una disidencia de la Democracia Cristiana de la década de 1960, se propone desde el inicio como un partido más post que anti-oligárquico, sin el sentido reformista de los primeros, y más bien con un propósito burgués-modernizador, buscando asumir como banderas las urgencias del capital para una mayor libertad de acción y la representación de las clases medias y alta de Lima. En conjunto todos conforman, a mediados de la década de 1960, una democracia restringida, frustrada como régimen político por el golpe militar del tres de octubre de 1968. Repetir este intento de régimen luego del velasquismo era muy difícil, pero el ánimo

predominante en AP, el PPC y parte del PAP, más allá de las discrepancias tácticas frente a los militares, parecía ser ese.

En el caso del PAP oficial, en cambio, si bien los hábitos de conducta política eran antiguos, sí había atención a las reformas ocurridas en los años anteriores, lo que se expresa en el progresivo acercamiento del discurso hayista a los militares (Lynch 1980) y en el pacto que permite dar curso a la transición. Pero el acercamiento no se queda en movimiento táctico, sino en un nuevo perfil de "izquierda responsable" que quiere darle Armando Villanueva al partido y que motivará, además de las diferencias personales, la disidencia de un sector minoritario encabezado por Andrés Townsend algún tiempo después. Sin embargo, este PAP de fines de la década de 1970 tenía una diferencia sustancial con el PAP anterior al velasquismo: su control del movimiento social organizado había desaparecido frente al embate de las distintas tendencias izquierdistas que en ese momento encabezaban al movimiento social bajo cuya presión había sucedido la transición. La habilidad táctica de los dirigentes apristas en la coyuntura no se empataba entonces, como antaño, con la conducción de los principales movimientos de masas.

Pero la novedad era la izquierda que había adquirido importancia política durante el velasquismo y en la conducción del movimiento social que enfrenta la contrarreforma de Morales Bermúdez. Sin embargo, esta izquierda presentaba dos características decisivas. Primero, no estaba interesada, en ninguna de sus tendencias, en la transición democrática y cuando esta se produjo su adaptación a la democracia fue más bien difícil y pragmática, y segundo, tenía gran influencia en determinados movimientos sociales pero grandes dificultades para influir en la opinión pública, no solo por la actitud hostil de los medios de comunicación sino, sobre todo, por su actitud sectaria en lo organizativo y dogmática en lo ideológico.

Tenemos entonces una situación complicada. En dos partidos había un claro ánimo restaurador, un tercero se encontraba dividido en torno al legado del velasquismo y sin la fuerza que otrora le había dado el movimiento social organizado, y la nueva tendencia política no tenía a la democracia como objetivo sino más bien como instrumento para otros fines.

5. ¿Qué le interesa ver a la gente en los partidos?

ALos políticos no se dan cuenta de que la democracia tiene que ser eficaz@

Senador del Partido Popular Cristiano.

Es difícil, por la carencia de encuestas sistemáticas sobre el punto a lo largo del período de estudio determinar con precisión las demandas de la gente a los partidos políticos. Sin embargo, a partir de la opinión de los actores y algunas encuestas parciales podemos determinar demandas que consideramos centrales. La más importante es una demanda por eficacia, primero para redistribuir y después para poner orden. Luego una demanda por capacidad para representar a diversos intereses, armar consensos y llegar a acuerdos y en menor medida lograr coaliciones entre los actores políticos. Por último, una demanda por unidad interna en los partidos. Es interesante ver que la democracia interna, cuya falta es comúnmente asumida como un problema central en los partidos peruanos no parece preocupar mayormente a los ciudadanos.

La demanda por eficacia, entendida esta como el logro de determinados objetivos, se da básicamente en los campos económico y de seguridad y tiene que ver con la resolución de los dos problemas fundamentales del período: la crisis económica y el terrorismo político. La demanda por eficacia es en un primer momento una demanda redistributiva a los dos gobiernos elegidos en la década de 1980. La demanda redistributiva tenía un antecedente en el gobierno reformista del General Velasco, que más allá de sus reales efectos distributivos, produjo, a través del impacto social de sus reformas, una fuerte imagen redistributiva general y una realidad redistributiva en el sector moderno de la economía. Esta imagen redistributiva, negada por el gobierno de Morales Bermúdez, es la que la ciudadanía quería convertir en realidad junto con el advenimiento de la democracia. El momento de la demanda redistributiva ocurre entre 1980 y 1988, es decir, entre el inicio del gobierno de Fernando Belaúnde y el ajuste de 1988, consecuencia del fracaso económico del gobierno de Alan García. Si tomamos como referencia la actividad huelgística en el período de estudio (ver cuadro No. 5), en términos principalmente de trabajadores afectados y horas-hombre perdidas, podemos ver que heredando un nivel significativo del período de transición democrática, esta actividad crece en la década de 1980 hasta el pico de 1988, en indudable respuesta a las medidas de ajuste de ese año, para declinar luego hasta nuestros días. Es una demanda redistributiva que tiene dos momentos, asociados con

los dos gobiernos señalados. Con Belaúnde viene la elección, con el 45.4% de los votos, luego las crecientes demandas y finalmente la decepción frente a un esfuerzo bastante pobre de política redistributiva. Pero esta decepción no lleva a la ciudadanía a un alejamiento de las opciones redistributivas, por el contrario se insiste con una opción más radical como era Alan García que es elegido con el 53.1% de los votos, pero agota su propuesta en los dos primeros años de gobierno, provocando un fenómeno hiperinflacionario que termina con la demanda redistributiva.

CUADRO N1 5: PERU: NUMERO DE HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y HORAS-HOMBRE PERDIDAS, 1979-1994.

AÑOS	NIHUELGAS	N1 TRAB. AFECTADOS	HORAS-HOMBRE PERDIDAS
1979	653	841	13411
1980	739	481	17919
1981	871	856	19974
1982	809	572	22751
1983	643	785	20300
1984	509	702	13816
1985	579	237	12228
1986	642	248	16867
1987	720	309	9068
1988	814	693	38275
1989	667	224	15223
1990	613	258	15067
1991	315	180	8881
1992	219	114	2319
1993	151	41	2168
1994	168	62	1937

El N1 de Trabajadores afectados y las horas-hombre perdidas están en miles.

FUENTE: INEI (1995) *Perú: Compendio Estadístico 1994-1995*. Lima.

A la demanda redistributiva continúa la demanda por orden, tanto en el plano económico como en el de seguridad. Es más difícil encontrar el punto de partida de la demanda por orden, para algunos sería el momento de estatización de la banca en la segunda mitad de 1987, para otros el momento de ajuste en setiembre de 1988. En lo que sí hay coincidencias es en que se trata de una demanda producto del fracaso del gobierno de García. La demanda por orden se

desarrolla en los años de hiperinflación (ver cuadro No.6) y de ofensiva senderista en pos del denominado "equilibrio estratégico" (ver cuadro No. 7) y tiene su plasmación en el autogolpe del cinco de abril de 1992 y su alto índice de aprobación ciudadana. La diferencia entre la demanda redistributiva y la demanda por orden es que mientras la primera aspira a una mejora, o al menos a una defensa, de las condiciones de vida, la segunda tiene que ver simple y llanamente con la sobrevivencia por lo que comporta una urgencia mayor que la primera y la gente suele someterse a sacrificios más grandes para lograrla.

CUADRO N1 6: PERU: DEVALUACION E INFLACION, 1980-1993.
(EN PORCENTAJES)

AÑOS	DEVALUACION DE LA TASA DE CAMBIO		INFLACION
	OFICIAL	INFORMAL	
1980	35.80	35.87	60.80
1981	47.70	47.49	72.70
1982	90.70	91.00	72.90
1983	135.50	146.07	125.10
1984	132.70	137.85	111.50
1985	168.10	211.12	158.30
1986	0.00	13.46	62.90
1987	101.10	314.60	114.50
1988	1682.50	1304.21	1722.30
1989	892.67	1117.93	2775.30
1990	10316.14	3748.50	7649.70
1991	93.43	86.67	139.24
1992	63.00	62.29	56.70
1993	32.21	32.53	39.50

FUENTE: BCR; CUANTO (1994) *Perú en números 1994*. Lima.

CUADRO N1 7: PERU: ACCIONES SUBVERSIVAS REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL, EN LIMA Y AYACUCHO.

AÑOS	PERU	LIMA	AYACUCHO
1980	219	38	48
1981	715	190	150
1982	891	178	323
1983	1123	256	460
1984	1760	292	655
1985	2050	589	362
1986	2549	834	354
1987	2489	696	404
1988	2415	513	390
1989	3149	642	381
1990	2779	826	312
1991	2785	1281	197
1992	2995	1374	245
1993	1918	902	114
1994	1195	501	31

FUENTE: MIN. INTERIOR; INEI (1995) *Compendio Estadístico 1994-1995*.

La demanda porque los actores sean capaces de representar diversos intereses se manifiesta de distintas formas en momentos diferentes. Primero, en la elección de caudillos de amplia convocatoria, por lo menos en su discurso electoral y en el momento inicial de sus mandatos, como fue el caso de Fernando Belaúnde y Alan García. Estos caudillos encabezaban a su vez opciones políticas que expresaban esta pluralidad como era el caso de Acción Popular, o que hacían cambios en sus respectivos partidos para expresarla, como fue el caso del PAP. Luego, ante el fracaso de la convocatoria personal de los caudillos y el ahondamiento de la crisis económica y política, se desarrolla la demanda para que los actores políticos lleguen a acuerdos y

consensos para enfrentar la misma. Pero esta demanda parece ser predominante solo a partir de la crisis del gobierno de García. Si observamos una encuesta de marzo de 1988 (ver cuadro No. 8) podemos ver que el 78% se muestra a favor de una propuesta de concertación que hace el Presidente de la República, un porcentaje altísimo si tenemos en cuenta el desprestigio del propio García a esas alturas de su gobierno. De igual forma, de cara a las elecciones de 1990, en setiembre de 1989 (ver cuadro No. 9), el 84% de los encuestados se muestra a favor de un acuerdo de principios para facilitar la gestión gubernamental del próximo presidente. Asimismo, el 81% de los encuestados en esa misma fecha (ver cuadro No. 10) señala que el tema fundamental a considerar es la política antinflacionaria y el 70% que es la política antisubversiva. Sin embargo, cuando se pregunta si todos los sectores políticos firmarían dicho acuerdo (ver cuadro No. 11), sólo el 37% responde que todos lo harían, reflejando tanto la situación de rivalidad entre los diversos actores políticos, como la percepción de sectarismo en los partidos políticos por parte de la población.

CUADRO N1 8: LA PROPUESTA DE CONCERTACION FORMULADA POR ALAN GARCIA A LOS PARTIDOS, LE PARECE...

MARZO DE 1988	SINCERA	POSIBLE	NECESARIA
SI	48.0	53.0	78.0
NO	41.0	37.0	16.0
NS/NC	11.0	10.0	6.0

FUENTE: Encuesta realizada por APOYO a 519 personas en la ciudad de Lima, durante el mes de Marzo de 1988.

CUADRO N1 9: ¿ESTA UD. DE ACUERDO CON QUE LOS PARTIDOS SUSCRIBAN UN ACUERDO DE PRINCIPIOS PARA FACILITAR LA GESTION GUBERNAMENTAL DEL PROXIMO PRESIDENTE?

ACUERDO:	SETIEMBRE DE 1989
DE ACUERDO	84.0
EN DESACUERDO	11.0
NO SABE/NO CONTESTA	5.0

FUENTE: Encuesta realizada por APOYO a 620 personas en la ciudad de Lima, durante el mes de Setiembre de 1989.

CUADRO N1 10: TEMAS A CONSIDERARSE EN DICHO ACUERDO.

TEMAS:	SETIEMBRE DE 1989
POLITICA ANTINFLACIONARIA	81.0
POLITICA ANTISUBVERSIVA	70.0
MORALIZACION	50.0
NARCOTRAFICO	41.0
POLITICA POBLACIONAL	26.0
POLITICA ENERGETICA	19.0
NO SABE/NO CONTESTA	3.0
TOTAL	MULTIPLE

FUENTE: Encuesta realizada por APOYO a 518 personas en la ciudad de Lima, durante el mes de Setiembre de 1989.

CUADRO N1 11): ¿TODOS LOS SECTORES POLITICOS FIRMARIAN DICHO ACUERDO?

	SETIEMBRE DE 1989
SI	37.0
NO	48.0
NS/NC	15.0

FUENTE: Encuesta realizada por APOYO a 620 personas en la ciudad de Lima, durante el mes de Setiembre de 1989.

Ahora bien, si de armar coaliciones entre partidos se trata la actitud de la gente parece ser ambigua, en algunos casos las apoyan y en otros no. En principio se aprueba la idea de que los partidos se unan para sacar los asuntos adelante, pero las coaliciones también son miradas con desconfianza porque pueden significar una "componenda" a espaldas del pueblo o una "suma que resta" donde unos cargan con los pasivos de otros. Mientras persiste la fascinación con el caudillo el acercamiento entre dos o más partidos suele entenderse como una cuestión en beneficio directo de los que negocian y no como un acuerdo en favor de los ciudadanos y/o del régimen democrático. Pocos valoran la actitud del PPC al aliarse con el PAP en la Asamblea Constituyente y luego unirse con AP durante el gobierno de Fernando Belaúnde. El discurso de este partido sobre la necesidad de afirmar el régimen democrático no es tomado muy en cuenta, esta actitud es vista más como una tendencia del PPC por estar ligado al poder de turno. Quizás mejor imagen tiene la alianza de varios partidos, especialmente AP y el PPC, en el FREDEMO para apoyar la candidatura de Mario Vargas Llosa, sobre todo en una situación de crisis extrema como la que el país vivía en ese momento. En este caso, sin embargo, muchos comentaristas señalan que esta alianza fue un peso innecesario para la candidatura de Vargas Llosa y que esta habría ganado más no teniendo o deshaciéndose de esos aliados. Por último, la alianza del PAP con la izquierda, que muchos habrían considerado natural para expresar la tendencia hegemónica

de centro-izquierda en la mayor parte de la década de 1980, es más bien rechazada por estos actores políticos, quizás debido al enconado conflicto que los separó durante décadas por el carácter autoritario del comportamiento político de ambos. El único que intenta un acercamiento entre ambas formaciones es Alfonso Barrantes, líder de IU, sin embargo, el asunto no pasa de contactos personales, en particular con Alan García cuando era Presidente. Esta iniciativa, por lo demás muy controvertida en los predios izquierdistas, tuvo un alto costo político para Barrantes.

Una vez afirmado el liderazgo plebiscitario de Fujimori y entrado en crisis definitiva el proto-sistema de partidos, en particular luego del cinco de abril de 1992, desaparece de la agenda política la necesidad de acuerdos y coaliciones. Uno de los expedientes que usa el nuevo caudillo, como parte del régimen que trata de establecer, es justamente denunciar toda alianza como traición y toda negociación como componenda, buscando exorcisar esas prácticas, por malsanas, de la política nacional.

La demanda por unidad interna de las organizaciones políticas se suele expresar en el disgusto que causa en el electorado la división de partidos o frentes. Estas divisiones generalmente resulta en bandos encarnados en personas, situación que contribuye a que los conflictos sean vistos básicamente como rivalidades personales. El reclamo popular de "no se peleen" se convierte aquí en clamor masivo. Tenemos el caso del conflicto Villanueva-Towsend, luego de la muerte de Haya de la Torre, que tiene importante incidencia en la derrota aprista de 1980; del conflicto entre Javier Alva Orlandini y Manuel Ulloa, durante el gobierno de Belaúnde, que resta apoyo, incluso de su propio partido, a Alva Orlandini como candidato populista en las elecciones de 1985; y del conflicto entre Alan García y Luis Alva Castro, que impide a los apristas enfrentar unidos la contraofensiva liberal de la derecha en la segunda mitad de su gobierno. Hay incluso analistas como Tanaka (1995) que sugieren que tanto Javier Alva Orlandini como Luis Alva Castro fueron intencionalmente promovidos por Fernando Belaúnde y Alan García, respectivamente, para luego "quemarlos" como posibles futuros rivales dentro de sus agrupaciones. Pero no hay nada que se parezca a los conflictos internos de IU, si en el caso de los conflictos internos de los otros partidos estos inciden negativamente en su aceptación electoral, en el caso de IU los conflictos internos son una de las causas principales de su fracaso

político. Es revelador, en este sentido, que en el momento de la división de IU una encuesta señale (ver cuadro No.34) que la causa principal de la misma son rivalidades personales.

En cuanto a la democracia interna como práctica necesaria en los partidos, que los comentarios críticos sobre la situación de los mismos suele poner como requisito para reformarlos, parece que su consideración no es grande, no solo entre los dirigentes, lo que no sería de sorprender, sino también entre la ciudadanía. Esto podría significar que los partidos son vistos más como mecanismos de acceso al poder de los políticos que como instrumentos de participación de los ciudadanos, imagen que expresa una práctica extendida en el período de estudio, y que cuando se consideran necesarios para el régimen democrático no se está implicando que deben ser mecanismos participativos de los ciudadanos, sino tan solo eficientes instrumentos de competencia de las élites por el acceso al poder.

Estas demandas nos pueden hacer pensar que la ciudadanía tiende a querer que los partidos actúen como totalidades, es decir, no en competencia interactiva unos con otros, sino usando todo el poder que tengan para solucionar problemas específicos. Pero que, al mismo tiempo, sean percibidos por estos ciudadanos como facciones, es decir, como grupos que persiguen intereses particulares. Esta dinámica entre el deseo de que sean totalidades y su percepción como facciones en la visión ciudadana es la que no logra ser superada por los actores partidarios democráticos, dejando el espacio para que los *outsiders*, al final de la década de 1980, se luzcan como totalidad y ajusten cuentas como facción.

IV. El regreso del populismo conservador

1. Belaúnde: un caudillo congelado

¿Por qué elige la gente a Fernando Belaúnde en 1980? Belaúnde es elegido con el 45.4% de los votos, más que el 35.3% que sacó el PAP para la Asamblea Constituyente en 1978. Podemos decir también que su votación como candidato presidencial es mayor que la de su partido, ya que la lista de senadores de AP, elegidos por distrito nacional único, solo llega al 40.9%. Sin embargo, el importante apoyo parlamentario le permite consolidar su presidencia. En el Senado logra mayoría en alianza con el PPC y en la Cámara de Diputados, debido a la distorsión del sistema electoral, al traducir el porcentaje de votos en número de escaños, logra con el 39% de los votos el 54% de los escaños (Tuesta 1995). Esto le da solidez a la figura presidencial y evita el asedio parlamentario del que había sido víctima en su primer período.

Pero era la persona más que el partido quien inspiraba la confianza del electorado ¿Será la razón acaso una imagen de eficacia política? No parece ese el motivo porque Belaúnde es sacado por los militares en 1968 en medio de un grave escándalo de corrupción, agobido por una crisis económica que lo había llevado, contra sus predicciones, a devaluar la moneda nacional y entre el reclamo de sus propios partidarios que lo cuestionaban por no haber llevado adelante el programa reformista con que había sido elegido, por primera vez, en 1963.

Belaúnde en 1980 es más bien percibido como la persona que podía llevar a buen fin el proceso de transición democrática e iniciar otro de consolidación institucional, debido a su imagen de tolerancia y moderación en lo personal, que combinaba con un drástico perfil antidictatorial. Resaltan, por lo demás, estas características debido a que estaba terminando una dictadura militar de doce años, que se había endurecido en su denominada "segunda fase" que corresponde al gobierno de Morales Bermúdez y que, además, el PAP, partido que los militares

parecían promover para sucederlos, hacía particular alarde de un estilo autoritario²². Es sabido que buena parte del voto de izquierda, un 10% aproximadamente²³, valorando estas características de tolerancia y moderación, opta por Belaúnde en estas elecciones generales, temerosos de que el PAP pudiera reeditar anteriores comportamientos represivos contra sus huestes. El afán de terminar con el autoritarismo y cualquier probable secuela es entonces lo que favorece a Belaúnde.

Belaúnde se ve también favorecido por ser el único otro caudillo populista sobreviviente, ya que Haya de la Torre muere en julio de 1979. Esto le permite capitalizar plenamente la representación populista hasta ese momento predominante en la política peruana. Esta imagen de caudillo populista se ve reforzada por el sistema presidencialista que legisla la Constitución de 1979, apareciendo en la campaña electoral como el caudillo salvador que sacaba al país de la dictadura militar. Belaúnde cuidaría esta imagen de caudillo salvador a lo largo de todo su mandato, buscando constantemente ponerse por encima de la lucha política cotidiana, incluso de las luchas dentro de su propio partido. Curiosamente, no abandonaría este estilo con el deterioro de su gobierno, por lo que al final se le vería ya no como el presidente patriarca de la campaña sino como el presidente A en las nubes@ que dibujaban las caricaturas, desconectado de la realidad, y siempre por encima de los ciudadanos.

Es importante señalar también que los dos problemas fundamentales que debería enfrentar el nuevo gobierno belaundista: la violencia terrorista y la crisis económica, no habían existido, en las dimensiones que se presentarían en los ochentas, en su primer gobierno. De igual manera, la izquierda legal, que rápidamente se agruparía como IU, tampoco había existido con la importancia que toma en la década de 1980. Estas condiciones hacen del segundo gobierno de Belaúnde, a contrapelo de la imagen de experiencia que buscaba proyectar, un gobierno

²²Acababa de morir Haya de la Torre y la lucha interna que se había desatado para sucederlo estaba plagada de incidentes violentos.

²³Este 10% sale de restar el voto presidencial de AP en 1980 de su voto en las elecciones municipales del mismo año, este es aproximadamente el mismo porcentaje en que sube la izquierda en ambas elecciones. La izquierda se presenta dividida en varias listas a las elecciones generales de 1980, por lo que sus posibilidades de triunfo eran nulas, esto lleva a muchos simpatizantes a votar por algún otro candidato con posibilidades de triunfo.

relativamente inexperto frente a los nuevos problemas y actores que presentaba la escena peruana. El juicio de Lourdes Flores al respecto es elocuente:

ABelaúnde es un hombre que respeta las instituciones, tiene una Constitución, organiza el Estado pero le falta coraje para tomar una serie de decisiones, o sea, en el campo de la subversión, no avizora el problema, lo deja pasar, en el campo económico, sabía que recibió un país que necesitaba un cambio de rumbo y también lo deja pasar. Entonces, es un hombre respetuoso, es un hombre personalmente valioso, de buena forma, pero la gente siente que no hay solución a sus problemas@

En un primer momento Belaúnde busca capitalizar la alta votación obtenida llamando, sorpresivamente, a un gobierno de amplia coalición nacional y haciendo ofrecimientos de carteras ministeriales tanto al PPC, el PAP e Izquierda Unida. Sin embargo, el carácter súbdito de la propuesta, que no tenía antecedentes en los años inmediatamente anteriores, y la imagen de caudillo conservador de Belaúnde, pesaban más que alguna otra consideración de estabilidad del régimen y tanto el PAP como IU no aceptan el ofrecimiento. El único que accede es el PPC desarrollándose con este una alianza para enfrentar la labor de gobierno²⁴. Esta alianza configura un sesgo de centro derecha que luego se traduciría en sus políticas tanto económica como laboral y antisubversiva. De esta forma reedita el último esquema de alianzas que Belaúnde había organizado en el período previo al golpe de Estado de 1968, llamado de la "superconvivencia", con lo que le termina de dar un carácter restaurador al inicio de su gobierno.

²⁴A la postre lo que le proporciona al segundo belaundismo la alianza con el PPC es una total fluidez en las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Belaúnde había ganado cómodamente la presidencia, superando con amplitud la barrera constitucional del 36%, su partido, asimismo, tenía amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pero necesitaba de un aporte de cinco votos para imponerse en el Senado. En términos numéricos esto último es lo que le brinda el PPC.

Es importante la definición de la alianza gubernamental con el PPC en el segundo belaundismo. Este partido, más allá de sus raíces socialcristianas, se había destacado en la oposición al velasquismo en la década de 1970 como un partido defensor de la propiedad privada y de la economía de mercado. Es decir, más que una agrupación socialcristiana, el PPC era percibido a inicios de la década de 1980 como el partido más directamente ligado a los intereses capitalistas, lo que llevó a que se le señalara como Ael partido de los gerentes@. La identidad del aliado iría marcando así, crecientemente, la identidad de la alianza que se constituye como el primer gobierno democrático del período.

Todo esto configura una representación de tipo populista, más bien conservadora, que le permite al segundo belaundismo expresar una amplia coalición de intereses, que van desde la derecha propietaria perjudicada por el velasquismo hasta el movimiento popular que no ve la forma de expresarse en la fragmentada organización izquierdista. Esta coalición, sin embargo, se ve rápidamente agrietada por la incapacidad del gobierno de satisfacer a una clientela tan variada en un contexto de graves problemas económicos y políticos, así como por la rápida recomposición de otras fuerzas en el escenario democrático, como el PAP que se recompone tras un liderazgo joven y la izquierda que funda el frente Izquierda Unida.

2. Las recetas del FMI y sus descontentos

En términos económicos coyunturales el gobierno de Belaúnde hereda la buena situación del último año del gobierno militar anterior, en particular un balance favorable en las cuentas externas (Ver cuadro No. 12) que históricamente han sido el talón de Aquiles de la economía peruana. Este balance favorable tenía su razón fundamental en los buenos precios de las exportaciones, particularmente de las exportaciones tradicionales, lo que permitía una balanza de pagos positiva.

CUADRO N1 12: INDICADORES BASICOS DEL SECTOR EXTERNO. 1978-1982. **(En millones de dólares)**

--

INDICADORES:	1978	1979	1980	1981	1982
BALANZA COMERCIAL	304	1722	826	-553	-429
EXPORTACIONES FOB	1972	3676	3916	3249	3293
IMPORTACIONES FOB	-1668	-1954	-3090	-3802	-3722
BALANZA EN CUENTA CORRIENTE	-164	953	-102	-1729	-871
BALANZA DE PAGOS	76	1579	722	-504	124

FUENTE: BCRP (1982;p.98); Javier IGUÍÑEZ y otros (1993) *Los ajustes. Perú 1975-1992.*

F. F.Ebert. Lima.

Sin embargo, es importante señalar que esta situación, buena principalmente en términos financieros, también era el producto de los varios ajustes ya anotados que habían ocurrido desde julio de 1975. Es decir, de un reordenamiento económico en contra de los ingresos de las mayorías, pauta que profundizaría el equipo económico que encabeza Manuel Ulloa, ministro de economía en los primeros años del gobierno y que se ahondaría drásticamente a partir del ajuste que implementa en el año 1983 el ministro Carlos Rodríguez Pastor.

Esta inicial situación financiera, sin embargo, le permite al arquitecto Belaúnde llevar adelante si bien no una política redistributiva, por lo menos un programa de construcción de infraestructura, ya característico de su anterior administración. Sin embargo, la política de apertura comercial con que también inicia su gobierno, la baja de los precios de las materias primas en el mercado internacional, el creciente peso del pago de la deuda externa y la subida de las tasas de interés en el mercado mundial (ver cuadro No. 13), todo esto agravado por los desastres naturales ocurridos en 1983 a causa del "Fenómeno del Niño", lo llevan a buscar una solución profundizando el mismo camino anti-demanda e implementar un ajuste económico ese año de 1983.

CUADRO N1 13: DEUDA EXTERNA TOTAL, 1978-1994.**(Millones de dólares)**

AÑOS	DEUDA
1978	9325
1979	9336
1980	9595
1981	9606
1982	11465
1983	12445
1984	13338
1985	13721
1986	14477
1987	15373
1988	16493
1989	16827
1990	17347
1994	22054

La deuda de 1994 corresponde hasta marzo.

FUENTE: MEF; BCRP; CUANTO (1991 y 1994) *Perú en números 1991 y 1994*. Lima.

Este ajuste económico, aconsejado por el Fondo Monetario Internacional, tenía un claro carácter recesivo, con incidencia en la restricción de la oferta monetaria, la austeridad fiscal, la subida de las tasas de interés y de la tasa de cambio. Todo ello, no es suficiente para detener la inflación (ver cuadro No. 6) y más bien tiene un serio efecto negativo en la producción manufacturera nacional (Gonzalez de Olarte y Samame 1991) (Iguñiz, Basay y Rubio 1993). El ajuste no soluciona, sino más bien agrava, los problemas en las cuentas externas, debido al mantenimiento de la apertura comercial, lo que lo lleva en 1984 a una nueva subida de aranceles y al cese del pago de parte de la deuda externa, manteniendo las medidas recesivas anteriores.

Esto último, permite terminar el período de gobierno con una recuperación de las reservas internacionales netas. La crisis, sin embargo, deteriora gravemente los sueldos y salarios reales (ver cuadro No. 14) y aumenta el sub-empleo y el desempleo (ver cuadro No. 15).

CUADRO N1 14: INDICES DE SUELDOS Y SALARIOS REALES. (Base 1980 = 100)

AÑOS	SECTOR PRIVADO GOBIERNO MIN.LEGAL			
	SALARIOS	SUELDOS		
1980	100	100	100	100
1985	61	80	43	55
1990	40	45	9	21
1993	33	45	9	11
1994	35.5	52.4	12.8	13

Los datos de 1993 y 1994 son estimados. Los datos de 1994 son estimados por Luis Aparicio Valdez (Análisis Laboral) en el INTERCAMPUS, 1995.

FUENTE: Elaboración en base a MTPS e INEI. Tomado de *Cuadernos Laborales*, N1 100, p.11. ADEC-ATC.

CUADRO N1 15: PEA EN LIMA METROPOLITANA SEGUN NIVEL DE EMPLEO.

Al 100%	1980	1985	1986	1990	1993	1994
DESEMPLEADO	7.1	10.1	5.3	8.3	9.9	10.0
ADECUADAMENTE EMPLEADO	66.9	47.6	52.1	18.6	12.7	15.0
SUB EMPLEADO	26.0	42.5	42.6	73.1	77.4	75.0

Para el año de 1994 los datos son proporcionados por Luis Aparicio Valdez (Análisis Laboral) en el INTERCAMPUS, 1995. Según el INEI en 1985 no se realizó Encuesta de Hogares.

FUENTE: MTPS. *Encuesta de Hogares*; CUANTO (1994) *Perú en números 1994*; INEI (1995) *Compendio Estadístico 1994-1995*. Lima.

Esta recesión productiva deja un sabor amargo en la población que se va a traducir en una aguda reacción sindical. Entre 1981 y 1984 hay seis paros nacionales de trabajadores, tres de los cuales son bastante importantes, los de enero de 1981, marzo de 1983 y marzo de 1984 (ver cuadro No. 16), llegando a producirse uno de los ciclos de actividad de huelgística más significativos de la historia del movimiento laboral (ver cuadro No. 17). Sin embargo, la reacción sindical no tiene la fuerza de los años setenta porque se daba en un período de recesión productiva, particularmente industrial, que lleva a los obreros a cuidar su puesto de trabajo o, en su defecto, aceptar una compensación monetaria por su despido. Pero no se trataba de una recesión cualquiera, sino de una recesión que se daba como parte de la crisis del modelo de acumulación de "industrialización por sustitución de importaciones" que estaba en declive desde mediados de los años setenta. Esta crisis tenía como efecto que el peso de la clase obrera industrial y de los asalariados en general fuera cada vez menor dentro de la PEA, (ver cuadro No. 18 y cuadro No. 19) y que el crecimiento de la misma se diera principalmente en el sector informal y no en el sector moderno de la economía (ver cuadro No. 20), afectando la actividad sindical que es característica de este último (Balbi y Gamero 1990, Balbi 1994). Asimismo, se da también, tal como señala Parodi (1988), una repercusión política menor, por encontrarse el país, a diferencia de los años setenta, viviendo un régimen democrático, lo que hace a cada sector social y político luchar por intereses específicos y vuelve imposible repetir las grandes coaliciones anti-autoritarias. Esta situación lleva a la desaparición de la denominada "centralidad obrera" o liderazgo de los trabajadores industriales dentro del movimiento popular, tal como había sido posible en los años setenta en un contexto de expansión industrial y lucha anti-dictatorial. Estas nuevas condiciones permiten al gobierno mostrar una actitud de relativa indiferencia e incluso distancia frente al reclamo sindical, que bien podría ejemplificarse, como también apunta Parodi, en las declaraciones del Ministro de Economía Manuel Ulloa, cuando dice que las demandas sindicales eran "un cúmulo de disparates".

CUADRO N1 16 : PAROS NACIONALES 1977-1984

Fecha	Trabajadores Afectados	Horas-Hombre Perdidas

19 de julio de 1977	272,000	2,000,000
22-23 de mayo de 1978	1,000,000	20,000,000
15 de enero de 1981	326,000	2,608,000
22 de setiembre de 1981	72,989	583,912
10 de marzo de 1983	298,322	2,386,576
27 de setiembre de 1983	75,117	600,936
22 de marzo de 1984	242,175	1,937,400
29 de noviembre de 1984	n.d.	n.d.

FUENTE: MTPS; Jorge Parodi (1988) "Los sindicatos en la democracia vacía", en: Luis Pásara y Jorge Parodi (editores) *Democracia, sociedad y gobierno en el Perú*. CEDYS, Lima.

CUADRO N1 17: CICLOS DE LA ACTIVIDAD HUELGUISTICA 1969 - 1984

AÑOS:	HUELGAS	TRAB. EN HUELGA (Miles)	HORAS-HOMBRE PERDIDAS (Millones)
69 - 72	1503	494.5	26.8
73 - 75	2137	1396.1	49.4
76 - 77	674	664.6	13.3
78 - 82	3420	4150.2	110. 1
83 - 84	1152	1482.3	34.0

FUENTE: MTPS; Jorge Parodi (1988) "Los sindicatos en la democracia vacía", en: Luis Pásara y Jorge Parodi (editores) *Democracia, sociedad y gobierno en el Perú*. CEDYS, Lima.

CUADRO N1 18: PEA ASALARIADA Y NO ASALARIADA EN LIMA METROPOLITANA.

--	--

(AL 100%)	1980	1986	1990	1993
ASALARIADA	61.2	55.6	55.7	56.6
NO ASALARIADA	38.8	44.4	44.3	43.6

FUENTE: MTPS; CUANTO (1994) *Perú en Números 1994* (Pg. 406)

CUADRO N1 19: PEA OCUPADA EN LIMA METROPOLITANA POR CATEGORIA DE OCUPACION

CATEGORIA:	1980	1986	1990	1993	1994
TOTAL	100	100	100	100	100
EMPLEADO					
- Privado	23.0	20.7	22.3	25.4	27.8
- Público	14.5	14.3	10.7	10.0	7.9
OBRERO	23.6	20.6	22.7	21.2	19.8
PATRONO	4.2	4.6	4.5	5.8	5.7
TRAB. INDEP.	23.6	26.1	29.4	27.8	28.8
TRAB. HOGAR	6.5	6.5	5.4	4.6	4.7
TFNR 1)	3.7	6.0	4.9	5.1	5.1
PRACTICANTES	0.9	1.2	0.1	0.2	0.2

1) TFNR: Trabajador familiar no remunerado.

FUENTE: MTPS; CUANTO (1994) *Perú en Números 1994* (Pg. 406).

CUADRO N1 20: PEA EN LIMA METROPOLITANA SEGUN SEGMENTACION DEL MERCADO DE TRABAJO

(Al 100%)	1981	1985	1990	1993
FORMAL	60.7	51.8	49.2	46.6
INFORMAL	32.8	40.5	45.7	48.8
TRAB. HOGAR	6.5	7.7	5.1	4.6

FUENTE: MTPS; CUANTO (1994) *Perú en Números 1994* (Pg. 401).

Pero no solo los sindicatos o eventualmente los partidos de oposición se rebelan contra la política económica del bealundismo, también hay una protesta importante dentro de sus propias filas. Se produce una lucha interna, más bien sorda, entre dos bandos, que la prensa se encarga de calificar, usando el nombre de sus líderes, Manuel Ulloa y Javier Alva, como "alvistas" y "ulloístas". Los primeros serían un grupo principalmente de parlamentarios provincianos, con poder en el aparato partidario y habilidad para el manejo de la red de clientela del bealundismo. Su líder es el senador Javier Alva Orlandini, que finalmente resulta como candidato presidencial en 1985. Los segundos serían un grupo principalmente limeño, que cuenta con parlamentarios pero también con burócratas que ocupan puestos de responsabilidad en el manejo de la economía y las finanzas nacionales. Su líder es el también senador Manuel Ulloa, gran empresario ligado a la tecnocracia y los negocios internacionales. Es difícil establecer con claridad diferencias programáticas entre ambos grupos, de la misma manera que es difícil establecer un perfil programático claro de Acción Popular, pero en general podemos decir que los primeros se constituyen en oposición al manejo cerrado de las decisiones económicas que hacen los segundos, así como al seguimiento que hacen estos de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a pesar del insistente reclamo periodístico al "alvismo" para que presente sus puntos de vista en materia económica, este nunca llega a plantear un diseño alternativo. El presidente Beláunde, siguiendo su estilo personal, parece estar en todo momento por encima del conflicto, aunque prefiere al ulloísmo y su estilo aristocrático para las labores de gobierno.

3. La violencia desconocida.

El problema de la violencia política y su particular carácter terrorista fue tratado por Belaúnde como un problema conocido, cuando era para él y para el país, tal como lo demostrarían trágicamente los años siguientes, un problema nuevo. La primera reacción de Belaúnde frente al inicio de las actividades terroristas por parte de Sendero Luminoso es que se trataba de "delincuentes comunes" o abigeos andinos que serían fácilmente reprimidos por las fuerzas policiales. Cuando el fenómeno empezó a extenderse comparó a Sendero Luminoso con las guerrillas de 1965 y señaló que tenían financiamiento externo, proveniente de los entonces países comunistas, poniendo las cosas en los estrictos marcos de la guerra fría. Pero junto con las declaraciones presidenciales había en su gobierno un profundo dilema sobre la necesidad de llamar a las Fuerzas Armadas para que repriman. Obando (1991) señala que las Fuerzas Armadas, a través de sus servicios de Inteligencia, sabían desde antes de la instalación del gobierno constitucional de los planes de Sendero Luminoso, pero que se inhibieron de actuar por razones políticas. Asimismo, señala que el Presidente Belaúnde no hizo lo necesario para poner a funcionar los dispositivos del "Sistema de Defensa Nacional" que los militares habían aprobado a través de un conjunto de decretos leyes poco antes de dejar el poder²⁵. Por otra parte, había en el Presidente recién elegido una gran resistencia a las Fuerzas Armadas -que todavía contaban en sus filas con numerosos mandos de la época velasquista- por haber sido él, contra quien habían ejecutado el golpe de Estado de 1968 (Degregori y Rivera 1993).

²⁵El Sistema de Defensa Nacional estaba previsto en la Constitución de 1979 y fue desarrollado legalmente por los propios militares antes de retirarse a los cuarteles, de manera tal que aseguraban el control castrense de las diversas instancias que lo conformaban. Esto parece ser que causó lógica resistencia en el primer gobierno civil elegido, manteniéndose como motivo de polémica a lo largo de todo el período de vigencia democrática.

El camino que siguió, sin embargo, fue el de la paulatina militarización de la respuesta gubernamental. En marzo de 1981 el gobierno belaudista dió el Decreto Legislativo No. 46, que buscaba suplir la falta de una legislación anti-terrorista, pero la tipificación del delito de terrorismo era tan amplia que no permitió focalizar la represión en los verdaderos terroristas, confundiendo a los militantes de la izquierda legal con los subversivos y permitiendo que gran parte de los detenidos fueron declarados presos de conciencia y puestos en libertad algún tiempo después (Chipoco 1992). En octubre de 1981 el gobierno decretó el Estado de Emergencia en cinco provincias del departamento de Ayacucho, lo que significaba un primer nivel de Régimen de Excepción de acuerdo a la Constitución de 1979, con la suspensión de determinadas garantías constitucionales. Esto significó la creación de la primera zona de emergencia aunque todavía el orden interno estaba en manos de la policía. Recién en diciembre de 1982, luego del asalto senderista a la cárcel de Ayacucho, el gobierno decide la intervención de las Fuerzas Armadas, creando los comandos político-militares, con lo que procede al traspaso "de facto" del poder en las zonas de emergencia a los militares. Esta situación se legalizará parcialmente en 1985, con la ley 24150 que reglamenta las funciones de los comandos político-militares, asignándoles tareas que iban más allá de las propiamente castrenses, a la par que una gran libertad de acción en las zonas bajo su autoridad.

Pero esta militarización no parece tampoco que hubiera sido un movimiento conjunto por parte del gobierno belaudista y los militares, sino más bien la forma, muchas veces trágica de resolver una falta de comunicación entre los políticos civiles, en este caso los populistas, y las Fuerzas Armadas. Esta últimas no parecían querer sujetarse a lo que dijera el Poder Ejecutivo y este, a su vez, no sabía o no tenía como sujetarlos. Ni siquiera parece ser que las distintas formas de afrontar el problema representadas por dos militares que sucesivamente fueron jefes en Ayacucho, una por el General Noel que subrayaba los aspectos militares y de Guerra sucia@ y otra por el General Huamán que afirma la lucha contra la pobreza y el desarrollo social, hubieran tenido repercusión dentro del partido gobernante.

La entrada de los militares a la lucha antisubversiva, significó no solo un viraje en la actitud del gobierno sobre el tema sino la aplicación de una política que Degregori y Rivera (1993) califican de genocida. Esto se expresa en el aumento del número de víctimas de la

violencia entre 1983 y 1984 (ver cuadro No.21) , los años más cruentos de toda la guerra interna, que sobrepasan los 5,500 muertos, aproximadamente un 20% del total en el período de estudio. Esta política genocida tiene el efecto contrario al buscado por los militares porque impide la colaboración de los campesinos con las Fuerzas Armadas, que solo se daría varios años más tarde, y permite a Sendero Luminoso multiplicar sus adeptos en un período corto de tiempo, a través de la política de "romper el cerco" que con éxito practica la organización terrorista, expandiendo su accionar al valle del Huallaga y la ciudad de Lima (Degregori y Rivera 1993).

CUADRO N1 21: PERU: MUERTES REGISTRADAS EN ACCIONES SUBVERSIVAS Y CONTRASUBVERSIVAS, SEGUN VICTIMA, 1980-1995.

AÑOS	TOTAL	PNP	FF.AA.	CIVILES	SUBVERS.
1980	11	--	--	2	9
1981	82	6	--	5	71
1982	193	31	1	52	109
1983	1979	52	9	682	1226
1984	3588	56	26	1785	1721
1985	1437	45	31	731	630
1986	1376	100	29	466	781
1987	936	139	53	403	341
1988	1509	137	143	825	404
1989	2878	229	109	1365	1175
1990	3708	163	135	1531	1879
1991	3044	213	174	1282	1375
1992	2633	197	199	1303	934
1993	1187	96	85	535	471
1994	615	20	61	253	281
1995	500	38	92	203	167

Entre las víctimas civiles se incluye autoridades políticas, eclesiásticas y extranjeros.

Los datos para 1995 corresponden hasta el mes de octubre.

FUENTE: CUANTO (1994) *Perú en Números 1994* (Pg. 345); DESCO, Banco de datos y documentación.

La extensión de las zonas de emergencia y de los comandos político-militares sobre porciones crecientes de la población y el territorio, expresan de la mejor manera la abdicación de la autoridad democrática de los gobiernos elegidos (ver cuadro No. 22). Esta situación está motivada no solo por una exigencia de autonomía en su accionar que exigen las Fuerzas Armadas sino también por una abdicación directa del poder civil en la conducción política de la guerra interna. Al respecto, hay versiones de los mandos militares de la época que señalan que las Fuerzas Armadas se habrían resistido en un primer momento a encabezar los comandos político-militares, exigiendo que la cabeza en cada lugar fuera un civil con acceso directo al Presidente de la República. Desafortunadamente la propuesta no tuvo eco.

CUADRO N1 22: PERU: ESTADO DE EMERGENCIA, 1981 - 1995.

(Porcentajes sobre totales nacionales).

AÑOS	POBLACION	TERRITORIO
1981	1.84	1.20
1985	6.04	7.25
1990	45.18	29.62
1991	55.87	39.24
1993	49.66	27.71
1995	44.27	22.14

FUENTE: Los datos hasta 1991 fueron extraídos de: Oscar Aliaga, "Imperdonables Costos". *Cuadernos Laborales* N1 65, Abril 1991. Los datos correspondientes a 1993 y 1995 son estimados por el Inst. Constitución y Sociedad y aparecieron en: CUANTO (1994 y 1995) *Perú en Números 1994 y 1995*, respectivamente.

Como también afirman Degregori y Rivera (1993) siguiendo a Stepan (1988), estas nuevas responsabilidades que se encargan a los militares, si bien son parcialmente legalizadas con algunos dispositivos, como es el caso de la ley 24150, rebasan ampliamente las prerrogativas de que gozaban constitucionalmente los militares en los marcos del régimen democrático. El desfase entre responsabilidades prácticas y prerrogativas legales causará repetidas y graves tensiones al ordenamiento democrático que cada vez serán menos manejables en los marcos del Estado de Derecho. Esta situación que lleva a optar por una determinada política antisubversiva hace que el efecto de la transición democrática en los militares peruanos sea distinto al efecto de la transición en otros países de América Latina, mientras en el Perú los militares amplían de hecho su poder político en otros países este poder es más bien restringido, volviendo los militares a sus funciones propiamente castrenses. Podemos decir entonces que la política antisubversiva del segundo belaudismo sienta las bases para que se reviertan los efectos políticos de la vuelta de los militares a los cuarteles en 1980, dándoles responsabilidades que solo podrían asumir plenamente teniendo de nuevo un rol político protagónico.

4. Coaliciones imposibles.

)Hubiera sido posible un tratamiento consensual de problemas tan graves como los que se le presentan al país en este período? Desde el punto de vista de Belaúnde y Acción Popular, los dos principales grupos de oposición: el PAP e IU, eran considerados adversarios casi enemigos, es decir, grupos con los cuales se compartía el espacio democrático, pero que no se consideraba actores políticos confiables para buscar con ellos soluciones conjuntas a problemas importantes. Con el PAP, Acción Popular tenía una antigua rivalidad que databa casi desde su fundación

como partido en 1956. Javier Tantaleán dirá: AHaya nunca le perdonó a Belaúnde que no fuera aprista@. Y Valentín Paniagua agregará:

ACon el APRA, por qué no podíamos entendernos, por una razón muy sencilla, porque el APRA nunca ha podido curarse del síndrome de Haya de la Torre. Haya de la Torre nunca perdonó a Acción Popular que le disputara las calles, nunca le perdonó, porque el único partido que ha sido capaz de disputarle hasta en el último rincón del Perú la preferencia popular ha sido Acción Popular y desgraciadamente el propósito del APRA, el año 1985 no era llegar al poder y quedarse, como decía pues el inefable Huayta, treinta años, sino destruir a Acción Popular.@

Más allá de sus diferencias ambas eran formaciones populistas de centro que se disputaban un electorado similar, pero el personalismo de sus líderes y el sectarismo de los aparatos hizo imposible, particularmente desde la coyuntura 1962-63, cualquier alianza política. La visión de Acción Popular del PAP durante este segundo gobierno de Belaúnde, y no con poca razón, era que esta última estaba interesada en capitalizar los errores del gobierno para ganar puntos en función de las elecciones de 1985. Los líderes acciopopulistas entrevistados suelen poner como ejemplo el exhibicionismo de Alan García, en ese momento candidato en ciernes del PAP, en cualquier ocasión que se le presentara para desprestigiar al gobierno y crecer a sus expensas. En cuanto a la izquierda, el desconocimiento de la misma por parte Acción Popular y su desprecio del velasquismo, a quien consideraban erróneamente la matriz de IU, lo llevaba a calificarla, sin ambages de "aliada de Sendero" o "brazo político del senderismo", lo cual la descartaba para casi cualquier posible coalición que tuviera que ver con acciones de gobierno.

Un ejemplo que permite darnos una idea de la profundidad de esta distancia entre los principales actores políticos es el testimonio de un diputado populista sobre un debate ocurrido en la Cámara de Diputados el año 1983. Señala el referido diputado que la bancada populista, entonces mayoritaria en esa Cámara, presentó una moción que rendía homenaje a un grupo de militantes de Acción Popular que habían sido asesinados días antes por Sendero Luminoso. Frente a esta iniciativa las bancadas, tanto del PAP como de IU, se oponían a la moción para que

la Cámara en forma unánime rindiera homenaje a los populistas muertos. Tras dos días de debates , y pese a que el Presidente Belaúnde llamó en repetidas oportunidades a la Cámara para que sus correligionarios no insistieran en la moción conjunta, esta fue finalmente aprobada.)Qué había tras esta resistencia a la solidaridad elemental con otro partido con quien supuestamente se compartía el mismo escenario democrático? Indudablemente que una valoración distinta del terreno común que los debía unir.

5. El saldo negativo.

Estas políticas para enfrentar los problemas fundamentales de la época van a tener un efecto negativo temprano en el segundo belaundismo. En las elecciones municipales de 1983 el candidato oficialista queda en tercer lugar con un 17.5% promedio de la votación nacional, detrás de sus dos principales opositores, el Partido Aprista y la coalición Izquierda Unida (ver cuadro No. 3). La sorpresa la da el candidato izquierdista a la alcaldía de Lima, Alfonso Barrantes, que gana esa plaza fundamental con el 36.47% de la votación. Y en las elecciones generales de 1985 el candidato de Acción Popular, Javier Alva Orlandini, queda en cuarto lugar con el 7.3% de la votación nacional. Esta diferencia de 38 puntos con la votación de Belaúnde en 1980 -la debacle mayor que sufre un partido entre dos elecciones generales consecutivas- es una expresión, no solo de la alta personalización de la política en el Perú sino del profundo descontento de la gente con la administración belaundista.

Esto, sin embargo, no significa que Fernando Belaúnde como individuo no siga siendo considerado una personalidad de gran influencia. En la encuesta sobre el poder en el Perú que la revista "Debate" hace desde 1981 entre líderes de opinión (ver cuadro No. 23), Belaúnde es considerado la persona con más poder en el Perú entre los años 1981 y 1984 y se mantiene entre los diez más importantes entre 1987 y 1992. Es decir, que a pesar de su falta de eficacia gubernamental, mantiene su importancia como presidente, primero y luego como ex-presidente. Esta discrepancia entre presidente y partido, nos hace ver la influencia del presidencialismo, en su versión de caudillismo populista, en el incipiente sistema partidario. No se consolida pero por lo menos se mantiene la figura presidencial, en desmedro siempre del partido político. Este, en

cambio, se ve seriamente debilitado y es el más afectado por la crisis del gobierno. Es decir, en vez de producirse una rotación de dirigentes ante el fracaso gubernamental, se produce una devaluación del actor partido salvaguardando el prestigio de su conductor histórico.

CUADRO N1 23: Personalidades con más poder en el Perú. 1981-1995.

Sin embargo, la imagen negativa del segundo gobierno de Belaúnde persiste en el tiempo (ver cuadro No. 24), hasta varios años después de terminado su período y a pesar del deterioro del gobierno siguiente de Alan García, el cual parece ser que tan solo le permite recuperar algunos puntos en la imagen que tiene la ciudadanía de su administración.

CUADRO N1 24: EVALUACION DEL SEGUNDO GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE.

EVALUACION:	JUL 1985	ENE 1987	ENE 1988
BUENO	10.0	14.0	19.0
REGULAR	40.0	38.1	38.0
MALO	48.0	45.4	41.0
NS/NC	2.0	2.5	2.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
N1 ENCUESTADOS		914	637

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Lima por APOYO.

Con todas estas graves dificultades, claramente perceptibles desde mediados del segundo gobierno belaudista, no era posible sin embargo, a través de mecanismos constitucionales, de obligar a cambios de política o, eventualmente, a un cambio de gobierno. El presidente y ambas cámaras del Congreso habían sido elegidos por un período fijo y coincidente de cinco años. No existían mecanismos de renovación parcial de las cámaras ni de destitución del presidente por razones políticas. Una vez elegido el mismo y conseguido mayoría parlamentaria tenía asegurado su período hasta el 28 de julio de 1985. Esta situación promovía entonces la oposición destructiva de los partidos adversarios, la que se veía incentivada, no solo por la distancia ideológica sino también por el interés táctico, que los llevaba a debilitar al régimen para tentar la victoria en las siguientes elecciones generales.

Podemos decir entonces que el primer gobierno producto de la transición tiene como resultado el drástico debilitamiento de los actores que lo conducen, tanto del partido en el

gobierno, Acción Popular y también, aunque en distinta medida, de su líder Fernando Belaúnde. El daño que recae sobre su aliado el PPC es menor, tanto por su "sabio" como natural distanciamiento hacia el final del quinquenio, como por su calidad de aliado menor, del cual no dependía la estabilidad del gobierno. Este debilitamiento perjudica seriamente, en un período tan importante como los primeros años del nuevo régimen democrático, las posibilidades de la consolidación institucional. Así, la ineficacia de un gobierno empieza a terminar con los llamados a ser protagonistas de la democracia agudizando de esta manera la precariedad del régimen político.

A pesar de la imagen de lealtad con la democracia que Belaúnde activamente promueve, no parece que ni el contexto, conformado por los otros actores partidarios, ni su propia concepción de democracia, que estaría restringida a AP y el PPC, permitan considerar al segundo belaundismo como especialmente leal con el régimen de la Constitución de 1979. Diríamos más bien que se mueve entre la lealtad y la semi-lealtad, sobre todo por su incapacidad, aunque sea de plantear un gobierno inclusivo, donde la mesa de Palacio de Gobierno, a contrapelo de lo que declarara alguna vez el propio Belaúnde, sí estuviera servida para que se sentaran todos los actores políticos que se encontraban en el terreno de la legalidad.

V. El fracaso del centro paradigmático

Alan haz lo que quieras@

Grito de un trabajador del PAIT durante uno de los Abalconazos@ de Alan García²⁶.

1. El joven que sabía más que su partido.

El PAP es el partido de mayor influencia en la vida política en el período de vigencia democrática entre 1980 y 1992. Su influencia comienza en el período de la transición, entre 1978 y 1980, cuando busca transformarse en el interlocutor de los militares, y se prolonga hasta después del cinco de abril de 1992, cuando los golpistas tratan de convertirlo en la "bestia negra" del nuevo régimen.

Esta influencia no es gratuita ni tan solo un asunto de oportunidad, comienza cuando los apristas negocian con el gobierno de Morales Bermúdez y se convierten en los protagonistas civiles más importantes de la apertura política, esta iniciativa les permite ganar las elecciones a la Asamblea Constituyente y transformarse en el poder hegemónico de la misma. Continúa con su papel como primera oposición al segundo belaudismo y encuentra su momento cumbre con el triunfo de Alan García en 1985. El momento de hegemonía absoluta es corto, les dura nomás hasta agosto de 1987, cuando se intenta estatizar la banca, sumiéndose luego en una profunda crisis. Sin embargo, aún así logran el 22.6% en las elecciones de 1990 e importante vigencia política luego del cinco de abril, en parte, paradójicamente, por las graves acusaciones de las que su líder es objeto por parte del gobierno de Fujimori.

²⁶El PAIT era un programa de apoyo al empleo temporal durante el gobierno de Alan García. Los trabajadores inscritos en este programa eran asiduos de los mítines de apoyo al gobierno de García. Y balconazos eran los discursos que el Presidente García solía dar desde uno de los balcones de Palacio de Gobierno.

La influencia aprista está marcada, al igual que en otras formaciones políticas, por grandes personalidades, aunque en su caso la estructura organizativa del partido y la identidad con su tradición de lucha en importantes sectores de la sociedad civil va a jugar un rol muy especial. A pesar de ello, la influencia del partido en el período va a estar marcada de comienzo a fin por los avatares de sus líderes. El estratega del acercamiento a los militares y jefe tradicional del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre, muere en junio de 1979, cuando el partido había cumplido exitosamente con liderar las primeras etapas de la transición. Esta muerte abre una lucha por el poder que se da, súbitamente, en condiciones distintas a las de anteriores ocasiones. La situación es resumida por uno de los líderes históricos del partido, Ramiro Prialé, cuando señalaba que el PAP tenía que hacer el tránsito de monarquía a república. Dos líderes que se creían con merecimientos suficientes para ser herederos del "jefe máximo" entran a disputar el liderazgo: Armando Villanueva y Andrés Townsend. Según los propios líderes apristas entrevistados la disputa, que se quiere hacer aparecer solo como ideológica, escondía sobre todo una profunda rivalidad personal. Villanueva sale elegido candidato del partido en elecciones internas que son tachadas de fraudulentas por Townsend, este último acusa en especial al entonces joven Alan García de haber organizado el fraude contra su candidatura y a favor de Villanueva. Si bien al final Villanueva y Townsend integran una sola fórmula presidencial, demostrando la fuerza orgánica del partido que integraban, el conflicto disminuye seriamente las posibilidades del PAP en las elecciones generales de 1980, que perdería frente a Acción Popular.

Esta disputa, que se zanjaría algún tiempo después con la derrota electoral de Armando Villanueva y la expulsión del PAP de Andrés Townsend, es el final de varias generaciones apristas que se habían desarrollado alrededor de Haya de la Torre. Este vacío dejado por los sucesores permite el surgimiento de una nueva figura: Alan García, que se había caracterizado originalmente por ser uno de los jefes de la "fuerza de choque" de Villanueva, pero que rápidamente se despercude de ese tinte agresivo y empieza una carrera por convertirse en el nuevo jefe. La oposición al segundo belaundismo es un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas o renovadas alternativas políticas, por la honda decepción que rápidamente causa el gobierno belaundista en la población. De acuerdo al cuadro No. 25 la simpatía por Acción Popular (en el gobierno) decae del 53% en setiembre de 1980 al 14% en junio de 1983 y al

11.4% en agosto de 1984, mientras que la simpatía por el PAP en esas mismas fechas sube del 21% al 27% y al 41.3%.

CUADRO N1 25: SIMPATIA POR PARTIDOS U ORGANIZACIONES POLITICAS.

PARTIDOS:	SET 1980	JUN 1983	AGO 1984
AP	53.0	14.0	11.4
APRA	21.0	27.0	41.3
PPC	16.0	23.0	4.8
UNIR	3.0		
UDP	2.0		
PRT	3.0		
IU		7.0	18.6
N.D. 1)	2.0	29.0	23.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0
N1 ENCUESTADOS	540		2492
LUGAR	LIMA	LIMA	NACIONAL
ENCUESTADORA	POP	POP	DATUM
PUBLICADO POR:	CARETAS	EL DIARIO	CARETAS

1) N.D.: No hay datos sobre la diferencia porcentual.

FUENTE: Banco de datos y documentación de DESCO.

Pero no solo son los errores del gobierno los que permiten desarrollarse al nuevo liderazgo aprista, se trata sobre todo de un profundo cambio de imagen. Alan García logra desarrollar una nueva imagen de su partido encarnada, al estilo de Haya de la Torre, por él mismo. Dispone, en este sentido una Aestilización@ de la tradicional estrella aprista y la adición como símbolo de una paloma, pareciera que en actitud de paz, así como un cambio de lema, de "sólo el aprismo salvará al Perú", grito de guerra de las épocas de lucha anti-oligárquica, al más

personal y a la vez amplio de "mi compromiso es con todos los peruanos". Busca renovar, asimismo, la propuesta de gobierno del partido, en particular en lo que se refiere a un nuevo programa económico, convocando a destacados intelectuales a trabajar en la Comisión de Plan de Gobierno. Mantiene, sin embargo, el espíritu antimperialista del programa aprista original de 1931, que había sido recuperado por quien fuera su mentor inmediato: Armando Villanueva. García combina entonces liderazgo nuevo y juvenil con una imagen de consenso, un antiguo programa de cambio y la mejor organización partidaria existente en el país, o por lo menos la percepción de que se trataba de una institución eficiente. Es interesante observar que, de acuerdo con la revista Debate, entre 1984 y 1986 el PAP es considerado como una de las instituciones más eficientes del país, ocupando en julio de 1984 y julio de 1985 el puesto tercero y en julio de 1986 el puesto sexto, y siendo el único partido democrático que es considerado entre los primeros lugares como institución eficiente en algún momento del período que va de 1981 a 1995.

Estos cambios que se producen en el PAP se empatan bien con el ánimo ciudadano que, luego del reformismo militar y la transición democrática, buscaba un cambio social que le trajera una mejora de sus condiciones de vida e identificaba esta posibilidad con la democracia. Luego de la decepción con Belaúnde se presentaban dos alternativas: el PAP y la IU, pero el electorado prefiere la propuesta de reformas moderada y consensual que ofrece un PAP en apariencia renovado, frente a la filiación radical y a la gran fragilidad orgánica que presenta IU. Finalmente llega el triunfo de Alan García en 1985 con el 53.1% de la votación, la más alta del período de vigencia democrática entre 1980 y 1992. Es tal la euforia que causa este triunfo que un diario limeño de la época, recogiendo el grito de una manifestación de apoyo al gobierno, llega a titular: "Alan haz lo que quieras".

Al triunfo en la elección presidencial en la primera vuelta, se suma el triunfo en las elecciones parlamentarias, logrando mayoría absoluta tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Tal como señala Tuesta (1995), en el caso de la Cámara de Diputados, sucede lo mismo que con AP en el período anterior, ayudados por la distorsión que permite el sistema electoral en la traducción de los votos en escaños, con aproximadamente el 50% de la votación el PAP logra el 59% de las bancas. Esta cómoda mayoría parlamentaria, mayor que la que

alcanzara AP en su segundo gobierno y más efectiva en su funcionamiento por las características del PAP, significará un importante respaldo a la administración de García, a la par que un elemento más de reforzamiento al régimen presidencialista.

Desde un primer momento destaca el protagonismo del joven líder aprista convertido en Presidente de la República. Los denominados "balconazos", discursos que dirigía el primer mandatario desde un balcón de Palacio de Gobierno a distintos sectores sociales que se acercaban con sus demandas, expresaban su afán de comunicación "directa" y poco institucionalizada con la multitud. Pero al mismo tiempo, también suponían el ensayo de una Ademocracia plebiscitaria@, la cual, a la vez que debilitaba las instituciones representativas, presagió lo que sería el recurso de legitimación más importante de los independientes en la década siguiente. Asimismo, el uso permanente y abusivo de los símbolos de poder presidencial, en particular la banda que usaba hasta en mangas de camisa, demostraban un afán exagerado de identidad con el cargo y de búsqueda de reconocimiento ciudadano. Si Fernando Belaúnde había sido criticado en su segundo gobierno por un estilo aristocrático y excluyente que centralizaba en su persona la mayor parte de las decisiones, García llevará este afán concentrador, tanto en las formas como en la toma de las decisiones sustantivas, a sus extremos, sin reparar en las consecuencias que ello tendría para el debilitamiento del régimen democrático.

2. La heterodoxia personalizada.

En términos de política económica el gobierno de Alan García significó un cambio importante respecto al gobierno de Belaúnde. Por una parte aprovechó el consenso existente sobre el fracaso económico de las políticas del segundo belaudismo, que aparecían inspiradas por el Fondo Monetario Internacional, para dar un vuelco en sentido contrario e iniciar una activa intervención en el mercado que se denominó Aheterodoxia económica@, buscando revertir una tendencia en política económica que, como señalamos, venía desde 1975. Por otra, recibió un escenario económico que favoreció sus políticas, por el alto nivel de reservas internacionales (ver cuadro No. 26), la alta inflación (ver cuadro No. 6) y la recesión productiva que dejó Belaúnde. Esta situación le permitió desarrollar una retórica "antimperialista", exitosa electoralmente, en la

que señaló que solo pagaría el 10% de las exportaciones como servicio de la deuda externa. Este discurso, y el alto perfil que mantuvo al respecto, le restó desde un principio el apoyo de la comunidad financiera internacional y de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, que habían promovido los ajustes anteriores en sentido contrario. En términos más específicos desarrolló una política de crecimiento vía el estímulo a la demanda, dándoles facilidades tributarias y bajos precios en los servicios públicos a los empresarios, así como elevando los salarios y congelando otros precios para estimular el consumo de los trabajadores. Esto motivó el uso de la capacidad instalada existente, pero sin mayor inversión ni ampliación de la estructura productiva, ni menos intentos serios de reconvertir la misma (González de Olarte y Samame 1991; Iguñiz, Basay y Rubio 1993). En el corto plazo esto bajó la inflación (ver cuadro No.6), permitió crecer a la economía (ver cuadro No. 27) y logró una cierta recuperación del empleo (ver cuadro No.15). Sin embargo, también llevó en un plazo de dos años a que se repitiera, en proporciones mayores por cierto, el problema tradicional de la economía peruana con las cuentas externas: se agotaron los dólares necesarios para importar insumos y satisfacer a una actividad productiva "dólar-adicta" (ver cuadro No. 26).

Cuando ya se avizoraban las dificultades del modelo, García ensayó una "huida hacia adelante" presentando al parlamento, a fines de julio de 1987, un proyecto de ley de estatización de la banca, lo que causó una estampida empresarial y la contraofensiva global de la derecha que se había mantenido a la defensiva luego de su derrota en las elecciones de 1985. El intento de estatización de la banca golpeó al gobierno aprista de manera definitiva y cambió a su líder, a tal punto que uno de sus asesores cercanos llega a decir:

Alan García tuvo un modelo de país muy definido hasta 1987. En el 88 creo que él es quebrado en sus presupuestos teóricos, intelectuales e ideológicos por lo que pasó, y mucho tiene que ver lo de la banca.@

En 1988, el gobierno se vió en la necesidad de realizar un nuevo ajuste, bastante demorado por cierto, que recién llegó en setiembre. El nuevo ajuste no produjo los efectos esperados, tanto porque mantenía un carácter ambiguo en sus políticas como, principalmente, por

falta de credibilidad de los actores económicos, sobre todo de los empresarios, que luego de tres años de gobierno, de retórica antimperialista y del intento de estatización de la banca, no le tenían ninguna confianza política.

Es interesante reseñar el cambio del discurso de García en materia de reactivación de la economía entre la campaña electoral y el inicio de su gobierno, porque quizás en este cambio podamos observar las dificultades para formar una coalición social que lo sostuviera. García desarrolla en la campaña el discurso de la Apirámide social@ donde señala que empresarios, trabajadores y clases medias, que conformarían el sector moderno de la economía, constituyendo el 25% de la población se llevaban el 77% del ingreso nacional, mientras que los marginados urbanos más los pobres rurales, que serían el sector verdaderamente atrasado, sumando el 75% de la población tendrían nada más que el 23% del ingreso (Iguñiz, Basay y Rubio, 1993). El candidato García señalaba que la reactivación productiva debía hacerse Adesde abajo@, basándose en este 75% pobre y muy pobre, con la perspectiva seguramente de desarrollar un verdadero mercado interno que no tuviera los problemas de estrangulamiento de otros intentos de Adesarrollo hacia adentro@. Esta visión tenía la virtud de señalar, aunque quizás en forma distorsionada, las profundas desigualdades sociales del Perú, como un elemento eje de sus problemas económicos, así como la voluntad de atacarlas para lograr una reactivación. Sin embargo, las exigencias de una reactivación más rápida y el formidable costo de una reactivación desde abajo parece que lo alejaron de estas ideas iniciales y se pasó, más bien, a la reactivación indiscriminada del sector moderno, vía la demanda, con los resultados señalados. Pero esta visión inicial del país, que lo dividía entre modernos y marginados, lo condicionaría frente a posibles alianzas con sectores Amodernos@ como empresarios y trabajadores, porque con ninguno de ellos lograría entenderse en función del establecimiento de políticas económicas coherentes y alternativas a las del FMI. Es destacable, en especial, el distanciamiento que propicia en este discurso de los trabajadores asalariados, porque ellos habían sido el eje en la reivindicación de los derechos económicos y sociales desde principios de la década anterior.

**CUADRO N1 26: INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR EXTERNO
1982-1990 (Valores en millones de dólares).**

AÑOS:	BALANZA:		RIN DEL SISTEMA
	DE PAGOS	COMERCIAL	BANCARIO
1982	124	-429	896.2
1983	-40	293	1102.9
1984	247	1007	1382.6
1985	280	1172	866
1986	-517	-65	866
1987	-785	-521	81
1988	-398	-99	-317
1989	863	1197	546
1990	146	391	692

FUENTE: BCRP; Javier Iguíñez, Rosario Basay y Mónica Rubio (1993) *Los Ajustes. Perú 1975 - 1992*. Fund. F. Ebert, Lima.

CUADRO N1 27: TASA DE CRECIMIENTO REAL

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Tasa de crecimiento real	0.1	-13.2	4.6	1.7	10.8	9.7	-8.3	-11.9	-4.6

FUENTE: BCRP; J. Iguíñez, R. Basay y M. Rubio, Op. cit.

Así, García que se había presentado como el líder que era capaz de llevar adelante un cambio en consenso con diversos sectores sociales, terminó en serio conflicto con casi todos. Con el capital extranjero rompió lazos desde un inicio por su posición frente al pago de la deuda externa y en particular por su actitud desafiante y sus intentos -fracasados- de formar un "sindicato de deudores" entre los países pobres. A ello se sumó la posición inflexible de los organismos internacionales que no aceptaban discutir propuestas que estuvieran fuera de su menú de opciones. Con los empresarios peruanos desarrolló una relación personal y no institucionalizada, que privilegió a los más grandes, grupo al que la prensa denominó "los doce apóstoles". Sin embargo, nunca pudo llegar a acuerdos duraderos con ellos. García reclamaba a los empresarios que invirtieran, al menos las ganancias que habían tenido con la nueva política económica de su gobierno, y estos se quejaban del congelamiento de precios y de la intervención global del gobierno en la economía, considerando que era el gobierno el que debía cambiar y no ellos. Esto generó una relación de amor-odio entre García y los líderes empresariales, donde uno quería imponerse con su poder político y los otros con el poder del dinero. El primero tomaba en cuenta la tendencia complaciente con el poder de turno que suelen tener los empresarios en el Perú y los segundos el poder corruptor que puede tener el dinero en la actividad política, en particular en un gobierno como el aprista que era considerado proclive a caer en estas tentaciones. La mutua desconfianza llevó a que García intentara el proyecto de estatización de la banca y a que, luego de ello, los empresarios respondieran con actitudes defensivas frente a cada nuevo conjunto de medidas económicas para arreglar la situación.

Los trabajadores tampoco tuvieron buenas relaciones con el gobierno aprista, desarrollando entre 1987 y 1988 cuatro paros nacionales por sus reivindicaciones. Fue tal la intensidad huelgística que en 1988 se llegó al mayor número de horas-hombre perdidas (ver cuadro No. 5) de todo el período democrático. Los trabajadores empezaron siendo, en el discurso electoral de García, parte de los privilegiados en la pirámide social, para pasar luego a convertirse en uno de los sectores de punta de la pretendida reactivación y terminar como víctimas de una profunda recesión. Al igual que con los empresarios la relación con los trabajadores tampoco fue institucionalizada, sino a través de intentos de acercamiento personal

con algunos líderes sindicales. La conducción izquierdista radical de los sindicatos llevó a los trabajadores, a pesar que los primeros dos años del gobierno significaron una pequeña recuperación salarial, a buscar desde un inicio recuperar el nivel de ingresos que habían perdido desde 1980, lo que explica un paro nacional temprano como el de mayo de 1987. En el caso de los tres paros producidos en 1988, estos se deben, más bien, al deterioro global de la situación y el último, en especial, a una respuesta al ajuste de setiembre de 1988. Más allá de la gran participación numérica en los paros de 1988, su efecto real fue muy reducido no logrando la nivelación de sus ingresos ni la defensa de sus puestos de trabajo, por la imposibilidad material del gobierno de atender a demanda reivindicativa alguna que significara un mayor deterioro de las cuentas fiscales y también de los empresarios que veían a su mercado reducirse drásticamente, lo que no hacía sino reflejar un estado más avanzado de descomposición del modelo de acumulación por "sustitución de importaciones" y una menor capacidad del mismo de reproducir a la masa asalariada en el sector moderno de la economía (Balbi y Gamero 1990). Esto llevó a los sindicatos, que ya venían de una situación de debilidad en los años anteriores, a debilitarse aún más hasta casi desaparecer como actores socio-políticos significativos a fines de la década de 1980.

Tal es el grado de personalización que Alan García desarrolla en el tratamiento de la crisis económica que cuando la gente es preguntada por el principal responsable de la misma, en setiembre de 1988 (mes del tardío ajuste aprista), el mismo García ocupa el primer lugar con el 35%, seguido de su gobierno con el 26% (ver cuadro No. 28).

CUADRO N1 28: PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA CRISIS ECONOMICA DEL PAIS.

AJUSTE:	SET DE 1988
Alan García	35
Gobierno actual	26
Gob. anterior/F. Belaunde	5
El APRA	4

El pueblo	3
Los empresarios	2
Abel Salinas	2
Alva Castro	1
Otros	11
NS/NC	11
TOTAL	100

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima a 654 personas, por la empresa APOYO.

Asimismo, esta individualización de la responsabilidad por la crisis económica se da junto con una percepción de extendida corrupción en el gobierno de García. Esta se entendía como corrupción abierta, en el caso de uno de nuestros entrevistados, cercano a las esferas de poder de la época, cuando señala que un alto dirigente empresarial en una oportunidad, enseñando un fajo de dólares americanos, habría dicho: Amira con estos verdes yo hago bailar a los apristas@, o como clientelismo, lo que lleva a afirmar a Carlos Ferrero que Alos apristas llegaron con hambre de puestos@, o como graves errores políticos lo que lleva a señalar a un alto dirigente aprista del mismo período su desacuerdo con Ala brutalidad que se cometió, cuando se entregó el manejo de Cooperación Popular -que era la institución que más dinero tenía- a cada Comité Provincial del APRA, ya más no podía ser@. Esto lleva a que hacia el final de la administración, en encuesta realizada en agosto de 1990, un 25% de los entrevistados señale que la razón principal de esta crisis es la corrupción gubernamental (ver cuadro No. 29).

Habría, sin embargo, que matizar esta percepción de la corrupción en el gobierno de Alan García con la influencia de la Aleyenda negra@ que la oligarquía tejió sobre el PAP, en particular en los años de la lucha anti-oligárquica entre 1930 y 1956. A esta campaña histórica de la derecha peruana, a la que muchas veces contribuyó la izquierda marxista, el PAP respondió con una consigna sectaria de Aa más calumnias más aprismo@ propiciando, en consonancia con la cultura política de la época, el cierrafilas partidario frente a la agresión externa. Esta leyenda negra que satanizó al PAP por razones políticas e ideológicas es indudable que se prolonga hasta

la década de 1980 e intenta cubrir también al gobierno de Alan García. Pero siendo todo esto cierto, hay necesidad de distinguir entre la satanización reaccionaria del aprismo por su influencia social y política democratizadora y la corrupción que efectivamente parece haberse extendido durante la administración de Alan García.

CUADRO N1 29: EXPLICACIONES A LA CRISIS ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA.

RAZONES:	TOTAL
Corrupción	25
Mala gestión administrativa	16
Mal manejo económico	11
Falta de apoyo político	4
No tuvo programa económico	4
Conflicto con organizaciones	4
Caudillismo demagógico de AGP	3
Estatización de la banca	3
Empresarios no invirtieron	3
Aplico ideología errónea	2
Demagogía del gobierno	2
Otros	11
NS/NC	12
TOTAL	100

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima a 610 personas, por la

empresa APOYO. La pregunta fué:)A quién considera como el principal responsable de la crisis económica del país?

3. Cuando los vaivenes matan.

La actitud frente al fenómeno de la violencia política por parte del gobierno de Alan García se caracterizó, al igual que su predecesor, por la carencia de una orientación definida. Un antecedente inmediato en este sentido fue la actitud de Alan García como candidato, que se definió como una crítica al gobierno acciopopulista, confundándose muchas veces con Izquierda Unida, pero sin una alternativa a la posición estrictamente represiva. Parece que durante la campaña Alan García y sus asesores tomaron contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas que tenían posiciones alternativas a las de la matanza indiscriminada, sin embargo, no parece que estos contactos hubieran influenciado en la elaboración de una política definida. Ya en el gobierno no se dieron señales de cuál sería el punto de apoyo fundamental. Por una parte se reorganizó a la Policía Nacional, unificando sus diferentes ramas, lo que era clamor ciudadano, pero por otra se la fortaleció dotándola de armamento más poderoso, lo que motivó los celos de las Fuerzas Armadas. Asimismo. Se organizó también el Ministerio de Defensa, pero de manera tal que importantes sectores se sintieron maltratados en el proceso y esto derivó en conatos de rebelión que llevaron a García a pasar al retiro al Comandante General de la Fuerza Aérea. En términos específicos de la guerra interna esta actitud ambigua osciló entre la condena drástica a los graves atentados contra los derechos humanos cometidos por los militares, en particular al inicio de su mandato, y la masacre de los penales -tentación de "solución final" del senderismo como dicen Degregori y Rivera (1993)-, donde la responsabilidad del propio Presidente de la República nunca pudo ser definitivamente aclarada. Igual sucedió con otras tristemente célebres ejecuciones extra-judiciales, como las de Accomarca en 1985 y Cayara en 1988, cuyos culpables quedaron impunes a pesar de las investigaciones que se llevaron a cabo. La falta de una política anti-subversiva tuvo como consecuencia que durante este período de gobierno se produjera tanto la mayor expansión de Sendero Luminoso en el curso de la guerra interna, como la continuación del énfasis en el aspecto militar de la lucha antisubversiva por parte de las Fuerzas Armadas, con

las consecuencias ya señaladas en términos de derechos humanos. Todo ello hace del período de gobierno aprista la coyuntura más intensa de la guerra interna, produciéndose la mayor cantidad de acciones subversivas (ver cuadro No. 7), muertos (ver cuadro No. 21) y desaparecidos (ver cuadro No. 30).

**CUADRO N1 30: PERU: PERSONAS DESAPARECIDAS
REGISTRADAS, 1981 - 1994.**

AÑOS	TOTAL
1981	9
1982	9
1983	766
1984	951
1985	529
1986	385
1987	115
1988	272
1989	1528
1990	589
1991	458
1992	747
1993	138
1994	120
MASCULINO	5808
FEMENINO	808
TOTAL	6616

FUENTE: Min. Público; INEI, 1995 (Pg. 749).

Algunos analistas como Carlos Tapia creen ver detrás de esta oscilación aprista una concepción errada del fenómeno subversivo que lo asociaba, como después lo harían algunos sectores de Izquierda Unida, casi exclusivamente con el problema de la pobreza. Ello habría llevado al gobierno, en un primer momento, a creer que con una retórica antimperialista y una mayor atención a zonas deprimidas, como las del denominado "trapezio andino", sería factible contrarrestar la subversión. Según Tapia, en este punto de vista no hay una valoración adecuada

de las concepciones ideológicas de Sendero Luminoso, para el cual el blanco del accionar subversivo era la organización estatal y eventualmente el régimen político en que esta tomara forma, más allá de las características particulares del gobierno que estuviera en funciones. Pero la realidad haría reaccionar, aunque fuera parcialmente, a la administración de García. Un factor en este sentido habría sido el asesinato por los grupos terroristas de muchos dirigentes apristas de base durante el quinquenio 1985-1990, constituyendo el PAP el partido político que más militantes perdió a manos de la subversión en los años de la guerra interna.

Durante el gobierno de Alan García comienzan a desarrollarse con fuerza las rondas campesinas, en muchos casos alentadas por militantes apristas amenazados por el terror. Esta estrategia, que a la postre resultaría decisiva para la derrota del senderismo, es rápidamente asumida por las Fuerzas Armadas, quienes les proporcionan instrucción, armamento ligero y las organizan bajo su comando. Igualmente, en este gobierno se asume la importancia del trabajo de inteligencia anti-terrorista, tanto a nivel policial como militar, lo que también se convertiría en viga maestra de la derrota senderista. Sin embargo, junto con estas iniciativas positivas surge en julio de 1988 el "Comando Rodrigo Franco", grupo paramilitar que parece ser fue promovido desde el Ministerio del Interior y conformado por gente ligada al Partido Aprista (Piqueras et. al., 1989). Este grupo habría expresado la desesperación de sectores del gobierno aprista frente al avance de la violencia política, intentando una respuesta, también en el terreno del terror, a los grupos subversivos.²⁷

Los vaivenes apristas llevaron a su extremo la brecha que señalan Degregori y Rivera entre las altas responsabilidades prácticas de los militares y sus relativamente escasas prerrogativas formales. Dos hechos nos dan cuenta de la magnitud de esta brecha a fines de la

²⁷ Es importante, sin embargo, señalar que nunca se llega a determinar con claridad si existen uno o varios grupos paramilitares que usan el nombre de ARodrigo Franco@. El grupo que se habría desarrollado en el Ministerio del Interior habría estado ligado al PAP y entrenado por el gobierno norteamericano a través de la CIA, pero también habrían tomado ese nombre otros grupos paramilitares desarrollados al interior de las Fuerzas Armadas, cuya actuación se desarrolló principalmente en el departamento de Ayacucho.

década de 1980: por una parte la ofensiva por el "equilibrio estratégico" que empiezan a desarrollar Guzmán y sus huestes, por otra la dramática situación en términos de sueldos y equipos en que se encuentran las Fuerzas Armadas en razón de la gravísima crisis económica que atravesaba el país. La ampliación de este tipo de brechas, que en el Perú se desarrolla a extremos incontrolables al final del gobierno de García, es, como recuerda Stepan (1988), insoportable para la democracia, lo que presagia el golpe de estado que se produciría pocos años más tarde.

Pero es ya tal la tensión dentro de las Fuerzas Armadas en la segunda mitad del gobierno aprista que se pueden contabilizar hasta dos intentos de golpe de estado. El primero, en octubre de 1988, un mes después del ajuste recesivo de setiembre de ese año, que lleva a García a pasar al retiro al Comandante de la Primera Región Militar, y el segundo, que no llega a tener fecha fija por lo que parecía la inminencia del triunfo de Vargas Llosa, pero que se plasma en lo que la prensa llamaría más tarde el APlan Verde@ y que serviría de base para la alianza militar con el Presidente Fujimori. Este segundo intento es especialmente importante porque habría plasmado una corriente militar, en un momento de extrema crisis nacional, sobre la necesidad de una tutela castrense sobre la democracia por un largo período. En ambos casos la inquietud militar habría estado relacionada con el avance subversivo en la guerra interna y la incapacidad de definición de una política que la enfrentara.

4. Yo mismo soy.

En estas condiciones ¿cuál fue la relación con las demás agrupaciones políticas? La alta votación inicial exime a García de la tentación de las alianzas. Por lo demás, los resultados electorales habían dejado maltrechos a las opciones más lejanas del partido ganador: Acción Popular y al Partido Popular Cristiano, agrupaciones que en el momento ocupaban el espacio de centro-derecha, pero con tan solo el 19.2% de la votación (ver cuadro No.3). Este magro resultado llevaría a Acción Popular a no presentarse a las elecciones municipales de 1986 y al PPC a alcanzar, a pesar de la ausencia de AP, tan solo el 14.8% a nivel nacional. En lo que respecta a IU, su segundo lugar con el 24.7% y su afinidad ideológica, por expresar la misma voluntad de cambio que el PAP, lo hubieran hecho el aliado ideal para establecer un bloque

hegemónico y llevar adelante un programa de cambio en democracia que ambas alternativas propugnaban. Sin embargo, una larga historia de odios mutuos incubados en la lucha anti-oligárquica y la profunda división sobre el punto en Izquierda Unida, impidieron toda posibilidad de acercamiento orgánico.

La posibilidad de alianzas empeoró conforme avanzó la crisis y cada cual vió la forma de sacar mejor partido de la situación. El centro-derecha, ocupado por AP y el PPC, fue salvado de la tumba por el propio García cuando este intentó estatizar la banca y ello motivó una reacción de los propietarios que alcanzó a vastos sectores ciudadanos y tuvo como líder providencial al escritor Mario Vargas Llosa, rescatando a los dos partidos señalados para formar el Frente Democrático (FREDEMO). IU se sumió en una aguda lucha interna a partir de las elecciones municipales de 1986 entre su líder, Alfonso Barrantes, cercano a Alan García, y los partidos que en su mayor parte se radicalizan frente al fracaso del aprismo en el poder y el avance del senderismo. En todos los casos el personalismo del caudillo aprista jugó un partido aparte, privilegiando de manera ostensible el contacto con algunos líderes frente a otros, lo que motivaba naturales celos en los demás y dificultaba la institucionalización de las relaciones políticas.

Este personalismo de Alan García jugaría también un rol en la crisis al interior de su propio partido, en particular en el conflicto interno que sostiene con Luis Alva Castro, el segundo hombre del gobierno, cuyo poder intenta erosionar, al punto, según se especuló en la época, de postergar decisiones, sobre, por ejemplo, política económica, en un año clave como 1987, con el objeto de perjudicar políticamente a Alva. Según dirigentes apristas entrevistados el conflicto con Alva habría sido una reproducción de conflictos en generaciones anteriores del PAP, como lo fueron los conflictos que en su momento tuvieron Haya y Seoane y posteriormente Villanueva y Townsend. Conflictos en los que la disputa por el liderazgo era lo fundamental, subordinando a esto las consideraciones políticas e ideológicas.

El conflicto de García con Alva se proyecta en el conflicto del primero con su propio partido, del cual progresivamente se va alejando en el curso del gobierno, hasta verse obligado a renunciar a sus cargos como dirigente en un congreso partidario en 1988, ante el multitudinario rechazo de la plenaria que lo recibe a los gritos de AHaya no ha muerto, sigue siendo el jefe@ y Afuera los amigos@. El alejamiento del partido, sin embargo, no solo tiene que ver con la natural

diferenciación entre partido y gobierno, sino principalmente con el estilo de gobierno de Alan García que concentraba todas las decisiones importantes en su persona, consultando de manera separada con distintos individuos y/o grupos sobre las mismas pero sin responder a las conclusiones de un colectivo. Las versiones al respecto, sin embargo, son contradictorias, porque hay quienes señalan que si la mayoría de ministerios y empresas públicas estaban conducidas por apristas y el Senado y la Cámara de Diputados contaban con una mayoría conformada por apristas miembros del partido, no habría habido tal marginación. Lo que habría estado restringido entonces habría sido el acceso al círculo íntimo de poder, donde se tomaban las decisiones fundamentales. Un corolario significativo de este conflicto con Alva Castro y de su distancia del partido son los esfuerzos, discretos por cierto, que llevó adelante García para apoyar al candidato Alberto Fujimori, desde antes de la primera vuelta, en las elecciones de 1990. Para el efecto se dice que instruyó al Servicio de Inteligencia Nacional para que apoyara a Fujimori, a la par que puso a su disposición a uno de sus principales asesores de imagen. Quizás tenía la esperanza de prolongar una influencia directa en la Presidencia de la República, a través de un hombre como Fujimori que en ese momento aparecía contrario al "shock" de corte fondomonetariasta y además sin mayor experiencia política.

Pero es interesante cómo el deterioro del gobierno de Alan García, a pesar de llevar adelante una administración que termina hundiendo al país en una de las mayores crisis de su historia, no llega a deteriorarse tanto a los ojos de la población como el gobierno de Belaúnde. Esto se expresa en los resultados de las elecciones generales de 1990, donde el candidato del Partido Aprista, Luis Alva Castro, alcanza el 22.6% de la votación, así como en una encuesta de mayo de 1990, hecha por Apoyo, donde los resultados señalan que el 18% de los interrogados todavía cree en las palabras de Alan García (ver cuadro No. 31). Quizás esto se deba, a diferencia del mayor deterioro que sufre Acción Popular, a la gran capacidad organizativa del PAP y, en particular, a las singulares dotes de agitador y movilizador político de García. Hay dos campañas que podrían considerarse un ejemplo en este sentido. La primera, es la que realiza el propio García en la segunda mitad de 1987, buscando apoyo popular para su (inpopular) intento de estatización de la banca, la segunda es la campaña, también en una situación muy difícil, de Luis

Alva Castro, como candidato aprista a la presidencia para las elecciones de 1990, que logra dañar a tal punto al candidato favorito Mario Vargas Llosa que impide su victoria electoral.

CUADRO N1 31: CREDIBILIDAD DE LOS POLITICOS.

	SET 1987	ENE 1988	DIC 1989	MAY 1990	AGO 1990	FEB 1991	AGO 1991	FEB 1993
A. García	37	27	14	18	11	10	19	5
A. Barrantes	45					33	30	26
F. Belaunde	29					37	42	31
M. Vargas Ll.			41	39		40	48	17
A. Fujimori				42	47	32	39	55
Encuestados	626	637	614	600	616	612	516	450

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Lima por la empresa APOYO. La pregunta fué: Cree en las palabras de...?

Sin embargo, el menor deterioro de la imagen del PAP y de Alan García, en comparación con el que sufre Acción Popular y Fernando Belaúnde, no significa que la ineficacia del gobierno de García para solucionar problemas, su incapacidad para forjar consensos e incluso los problemas internos por los que pasa su partido, no debilitaran seriamente al PAP y a su líder, reduciendo de manera muy significativa sus posibilidades de continuar siendo un actor fundamental del proceso de consolidación democrática. Este debilitamiento lo podemos observar tanto en el índice de imagen de partidos (ver cuadro No. 32) donde el PAP, luego del gobierno de García, saca el índice más negativo de todos los partidos políticos, yendo del -38.3 en junio de 1991 al -66.6 en julio de 1994, como en el índice de imagen de personalidades (ver cuadro No. 33), donde García, asimismo, cuenta con la imagen más negativa, que va del -50.4 en marzo de 1991 al -74.7 en noviembre de 1993. Este deterioro aprista contrasta en los noventas con el menor deterioro de Acción Popular, el otro partido de gobierno en los ochenta, que va de 4.6 de índice de imagen en junio de 1991 a -24.5 en junio de 1994 y sobre todo con Fernando Belaúnde, cuyo índice de imagen se mantiene positivo, aunque también en descenso, de 30 en marzo de 1991 a 12.6 en noviembre de 1994.

Alan García intenta renovar la forma de representación populista que había sido tradicional en el PAP. Por una parte busca repetir al caudillo que apela directamente a las masas movilizadas, pero por otra es consciente que el PAP ya no tenía la hegemonía de antaño sobre los movimientos sociales. Busca por ello Asaltarse@ al movimiento social organizado de filiación mayoritariamente izquierdista y apelar a los más pobres, a los excluidos del aparato productivo moderno y de la propia organización social. Ello se refleja en su plantemiento electoral de la Apirámide social@, ya reseñado, y se continúa en los encuentros campesinos o ARimanacuy@, los programas de empleo temporal como el PAIT, el crédito con interés cero y hasta el estilo que inaugura con los Abalconazos@. Pero la capacidad de movilización de esta masa organizativamente indiferenciada encuentra rápidamente sus límites. Por ello, el éxito inicial de esta renovada forma de apelación a las masas no se demuestra suficiente para afirmar su liderazgo y construir una nueva forma de representación populista. Más bien, el rápido deterioro de su imagen de conductor una vez que la derecha pasa a la ofensiva señalan la debilidad, o quizás la calidad de último recurso, de apelar a los más pobres, así como el agotamiento definitivo de la forma misma de representación populista.

CUADRO N1 32: IMAGEN DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLITICAS

CUADRO N1 33: IMAGEN DE PERSONALIDADES

5. El viraje hacia el abismo.

En este contexto, hay, sin embargo, una coyuntura de singular importancia, porque marcaría no solo el destino del gobierno, sino del régimen democrático en su conjunto. Se trata de la coyuntura en que Alan García intenta estatizar la banca, idea que lanza, en forma de proyecto de ley a las cámaras a fines de julio de 1987, con motivo de su discurso anual ante el Congreso de la República. La iniciativa de García, que no consultó previamente con sus ministros ni con su propio partido, se da en un momento de temprana soledad en su mandato, cuando ya se había peleado, o cuando menos distanciado, de la mayor parte de los actores sociales y políticos, tanto dentro como fuera de su partido. Debía por lo tanto recomponer la situación y buscar un esquema de alianzas y/o someter a los más cercanos y aislar definitivamente a los adversarios. Por ello, la medida tiene el carácter de "huida hacia adelante", que debería haber sometido, por su radicalidad, a todos aquellos que estuvieran a su izquierda: sindicatos e IU principalmente, además de unificar al PAP bajo su liderazgo y terminar de descolocar al centro-derecha que ya se encontraba en situación bastante difícil, para con esta correlación favorable enfrentarse a los poderes económicos que serían el hueso más duro de roer. No contaba García con el impacto social negativo que tuvo la iniciativa en los sectores medios y con la reacción política, no solo de descontento social, que produce la medida. De ella surge la prédica liberal de Mario Vargas Llosa y algún tiempo más tarde el movimiento "Libertad", lo que le daría a las posiciones conservadoras un perfil renovado, pasando el famoso escritor a liderar la oposición al infortunado proyecto. Y quizás tampoco contaba con la oposición que semejante medida tuvo al interior del PAP, en particular en las generaciones mayores, lo que se reflejaría en la oposición de la bancada aprista en el Senado, que finalmente liquida el proyecto de estatización bancaria en el parlamento.

Lo que tenía como objetivo una recomposición global de fuerzas que debía volver a poner a García en el centro del escenario se convierte en su gran fracaso político, cayendo en un profundo aislamiento del que no volvería a salir hasta más allá del término de su mandato. Pero el intento de estatización de la banca, significó también un gravísimo golpe para el resto de los actores que habían compartido el escenario democrático hasta el momento, más allá de su grado

de simpatía o rechazo con la pretendida estatización. La medida se reveló rápidamente como irresponsable y demagógica, identificándose más con la búsqueda de protagonismo del Presidente que con un intento serio de resolver problema alguno, menos aún el problema del crédito como afirmaba García. La izquierda por su neutralidad y eventual apoyo a la medida terminó asociándose con la misma y el centro-derecha, con Acción Popular y el PPC, a pesar de su oposición a la medida eran tenidas como agrupaciones que por sí solas no eran capaces de articular una oposición a la misma. El intento de estatización y su posterior fracaso fue visto así como el mejor y mayor ejemplo de irresponsabilidad política del período democrático, exactamente lo contrario de lo que la ciudadanía quería ver como eficacia para la solución de los grandes problemas por los que atravesaba el país. García pasó a ser más allá de sus partidarios y detractores el prototipo del caudillo preocupado por las ventajas a obtener en el cálculo táctico de corto plazo.

La fallida estatización de la banca significó, asimismo, la disolución de la segunda posibilidad de centro político, en los términos de Sartori (1992), ya que produjo en vez de una aglutinación alrededor del gobierno, una polarización que terminó aislándolo. Esta disolución de la segunda posibilidad de centro político impide de manera definitiva en el período de estudio que las fuerzas de cambio, el PAP e IU principalmente, dominantes en la mayor parte de la década de 1980, sean las que pasen a constituir el eje de la estabilidad del régimen democrático. Pero, más aún, esta disolución tiene un efecto tal que impide la constitución de nuevos centros políticos, en particular de un nuevo centro de derecha democrática, como sería el intento del FREDEMO y particularmente del Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa.

El PAP encabezado por Alan García, que parecía ser durante la campaña electoral y el primer año y medio de gobierno la alternativa leal por excelencia a la promesa democrática de la Constitución de 1979, pasó a ser, debido al desmanejo extremo al que llevó a la administración estatal, la opción más desleal al régimen democrático. Es cierto que esta deslealtad no llevó a que cuajaran en el PAP propuestas continuistas, ya fuera por la vía de la reelección o del golpe de Estado, pero ello no es óbice para señalar el gravísimo e irreparable daño que -en los marcos de ese período- hizo Alan García a la cabeza del gobierno aprista al régimen democrático. Esta deslealtad, producto de la irresponsabilidad política extrema, terminó afectando a todos los

actores democráticos y siendo el antecedente más importante del golpe del cinco de abril de 1992.

Si con Belaúnde la democracia de los ochentas ya había tenido un caudillo populista que había potenciado el presidencialismo hasta colocarse por encima de la ciudadanía y lejos de la solución de sus problemas; con García su tardío liderazgo, también populista, lo llevó a abusar y en grados aún más extremos de la figura presidencial. Quizás si el caso más claro de esta actitud sea la personalización de sus iniciativas políticas, que buscaba identificar con su persona, antes que con su partido o con su gobierno, los diagnósticos y las soluciones que él proponía. La otra cara de la medalla de esta personalización de sus iniciativas es la individualización de la culpa por parte de la opinión pública, una vez que las iniciativas terminan en fracasos. Esto último, como hemos visto (Cuadro No.28), es especialmente perceptible en el tratamiento del problema económico.

Al igual que en el caso del gobierno anterior, por encontrarse dentro del mismo régimen constitucional, no había mecanismo legal para limitar el agresivo presidencialismo en curso y poder frenar de alguna manera sus desbordes, o, eventualmente, efectuar un cambio de liderazgo. Tal como en la administración que lo precedió, el presidencialismo de García no logra mantener una opinión pública favorable más allá de la mitad de su gobierno, pero su sólida mayoría parlamentaria continuó apoyándolo sin que intentara siquiera una recomposición de su gobierno sobre otras bases.

VI. Izquierda Unida o la democracia como coartada

*AA nosotros nos perdonó la vida el pueblo no una sino muchas veces, hasta que un día nos dijo:
váyanse a la mierda@*

Santiago Pedraglio

1. Una creación pragmática.

La coalición Izquierda Unida es una expresión muy representativa del ánimo inicial de cambio que caracteriza al período democrático. La trayectoria de lucha y el trabajo organizativo de los partidos marxistas²⁸ que la conforman, muy importantes en las movilizaciones anti-dictatoriales de la década de 1970, le dan un cierto prestigio entre la población de lealtad con las banderas que enarbola. Sin embargo, la ambigüedad de su propuesta representativa -entre el corporativismo y el populismo- el radicalismo de su discurso y el carácter equívoco de su compromiso democrático la hacían a la vez una alternativa poco probable de gobierno y ponían una suerte de "techo" a sus pretensiones de poder.

²⁸En Izquierda Unida la mayoría de los partidos se consideraban marxistas-leninistas, salvo el Partido Socialista Revolucionario, que decía aceptar nada más la "interpretación marxista del capitalismo" y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, liderado en la época por Carlos Tapia, que se decía "marxista revolucionario".

IU es una "creación pragmática" de cara al escenario electoral de la década de 1980, su formación tiene que ver, en forma inmediata, con la experiencia electoral inicial de la izquierda en el período. Luego de la buena pero dispersa actuación de las fuerzas izquierdistas que optan por la participación electoral²⁹ para la Asamblea Constituyente en 1978, estas hacen un esfuerzo de unidad para afrontar las elecciones generales de 1980. Se conforman así la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) -unidad de los partidos radicales- y la Unidad de Izquierda -coalición de los partidos moderados- ninguna de las cuales logra sobrevivir la disputa por los primeros lugares en las listas de candidatos al parlamento, fragmentándose antes de haberse inscrito. La dispersión en la que acuden a las elecciones de 1980 -en cinco listas diferentes- hace que obtengan menos de la mitad de los votos que consiguieron en 1978 (ver cuadro No.3), lo que les proporciona una señal clara de la importancia política de la unidad para lograr resultados electorales aceptables. Por esta razón, más que ninguna otra, se funda Izquierda Unida algunas semanas antes de las elecciones municipales de 1980. Los buenos resultados que obtienen en las mismas, el segundo lugar a nivel nacional con el 23.3% y el segundo lugar en Lima lanzando a un carismático abogado independiente de izquierda: el Dr. Alfonso Barrantes, hace que se mantengan unidos y empiecen a desarrollar una identidad como frente político. Su influencia en la vida política nacional comienza, sin embargo, en las elecciones municipales de 1983, con el triunfo de su candidato a la alcaldía de Lima que fue nuevamente el Dr. Alfonso Barrantes, y la obtención también del segundo lugar a nivel nacional pero con el 29% de la votación.

IU, constituida originalmente como una coalición de partidos donde predominaban los radicales, tenía una influencia particularmente intensa en un importante, pero minoritario, círculo de simpatizantes cuyo trabajo político se focalizaba en lo que Sinesio López (1991) denomina la "sociedad civil popular" surgida en la década de 1970. Este frente tuvo, sobre todo en sus primeros años, dificultades de comunicación con el gran público, que van a determinar la conformación de su liderazgo. De allí el papel fundamental de Alfonso Barrantes, quien se convirtió en el líder gracias a dos cualidades: una importante capacidad de mediador entre la

²⁹Todos los partidos conocidos salvo dos grupos maoístas, "Patria Roja" y "Sendero Luminoso". El primero se integraría posteriormente a Izquierda Unida, mientras el segundo optaría por la lucha armada.

fracciones izquierdistas y una gran capacidad de comunicación con la ciudadanía, permitiéndole esto último sus buenas actuaciones electorales. Esta calidad de líder hizo de Barrantes, por lo menos, expresión de la influencia de IU en la política nacional, e incluso, para algunos analistas, este abogado de izquierda fue Amás que IU@, repitiendo el papel que en su momento cumplieron, respecto de sus respectivos partidos, tanto Fernando Belaúnde como Alan García. Así, si observamos el cuadro de personalidades con más poder (ver cuadro No. 23) vamos a encontrar que Barrantes tiene una ubicación entre 1984 y 1989, es decir entre su triunfo en las elecciones municipales de fines de 1983 y la división de IU en 1989, en una posición expectante que va del sexto al tercer lugar, incrementándose su influencia entre 1986 y 1988, cuando más cerca estuvo de ser considerado la alternativa de recambio al gobierno de Alan García. Sin embargo, tal como veremos en las próximas líneas, así como Barrantes tiene la capacidad para sacar a los partidos de la izquierda marxista de las catacumbas y liderar su unidad, no tiene igual capacidad para afirmar su conducción en democracia, tanto por las características de los partidos mismos como de la personalidad de Alfonso Barrantes.

2. El problema de la ambigüedad ideológica.

El problema fundamental que tiene IU para cumplir su papel de oposición es su ambigüedad ideológica frente a la democracia, que se expresa, sobre todo, como dicen Carlos Tapia y Santiago Pedraglio, en su ambigüedad frente a Sendero Luminoso. El objetivo estratégico de IU no era la consolidación del régimen democrático, sino el crear las condiciones para una revolución que trajera como resultado una sociedad socialista. Su objetivo entonces era un cambio radical para el cual se proponía usar la democracia. La raíz del problema era tanto la ideología marxista, particularmente dogmática, de estos partidos como el carácter ideológico de los mismos. Ambas características los llevaban a contraponerse con la democracia, en especial si buscaban cumplir el delicado papel de oposición en un régimen todavía joven.

Dos hechos, si bien anteriores a la conformación misma de IU, marcan esta ambigüedad frente a la democracia y el predominio dentro del frente de las posiciones radicales. Uno, es la presentación de la Amoción roja@ en la Asamblea Constituyente de 1978 por un grupo de

partidos que buscaban resaltar su condición de fuerzas antisistémicas ajenas a la democracia que aquella Asamblea expresaba. El otro, es la entrega en el mitin de cierre de campaña de 1980 de la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR)³⁰, de un fusil de palo a su candidato presidencial, en ese momento el líder sindical de los maestros, Horacio Zevallos. En ambos casos se trata de gestos que no hacía sino expresar la participación vergonzante e incluso la pobreza expresiva de la izquierda marxista-leninista en la democracia representativa. En el primer caso señalando la esperanza utópica en la transformación súbdita de una democracia que consideraban Aburguesa@, en el segundo, la nostalgia por una lucha armada a la que finalmente no se llegarían a plegar.

Sin embargo, este discurso radical entraba en conflicto con la práctica cotidiana que desarrollaban los dirigentes políticos de IU, que por los estrechos lazos que habían tenido sus partidos con diversos movimientos sociales era una actividad de intermediarios que tramitaban las demandas de estos sectores ante diversas instancias del poder estatal que debían encontrarles solución. Esta actividad se ampliaba, en algunos casos, a la administración de espacios estatales específicos, como fueron los municipios, cuyo gobierno, desafortunadamente no superó -salvo contadas excepciones- las formas tradicionales de relación clientelista con la población que habían establecido antes otras formaciones políticas. Ello motivó que en muchos casos esta participación en el gobierno local tan solo sirviera para el ascenso social y el enriquecimiento personal de quienes ocuparon estas posiciones. Así, la actividad de intermediarios, propia de toda democracia, al tener no solo los vicios que ocurrían en otros partidos sino también confundir el discurso reivindicativo de los pobladores no contribuyó al afianzamiento del régimen político, por la vía de convertir la demanda particular en una acción de interés general -como legislación o acción de gobierno- sino que devino en reivindicación corporativa de algún segmento social que los dirigentes izquierdistas suponían debía servir para "agudizar las contradicciones".

Esta situación llevó, tal como señala Jorge Parodi (1993), a que el afán por conseguir la satisfacción de necesidades básicas se tradujera como radicalización política, confundiendo la

³⁰UNIR era la sigla bajo la cual actuaba en la legalidad democrática el grupo maoísta APatria Roja@, en alianza con otras agrupaciones menores.

lucha por demandas inmediatas con la adhesión a utopías revolucionarias. Esto se puede observar, según el mismo Parodi, en la percepción que tienen los pobladores de su participación en las organizaciones sociales, donde se privilegia el contacto con el líder antes que la eficacia de la participación misma y se aprecia más el objetivo utilitario de la actividad que el carácter democrático supuestamente promovido.

La ambigüedad ideológica, sin embargo, presente en toda la trayectoria de IU, tendría un efecto dramático a final de la década de 1980, cuando la crisis del frente izquierdista coincide con la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo en Europa Oriental. La combinación de ambos efectos hace sencillamente imposible sobrevivir a la identidad izquierdaunida.

3. La convivencia de dos formas de representación.

La presencia de estas características en IU nos lleva a señalar que este frente promovía dos formas de representación política. Por una parte, los partidos de IU, en particular los partidos más radicales como el PUM, el PC y Patria Roja, promovían una forma de representación corporativa que consistía en asumirse representantes de determinadas organizaciones sociales, fueran estas sindicales, campesinas, regionales, estudiantiles, de autodefensa o de sobrevivencia. Por otra, el liderazgo de Alfonso Barrantes, apoyado por los partidos menos radicales, como el PSR, los independientes y algunos sectores dentro de los partidos más radicales, buscaba desarrollar una representación populista que se basaba en la apelación indiscriminada al Apueblo izquierdista@ más allá de su afiliación a determinada organización social o partido de izquierda.

La representación corporativa toma fuerza en la izquierda peruana en la década de 1970 y tenía como antecedente formas similares de representación que había desarrollado el PAP en décadas anteriores. De alguna manera, era una forma de continuación de la Aintegración segmentada@, a la que se refiere Julio Cotler (1968), que desarrollan diversos sectores populares en la sociedad peruana en el curso y con posterioridad a la crisis oligárquica³¹. La izquierda radical de las décadas de 1970 y 1980, entendía la promoción de esta representación corporativa

³¹Incorporación segmentada porque era la integración, vía la lucha y la negociación, de sectores específicos al sector Amoderno@ o Acapitalista@ del Perú.

como el desarrollo de una verdadera Ademocracia de masas@, alternativa en su concretización institucional a la democracia representativa vigente en el momento. El caso más claro era del PUM que caracterizaba su lucha política como el desarrollo de Afactores de poder@, que no eran otra cosa que la hegemonía partidaria y/o izquierdista en determinadas organizaciones sociales (Partido Unificado Mariateguista 1984 y 1984a). El desarrollo de estos factores de poder debía pasar a constituir un poder alternativo a lo que se entendía como poder burgués dominante.

Ahora bien, el desarrollo de esta forma de representación no es una cuestión arbitraria en los dirigentes de IU. Por el contrario, trataba de ser la expresión de un desarrollo organizativo muy importante que diversos movimientos sociales en estrecha interacción con varios partidos marxistas y sucesivas políticas estatales de reforma social, habían llevado a cabo en las dos décadas anteriores al docenio democrático. Este desarrollo se convierte en una red de organizaciones que gesta lo más importante de la sociedad civil peruana hasta ese momento y produce millones de sujetos de derechos, conformando como diría Sinesio López (1997), una ciudadanía más social que individual. Estos nuevos ciudadanos (Lynch 1995), estaban a la búsqueda de una alternativa democrática y, en primera instancia, de un liderazgo político que la hiciera realidad. Era ciertamente difícil que nuevos actores sociales encontraran esta alternativa en un tipo de régimen democrático que no les ofrecía salidas a sus problemas y en una clase política que mayoritariamente veían distante. Los partidos radicales de IU, en cambio, ofrecen este liderazgo vía la representación corporativa de los sectores señalados, que se vendía como una alternativa que los consideraba como protagonistas, dando una orientación, entre varias posibles, a esta demanda social.

La expresión más desarrollada de esta representación corporativa en IU es la denominada Asamblea Nacional Popular (ANP). Esta Asamblea ocurre en noviembre de 1987, curiosamente en el período en que IU alcanza su apogeo electoral (ver cuadro No. 2) y su líder, Alfonso Barrantes, estaba a la cabeza en las preferencias como posible candidato para las elecciones generales de 1990, o sea, cuando su éxito democrático representativo era mayor. La ANP había tenido como antecedente dos encuentros preparatorios que se habían llevado adelante en Lima y Chiclayo, así como asambleas populares en diversos distritos de Lima donde la izquierda era hegemónica. La ANP congrega un número muy grande de delegados, aunque la cifra varíe

muchos según la fuente, para Mario Zolezzi fueron 2,364 delegados mientras que para Jaime Joseph fueron 1,105. Estos delegados provenían de organizaciones tan disímiles como sindicatos, gremios campesinos, frentes de defensa, universidades, organizaciones de sobrevivencia, autogestión y autodefensa. No todos, pero sí la mayoría de los asistentes, 85% de acuerdo con Zolezzi (1988) y 70% de acuerdo con Joseph (1988), se identificaban con algún partido de izquierda, lo que revela la incidencia de los partidos de la izquierda radical en la incipiente sociedad civil popular. Quienes tenían mayor influencia eran el PUM y el PCP, pero también tenía presencia significativa la UDP, organización que en el momento se encontraba muy cerca del MRTA y a la que muchos consideraban brazo político del mismo. Es también interesante la actitud predominante que existía en el evento. Según Joseph, se trataba de la vanguardia del movimiento popular que se movía en una lógica que iba de la radicalidad a la negociación, porque a la vez que planteaba un régimen democrático alternativo y recibía con entusiasmo el saludo del MRTA, pedía también un conjunto de reivindicaciones al gobierno. El evento, asimismo, no contó con la simpatía de los sectores menos radicales de IU, pero estos no manifestaron su abierta discrepancia por la abrumadora presencia Ade masas@ y la retórica basista que acompañaba a la ANP. No parece, sin embargo, haber existido mayor polémica ideológica sobre su realización y las soterradas discrepancias aparecían más como celos por parte del sector con menos presencia en el evento y temor de que este significara un espacio alternativo a la propia IU.

Pero los resultados de este intento de democracia alternativa no fueron significativos, ya que la ANP no volvió a tener otra reunión y su impronta más bien se diluyó en el tiempo. Un presagio, quizás, de este resultado fue el tipo de discusión que se llevó adelante en el evento. A diferencia de lo que se suponía sería el tema fundamental: el diseño, aunque fuera inicial, de un régimen democrático alternativo, el debate se centró en quién debía convocar a un próximo paro nacional. De acuerdo a lo que señalaba la correlación de fuerzas que cada quien tenía en cada organización, el PUM sostenía que debía ser la ANP y el PCP que el convocante debía ser la CGTP. En ambos casos se revelaba el interés táctico de corto plazo de cada formación partidaria más que consideraciones estratégicas de formación de algún poder alternativo.

Pero lo más significativo de este intento de desarrollo de la representación corporativa fue que se presentaba como radicalmente opuesta al Aparlamentarismo burgués@, y no como una propuesta de ampliación o apertura de la democracia representativa existente. A ello habría que agregar la persistencia de las pequeñas disputas entre los partidos radicales que viciaban incluso a la ANP como una alternativa de democracia de masas. En estas condiciones, intentos como el señalado, a la vez que erosionaban gravemente la institucionalidad democrático representativa, no significaban tampoco el desarrollo de formas democráticas alternativas.

La representación populista, centrada en la figura de Alfonso Barrantes, buscaba repetir, con éxito diverso, la forma de liderazgo de Haya de la Torre, pero con la tentación no tanto de ser líder de un movimiento de masas sino candidato exitoso a la Presidencia de la República. Nuevamente, la proyección del caudillismo populista en la ambición presidencial se convertía en la brújula del líder que entraba en escena. Barrantes tenía como ventaja sobre los partidos que promovían la representación corporativa el hecho de apelar a un universo mayor, conformado por los ciudadanos que progresivamente se habían venido identificando con IU y su propuesta de cambio. Pero el ámbito de desarrollo de su forma representativa era diferente generándose un paralelismo de formas de representación y casi una imposibilidad de competir por la diferente naturaleza de los criterios en juego. Esto llevaría a una grave tensión y eventual parálisis a IU que buscaría resolverse, tal como veremos más adelante, con la realización de un Congreso Nacional. En cuanto a la representación populista misma, si bien no buscaba la confrontación con la democracia representativa, su carácter desinstitucionalizado, típico del populismo, tampoco favorecía la consolidación del régimen en curso.

A los problemas derivados del tipo de intermediación desarrollada se agrega un grave problema estructural: la progresiva desaparición de los movimientos sociales más importantes que constituyeron la base social izquierdista. Me refiero sobre todo a la clase obrera urbano-industrial, que había sido líder de las grandes movilizaciones populares de la década de 1970, sufriendo luego la suerte del tipo de industrialización que le había dado origen; pero también a la empleocracia estatal que languidece junto con el empobrecimiento del aparato estatal que la procrea (ver cuadros Nos. 18 y 19) e incluso al campesinado andino que pasa a otros quehaceres una vez conseguido su pedazo de tierra o ser atemorizado por Sendero Luminoso. Estas bases

tradicionales de asentamiento izquierdista decrecen al mismo tiempo que se produce un crecimiento significativo del denominado sector informal de la economía (ver cuadro No. 20), donde el trabajo político es más difícil y el discurso izquierdista muy distante de la naturaleza y la problemática de estos sectores. Esto no significa que la izquierda no incursione e incluso promueva el desarrollo de otros movimientos sociales, como son las organizaciones de sobrevivencia, para enfrentar el hambre producto de la crisis, pero ya no se trata de movimientos "ofensivos"³² que podrían aspirar a afirmar la presencia de un nuevo actor social -los gremios sindicales- con carácter relativamente permanente, se trata más bien de movimientos "defensivos" cuya aspiración fundamental es enfrentar una situación de emergencia, por más que esta emergencia, por la profundidad de la crisis, pueda durar varios años.

³²La diferencia entre movimientos sociales "ofensivos" y "defensivos" establecida por Charles Tilly (1978) es fundamental para evaluar la consistencia del tejido social que este movimiento desarrolla.

Este conflicto entre discurso y práctica lleva a varios de los dirigentes de IU a desarrollar una doble moral y un doble lenguaje, en actitud que se justificaba por la idea de que el cambio era más importante que la democracia, a diferencia del ánimo ciudadano, que se expresa en sucesivas elecciones y manifiesta la esperanza de que el régimen democrático pudiera traer un cambio social. La doble moral y el doble lenguaje encuentran, según Santiago Pedraglio³³, su mejor ejemplo, en los líderes de los partidos más radicales de IU que fueron elegidos parlamentarios y se dedicaban persistentemente a criticar la institución parlamentaria, a pesar de haber luchado denodadamente por ocupar los primeros puestos en las listas de candidatos de tal manera que pudieran garantizar su elección. Estos dirigentes al ejercer una oposición desleal (Linz 1978) a la democracia erosionaron de forma tal las instituciones del régimen político que contribuyeron en forma importante a su progresivo desprestigio frente a la ciudadanía.

Este comportamiento político que buscaba satisfacer reivindicaciones puntuales de clientelas específicas, más que organizar la lucha política por el gobierno nacional afianza la posición de poder en relación con el aparato estatal de los líderes que se convierten en intermediarios. Pero haciendo, según señala Javier Diez Canseco, una intermediación ineficaz, porque las soluciones que se conseguían eran efímeras. En estas condiciones, continúa Diez Canseco, la ideología y el programa son una coartada para abrirse determinados espacios de representación. Paradójicamente así, para muchos de estos políticos izquierdistas el poder ya no nace del fusil sino de su ubicación en la lista de candidatos al parlamento y eventualmente en el aparato del Estado.

4. Entre la denuncia y la propuesta.

En este rol de oposición ¿podemos considerar que IU tenía propuestas políticas sobre los grandes problemas nacionales? Aquí es importante diferenciar entre la actitud de los políticos y la actitud de los intelectuales que adhieren a IU. En los políticos, en particular en los líderes más radicalizados que son los que van a terminar caracterizando al frente, la actitud era de denuncia

³³Santiago Pedraglio fue sub-secretario general del Partido Unificado Mariateguista entre 1984 y 1988.

más que de propuesta política. Esta actitud comienza con la denominada "moción roja", ya aludida, en la primera sesión de la Asamblea Constituyente de 1978 y continúa con la consigna de "juicio político a la dictadura" (en alusión al gobierno de Morales Bermúdez), para traducirse a lo largo de la década de 1980 en múltiples denuncias de corrupción y atentados contra los derechos humanos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, que hacen de los parlamentarios izquierdistas los miembros más destacados de las comisiones de investigación del Congreso Nacional. No es que no existieran corrupción y atentados contra los derechos humanos sino que la labor de oposición se focaliza en estas denuncias prestando menor atención a la necesidad de propuestas específicas para la solución de problemas concretos. Esta actitud de denuncia surge de la convicción de la inviabilidad de la democracia, al menos tal como estaba legislada en la Constitución de 1979, por lo tanto había que mostrar los abusos que a su amparo se podían cometer. Al respecto Javier Diez Canseco nos señala:

Yo creo que la democracia liberal o constitucional existente no era un espacio de alianzas capaz de dar una respuesta a la crisis del país, para ponerlo de otra manera, era la crisis de esa democracia donde estaba la base de todo el caos del país, era la inoperancia de ese régimen de gobierno@

En los intelectuales adherentes, cuya contribución a la imagen e influencia políticas de IU va a ser definitivamente menor, sí va a existir una gran preocupación por desarrollar propuestas políticas. Ello se va a traducir, principalmente, en dos momentos: entre 1984 y 1985, cuando se prepara el Plan de Gobierno de Izquierda Unida para las elecciones generales de 1985, y en 1988, cuando se desarrollan los trabajos preparatorios para el Primer Congreso de Izquierda Unida, llevado adelante a principios de 1989. Sin embargo, el producto desarrollado en ambos momentos, si bien se traduce en propuestas políticas específicas en múltiples campos, no lleva a cambiar la dinámica política de IU para hacer una oposición en base a alternativas concretas. En algunos casos porque se trata de propuestas que no tenían la correlación social y política de fuerzas necesaria para ser llevadas adelante, en otros porque respondían a esquemas ideológicos

que mostrarían su caducidad pocos años más tarde y en casi todos porque el simple hecho de hacer propuestas iba a contracorriente del estilo de denuncia que caracterizaba al frente.

En estas condiciones podemos decir, por ejemplo, que IU no tenía una política económica alternativa realista para afrontar la crisis que progresivamente fue empeorándose en el período democrático. Ello no quiere decir que no tuviera opinión, generalmente en contra, de la política económica de los gobiernos que se sucedieron en el período democrático, en particular en contra de los ajustes recesivos y de la influencia que en ellos tuvo el Fondo Monetario Internacional. Esto no significa tampoco que alguna instancia, como fue el caso de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno, no tuviera opinión sobre cuestiones económicas. Tanto en el trabajo desarrollado para las elecciones de 1985, como para el Congreso de 1989, se prepararon documentos donde se esbozó una visión de la economía de claro corte anti-capitalista que promovía una "planificación concertada y obligatoria" y la intervención del Estado para reordenar la acción de los agentes económicos y poner por delante el bienestar popular. Lo que señalamos es que este trabajo por sus características inherentes, así como por las características del mismo frente, careció de la eficacia política necesaria.

Es difícil también poder señalar que IU tuvo una política definida frente a Sendero Luminoso. Se caracterizó más bien por la duda. La raíz de esta ambigüedad era ideológica, como ya señalamos la mayoría de los partidos de IU se declaraban marxistas-leninistas, es decir, compartían una matriz de pensamiento con Sendero Luminoso, lo que no quiere decir que fueran lo mismo ni que fueran capaces de desarrollar prácticas terroristas, como sí lo hacía Sendero Luminoso. Es más, la opción de participación electoral en el régimen democrático que estos partidos toman de 1978 en adelante, lleva a que algunos de ellos, o fracciones dentro de estos partidos, evolucionen a una posición realmente democrática. Sin embargo, la convicción anti-sistema persistiría a lo largo de toda la década de 1980 como la característica definitoria de IU.

Esta concepción anti-sistema identificaba democracia representativa con capitalismo y señalaba al régimen democrático como una de las cuasas y no como el camino de salida de la crisis del país. La convicción anti-sistema llevaba también a una suerte de "complejo de culpa" frente a los grupos que se habían alzado en armas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), porque estos sí se habían atrevido y los marxistas-

leninistas dentro de IU no lo habrían hecho. Pero esta ambigüedad va cediendo paso en el curso de la década a actitudes democráticas, sobre todo producto de los asesinatos que Sendero Luminoso lleva adelante de dirigentes populares, muchos de ellos cercanos o militantes de partidos de IU. Sin embargo, el camino de IU no es solo de apertura y democratización, importantes formaciones dentro del frente como el Partido Comunista Peruano y el Partido Unificado Mariateguista, sufren más bien procesos de endurecimiento, que los llevan a prepararse para una eventual insurrección que felizmente no llevan adelante.

Para Izquierda Unida, en un primer momento, la violencia política constituirá una "guerra de minorías" que oponía a las fuerzas de seguridad, por un lado, y a Sendero Luminoso y el MRTA, por otro. Esta idea los lleva a tomar una "tercera posición", señalando que el principal enemigo no era el terrorismo sino la pobreza y que había que luchar por "una paz con justicia social", sin entender la especificidad del fenómeno terrorista y la necesidad de eliminarlo para que pudiera existir democracia. Carlos Tapia señala que esta idea de la "pobreza" como el enemigo principal de IU es introducida por los denominados "crisitanos de izquierda", reforzando de esta manera el paradigma marxista-leninista que oponía el logro de la justicia con la democracia representativa. Y agrega:

A...para la izquierda el problema principal no es Sendero, el adversario principal no es Sendero, estos serían parte del pueblo que están equivocados. La idea era que en algún momento nos encontraríamos en la lucha final por la captura del poder con ellos. Con esa postura ideológica y sin abandonar programáticamente el tema de la dictadura del proletariado, era bien jodido pedir un plan de izquierda que considerara a Sendero adversario principal en la confrontación armada.@

Esta idea es la que origina los grupos de derechos humanos, que nacen en su mayoría de canteras izquierdistas, como árbitros en una guerra de minorías para evitar que se cometan abusos entre las partes en conflicto, en particular para evitar que los organismos de represión estatal cometan abusos contra los combatientes de los grupos subversivos o la población civil indefensa. En estas condiciones era muy difícil que los militantes izquierdistas de base pudieran

visualizar a los grupos terroristas y en particular a Sendero Luminoso, como enemigos de la democracia. Esta debilidad permite, sobre todo a Sendero Luminoso, penetrar bases otrora bastiones de partidos de IU e intentar imponer su dominio. Es recién en este momento, a fines de la década de 1980, cuando la militancia de IU empieza a sentir en carne propia los embates del terrorismo, que la actitud empieza a cambiar. Este cambio de actitud tendría dos expresiones muy significativas. Por un lado un efecto más bien indirecto, en el cambio de actitud de los grupos de derechos humanos, que pasan a considerar que la defensa de los mismos tiene un carácter universal, sean los afectados terroristas, población civil o miembros de las fuerzas de seguridad., y por otro, el convencimiento de la izquierda, a inicios de la década de 1990, de la necesidad de una política de pacificación que fuera consenso entre los diversos sectores políticos. Pero, esta última consideración, vital para una fuerza democrática que lucha contra el terrorismo, solo llega a convertirse en una certeza en las filas izquierdistas pocos meses antes del golpe de estado del cinco de abril de 1992.

5. La incapacidad de dirección política.

La falta de políticas frente a temas de fundamental importancia para la democracia y el país no hace sino reflejar en IU, más allá del "corsé" revolucionario que estrecha su horizonte, una crónica incapacidad de dirección política. Esta incapacidad de dirección se expresa en las instancias de conducción nacional en una aguda disputa entre el caudillo-mediador, Alfonso Barrantes y los jefes de los pequeños partidos integrantes de la coalición. En un primer momento los jefes de los partidos buscan a Barrantes como mediador entre las diferentes facciones radicales por ser este un conocedor de su discurso y sus personalidades y tener fama de una honestidad a toda prueba. De mediador pasa a director de debates y de allí a candidato, probablemente la única opción de los partidos para ponerse de acuerdo. Por su éxito como candidato es que Barrantes se convierte en líder y aquí es donde empiezan los problemas. Al ser primero un candidato exitoso y luego alcalde elegido de la ciudad capital Barrantes se siente expresión del voto izquierdista independiente, que superaba largamente a la militancia de todos los partidos juntos y se convierte de hecho, como señala Manuel Córdova, en el primer

independiente, cualidad por la que es particularmente apreciado por la ciudadanía. El éxito electoral lo lleva también a querer convertirse en jefe, cuestión que no le toleran los jefes de los partidos radicales que se sentían, todos, los creadores del liderazgo barrantista, cuyo objetivo -así lo racionalizaban- era electoral pero no revolucionario, a diferencia de cada uno de ellos, que sí habrían estado llamados a dirigir a las masas a la revolución. Alfonso Barrantes como político venía del Partido Aprista y tenía como modelo de líder a Haya de la Torre, a cuya imagen y semejanza pretendía un reconocimiento como jefe, en los términos indiscutidos e indiscutibles de Haya. Sin embargo, ni tenía las cualidades carismáticas del líder aprista ni IU era como agrupación política similar al PAP, ni los jefes de los partidos estaban dispuestos a imponerse un gran jefe y convertirse, quizás, en "cola de león".

Henry Pease, señala que en el Comité Directivo Nacional de IU no llega a haber una discusión y decisión colectivas de los problemas que se tratan, que Alfonso Barrantes solo tomaba decisiones si estaba de acuerdo con la mayoría, de lo contrario no tomaba decisiones y empezaba un trabajo de consultas con los jefes de los partidos que frecuentemente llegaban a un punto muerto. Sobre ello puntualiza la siguiente dinámica:

ACada uno hace su juego para tener a su lado a Barrantes y cada uno intriga con Barrantes contra el otro@.

Esta dificultad para construir una dirección colectiva imposibilitaba la construcción de IU como una sola unidad orgánica, llámese esta "frente revolucionario de masas", como querían los partidos, o "partido" como deseaban algunos optimistas y el propio Barrantes en algún momento. Además, si bien Barrantes demuestra cualidades de mediador y popularidad electoral, carece de vocación de poder y capacidad de gobierno. Esto se demuestra en sus interminables dudas sobre la suerte del gobierno municipal que preside, en su falta de ánimo para encabezar las lides electorales, sobre todo la municipal de 1986 y la general de 1990, en las que prácticamente no hace campaña y en su incapacidad para liderar IU en el proceso hacia su Primer Congreso Nacional.

Curiosamente, esta evolución de mediador a director de debates, de allí a candidato exitoso y finalmente a intentar convertirse en jefe, se ve toda modelada por la ambición de ser Presidente de la República. Sin embargo, esta ambición no es otra cosa que un espectro vacío porque Barrantes carece, como ya señalamos, de determinación para estar a la altura de sus ambiciones. Nuevamente, como en Belaúnde y García, aunque sin tener la experiencia de gobierno de estos, Barrantes es cegado por la posibilidad de acceder a la presidencia. Una vez más, el tipo de régimen presidencialista distorsiona gravemente las proyecciones políticas del liderazgo y contribuye a impedir la formación de una dirección sólida y democrática en una organización política.

Barrantes, sin embargo, en un primer momento por pragmatismo, olfato político y su inclinación personal a la moderación y luego por creciente convicción, empieza a abandonar las tesis revolucionarias y se inclina más y más por la democracia. En esta actitud lo acompañan, con alguna mayor elaboración, algunos partidos moderados, sectores minoritarios de los otros partidos y algunos intelectuales. Este viraje inicial, sin embargo, no logra convertirse en la identidad del frente por la oposición de los partidos radicales a un cambio de discurso y la contradicción en que caen algunos de los grupos democratizadores, que proclamaban la necesidad de democratizar el frente "de la boca para afuera", pero que no se atrevían a dar los pasos concretos para llegar a esa meta. Los partidos radicales consideraban que había que prepararse para la revolución y no para la democracia por lo que despreciaban en el fondo cualquier intento democratizador, pero no podían oponerse a ello públicamente porque debían cuidar su base electoral. Los moderados, al mismo tiempo, tenían temor a que se identificara su intento democratizador con "darle armas al enemigo" por lo que actuaban con suma cautela.

El mayor intento de democratización lo encabezó Henry Pease y la Comisión Organizadora del Primer Congreso de IU. Bajo el principio de Aun militante un voto@ esta Comisión trató de cambiar los principios de representación populistas y corporativos que predominaban en el frente por un principio de representación ciudadana. Para ello, buscaron carnetizar a todos los simpatizantes de IU y hacer un Congreso que eligiera a una dirigencia representativa de la militancia izquierdaunidista y no de los partidos de IU. Este formidable esfuerzo llevó a constituir comités de IU en todos los departamentos del Perú y en buena parte de

las provincias, empadronando y entregando carnets a aproximadamente 130,000 militantes del frente. Permitió, asimismo, realizar eventos de base y departamentales en casi todo el país, para finalmente realizar el Congreso a fines de enero de 1989. En este evento se reunieron a más de 3,500 delegados, de los cuales 70% habían sido elegidos por comités de base, 25% correspondieron al cupo de los partidos y el resto a las comisiones nacionales de IU. El Congreso, sin embargo, fue totalmente dominado por la dinámica de los partidos sin permitir la expresión de las bases del frente de manera independiente. Al mismo tiempo, el aplastante predominio partidario motivó la ausencia del líder de IU, Alfonso Barrantes, quien sospechando los problemas que sobrevendrían optó por mantenerse alejado del evento. Aunque varios observadores de la época señalan que esta ausencia fue precisamente uno de los factores de la hegemonía de los partidos, en particular de los más radicales. Esto llevó a una polarización entre quienes querían integrar a IU a la lucha democrática y quienes querían prepararla para la lucha armada. Al final, los últimos se impusieron, paradójicamente aliados con quienes habían sido el fiel de la balanza: el grupo cristiano de izquierda, lo que motivó la ruptura del frente y el retiro de los partidos moderados.

Ni siquiera este proceso democratizador pudo romper con las clientelas propias de cada agrupación, desarrollándose lo que Alberto Adrián llama una "ficción de democracia" donde todos acudían a determinado evento, comisión o plenaria con su propio contingente y nadie cambiaba de opinión sean cuales fueren los argumentos que se esgrimieran. Algún tiempo más tarde, hasta el propio Pease tuvo que formar otro pequeño partido para defender sus puntos de vista. Tenemos entonces que la imposibilidad de desarrollar virajes programáticos y orgánicos impiden a IU asimilar su experiencia en la democracia representativa para convertirse en una agrupación democrática.

En lo que se refiere a establecer alianzas con otros grupos políticos, distintos a si mismos, la reticencia en IU es altísima. Santiago Pedraglio nos señala al respecto:

AUna de las faltas de seriedad de la izquierda es que no pacta, que no sabe pactar. Un acuerdo dentro de la izquierda no duraba un par de horas. Si así era adentro, imagínate afuera@.

Y Carlos Ferrero agrega, desde otra orilla, que este fue uno de los problemas fundamentales de la izquierda en la década de 1980. El dogmatismo marxista llevaba a hacer un análisis estrictamente clasista de los demás grupos políticos tachándolos de "enemigos de clase". Esta visión desacartaba cualquier posibilidad de alianzas con partidos como Acción Popular o el PPC y volvía harto problemática la relación con el PAP. Alfonso Barrantes y algunas otras minorías, que en distintos momentos intentan democratizar IU, son quienes más insisten en la necesidad de hacer alianzas fuera del campo de las izquierdas. Una primera iniciativa es la del propio Barrantes cuando propone, luego de la elección de Alan García, la necesidad de un "frente anti-terrorista", planteamiento que tocaba una de las contradicciones más hondas de IU, pero que por lo mismo urgía resolver. El planteamiento, sin embargo, fue violentamente rechazado por la mayoría de los partidos de IU, tachándolo de reaccionario y de buscar la unidad con los militares que violaban los derechos humanos. Un segundo planteamiento fue esbozado en "Amauta", vocero del PUM, que entre 1986 y 1987 tuvo una significativa influencia de la minoría de ese partido. Allí se levantó la necesidad de un "Acuerdo Nacional", que hacía precisiones a la propuesta de Barrantes pero también intentaba ir más allá de la izquierda. Corrió, sin embargo, igual suerte que el anterior. En ambos casos se trataba de planteamientos que apelaban a otros sectores democráticos para ver la forma de salvar a este régimen político. Los radicales en cambio, si pensaban en algún frente lo hacían no para defender la democracia sino para enfrentar lo que ya calificaban (en la época de García) como un gobierno cívico-militar y transformar el régimen político en otro que se suponía no iba a tener los problemas de la democracia representativa.

Barrantes, por su parte, intentó en los primeros años del gobierno de Alan García desarrollar una relación personal con este que, eventualmente, diera paso a una alianza política. Sin embargo, Barrantes entendió esta relación con García como un reemplazo a la ya maltrecha relación que mantenía con la mayoría de los partidos de IU, representados en el Comité Directivo Nacional, creyendo que la fuerza del frente residía principalmente en su liderazgo personal y que recomponer sus relaciones con los partidos era poco menos que una pérdida de tiempo. Este tipo de relación con el entonces Presidente de la República no le produjo réditos políticos

significativos y más bien le abrió un flanco permitiendo que la derecha, en claro repunte a partir del intento de estatización de la banca, lo asociara permanente con García y los fracasos de su gobierno.

Pero, a pesar de sus problemas internos, IU con el liderazgo de Alfonso Barrantes, mantiene una presencia política muy significativa entre 1987 y 1989, a tal punto que muchos analistas pensaron que sería gobierno en 1990. En junio de 1987, en una encuesta sobre posibilidades electorales, Barrantes como su candidato natural se mantiene en segundo lugar, con el 20% de las preferencias detrás de Luis Alva Castro que tiene el 27%; en enero de 1988 pasa al primer lugar con el 34% superando tanto al posible candidato del FREDEMO, Mario Vargas Llosa, que va al segundo lugar con 24%, como a Alva Castro que queda tercero con el 17%; en octubre de ese mismo año Barrantes está en el 32% de las preferencias contra 29% de Vargas Llosa y 10% de Alva Castro (ver cuadro No.34) . Sin embargo, su popularidad cae drásticamente luego del Congreso de Izquierda Unida y la división de IU ocurridos en 1989. La percepción popular al respecto es contundente, en encuesta llevada adelante en agosto de 1989 (ver cuadro No. 35) el 55% de los interrogados señala que la causa principal de la crisis de IU son rivalidades personales, dejando para un segundo lugar las discrepancias ideológicas con un 34%. Esto va a repercutir en las preferencias electorales, en abril de 1989 las preferencias de Barrantes están en 27%, para pasar en octubre de 1988 al 14% y terminar sacando en abril de 1990, como candidato de una de facciones izquierdistas nada más que el 4.7% de los sufragios (Tuesta 1995). Definitivamente, los problemas internos que terminan en la división de IU sellarán la suerte tanto del frente como de su líder, que pasa de virtual ganador a ocupar el quinto lugar en las elecciones que dos años antes parecía le darían victoria.

Un elemento catalizador de estos problemas internos, aunque muchos lo hayan querido ver como la causa fundamental y hasta única de la crisis izquierdista, fue la caída del muro de Berlín y el colapso comunista en Europa Oriental. Digo esto no por un efecto orgánico inmediato en las formaciones izquierdistas, como sí lo tuvo la polémica chino-soviética a principios de la década de 1960, sino por su influencia en el cambio del sentido común de la población que ya venía sufriendo los embates de otros fracasos. La crisis del comunismo definitivamente pesa, pero como contexto e influencia político-cultural más que como causa directa de la crisis de IU.

Aunque parezca contradictorio, quizás si el rotundo fracaso del gobierno aprista de Alan García, que también encarnaba la necesidad de cambio; no tanto por el fracaso mismo, que la izquierda pudiera haber utilizado electoralmente, sino por su rotundidad, afectan más las posibilidades de IU que el colapso comunista.

**CUADRO N1 34: PREFERENCIA ELECTORAL SEGUN CANDIDATOS
PRESIDENCIALES, 1986 - 1990 (al 100%).**

Candidatos:	OCT 86	OCT 86	JUN 87	ENE 88	OCT 88	ABR 89	ABR 89	OCT 89	FEB 90	FEB 90
A. Barrantes	14.7	17.6	20	34	32	27	23	14	12	13
H. Pease								7	9	10
L. Alva C.			27	17	10	9	7	8	13	10
M.Vargas Ll				24	29	36	36	47	44	48
Encuestados	850	4834	680	637	631	3043	617	542	1200	621
Lugar	Lima	Nac	Lima	Lima	Lima	Nac	Lima	Lima	Nac	Lima

FUENTE: Encuestas realizadas por APOYO.

CUADRO N1 35: CAUSAS DE LA CRISIS EN LA IZQUIERDA UNIDA.

CAUSAS:	AGOSTO DE 1989
RIVALIDADES PERSONALES	55.0
DISCREPANCIAS IDEOLOGICAS	34.0
DISCREPANCIAS PROGRAMATICAS	6.0
OTROS	1.0
NO SABE/NO CONTESTA	4.0

FUENTE: Encuesta realizada por APOYO a 335 personas en la ciudad de Lima, durante el mes de Agosto de 1989.

Izquierda Unida, la agrupación a la que parecía no importarle la eficacia inmediata de sus propuestas ni la posibilidad de encontrar aliados, termina autoeliminándose producto de sus propias contradicciones internas. Pero lo más interesante es que estas contradicciones no parecen ser, solamente, ideológicas o programáticas, sino, sobre todo, contradicciones de carácter

personal entre la ambición de los diferentes liderazgos, grandes y pequeños, que no encuentran suficiente lugar para cada uno en el mismo frente.

La conducta presentada lleva a considerar a IU como una fuerza desleal a la democracia legislada en la Constitución de 1979. Su creación en 1980 es una superación organizativa de la dispersión que observa la izquierda en la segunda mitad de la década de 1970, pero no significa una autocrítica ideológica del tipo de postulados revolucionarios, inspirados en el marxismo-leninismo, que guían a este frente. Para IU la democracia no pasa de ser un régimen político que le permite una acumulación de fuerzas en pos de objetivos que suponían, no solo la trascendencia de la Constitución de 1979, sino la destrucción de las instituciones legisladas en la misma. Las fuerzas políticas y personalidades que dentro de IU pretendieron conducir al frente hacia el logro de una democracia avanzada, usando para ello las propias instituciones democráticas existentes, nunca llegaron a constituirse en la fuerza principal de conducción ni tampoco ganar para sí la simpatía del pueblo izquierdista que había hecho de IU su identidad política. De esta forma, IU encarnó la paradoja de ser al mismo tiempo expresión de la democratización de la sociedad peruana y agente principal de la erosión de la democracia representativa, tal cual conocimos a esta última en la década de 1980.

VII. Los que golpean desde afuera

1. Partidos revolucionarios antisistémicos

En este capítulo me refiero a los partidos revolucionarios antisistémicos: Sendero Luminoso y el MRTA. No se trata de un análisis de estos partidos en su conjunto, sino tan solo de su efecto en el incipiente sistema de partidos que se desenvolvían en la legalidad democrática y que son el objeto principal del trabajo. Me refiero a ellos como partidos revolucionarios antisistémicos, tomando la definición de Giovanni Sartori (1992), no porque no hubieran otros partidos revolucionarios en el período, de hecho así se reclamaban la mayoría de los partidos de IU, sino porque la actividad fundamental de estos partidos estaba dedicada a subvertir abiertamente el sistema democrático en funciones desde fuera del mismo, mientras que los otros que se consideraban revolucionarios se desenvolvían dentro del sistema democrático. Además, califico el carácter antisistémico de los dos partidos señalados, como revolucionario antisistémico, para diferenciarlos también de otras fuerzas antisistémicas, tanto de izquierda como de derecha, que se desenvolvían dentro de la legalidad democrática.

Pero, ¿por qué considerarlos partidos? A lo largo de los doce años de vigencia democrática y más todavía luego del golpe de estado del cinco de abril, una abundante literatura, principalmente periodística, ha insistido en negar el carácter partidario de estos grupos. La naturaleza revolucionaria antisistémica, sus métodos abiertamente violentos y la caracterización terrorista de los mismos parece haber cegado a muchos analistas sobre el evidente carácter político de su acción, más allá del acuerdo o el desacuerdo con la misma. Estos son indudablemente partidos, porque se ajustan a la definición de tales como organizaciones que buscan el poder político, tratan, desde su particular punto de vista, de agregar y articular intereses e influyen en la situación en curso. El que tengan una altísima carga ideológica, eleven a una categoría casi divina a sus líderes, usen métodos terroristas y su acción conduzca al aislamiento y no a la agregación de intereses, no los hace menos partidos que los otros, sino sencillamente

diferentes y ciertamente no democráticos y anti-democráticos. Es más, una de las características centrales que define a una agrupación como partidaria, el contribuir a darle forma -positiva o negativamente- a la vida política de un país, está definitivamente presente en estos partidos, por más que su acción contribuyera a la inviabilidad del régimen político desde el punto de vista de la consolidación de la democracia. A tal punto fueron factor decisivo, que llevaron a que el escenario de la política como guerra dominara al escenario de la política como democracia, revelando la incapacidad de los partidos legales para lidiar con la influencia subversiva y determinando que la impronta violentista se convirtiera en elemento central de la ruptura del orden democrático.

Su carácter revolucionario antisistémico, además, agrega un elemento especialmente polarizante en los conflictos del período. No se trata solo de la existencia de fuerzas centrífugas que polarizan el conflicto desde dentro sino también de estas fuerzas que estimulan el proceso centrífugo desde afuera. Es imposible entonces entender la dinámica del régimen democrático si no se señalan las relaciones entre las fuerzas de fuera y las de dentro y la interacción que también se establece entre la democracia y la guerra.

Sin embargo, esta resistencia de los medios de comunicación y muchos líderes políticos a llamar partidos a estos grupos quizás pueda rastrearse con más éxito en el plano subjetivo. Me refiero a la resistencia a aceptar a los subversivos como agrupaciones políticas que formaran parte de la realidad peruana, por más que fueran una expresión especialmente perversa de la misma. Algo así como, en referencia que tomo prestada de una de mis lectoras, la dificultad de reconocer al Abebé de Rosemary@³⁴ de la política peruana encarnado particularmente por Sendero Luminoso. Es importante considerar esta resistencia subjetiva en varios de los actores de los ochentas porque ella en buena medida sería uno de los factores que impediría el arribar a consensos democráticos que permitieran una política de pacificación eficaz en el período.

³⁴"El bebé de Rosemary@ es una película en que la protagonista queda embarazada del demonio y finalmente da a luz a su hijo. La referencia es exagerada pero ilustrativa para entender el rechazo y la dificultad de aceptación que genera lo perverso de la propia sociedad en que uno vive.

2. Guerra y democracia.

Pero quizás el hecho que más claramente establezca la influencia de estos partidos revolucionarios antisistémicos sea la constitución de dos escenarios en el período de estudio: el escenario de la política como democracia y el escenario de la política como guerra (López 1990). La ineficacia y ambigüedad de los actores políticos democráticos permite que surja, además del escenario natural del régimen democrático, otro escenario distinto que está caracterizado por el enfrentamiento violento de los actores que lo conforman. Es decir, los partidos revolucionarios antisistémicos no sólo son grupos que desafían con las armas en la mano a la democracia, sino que logran, con la participación de unas Fuerzas Armadas que carecían de entrenamiento democrático, la constitución de un escenario alternativo, que a la larga contribuiría a terminar con la democracia.

Ahora bien, el escenario de la guerra no aparece de la noche a la mañana, ni es solo producto de las fuerzas directamente involucradas en el conflicto militar. A contrapelo de lo que muchos creen, el escenario de la guerra es producto también de la continua irresponsabilidad de los actores políticos democráticos, entendiendo por irresponsabilidad su incapacidad para actuar sobre los problemas fundamentales con alternativas creíbles. Se trata de una irresponsabilidad que tiene dos características, primero, su incapacidad, en el gobierno y en la oposición, para desarrollar una política coherente y eficaz para enfrentar el fenómeno subversivo, y segundo, la abdicación progresiva de la autoridad política del gobierno democrático que pasa finalmente, en cuanto a conducción de la lucha anti-subversiva se refiere, a manos de los militares. Esta abdicación se produce no sólo por la estrategia militar de guerra sucia@ que desarrollan las Fuerzas Armadas sino también por el abandono civil de los campos no militares del conflicto. Esto hace que la subversión pase de ser un problema local y/o regional a convertirse en un problema nacional. Una vez configurado el escenario de guerra como un escenario alternativo, cuestión que podríamos fijar en el período que va de la masacre de los penales, en junio de 1986, a la realización del I Congreso de Sendero Luminoso a principios de 1988, la dinámica que se constituye es una de progresiva ganancia de terreno de la guerra en desmedro de la democracia. De la soberbia de la democracia a la que no le importa la guerra mientras no la sienta en sus

narices, pasamos a una democracia asediada por la guerra y que finalmente es tomada por la misma. Pero este asedio y finalmente toma, no es solo la pretensión subversiva, de Sendero Luminoso y el MRTA, de que sus propósitos finalmente se impongan, sino la hegemonía final de los actores de la guerra: subversivos y Fuerzas Armadas sobre los actores democráticos, para marcar definitivamente al escenario de la política como un escenario que evite la competencia y resuelva los problemas a través del enfrentamiento.

¿Cómo se avanza en la constitución de este escenario de la guerra? Más allá de los condicionantes estructurales de la violencia que dan el contexto al conjunto del período, me parece importante resaltar el papel que cumple la voluntad de los actores. Primero, se gesta la posibilidad de tal escenario por la decisión de los dos grupos que inician la lucha armada, Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos escogen la oportunidad y la forma de lucha. Segundo, la respuesta del régimen democrático que permite con sus errores el desarrollo del escenario de la guerra. Y, tercero, la autonomización del conflicto respecto del régimen democrático, originada por la respuesta militar de la democracia, que se caracteriza por conceder el control político de buena parte de la población y el territorio a las Fuerzas Armadas. Esto lleva a que los militares controlen en 1991, uno de los momentos de mayor intensidad de la guerra interna, el 55% de la población y el 39% del espacio geográfico nacional (ver cuadro No. 22)³⁵.

La actitud de los actores democráticos va del desconocimiento del fenómeno en el segundo belandismo, similar, por lo demás al desconocimiento que ostentaban las fuerzas de seguridad en el momento, a la ambigüedad práctica del gobierno aprista que oscila entre la destitución de los jefes militares y la masacre de los penales, hasta la ambigüedad ideológica ya anotada de IU. El desconocimiento y la ambigüedad se traducen en ineficacia desaprovechándose así la debilidad intrínseca de los movimientos subversivos, sobre todo en sus inicios. Se trata, además, de una debilidad subversiva consecuencia de no ser producto de movimientos sociales específicos, o como señalan Sinesio López (1987a) y Carlos Iván Degregori (1985), de hacer

³⁵Es importante al respecto diferenciar entre el impacto que tiene el control militar del territorio en una ciudad como Lima, donde reside el 30% de la población, y en una provincia, por ejemplo, como Huamanga. En la primera, si bien en determinadas zonas se producen rastrillajes y un importante control militar, en la mayor parte de la ciudad la presencia militar no es tan significativa. Mientras que en Huamanga, como en la mayor parte de zonas del interior, los militares se convierten en la autoridad máxima y absoluta del lugar, teniendo el impacto de la guerra otras dimensiones sobre la vida social y política.

una guerra que no tiene continuidad con ninguna política práctica. O sea de una debilidad estratégica que hubiera permitido, de contarse con una política informada y mínimamente coherente, el rápido aislamiento de los grupos en cuestión. La pérdida de esta oportunidad inicial permite la expansión del asentamiento de los grupos armados y finalmente la constitución de un escenario alternativo.

Ahora bien, ¿podría haber sido factible una política antsubversiva eficaz por parte de la democracia como régimen político? En los primeros años de la guerra quizás el desconocimiento del fenómeno, producto de la fragmentación de las élites políticas peruanas, no lo hubiera permitido, pero desde la etapa final del gobierno de Belaúnde en adelante, año 1984, la falta de una política consensual fue más fruto de la interacción destructiva entre los actores democráticos, que alimentaba la incomunicación con los militares, que de una falta de elementos para elaborar una alternativa de política.

3. La incidencia de los grupos armados.

Sendero Luminoso y el MRTA son formaciones políticas de origen distinto y que responden a tradiciones diferentes dentro de la izquierda peruana. De allí que su concepción de la lucha armada y de la estrategia a desarrollar para alcanzar sus objetivos sea también diferente. Además, es preciso remarcar que su importancia es también muy diferente, según Carlos Tapia (1995), si los medimos en términos de militantes en armas Sendero Luminoso llega a ser cinco veces más grande que el MRTA. Sendero Luminoso es una organización maoísta que procede del tronco del antiguo Partido Comunista Peruano, cuya concepción de revolución y de lucha armada toman, por lo tanto, como modelo a la Revolución China. El MRTA es una organización que proviene de la denominada corriente de la nueva izquierda, que aparece en los años sesenta al influjo de la revolución cubana y que se expresa en la época en organizaciones como Vanguardia Revolucionaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, procediendo buena parte de los cuadros del MRTA de esta última tendencia política.

Sendero Luminoso adopta una versión particularmente fundamentalista del maoísmo que lo lleva a considerarse el centro de la revolución mundial. Esta concepción autocentrada hace que

no busque aliados sino súbditos y no reconozca otras organizaciones sociales que las que él mismo promueve, desarrollando una política no solo agudamente dogmática sino también especialmente sectaria. Esta concepción se traduce en su relación con el régimen democrático, busca su destrucción simple y llana, para reemplazarlo por una dictadura revolucionaria de partido único y, más exactamente, de una jefatura que Asabe@ lo que debe hacer. Esto hace que su relación con otros grupos políticos u organizaciones sociales sea inexistente, salvo, como nos señala Carlos Tapia, para informar, advertir y amenazar, a los que no cumplen con sus dictados. La relación de Sendero Luminoso con la democracia era entonces una relación de enfrentamiento total, no reconocía aliados que estuvieran dentro de este régimen y los despreciaba e insultaba a todos³⁶. Es más, prolongaba esta conducta en su relación con el otro grupo insurgente, el MRTA, al que consideraba un agente de la izquierda legal y con el cual en varias oportunidades tuvo enfrentamientos armados.

Sendero Luminoso desarrolla la lucha armada entre 1980 y 1992 a través de sucesivas etapas que sintetiza en varios planes militares, que se suponía le debían permitir pasar de lo que ellos llamaban Adefensiva estratégica@ al Aequilibrio estratégico@ y finalmente a la Aofensiva estratégica@ contra las fuerzas del orden. Inician la lucha armada en mayo de 1980 y un grave error en la contraofensiva militar de 1983-84, cuando las Fuerzas Armadas entran a reprimir con prácticas de exterminio masivo el fenómeno subversivo, les permite exapandir su radio de acción fuera de su ámbito original en el departamento de Ayacucho. Tienen un segundo período de expansión entre 1988 y 1992, en el momento de crisis del gobierno de Alan García, de elección de Fujimori y de debilitamiento general del régimen democrático. Este segundo momento es el que los lleva a la ilusión de lograr el Aequilibrio estratégico@ y creer que podían tomar las ciudades y particularmente Lima. Este es el período que termina con la captura de su líder Abimael Guzmán en setiembre de 1992. En ambos casos, se trata de momentos de expansión que Sendero realiza usando exclusivamente la fuerza, es decir, la intensificación de la guerra contra la democracia. Su concepción militarista se suma a factores antes señalados y ello los lleva a la

³⁶Es interesante al respecto la calificación de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, a Izquierda Unida como Aun inmenso montón de basura@.

confianza exclusiva en sus propias fuerzas insurrectas y a menospreciar la necesidad de alianzas con otras fuerzas políticas.

Tenemos entonces que la importancia de Sendero Luminoso se debe tanto a la oportunidad para actuar que desarrollan como a la ideología que los guía. La buena oportunidad para sus propósitos tiene dos elementos. El primero, es el momento en el que aparecen, cuando se inauguraba el primer gobierno democrático luego de doce años de dictadura militar. La sociedad, tanto civil como política, estaba muy sensible a cualquier apresto represivo del Estado o, peor aún, a cualquier asomo de intervención militar en la política. Además, los militares se retiraban a sus cuarteles seguros de haber dado una salida a las tensiones políticas existentes, y, como apunta Carlos Tapia (1997), incluso sus hipótesis de guerra estaban más bien dirigidas a un conflicto externo y no a uno interno. Lo fundamental de la izquierda, por otra parte, decidía integrarse a la lucha política legal, a pesar de continuar con un discurso político de revolución armada. El segundo, es el desconocimiento, tanto de los militares como de los políticos que llegan a la Presidencia de la República, de las características de los grupos armados, en especial de Sendero Luminoso. Fernando Belaúnde, como ya señalamos, los trata primero como abigeos y luego de la misma manera que a las guerrillas de 1965. Alan García confía en que sus promesas de cambio van a desaparecer a la subversión. Los militares aplican sus antiguos manuales de principios de los años sesenta producidos en el auge de la guerra fría. Pero ninguno de estos actores, que tuvieron poder para diseñar una estrategia distinta al principio de la guerra interna, acertan en su perspectiva. Quizás la muestra más dramática de esta situación es que recién en 1989 el Ejército Peruano publicó un nuevo Manual de Lucha Contrasubversiva, en el que resumía sus experiencias y formulaba un giro en la estrategia.

En cuanto a la ideología, este es un elemento que asume particular importancia en el desarrollo de Sendero Luminoso. Se trata de un grupo que convierte los principios ideológicos en creencias sobrenaturales, es decir, en religión, y los encarna en la persona de su líder: Abimael Guzmán. Esta versión religiosa de la ideología marxista encuentra terreno fructífero en primer lugar en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, donde una élite intelectual provinciana y mestiza (Degregori 1989) no encuentra los canales de movilidad social adecuados para realizar sus aspiraciones laborales y profesionales. En las palabras de Degregori son los

hijos engañados que buscan la espada de la verdad para vengarse de su desgracia. El anteponer estas ideas vengadoras a una realidad carente de recursos materiales es lo que lleva a la constitución de una organización que endiosa la voluntad de sus militantes y practica la violencia extrema y el terror como ejes de su accionar.

El MRTA, en cambio, tiene una visión más pragmática de la política y en particular de las posibilidades de utilización del régimen democrático. Si bien nunca hace explícitas el tipo de relaciones que deseaba con la democracia, en diversos momentos parece que albergara la idea de negociar su ingreso a la política democrática desde el escenario de la guerra, algo así como usar las armas para conseguir reformas en vida política del país. El curso que siguió la guerrilla centroamericana, al forzar la democratización de los regímenes oligárquicos en esos países, no estaría ausente de esta perspectiva. En este sentido podríamos entender la tregua que le da al gobierno aprista recién elegido en 1985, su participación casi abierta en la campaña para el referéndum a favor de que el departamento de San Martín se convierta en región en 1990 e incluso la toma de la residencia del embajador del Japón entre fines de 1996 y principios de 1997. Hechos a los que deberíamos agregar su particular sentido de las relaciones públicas que buscaba maximizar a través de los medios de comunicación el efecto propagandístico de sus acciones.

Este sentido de la lucha armada para el MRTA se va a plasmar en diversos tipos de relación que desarrolla con los actores que están dentro del régimen democrático, en particular con IU y con el PAP. Para empezar, si bien nace como partido en 1982, su origen está determinado como una opción alternativa, armada más precisamente, a la formación de Izquierda Unida dos años antes. Pero, a pesar de constituirse en opción alternativa, mantiene el proyecto de radicalizar IU y convertirse en su Abrazo armado@. Esto lo hace a través de organizaciones que aparecen en la escena pública con posiciones que están, en diversos grados, entre el MRTA e IU. Nos referimos a organizaciones como la Unidad Democrático Popular (UDP) posterior a la fundación de IU, y a Pueblo en Marcha, que aparecen en la primera mitad de la década de 1980 y finalmente a Patria Libre, que aparece hacia el final del período democrático. Ello no quita que busque establecer contactos con partidos dentro de la propia IU, como el PUM y el PCP, a los que consideraba los más cercanos a una estrategia dual de lucha política y militar. Este

acercamiento es especialmente importante a fines de la década de 1980 cuando tanto el PUM como el PCP coqueteaban con la idea de desarrollar sus propio grupos armados.

Asimismo, intentan también un acercamiento al PAP, en especial en el momento inicial del gobierno de Alan García, con la denominada tregua de sus acciones armadas, aunque no se sabe si hubo eco a la misma en las filas apristas. De igual manera, en particular en fuentes cercanas a partidos de derecha, corrió el rumor de que Alan García habría dejado escapar a los militantes del MRTA que huyen del penal de Cantogrande a principios de 1990, sin embargo, nunca se han aportado evidencias al respecto. Este rumor era alimentado por el antecedente de la militancia juvenil aprista que tuviera uno de los principales líderes del MRTA, Víctor Polay Campos, contemporánea a la militancia juvenil del Presidente aprista Alan García. Es más, la detención de Polay durante el gobierno de García fue causa de especial preocupación, que motivó la visita del entonces Ministro del Interior Armando Villanueva al recién detenido para evitar su maltrato.

Pero la mucho menor importancia del MRTA respecto de Sendero Luminoso, hace que esta estrategia de relación con el régimen democrático sea un elemento más en el desarrollo de las fuerzas centrífugas dentro del mismo pero subordinado al impacto que tiene el accionar del grupo maoísta. Sin embargo, la fuerza, habilidad y novedad de estos grupos subversivos no nos lleva a colocar en ellos la causa fundamental del impacto que tiene la violencia política en la democracia. Parece, más bien, que el reto que suponen, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, va a revelar la incapacidad de los actores democráticos para producir respuestas adecuadas al fenómeno subversivo y no la fuerza misma de los subversivos para llevar adelante sus propósitos. Es interesante, en este sentido, ver cómo cada error u omisión de los políticos civiles lleva a un desarrollo de los grupos alzados en armas. El mejor ejemplo quizás sea la matanza llevada adelante por las Furezas Armadas en Ayacucho entre 1983 y 1984, que permitió paradójicamente la primera gran expansión de Sendero Luminoso fuera de su región de origen. Pero a ello podríamos agregar las ejecuciones extra-judiciales que se continúan a lo largo de la década, y en especial, la denominada masacre de los penales, llevada adelante durante el gobierno de Alan García.

El epílogo de del impacto de los grupos subversivos en el régimen democrático es el golpe del cinco de abril de 1992 y la constitución de un régimen político alternativo basado en la fuerza. Esto significa el triunfo del escenario de la guerra y su prolongación como un régimen de fuerza, donde el poder, como reazaba la consigna maoísta, nace efectivamente del fusil. Paradójicamente quienes decían querer que la sociedad se libere de todas sus cadenas la dejaron, con su iniciativa, más encadenada.

VIII. El reino de los independientes

1. Los independientes que se convirtieron en *insiders*.

Los independientes surgen como actores políticos relevantes el año 1989 con la elección de Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima. 1989 es un año crítico para la democracia peruana porque en él los problemas irresueltos en la década que terminaba se hacen presentes en toda su magnitud y los principales actores partidarios muestran grave incapacidad para resolverlos.

Señalar 1989 como el año en que aparecen estos nuevos actores no quiere decir que antes de esta fecha no hubieran líderes políticos que la población percibiera como independientes, en el sentido de no provenir, estrictamente, de canteras partidarias y pretender cierta equidistancia con los partidos, pero estos líderes no se ajustaban a la definición del independiente como *outsider*, es decir como un actor que desde fuera del sistema o proto-sistema de partidos busca la identificación de un universo social fragmentado con su persona y que además niega a la actividad política la posibilidad de intervención positiva para cambiar el curso de los acontecimientos. Esta condición de *outsider* es la que significará una novedad en la política peruana y la que, finalmente, propiciará un cambio de régimen político. Se considera, sin embargo, como antecedentes de los independientes como *outsiders* a dos importantes líderes de la década de 1980, Alfonso Barrantes Lingán y Mario Vargas Llosa. Tanto Barrantes como Vargas Llosa, cada cual en su momento, encabezan la oposición y aparecen como las alternativas

más probables de recambio. Pero sus lazos con los partidos y su actitud frente a la actividad política misma no los convierten todavía en *outsiders*.

Alfonso Barrantes es la primera figura del período democrático a la que la ciudadanía percibe como independiente. No tiene directamente militancia en ninguno de los partidos que conforman IU, pero constituye la figura que logra unir a múltiples facciones casi siempre en conflicto. Se constituye en el caudillo-mediador para terminar siendo el símbolo de la unidad del conjunto, es decir algo más que la suma de las partes. Barrantes busca distanciarse de los diferentes partidos y aparecer ejerciendo un liderazgo propio que se debería a sus cualidades personales. Trata de mostrar, asimismo, que a IU los problemas los traen los partidos y que él es el portador de las soluciones. Esta imagen, independiente de los partidos pero a la vez uniéndolos y encabezándolos, es apreciada por la ciudadanía que en cuatro oportunidades (tres elecciones municipales, 1980, 1983, 1986 y una elección general, 1985) lo recompensa con una votación masiva. Incluso en el ánimo popular esta imagen se traduce como la persona bondadosa a la que los muchachos apodan el "tío frejolito". Por otra parte, Barrantes no tiene un discurso anti-político ni anti-partido, ni menos contrario a la institucionalidad democrática, su pretensión habría sido, más bien, la desaparición de los pequeños partidos marxistas y la transformación de IU en un gran partido político, atendiendo a que era ésta última la identidad del electorado izquierdista y no las pequeñas capillas radicales. De igual manera, se trata de un político que, a pesar de provenir de canteras con hábitos confrontacionales, el PAP y el comunismo, tiene particular aprecio por la interacción competitiva y la negociación política, cualidades que no adornan a los independientes posteriores. Podríamos, quizás, considerarlo como un independiente que se convierte en "*insider*"³⁷ y a su futuro, para bien y para mal, al de los partidos de los ochentas.

Mario Vargas Llosa es el segundo independiente que, más a pesar suyo que Barrantes, también se convierte en *insider* en la década de 1980. El poder lo venía tentando desde años atrás cuando Beláunde, a mediados de su segundo gobierno, le ofreció el premierato. Sin embargo, el

³⁷Decimos *insider*, es decir que pertenece adentro del sistema partidario, por oposición a *outsider*, que viene de afuera del sistema de partidos.

escepticismo, propio de su particular condición intelectual, lo hizo mantenerse alejado del mismo. Su intervención en la política se da encabezando una reacción contra una medida que expresa la irresponsabilidad y el cortoplacismo mayores de la década de 1980: el intento de estatización de la banca. Ello lo hace un independiente que ingresa al juego político buscando encabezar una respuesta social, de los sectores medios y altos principalmente, a la medida. Su condición de independiente, estrictamente hablando, dura poco, algunos meses más tarde se forma "Libertad", movimiento que él encabeza y que representa, como dice Alberto Massa, "lo nuevo" de la política peruana en esa coyuntura. Pero ni Vargas Llosa pierde su peso decisivo en este nuevo movimiento ni "Libertad" se convierte de inmediato en un partido de derecha más. Se trata, por el contrario de una organización que mantiene, si cabe, una estructura abierta de movimiento, busca promover la participación política de los propietarios y profesionales acomodados y levanta, por primera vez en el debate político, ideas radicalmente neoliberales. Al mismo tiempo el connotado escritor, si bien alienta la organización democrática de su movimiento, mantiene su condición de líder y se reserva, cual jefe tradicional de partido criollo, la última palabra en los asuntos de importancia. Hay incluso alguien como Federico Salazar, integrante de Libertad en sus primeros años, que señala a Vargas Llosa como un líder convertido en rey por sus allegados, lo que nos trae a la memoria una de las definiciones weberianas de partido: la del jefe con su séquito, tan común a la política peruana.

Pero la impronta de Libertad es distante de los partidos, incluso de aquellos que serían sus futuros aliados en el FREDEMO, intentando desarrollar un estilo "transparente" en el quehacer político que le traería más de un problema durante la campaña electoral. La alianza con los dos partidos que habían ocupado el centro-derecha en los años precedentes: Acción Popular y el PPC, le es impuesta por las relaciones comunes "de clase" e incluso familiares que unían a las dirigencias de las tres agrupaciones, pero se trata de una coalición constantemente resentida por Vargas Llosa, justamente porque opaca la novedad de Libertad y su liderazgo, trayendo el pasivo de un fracaso gubernamental y de su incapacidad para establecer una interacción democrática con los demás actores políticos. Vargas Llosa, sin embargo, mantiene una imagen de limpieza personal que lo coloca por encima de las contradicciones inmediatas, tanto de su movimiento como de la coalición de partidos, tomando distancias, muchas veces públicamente,

de las posiciones más desatinadas de sus seguidores. Al respecto, es interesante la afirmación de Alfredo Torres cuando señala que el mejor momento de Vargas Llosa es cuando renuncia, momentáneamente, a la candidatura presidencial por una disputa con Acción Popular y el PPC respecto de las candidaturas a las elecciones municipales de 1989. Inmediatamente su actitud es apoyada por el público. En la coyuntura era claro que la ciudadanía lo prefería solo que acompañado de sus aliados en el FREDEMO. Es decir, apreciaba más su condición de independiente sui géneris a la cabeza de un movimiento nuevo como Libertad que su conversión en *insider*, por más que siguiera como líder, al formar coalición con dos partidos conocidos.

Sin embargo, en el momento de surgimiento como figuras políticas nacionales tanto de Barrantes, a principios de la década de 1980, como de Vargas Llosa, en la segunda mitad de la misma década, el poder, es decir la capacidad de darle forma a la vida política del país, la tenían los partidos. Esto hace que ambos líderes difícilmente hubieran podido convertirse en *outsiders*, es decir en actores políticos que convoquen a la ciudadanía por fuera del proto-sistema partidario. Ambos necesitaban de los partidos para hacer política, quizás menos de lo que ellos se imaginaban, sobre todo Vargas Llosa por el momento crítico de su surgimiento, pero eso era muy difícil concebirlo en las circunstancias que a cada cual le tocó vivir. En 1989, en cambio, la crisis estaba madura y su mención era moneda corriente en los medios de comunicación, por lo que la relación de los nuevos actores con los partidos tenía condiciones para ser radicalmente distinta.

Además, en aquellas circunstancias era muy difícil que cuajara todavía una forma de representación distinta a las que se conocían en el momento, me refiero a las representaciones populista y corporativa. Barrantes, por su parte, trataba de imitar a los liderazgos populistas conocidos y era, de alguna manera, más cercano al pasado que Vargas Llosa. Este último, en cambio, parecía más cercano a producir una ruptura en términos de representación, pero creía necesitar a las representaciones populistas conservadoras que conocía y se sentía demasiado cómodo en el entorno post-oligárquico que lo rodeaba. Por estas razones no se atrevió a inventar una nueva representación aún desconocida en el país, que pudiera incluir de manera real o figurada a un Atodos@ inclusivo.

2. El *outsider* de éxito limitado.

1989 es el segundo año de la hiperinflación con 2,775.3% y un crecimiento negativo de -11.9% (ver cuadro No. 6), el año de mayor cantidad de acciones subversivas, con 3,149 (ver cuadro No. 7) y desaparecidos con 1528 (ver cuadro No. 30) y uno de los años con más número de muertos con 2,878 (ver cuadro No. 21). Este es el año en que se muestra el fracaso del ajuste de setiembre 1988, de acuerdo con Balbi (1990) el ajuste que tuvo -entre los que se habían dado hasta ese momento- los efectos más traumáticos, por su drasticidad, sobre los ingresos de los trabajadores, reduciéndose, de acuerdo con Iguñiz, Basay y Rubio (1993) los salarios privados en un 36.3%, los sueldos privados en un 27.2% y los sueldos públicos en 27%. Este es también el año en que se inicia la ofensiva senderista por el logro de lo que esa organización denominaba "el equilibrio estratégico", que implicaba el traslado del escenario principal de la guerra interna a Lima. Pero este es también el año en que se divide Izquierda Unida, la alternativa más importante hasta el momento para suceder al PAP en el gobierno, en que el FREDEMO tiene una de sus más graves crisis cuando Vargas Llosa renuncia a la candidatura presidencial por la disputa con los partidos "tradicionales" del frente sobre las elecciones municipales y en que el desprestigio del PAP y de Alan García, en particular, se ahonda debido a la profundización de la crisis y al ataque persistente de la derecha. El agravamiento de los problemas y la aparente ausencia de actores políticos que puedan manejarlos lleva a que aparezca en el debate público el tema de la "viabilidad del país" como un asunto en cuestión que empieza a merecer la atención de los analistas.

En estas condiciones, de extrema crisis nacional, es que surge a la palestra Ricardo Belmont Casinelli, un próspero empresario de las comunicaciones y conocido conductor de programas benéficos y deportivos en la televisión nacional, que lanza su candidatura a la alcaldía de Lima y gana con el 47% de la votación. Belmont es el primer independiente que puede considerarse *outsider* porque es ajeno a los partidos y apela directamente a la ciudadanía usando sus características personales, sin ningún programa, ideología y tan solo un mínimo de organización, para producir la identificación con sus electores. Su movimiento "Obras" es una etiqueta de carácter desechable que se usa de acuerdo a las necesidades del conductor. Sinesio López (1989) llama a Belmont "hijo del desconcierto nacional", como producto, según él,

orgánico de la crisis que vivía el país en ese momento y señala que su triunfo se basa, sobre todo, en un electorado migrante del PAP (46%) e IU (30%), es decir en sectores de la ciudadanía que antes apoyaron opciones de cambio, pero que se alejan de las mismas por la debacle en que estas se debaten.

De esta manera los ciudadanos que habían optado a lo largo de la década por confiar demandas de cambio a determinados partidos empiezan a cambiar sus lealtades políticas, quizás ya no precisamente por el cambio, sino sencillamente por algo distinto al desorden de fines de los ochentas. Manuel Córdova (1990) agrega que la importante votación independiente, que tiene en Belmont a su mejor ejemplo, significa una negación de la polarización izquierda-derecha que muchos analistas hubieran querido ver en estas elecciones y que a la par que ello significa una carencia de lazos con el pasado, la falta de proyecto implica también una ausencia, pero de futuro. Como independiente, sin embargo, según Sinesio López, Belmont traería algunas virtudes, calificándolo de "positivo, juvenil, cooperante y solidario" cualidades, en particular la primera, que son especialmente apreciados en un año "negro" para el país. Lo desconocido y la ausencia de propuestas concretas empiezan a ser virtudes después de una década de promesas incumplidas por viejos conocidos. El nivel al que es elegido Belmont, de gobierno provincial de la ciudad capital, si bien lo convierte en una figura política de primer orden no lo transforma, por el momento en que esto sucede, de inmediato en presidenciable. Belmont, más bien, apuesta a Vargas Llosa en las elecciones generales de 1990, quien por lo demás, aparecía, a fines de 1989, como el seguro ganador de esa contienda. Pero, su apoyo al candidato del FREDEMO no lo "quema" con los partidos sino que es visto y presentado como el apoyo de uno a otro independiente, que por el momento corren en niveles distintos.

Belmont es el primer líder abiertamente antipolítico del período. La gente lo elige, exactamente, porque no parece político y tiene un discurso que rememora más al comentarista deportivo de fútbol que al político. Es difícil que vea en él al líder eficaz, de hecho no se caracterizó por su eficacia en su labor como alcalde de Lima, ve más al líder distinto, algo sí como un descanso frente al fracaso de la política en el período. Belmont es también el primer líder que rompe el patrón representativo anterior, inaugura la representación por identificación

directa, sin apoyo partidario alguno, que será la regla de los años siguientes. Con él podemos decir que los partidos de la época empiezan a ser verdaderamente prescindibles.

El nivel municipal, sin embargo, será algo que Belmont no podrá superar, repitiendo su exitosa actuación electoral en Lima en 1993, pero no logrando dar el salto al nivel presidencial que lo hubiera llevado a competir con posibilidades contra Fujimori en 1995 (ver cuadro No. 36). Quizás el diferente juego de poderes a nivel nacional hace insuficiente la condición de *outsider* para competir y requiere del establecimiento de alianzas ya no solo por fuera de los partidos sino incluso por fuera de la democracia. Quizás también la falta de una imagen de eficacia, crucial para el líder nacional en una época de crisis extrema, hacen imposible que de el paso siguiente a líder nacional y figura presidencial. Estamos entonces frente a un *outsider* de éxito limitado cuyas cualidades personales le permitieron triunfos municipales pero estuvieron lejos de satisfacer todas sus ambiciones.

Cuadro No. 36: Aprobación de Ricardo Belmont como Alcalde de Lima.

3. El cielo es el límite.

Pero el independiente que se va a constituir como el *outsider* por excelencia en la coyuntura será Alberto Fujimori: un ex-rector de universidad nacional (escuela particularmente dura para el aprindizaje político en el Perú) que apuesta a ser senador y termina elegido Presidente de la República. Para el efecto cuenta, al igual que Belmont, con un movimiento que tampoco supera el carácter de etiqueta: "Cambio 90" y por el que se interesa solo en época de elecciones. Sin embargo, a diferencia de Belmont, es un antipolítico que si tiene experiencia política, aunque esta se restringiera al ámbito universitario, y que, además, entra en una dinámica de interacción utilitaria, aunque fuera indirectamente, con los partidos primero, sobre todo con el PAP, y con los militares después, para conseguir sus fines presidenciales.

En su sorpresivo triunfo junta elementos que van de lo estructural a lo episódico tales como la agudización de los problemas fundamentales de la década y la incapacidad de los actores partidarios para constituirse en alternativas de recambio viables, que ya señaláramos líneas arriba. A ello agrega el admirable manejo de las contradicciones que surgen en el curso de las dos vueltas electorales y el apoyo del gobierno saliente, en particular de sus servicios de

inteligencia, en su desesperado afán por derrotar a Vargas Llosa. Fujimori se convierte así en una alternativa de identidad popular para sectores mayoritarios por el fracaso de quienes habían asumido esta representación en los años anteriores. La agudización extrema de los problemas de crisis económica y violencia terrorista, que la población atribuye a erróneas decisiones de los gobernantes, van a reorientar el ánimo de cambio que inaugura la década y lo van a reemplazar por una búsqueda de orden y seguridad que, como lo demostrarán sucesos posteriores, la ciudadanía persigue prácticamente a cualquier precio.

Este triunfo electoral de un personaje prácticamente desconocido tres meses antes de las elecciones es ayudado por el sistema electoral de corte presidencialista, que no incide en la importancia de la organización partidaria ni de la alternativa programática, sino en la imagen personal del candidato y el mensaje muy general que esta proyecta. Si el tipo de régimen presidencialista había ayudado al triunfo de caudillos partidarios como Belaúnde y García, en el caso de Fujimori su influencia es aún mayor, porque a las facilidades que este tipo de régimen le da a la proyección de su imagen personal no se agregan el apoyo de una tradición, una maquinaria política ni menos una ideología siquiera medianamente elaborada.

Además, Fujimori no sólo es un *outsider* distinto sino también un *outsider* que aparece como eficaz, justamente la característica que le permite ser un líder de nivel presidencial. En este sentido se convierte en un líder salvador, en un momento de aguda crisis general donde la ciudadanía necesitaba una figura de este tipo, que presentara soluciones y pareciera tener la voluntad de querer llevarlas adelante. Aparece así, en su sentido pleno, un nuevo tipo de representación política en el Perú, la representación por identificación, pero no de un colectivo, sea como masa indiferenciada o como agregado ciudadano, sino la representación por identificación de los individuos atomizados que huyen de la tragedia de la fragmentación social sintiéndose reflejados en un caudillo que no soporta mediaciones y se asume como su mejor intérprete.

La hiperinflación y la recesión, que acompañan a la crisis económica (ver cuadros Nos. 6 y 19), las dificultades de una respuesta sindical a la misma, sobre todo después del ajuste de 1988 (ver cuadro No.5) y el crecimiento de la informalidad (ver cuadro No. 20), generan las condiciones para que se produzca la identidad del *outsider* con individuos que viven en una

sociedad en agudo proceso de fragmentación. En esta sociedad fragmentada las organizaciones pertenecientes al mundo "formal", como los sindicatos, pierden vigencia, apareciendo redes de comunicación entre las gentes que les permiten sobrevivir y reproducirse pero que no responden más a las antiguas formas de canalización de demandas de la sociedad al Estado vía los partidos políticos (Grompone 1991a, Franco 1991).

En estas condiciones la incapacidad de quienes aparecían en la coyuntura como las alternativas más viables para el recambio del gobierno aprista: IU y el FREDEMO demuestra a los ojos del público las gravísimas carencias de los partidos como actores políticos que pudieran responder a las exigencias del régimen democrático y es un catalizador de primer orden para el triunfo de Fujimori. La crisis de funcionamiento de los partidos tiene un giro hacia crisis final, o lo que López (1995) y Tanaka (1995) llaman colapso, con el fallido intento de estatización de la banca en 1987, pero esta crisis final tardaría en expresarse de acuerdo a la dinámica, errores e intentos de recomposición de cada formación política. Incide primero en el PAP, como partido de gobierno, también en IU a pesar de su popularidad e incluso en el FREDEMO cuya imagen se pensaba que era inmejorable.

El caso más clamoroso en este sentido es el de IU, hasta mediados de 1989 la carta más segura para el reemplazo del PAP y portadora de la última esperanza de cambio en democracia en el período. En IU la incapacidad para manejar las contradicciones internas que finalmente la llevarían a la división es vista por la ciudadanía como manifestación de una incapacidad mayor para conducir los destinos del país, llevando a que ninguna de las fracciones resultantes despertara la confianza del electorado. Descartada IU se cierra también la promesa de cambio en democracia que habían acompañado al régimen político desde los años de la transición de 1978 en adelante. En cuanto al FREDEMO, a la mezcla de lo nuevo, representado por el candidato y su movimiento, con lo conocido, representado por los partidos que habían fracasado en el gobierno, se agrega la distancia étnico-social que se desarrolla por la composición, el estilo y el discurso "pitucos" de la coalición que aparecen como impuestos al resto de la ciudadanía, quizás como una actitud inconsciente de "reconquista" frente a un país que parecía se les iba de las manos. Ambos elementos producirán una honda desconfianza que se extenderá al proyecto neo-liberal agresivamente enarbolado por este frente y lo llevará a la derrota, en segunda vuelta,

frente al recién aparecido. Descartadas la promesa de cambio, por el fracaso de García y la división de IU y la necesidad de proyecto por la debacle de las dos alternativas anteriores y la derrota del FREDEMO, queda la política peruana como terreno expedito para lo desconocido que por alguna razón produzca simpatía entre sectores importantes de la ciudadanía.

Fujimori hará en cada momento de la campaña electoral lo que más le convenga para conseguir los objetivos que persigue, adelantando una actitud pragmática que lo caracterizará más adelante. Siempre ahorrará precisiones programáticas en sus discursos pero señalando que está, en términos generales, por el "no shock", es decir, manifestando su disconformidad con las políticas de ajuste económico que preconiza el candidato del FREDEMO y con las que la ciudadanía parece estar mayoritariamente en desacuerdo. El perfil del candidato opuesto al ajuste económico es la única característica, por negación, de su pensamiento político electoral que junto con su imagen personal le permitirán la victoria en los comicios generales. Así se afirma Alberto Fujimori como el *outsider* victorioso que sabe aprovecharse de las crisis de los demás a pesar de su falta de programa -en positivo- y de mensaje de futuro. Terminan los tiempos de esperanza colectiva y empiezan los de la sobrevivencia individual.

4. *Outsider* + poderes fácticos: de coalición de gobierno a régimen político.

Una vez elegido Fujimori, como político perspicaz fogueado en los predios universitarios, se da cuenta que necesita fuerza para gobernar. Sin partido propio ni un claro apoyo de sectores sociales organizados, la necesidad de fuerzas que sustenten su gobierno se convierte en una cuestión crucial. Ya como presidente electo y siguiendo los consejos de los asesores que se le acercan realiza dos acciones fundamentales: traslada su centro de operaciones al "Círculo Militar", donde recibe la influencia directa del alto mando de las Fuerzas Armadas, y emprende un viaje a los Estados Unidos para tomar contacto con los directivos de la comunidad financiera internacional. Como conclusión de ambas acciones resuelve apoyarse en los militares para enfrentar el problema de la guerra interna y en las organizaciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de la tecnocracia y los empresarios ligados a los mismos, para enfrentar el problema de

la crisis económica devenida en hiperinflación. Ambos apoyos, en principio, le dan la fuerza suficiente para ser gobierno, pero, como grupos de interés que son, recibir su apoyo implicaba adoptar sus propuestas para la solución de los problemas señalados. Ello significa, en el caso de los militares, no solo entregarles la conducción total de la lucha antiterrorista, sino hacerles problemas por los abusos en términos de derechos humanos, sino además tomar conocimiento del denominado "Plan Verde" (Oiga Nos. 647 y 648, 1993) que contendría un plan de gobierno para 20 años, elaborado por un sector de las Fuerzas Armadas en las postrimerías del gobierno de Alan García, para un eventual golpe de Estado y una reorganización autoritaria del país. El golpe no se habría llevado a cabo ante el surgimiento de Vargas Llosa y el FREDEMO y ahora con el nuevo Presidente electo la idea era cooptarlo al proyecto. En el terreno económico, asimismo, el apoyo significaba obtener a cambio la aplicación en su integridad, de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales señalados. Esto último implicó asumir el programa neoliberal planteado por el FREDEMO y aplicar el ajuste económico, directamente contra lo manifestado en la campaña electoral.

Una vez conseguidos los apoyos necesarios Fujimori tenía un gobierno con políticas claras, aunque prestadas, frente a los dos problemas fundamentales que afrontaba el país³⁸. Al inicio de la aplicación de estas políticas tiene un apreciable apoyo ciudadano, tal como podemos observar en el cuadro No. 37. Es más, si bien no gozaba de mayoría parlamentaria propia, como si la habían tenido Belaúnde y García, podía fácilmente formar una mayoría parlamentaria, en especial en el terreno económico, que apoyara sus políticas neo-liberales. Esto se demuestra con la concesión, en abril de 1991, por parte del Congreso, de facultades extraordinarias para legislar en materia de pacificación, inversión, empleo y reforma del Estado. Facultades, por lo demás, con las que ya habían contado, en su momento, tanto Belaúnde como García, llevando a que el mayor número y lo más importante de las leyes aprobadas en el período democrático fuera por

³⁸El establecimiento de políticas claras y la existencia de una voluntad decidida a llevarlas adelante le permite en el corto plazo ciertos éxitos a Fujimori, en particular en el terreno económico, donde a pesar del alto costo social infligido, se logra abatir la inflación. En el campo de la lucha anti-subversiva también se producen avances significativos como resultado del apoyo presidencial a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en este terreno es también cierto que se continuaron políticas establecidas en años anteriores (Tapia 1995), producto de la experiencia de las propias fuerzas armadas y policiales y de un mayor protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de autodefensa.

este conducto (ver cuadro No. 38). Sin embargo, Fujimori no parece contento con las mayorías parlamentarias que forma ni con las facultades extraordinarias que se le otorgan, por el contrario, manifiesta repetidamente en público su aversión a la negociación con los diferentes grupos políticos y señala la necesidad de negociar como un impedimento al normal desenvolvimiento de la labor de gobierno. Asimismo, desarrolla un permanente ataque al Poder Judicial, denominando a su local "palacio de la injusticia" y a los jueces y fiscales "canallas y chacales".

Cuadro No. 37: Aprobación de Alberto Fujimori como Presidente de la República.

CUADRO N1 38:)QUIEN LEGISLA EN EL PERU?

	1980-85	1985-90	1990-95*
PODER EJECUTIVO			
- Decretos Legislativos	348	265	176
- Decretos-leyes ****			745
PODER LEGISLATIVO			
- Leyes *****	1071	990	335
Orígen parlamentario	212**		84***
Orígen gubernamental	463**		144***
Total de normas con jerarquía legal	1419	1255	1256

* Entre agosto de 1990 y el 31 de mayo de 1995.

** Entre agosto de 1980 y agosto de 1984.

*** Entre enero de 1993 y mayo de 1995.

**** Del 6 de abril al 30 de diciembre de 1992. Llevan número de ley.

***** Incluyen resoluciones legislativas que ratifican tratados, acuerdan pensiones de gracia y viajes presidenciales. Llevan número de ley.

FUENTE: CCD Dirección de Desapacho Legislativo. Publicado en Caretas, el 5 de octubre de 1995.

El punto de conflicto viene cuando en noviembre de 1991 el gobierno, en uso de las facultades extraordinarias para legislar que le había dado el Congreso, promulga 126 decretos legislativos. Esta avalancha legislativa del Ejecutivo produce conmoción en el Congreso, la oposición y el país en general. En particular por los dispositivos relativos a los problemas de la pacificación. El Congreso observa, en uso de sus atribuciones, aproximadamente el 20% de estos decretos, formando una Comisión Multipartidaria que, con la presencia del Primer Ministro Alfonso de los Heros, procede a su revisión. En un trabajo paciente y con la -supuesta- aprobación del Poder Ejecutivo, vía el presencia del Primer Ministro, se van modificando los decretos con especial énfasis en la inclusión del poder civil en la conducción de la lucha anti-subversiva. Asimismo, y dada la experiencia de la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo, el Congreso aprueba una ley que regulaba las atribuciones normativas del Presidente de la República. Por último, la Comisión Bicameral de Presupuesto logra, por primera vez en el período democrático, aprobar el Presupuesto de la República por unanimidad, siendo posteriormente este Presupuesto aprobado por el pleno del Congreso. A esto se agrega la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales de varias de las reformas neoliberales aprobadas y la negativa del Fiscal de la Nación de acusar a Alan García ante la Corte Suprema. Fujimori responde observando las leyes aprobadas y atacando reiteradamente al Congreso, en particular por los altos sueldos (2,500 dólares mensuales) que estarían ganando los parlamentarios. De igual forma, se niega a entrevistarse con los presidentes de las cámaras, ambos miembros de un partido conservador y que apoyaba su política económica como el PPC. Lo interesante, sin embargo, es el alto apoyo popular que tiene en sus críticas al parlamento (ver cuadro No. 39). En una encuesta llevada adelante en el mismo mes de diciembre de 1991, el 72% de los limeños entrevistados lo apoyan, pero en esa misma

encuesta (ver cuadro No. 40) el 79% piensa que las críticas están encaminadas a mejorar la institución parlamentaria y no a cerrarla.

CUADRO N1 39: CRITICA DE FUJIMORI AL PARLAMENTO.

OPINION:	DIC 1991
APRUEBA	72
DESAPRUEBA	21
NS/NC	7
TOTAL	100

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima a 519 personas, en diciembre de 1991, por la empresa APOYO. La pregunta fué: Aprueba o desaprueba el estilo de Fujimori de criticar al parlamento?

CUADRO N1 40: INTENCIONES DEL PRESIDENTE AL ENFRENTARSE AL PARLAMENTO.

OPINION:	DIC 1991
MEJORARLO	79
CERRARLO	13
NS/NC	8
TOTAL	100

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima a 510 personas, en diciembre de 1991, por la empresa APOYO. La pregunta fué: Cuál cree ud. que son las intenciones del Presidente al enfrentarse al Parlamento?

Dos hechos parece ser que terminan de convencerlo sobre la necesidad de terminar con la democracia: el nombramiento de Alan García como Secretario General del PAP en febrero de 1992, lo que Fujimori cree que eventualmente podría revitalizar a la oposición, y una investigación parlamentaria a miembros de su familia sobre un posible negociado con ropa usada

donada por el Japón. La agudización de este comportamiento autoritario tendría su primera culminación pocas semanas más tarde con el autogolpe del cinco de abril de 1992, decidido entre Fujimori y los militares, que según las encuestas es aprobado por la ciudadanía (ver cuadro No. 41) y lleva su aprobación como Presidente a los mayores niveles de toda su gestión (ver cuadro No. 36).

N1 41: APROBACION DE LA RUPTURA DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL.

OPINION:	ABR 92	JUN 92	AGO 92	ABR 93	ABR94
APRUEBA	70	66	60	59	59
DESAPRUEBA	18	22	30	30	34
NS/NC	12	12	10	11	7
TOTAL	100	100	100	100	100

FUENTE: Encuestas realizadas por APOYO.

Fujimori logra el cinco de abril de 1992 lo que no había podido hacer en noviembre de 1991 con la avalancha de decretos legislativos y lo que quizás había soñado, a sugerencia de ciertos asesores castrenses, desde su estadía en el Círculo Militar, a comienzos de julio de 1990: el cambio del régimen político en el Perú. Como señala Sinesio López (1995) este cambio de régimen no se pudo hacer en noviembre de 1991 por oposición de los partidos en el parlamento, que más bien intentaron una solución de consenso, pero se forzó algunos meses después por el creciente apoyo popular al Presidente y ante la perspectiva de que los mismos partidos parlamentarios endurecieran su posición de control democrático del Poder Ejecutivo.

Señalar que se produce un cambio de régimen político en el país, significa, en este caso, que la coalición de gobierno conformada por el *outsider* Fujimori y los poderes fácticos mencionados pasan a decidir lo fundamental de las políticas gubernamentales, no solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, como fue del 28 de julio de 1990 al cinco de abril de 1992, sino que deciden también lo que se hace en los ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial y en los órganos de poder descentralizados.)Por qué necesita esto la coalición de gobierno? Porque las

propuestas de los poderes fácticos no resisten el control democrático del parlamento elegido en 1990 y estos, ante la tentación del poder absoluto, no están interesados en pactar nada que no sea la integridad de sus propuestas. En el caso de los militares el asunto era cerrar la brecha entre prerrogativas y responsabilidades que apuntan Degregori y Rivera (1993), convirtiendo, como ellos señalan, las responsabilidades prácticas en prerrogativas legales. Solo esto significaba terminar con la democracia representativa porque implicaba aceptar el control militar formal de parte del Estado. En el caso de los organismos financieros internacionales, la tecnocracia y los empresarios ligados a ellos, la política neoliberal que proponen iba más allá de un cambio coyuntural e implicaba un conjunto de reformas al ordenamiento macroeconómico del país que terminaba radicalmente con la presencia del Estado en la actividad económica y abolía los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1979. Con los intereses de los poderes fácticos coincide la ambición personal de poder de Fujimori, que encuentra en esta convergencia la fuerza no solo para llevar adelante el mandato de gobierno obtenido en 1990, sino para permanecer en el poder más allá de lo que señalen las reglas escritas.

)Por qué es posible que exista en Fujimori y los poderes fácticos esta tentación del poder absoluto? Por la situación de crisis en que se encuentran los partidos políticos y el desprestigio de las instituciones democráticas, en particular del parlamento (ver cuadro No. 42). Como podemos observar, en marzo de 1992, en encuesta llevada adelante en Lima, el nivel de confianza en el parlamento era de tan solo el 17% y en los partidos del 12%, mientras que el de la Presidencia de la República estaba en alza respecto de los meses anteriores y se ubicaba en el 42%. Esta situación es reiteradamente explotada por el Presidente y los servicios de inteligencia, que se convierten desde el inicio de su mandato en parte de su maquinaria política. Fujimori se da cuenta de que cada vez que ataca al parlamento o a los partidos sube en las encuestas, situación que refleja un hondo descontento ciudadano por una década de fracasos en democracia, lo que es usado como pretexto para adueñarse de todo el poder.

CUADRO N1 42: NIVEL DE CONFIANZA EN INSTITUCIONES

INSTITUCIONES:	MAR	SET	MAR	SET	MAR	SET	SET	SET
	89	90	91	91	92	92	93	94
PRESID. REPUBLICA	23	57	29	26	42	54	60	63
PARLAMENTO	20	45	19	19	17		44	42
PARTIDOS POLITICOS	17	21	13	13	12	13	11	14
ENCUESTADOS		626	602	507	500	500	500	501

FUENTE: Encuestas realizadas por APOYO en las fechas correspondientes, en la ciudad de Lima.

En términos políticos el significado profundo del golpe de Estado es que Fujimori y los poderes fácticos pueden tener la iniciativa en el cambio de las reglas de juego institucionales. Esta iniciativa es la que les permite, a pesar del compromiso asumido en la Reunión de la OEA en las Bahamas y de la postura favorable al diálogo con los partidos de la opinión pública, en encuesta publicada en junio de 1992 (ver cuadro No. 43), no desarrollar un diálogo efectivo ni llegar a un acuerdo con los partidos para una salida conjunta a la crisis política. Esto les permite, asimismo, que el denominado Congreso Constituyente Democrático se elija en las condiciones que imponen Fujimori y sus aliados y que este sea el cuerpo que redacte la nueva Constitución. El golpe cumple así con su objetivo de cambiar de régimen político y de cambiar el centro del poder para que sean Fujimori y los poderes fácticos quienes eliminen o administren la intervención en política de otras fuerzas que no sean proclives al nuevo régimen, definitivamente autoritario.

**CUADRO N1 43: NECESIDAD DE DIALOGO ENTRE
FUJIMORI Y LOS PARTIDOS**

OPINION:	JUN 1992
A FAVOR	53.6
EN CONTRA	30.5
N. D.	15.9
TOTAL	100.0

N. D.: No hay datos sobre la diferencia porcentual.

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima por el Instituto Peruano de Economía Aplicada IPEA. Publicado en La República; DESCO, Banco de datos y documentación.

De esta manera, Fujimori y la coalición de poderes que lo apoyan se convierten en la fuerza antisistémica exitosa del período de estudio, logrando lo que no había logrado ni siquiera Sendero Luminoso: la destrucción de la democracia constitucional legislada en la Carta de 1979. Es importante cómo el *outsider* Fujimori debe prescindir, primero, e intentar eliminar, después, a los partidos políticos para cumplir su cometido. Lo que señala, que a pesar de las importantes fuerzas antisistémicas que anidan en los mismos, había necesidad de una fuerza externa a ellos y al régimen democrático en que estos partidos habían hecho una importante experiencia política, para que fuera la que le diera el golpe final a la democracia. Este carácter de fuerza antisistémica es el que llevará a la coalición golpista a la construcción de un régimen autoritario, ajeno al pluralismo y a la competencia políticas.

En estas nuevas condiciones la crisis de los partidos se agudiza al punto del colapso, tal como se demuestra en los magros resultados que obtienen en las elecciones para el CCD y en las elecciones generales de 1995 (ver cuadro No. 3). A este colapso coadyuvan, no solo las nuevas condiciones impuestas por Fujimori, sino también serios problemas que reiteran las formaciones partidarias, como su incapacidad, con antecedentes por cierto en los ochentas, de efectuar acciones unitarias, haciéndose más difícil su eventual recuperación. Como en el pasado, Cambio 90 -el movimiento fujimorista- no deja de ser una etiqueta para usos electorales, a la cual se le agrega, en la misma calidad, "Nueva Mayoría", con el fin de incorporar profesionales a las listas de candidatos del oficialismo que hubieran resentido el roce con elementos cambistas. Podemos decir entonces que luego del cinco de abril las organizaciones, ya sean partidarias o movimientos formados por independientes, tienen poca influencia en darle forma a la vida política del país. Las decisiones, como señalan parlamentarios de la mayoría oficialista entrevistados, las toma Fujimori con los representantes de los poderes fácticos, en una sucesión de círculos concéntricos, de acuerdo a la importancia de las mismas, que siempre tiene a Fujimori como eje.

Pese al vacío político existente no parece que hubiera en los antiguos partidos ánimo de reforma, dejándose más bien llevar por la inercia de lo que fueron. En cuanto a la posibilidad de que surgieran nuevas organizaciones partidarias, que expresaran formas diferentes de hacer política con respecto a la década de 1980, la esperanza podría estar en los movimientos de resistencia al fujimorismo que se desarrollan en su segundo período, específicamente a partir de 1997. En cuanto a los independientes, parece ser que las condiciones que impone el nuevo régimen político difícilmente dejan espacio para el surgimiento de otro *outsider*, de talla nacional y con una propuesta alternativa, que logre identidad con sectores importantes de la ciudadanía en las actuales condiciones de fragmentación social. Un nuevo *outsider* tendría que encontrar la fuerza suficiente para rivalizar con el actual, salvo que le dispute sus apoyos fundamentales, lo que pasaría necesariamente por una crisis, no solo de gobierno sino también de régimen y llevaría a una recomposición institucional del escenario político. La experiencia de Belmont puede ser aleccionadora al respecto, ya que se trata de un independiente que es elegido en dos oportunidades a la alcaldía de Lima, desarrollando así una importante posición de poder. A pesar de su mal gobierno municipal Belmont mantiene una significativa popularidad (ver No. 36) hasta

que decide ser candidato presidencial, desde ese momento comienzan las agresiones del Poder Ejecutivo, en la forma de recortes presupuestales, hasta que lo reducen a su mínima expresión electoral. Sin embargo, el ejemplo alternativo podría ser Alberto Andrade, también elegido dos veces alcalde de Lima, pero que a diferencia de Belmont es un independiente exitoso en el gobierno de la ciudad capital, y cuya mayor experiencia política respecto de Reicardo Belmont le ha permitido sortear mejor el acoso fujimorista, por lo que intenta proyectarse con mayores posibilidades de éxito como candidato presidencial.

)Podemos considerar a Fujimori un fenómeno totalmente nuevo producto quizás de los poderes fácticos? De ninguna manera, Fujimori es producto del fracaso de los partidos durante el período de vigencia democrática y su extrema pesonalización de la política tiene claros antecedentes en los líderes más importantes de la década de 1980, en especial en quienes encabezaron gobiernos, me refiero a Fernando Belaúnde y Alan García. La diferencia está en que Belaúnde y García desarrollaron esta personalización del poder en los marcos de su mandato constitucional, mientras que Fujimori carece de estos u otros escrúpulos a la hora de gobernar. El estilo de toma de decisiones, tanto en Belaúnde como en García, era centralizado y excluyente, teniendo como referencia de consulta obligada solo pequeños círculos íntimos, pero en pocos casos las instancias jerárquicas de sus respectivos partidos o algún mecanismo de consulta regular, dentro o fuera del ámbito institucional, con los partidos opositores. Sin embargo, sí podemos decir que existía una preocupación por la reacción que pudieran tener, dependiendo de la importancia de la decisión, los otros actores políticos. En Fujimori se reitera el carácter centralizado y excluyente de la toma de decisiones, aunque para él, a diferencia de los dos anteriores, no existan - o no debieran existir si es que aparecen- ni reglas escritas ni otros partidos o independientes cuyas reacciones eventualmente valdría la pena tomar en cuenta.

Conclusión

Mi preocupación inicial por la crisis de los partidos políticos en el Perú me llevaba a pensar que esta había sido producto de la ineficacia e irresponsabilidad de estos en el manejo de la cosa pública y que por lo tanto la explicación a la misma se encontraba en su fallida interacción para constituir un sistema de partidos. Ello me llevó a esbozar, en un primer momento, la tesis del suicidio de los partidos en el período 1980-1992. Mi tesis del suicidio era también una reacción al poco espíritu autocrítico que encontraba en los analistas cercanos a los partidos de la década de 1980, quienes, por el contrario, sostenían y quizás alguno todavía sostiene, que los partidos habían sido asesinados por la impronta de los *outsiders* o independientes, en particular por el surgimiento de Alberto Fujimori. Es más, algunos entre ellos señalaban que los partidos como tales poco podían hacer en un país como el Perú tan limitado por la determinación de sus males seculares. La tesis del asesinato me parecía, y en alguna medida me sigue pareciendo, una forma de convalidar la ineficacia e irresponsabilidad anotadas. Sin embargo, distintas críticas a este modo de pensar, en suicidio o asesinato, que a la postre no vienen a ser sino dos caras de la misma moneda porque razonan en compartimentos estancos absolutizando ora la historia ora la coyuntura, así como el curso mismo de la investigación, me llevaron por otros caminos. Había que salir del período de estudio para poder explicarlo plenamente y al mismo tiempo encontrar qué traían consigo los actores involucrados que los sobredeterminaba y los hacía interactuar de una manera específica.

Se impuso entonces la necesidad de un enfoque de síntesis. Un enfoque que articulara agencia con estructura y que nos señalara cómo lo estructural se hacía presente en la coyuntura a través de los actores mismos. El recurso para encontrar la expresión de lo estructural en la coyuntura ha sido el análisis de la representación política. El análisis de la representación como

el contenido particular de la forma de intermediación política por excelencia que es el partido. Más específicamente de la caracterización de una forma de representación política particular a América Latina: el populismo. El análisis entonces del papel histórico cumplido en el Perú por la impronta populista realizando lo fundamental del proceso de democratización conocido y de su agotamiento final por ineficacia renovadora al no haber logrado las transformaciones prometidas.

En esta perspectiva la actuación electoral de los partidos tiene una importancia subordinada en el análisis histórico-coyuntural de las formas de representación política. En este tipo de análisis se apunta a ver cómo los partidos dan o no cuenta de los problemas fundamentales que deben enfrentar, para, en última instancia observar su calidad de actores de la democracia. Los resultados electorales se convierten así en una referencia importante pero en el marco del análisis, sobredeterminado estructuralmente, de la conducta misma.

Se trata entonces de la interacción de partidos agotados que se produce en un contexto muy difícil, tanto en relación a la propia historia del país como al resto de América Latina y con la repetición de patrones de interacción anteriores fruto de la lucha anti-oligárquica. El contexto está dado por: un cambio en la composición ciudadana en relación al Perú anterior a 1968, la mantención de una profunda desigualdad social, una crisis económica que se vuelve crónica y la aparición de la violencia terrorista que apunta a destruir la democracia.

El cambio en la composición de la ciudadanía no solo significa una renovación y muy significativa ampliación de la mayoría del cuerpo ciudadano entre los sesentas y los ochentas, sino también la aparición de una sociedad civil que es hogar de una profunda democratización política, la que se va a expresar en la multiplicación del tejido organizativo de la sociedad peruana en el docenio democrático. Pero, a la par, se mantiene una profunda desigualdad social, con la particularidad de que se deteriora la participación de los sectores menos favorecidos en el PBI, mientras crecen los niveles de escolaridad y la esperanza de vida, o sea la combinación precisa para que la población exija soluciones eficaces o por lo menos serios intentos al respecto de parte de los políticos. Esto se completa con una crisis económica que destruye la demanda y tiende a volverse crónica, expresando en el fondo un cambio mundial en el modelo de acumulación que tampoco es enfrentado por los políticos. Y, por último, el reto de la violencia

terrorista que cuestiona la legitimidad del régimen democrático y pugna por constituirse en la influencia decisiva en la situación política.

Pero esta interacción entre partidos agotados se da además en términos similares a los de la democracia oligárquica, anterior a 1968. El enfrentamiento continúa siendo la característica predominante en la interacción entre los partidos, con el agravante que al enfrentamiento entre antiguas sub-culturas anti-oligárquicas se agrega la polarización ideológica, propiciada especialmente por la presencia de Izquierda Unida, y el reto de los grupos violentos que desafían al sistema desde afuera. Este enfrentamiento da lugar a un juego suma-cero, tanto entre los diferentes partidos como entre gobierno y oposición, paralizando al régimen en su conjunto. Este enfrentamiento impide, en lo fundamental, el desarrollo de políticas que ataquen los problemas de fondo, ya sea que estas se desarrollen por la competencia entre las propuestas de diversos partidos o por el consenso a que pudieran llegar algunos de ellos. El enfrentamiento subordina a la dinámica competencia-cooperación, propia de la democracia de partidos, y hace caer al régimen democrático en la ineficacia y en los peores casos en la irresponsabilidad.

Esta dinámica de enfrentamiento desprestigia rápidamente a los gobiernos y luego a todos los partidos porque el nuevo cuerpo ciudadano, producto de la sociedad significativamente democratizada, tiene menor tolerancia a la tradicional relación caudillo-masa indiferenciada, de relativo éxito en el período anterior al velasquismo. El intento, por parte de los populismos triunfantes electoralmente: Acción Popular y el PAP, en las figuras de Belaúnde y García, de repetir este esquema tiene una duración relativamente corta y un beneficio político pequeño, porque el incumplimiento de la promesa electoral ya no puede ser saldado, como antaño, con el expediente de la mera identificación carismática. Al respecto, los únicos intentos de promover la participación ciudadana en los asuntos públicos vienen de la izquierda legal, pero se quedan en el ámbito municipal refiriéndolos a reivindicaciones muy específicas o son planteados como un régimen político alternativo, tal como fue el caso de las llamadas Aasambleas populares@, que terminan debilitando la legitimidad de la democracia representativa.

El tipo de interacción y la falta de terreno común que la democracia supone lleva a que los partidos multipliquen sus actitudes de semi-lealtad y deslealtad con el régimen democrático. La falta de lealtad, asimismo, se agudiza por la tentación que suponen las fuerzas antisistémicas

presentes, tanto en la forma de poderes fácticos, teóricamente dentro del régimen democrático, como de grupos subversivos que están abiertamente fuera de él. Por el lado de los gobiernos la abdicación de su autoridad democrática, en especial en los terrenos de la seguridad y la economía, supone la entrega de esferas importantes del poder a las Fuerzas Armadas y a los organismos financieros internacionales. Por el lado de algunos de los partidos de la izquierda radical, su coqueteo con los grupos subversivos debilita en el otro extremo la legitimidad de la democracia. Esta falta de lealtad es el camino de la polarización que hace imposible la constitución de un sistema de partidos estable.

Este tipo de interacción, asimismo, destruye la posibilidad de que se formen sucesivos centros políticos, entendidos como el punto de equilibrio del sistema de partidos, en cada momento que una fuerza electoral triunfante contaba con el caudal de votos para hacerlo. Los dos populismos que llegaron al gobierno, Acción Popular primero y el PAP después, en lugar de interpretar su victoria electoral como una base para desarrollar consensos fuertes que estabilizaran al régimen político, la usaron como una carta blanca para el desarrollo del caudillismo exacerbado que supuestamente sabía y podía enfrentar solo los graves problemas que se presentaban.

Este juego suma-cero lleva a que surja primero y predomine después un escenario de la guerra que desplaza al escenario de la democracia. Una responsabilidad central en el impulso al escenario de la guerra lo tienen las fuerzas directamente involucradas, primero y antes que nadie los grupos subversivos que dan inicio a la guerra interna y luego las fuerzas del orden que los reprimen brutalmente. Pero quienes permiten el predominio del escenario de guerra y la consecuente subordinación y posterior desaparición de la democracia, son los partidos. Son estos, con su falta de eficacia para desarrollar políticas de consenso para el combate a la subversión y el uso táctico de esta ausencia para perjudicar a sus rivales, los que permiten el avance de los poderes fácticos y de los grupos subversivos.

El predominio del escenario de la guerra supone la liquidación del liderazgo político de los partidos, la creación de un vacío y la aparición de un liderazgo alternativo, el de los denominados independientes o *outsiders* cuyo mejor ejemplo es Alberto Fujimori. Los independientes y en particular Fujimori, logran identificar toda la ineficacia y la

irresponsabilidad políticas del docenio democrático con la democracia de los partidos. Asimismo, frente a la quiebra de la forma de representación populista en que se basaba esa democracia logran también establecer una representación por identificación con una imagen supuestamente ajena a la política con la que se comunicarían por semejanza y que sí tendría la capacidad, o por lo menos la auténtica voluntad, de solucionar los problemas del país. Ante el fracaso de liderazgo de los partidos y sus jefes surge entonces el liderazgo plebiscitario de una figura no política y quizás si hasta anti-política, una figura que reclama y obtiene el endoso absoluto de la voluntad popular apareciendo como el salvador no sólo de una crisis de coyuntura sino del país en su conjunto.

Este liderazgo plebiscitario de los independientes se basa en una legitimidad por resultados que subordina a cualquier legitimidad legal que el régimen autoritario quiera darse. A diferencia de la tibia legitimidad legal que adornaba a la democracia o de la más importante legitimidad carismática que espasmódicamente visitó a los líderes populistas de los ochentas, la legitimidad por resultados aparece como la forma ad-hoc de legitimidad que permite consolidarse al *outsider* Fujimori en momentos en que la población pedía orden y estabilidad ante lo que parecía el inminente peligro de perderlo todo de manera irremediable. Una legitimidad por resultados, además, que no se medía en las incómodas urnas electorales con las que el *outsider* tiene una relación contradictoria, sino a través del encargo de sondeos de opinión que van a convertir a la encuesta en la forma de expresión por excelencia de la voluntad popular en la era anti-política. Pero, sobre todo, una legitimidad por resultados que pasa la prueba de la eficacia, no porque sus propuestas lleven necesariamente a solucionar los problemas fundamentales que aquejaban al país, sino porque aparece un nuevo actor político que a diferencia de los partidos levanta propuestas creíbles y busca ponerlas en práctica. A esta legitimidad por resultados el régimen busca agregarle también una legitimidad legal, de allí que convoque a un Congreso Constituyente y promueva un cambio masivo de leyes. Pero, por el origen golpista del régimen político luego del cinco de abril de 1992, esta legitimidad legal no tiene ni de lejos la importancia de la legitimidad por resultados. A pesar de todo esto, sin embargo, una de las grandes sorpresas de esta década larga de 1980 es el alto precio que la población estaba dispuesta a pagar por volver a tener un futuro que fuera más allá del día siguiente.

El predominio del escenario de la guerra es entonces el que da origen al cambio de régimen político de la democracia de partidos al autoritarismo neoliberal. Los que triunfan en este escenario, que se suponía eran las Fuerzas Armadas de la democracia, se coaligan más bien con los organismos financieros internacionales a través del *outsider* salvador e intentan fundar un nuevo régimen basado en la fuerza aunque revestido de formalidades electorales. La fuerza, casi bruta, pasa así a ser la característica que distingue al nuevo régimen establecido.

No se trata, entonces, en el caso peruano, de la fundación de un nuevo régimen político de independientes o *outsiders*, que habrían aparecido para democratizar la política de los partidos. Se trata, más bien, de un nuevo régimen autoritario que lleva adelante una reorganización social en base a la ideología neoliberal y que usa a la figura del *outsider* para desprestigiar a la política en su conjunto. Me refiero tanto a la vieja política de los partidos como a cualquier nueva política que quiera reivindicar la intervención de la voluntad en el manejo de los asuntos públicos.

Se funda entonces un régimen no sólo anti-partidos sino también anti-político, que condena cualquier intervención directa de las formaciones políticas y el estado en la sociedad y particularmente en la esfera del mercado. Con esto no estamos diciendo que el régimen no haga política, sino que en vez de hacerla a la luz pública la hace en las sombras, buscando que los actores, cuando de tomar decisiones importantes se trata, estén lo más lejos posible de los ciudadanos. Este régimen anti-político usufructúa de los graves errores de los partidos y basa su permanencia en que no resurjan las viejas formaciones partidarias o surjan nuevas formas de hacer política, que cuestionarían su legitimidad y constituirían una alternativa con sólo aparecer como agrupaciones creíbles y capaces de ejercer influencia. La anti-política, entonces, no sólo llena un vacío sino impide que eventualmente otros lo ocupen, porque no se trata, ella misma, de un grupo más en competencia, sino de un régimen completo uno de cuyos supuestos en la ausencia de competencia.

Es difícil predecir si va a haber en un futuro próximo una alternativa capaz de reemplazar a la anti-política en el poder, pero, en todo caso, no parece que sea con una dinámica similar a la del decenio 1980-1992 que está a producirse. Fue de tal magnitud el fracaso de los antiguos partidos que sólo cabe pensar en nuevas relaciones de sentido en este quehacer que den las

posibilidades a nuevas formas de hacer política que puedan reinventar la palabra partido y volver a hacer realidad la expresión democrática de los ciudadanos en una sociedad compleja.

Creo que lo mejor es pensar el período de estudio como el final de un ciclo partidario que va de 1930 a 1992 y que tiene en el docenio que nos ocupa su último acto. Por lo demás, no es la primera vez que termina un ciclo partidario en el Perú. Con la crisis de 1930 terminó definitivamente el ciclo inaugurado en 1895, dando paso a la formación de partidos, modernos en su momento, que hoy vemos caducar. Además, al igual que parece ser en la actualidad, el ciclo anterior también terminó con un interregno autoritario: el gobierno de Augusto B. Leguía, o la dictadura del Aoncenio@, que más de un estudioso ha comparado con el régimen autoritario que encabeza Alberto Fujimori. Existen pues algunas razones para pensar que marchamos a la inauguración, si es que no estamos ya en él, de un nuevo ciclo partidario, donde quizás se podría esperar que la crisis de la representación populista y sus formas respectivas den paso a una renovada representación democrática que se exprese en nuevas o renovadas formas partidarias.

Bibliografía

Adrianzén, Alberto

- 1996 Política y antipolítica, lenguaje y globalización. *Pretextos* No.8. DESCO. Lima.
- 1993 APartidos y orden social en el Perú@ En: Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos. Lima: IEP, IFEA.
- 1992 ADemocracia y partidos en el Perú@. *Pretextos* No. 3-4. DESCO. Lima.
- 1990 AEstado y sociedad: señores, masas y ciudadanos@. *Estado y sociedad: relaciones peligrosas*. Lima: DESCO.

Alberti, Giorgio

- 1991 ADemocracy by default, economic crisis, >Movimientismo= and Social Anomie@, XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, Buenos Aires, julio.

Ames, Rolando

- 1994 ALos partidos políticos: crisis, renovación y refundación@, *Cuestión de Estado*, Año 2, núm 8-9, Lima.

Balbi, Carmen Rosa.

- 1994 Sindicalismo y flexibilización del mercado de trabajo. En: *Debates en Sociología* N1 19. Lima: PUC.

Balbi, Carmen Rosa y Julio Gamero.

1990 Los trabajadores en los 80: entre la formalidad y la informalidad. En: Autores Varios, *Movimientos sociales: Elementos para una reelección*. Lima: DESCO.

Bachrach, Peter.

1973 *Crítica de la teoría elitista de la democracia*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Bourricaud, Francois.

1989 *Poder y Sociedad en el Perú*. Lima: IEP ediciones.

Burga, Manuel y Alberto Flores Galindo

1979 *Apogeo y Crisis de la República Aristocrática*. Lima: Ediciones Rikchay Perú-No.8

Burke, Edmund

1839 Thoughts on the cause of the present discontents (1770). In: *The Works of Edmund Burke*, Boston, Little Brown, 1839, vol. 1

Cardoso, Fernando Henrique

1981 *Regimen Político y Cambio Social*. Algunas reflexiones a propósito del caso brasileño. En: *Estado y Política en América Latina*. México: Siglo XXI editores.

Cerroni, Umberto.

1993 *Hacia un nuevo pensamiento político. Socialismo, Liberalismo, Socialismo liberal*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.

Cohen, Jean L. and Andrew Arato.

1992 *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: The MIT Press.

Córdova, Manuel.

1990 Perú 1989: el desborde de los partidos. En: *Temas de Actualidad*, N1 2. Lima: IDS.

Cotler, Julio

1994 ACrisis política, *outsiders* y autoritarismo plebiscitario: el fujimorismo@. En: *Política y sociedad en el Perú. Cambios y continuidades*. Lima: IEP.

1988 ALos partidos políticos y la democracia en el Perú@. En: *Democracia, sociedad y gobierno en el Perú*. Lima: CEDYS.

1978 *Clases, estado y nación en el Perú*. Lima: IEP.

1968 ALa mecánica de la dominación interna y del cambio social@. En: *Perú Problema. Cinco Ensayos*. Perú Problema 1. Lima: IEP.

Crabtree, John.

1994 La crisis del sistema partidario peruano (1985-1995). *Apuntes* No. 35. Segundo Semestre. Lima.

Chipoco, Carlos.

1992 *En Defensa de la Vida. Ensayos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario*. Lima: CEP.

Dahl, Robert

1985 *A preface to economic democracy*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

1956 *A preface to democratic theory*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Degregori, Carlos Iván

1990 *El surgimiento de Sendero Luminoso*. Lima: IEP ediciones.

1989 *Qué difícil es ser dios*. Lima: El Zorro de Abajo ediciones.

1985 *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros*. Lima: IEP ediciones.

Degregori, Carlos Iván y Carlos Rivera.

1993 *FF.AA., Suversión y Democracia: 1980-1993*. Doc. de Trabajo N1 53. Lima: IEP.

Di Tella, Torcuato

1993 *Historia de los partidos políticos en América Latina*. México: FCE.

Duverger, Maurice.

1957 *Partidos Políticos*. México: Fondo de Cultura Económica.

Eguren López, Fernando, Janet Cano Pacheco y Alberto del Águila Alfaro

1997 *Evaluación Social del Desarrollo Humano en el Perú*. Lima: Acción Ciudadana.

Franco, Carlos.

1991 *La otra modernidad. Imágenes de la sociedad peruana*. Lima: CEDEP.

Germani, Gino

1965 *Política y Sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.

Gonzalez de Olarte, Efraín y Lilian Samamé.

1991 *El Péndulo Peruano. Políticas Económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990*.
Lima: IEP.

Grompone, Romeo

1991 *El velero en el viento*. Lima: IEP.

1991a Fujimori: Razones y desconciertos. *Demonios y Redentores en el Nuevo Perú. Elecciones 1990, una tragedia en dos vueltas*. Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone. Lima: IEP.

Hayek, Friedrich A.

1960 *The Constitution of Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press.

Hobbes, Thomas

1986 *Leviathan*. Middlesex: Penguin Classics.

Huntington, Samuel P.

1991 *The third wave. Democratization in the late twentieth century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.

Iguñiz, Javier, Rosario Basay y Mónica Rubio.

1993 *Los Ajustes. Perú: 1975-1992*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Joseph, Jaime A..

1988 AAsamblea Nacional Popular. Nuevos espacios para viejas preguntas@. Ponencia presentada al Seminario Movimientos Sociales y Estructura Política. Clacso, julio de 1988.

Karl, Terry Lynn

1996 ADilemmas of democratization in Latin America@. En: *Democracy in Latin America. Patterns and cycles*. Edited by Roderic Ai Camp. Jaguar Books on Latin America Number 10. Wilmington: Scholarly Resources.

Kruijt, Dirk

1990 *La revolución por decreto*. Lima: Mosca Azul editores.

Ikenberry, G. John

1988 AConclusion: An institutional approach to American Foreign Economic Policy@ In: G. John Ikenberry, David A. Lake and Michael Mastanduno eds. *The State and American Foreign Economic Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kirchheimer, Otto

1966 AThe transformation of the Western European Party Systems@, in Joseph La Palombara and Myron Weiner eds. En: *Political Parties and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.

Laclau, Ernesto

1977 ATowards a theory of populism@ En: *Politics and Ideology in Marxist Theory*. Ernesto Laclau. London: Verso.

Landi, Oscar

1995 AOutsiders, Nuevos caudillos y Media Politics@. En: *Partidos y Clase política en América Latina en los noventa*. Carina Perelli y otros (comp.) San José: IIDH/CAPEL.

Lasalle, Ferdinand

1976)*Qué es una constitución?* Madrid: Ariel.

Lawson, Kay

1988 AWhen Linkeage Fails@ En: *When parties fail*. Kay Lawson and Peter Merkl, editors. Princeton University Press.

Lechner, Norbert

1996 Las transformaciones de la política. *Revista Mexicana de Sociología*. Año LVIII, Núm. 1. Enero-marzo de 1996.

Linz, Juan

- 1994 Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference? *The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives*. Editado por Juan Linz y Arturo Valenzuela. Baltimore y Londres: The John Hopkins University Press.
- 1990 ATransiciones a la democracia@ En: Revista de Estudios e Investigaciones Sociológicas. Madrid, No. 51.
- 1978 *The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown and Reequilibration*. Baltimore y Londres: The John Hopkins University Press.

Linz, Juan y Alfred Stepan

- 1996 *Problems of democratic transition and consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan

- 1967 ACleavage Structures, Party Systems and voter alignments@. En: *Party Systems and voter alignments: Cross-National Perspectives*. Editado por Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan. The Free Press.

Locke, John

- 1980 *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.

López, Sinesio

- 1997 *Ciudadanos reales e imaginarios*. Lima: IDS.
- 1995 APerú: Partidos, *outsiders* y poderes fácticos en el golpe y la transición política@. Ponencia presentada al Congreso de Latin American Studies Association, Washington D.C. September 1995.
- 1994 ALos partidos políticos: crisis, renovación y refundación@. *Cuestión de Estado* No.7, Año 2. Lima
- 1991 APartidos políticos, Estado y democracia en el Perú@. *El dios mortal*. Lima: IDS.

- 1991a AEl Estado Oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación@. *El dios mortal*. Lima: IDS
- 1989 ASociedad y Estado en el Perú actual: un intento de interpretación@. Manuscrito. Lima: IDS.
- 1987 ALa otra cara del asedio@. *Cuestión de Estado*. N1 1. Lima: IDS.
- 1987a APolítica, violencia y revolución@. *El Zorro de Abajo*, No. 7, junio. Lima.
- 1985 APerú 1985: entre la moderación y la radicalidad@. *El Zorro de Abajo*, No. 1, junio-julio, Lima.

Lynch, Nicolás

- 1996 ACrisis y perspectivas de los partidos políticos en el Perú@. En: *Experimentos con la democracia en América Latina*. México D.F.: Unidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.
- 1995 Nuevos ciudadanos y vieja política en el Perú. *Socialismo y Participación* No.70.Lima
- 1992 *Para cambiar el estado. La Reforma del Congreso Nacional*. Lima: IDS.
- 1992a *La Transición Conservadora. Movimiento Social y Democracia en el Perú, 1975-1978*. Lima: El Zorro de Abajo ediciones.
- 1990 AEl carisma en el liderazgo de Haya de la Torre@. *Revista de Sociología*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. 6, No. 7
- 1980 AEl APRA y la dictadura militar@. *El APRA: un camino de esperanzas y frustraciones*. Lima: Ediciones El Gallo Rojo.

Mainwaring, Scott y Timothy Scully.

- 1995 *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.

Manin, Bernard

1992 A Metamorfosis de la representación@ *¿Qué queda de la representación política?* Caracas: CLACSO-Nueva Sociedad.

McClintock, Cynthia.

1994 A Presidents, Messiahs, and Constitutional Breakdowns in Perú@ *The failure of Presidential Democracy. The case of Latin America, vol. 2.* Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Moore, Barrington

1966 *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World.* Boston: Beacon Press.

Neuman, Sigmund

1956 A Toward a Comparative Study of Political Parties@ *Modern Political Parties.* Sigmund Neuman ed. Chicago: The University of Chicago Press.

Nohlen, Dieter

1994 *Sistemas electorales y partidos políticos.* México: Fondo de Cultura Económica.

Nozick, Robert

1988 *Anarquía, Estado y Utopía.* México: Fondo de Cultura Económica

Obando Arbulú, Enrique.

1991 Diez años de guerra antisubversiva: una pequeña historia. En: *Quehacer* N1 72, Lima: DESCO.

O'Donnell, Guillermo.

1994 Delegative Democracy. *Journal of Democracy.* Volume 5, No. 1. Washington.

1980 Notas para el estudio de procesos de democratización política a partir del estado burocrático-autoritario. *Los límites de la democracia*, tomo II . Buenos Aires: FLACSO.

O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter

1986 *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Oiga

1993a Historia de una traición. N1 647. 12 de Julio. Lima.

1993b El poder en la sombra. N1 648. 19 de Julio. Lima.

OIT

1997 Panorama Laboral >96. América Latina y el Caribe

Parodi, Jorge.

1993 *Los pobres, la ciudad y la política*. Lima: CEDYS.

1988 Los sindicatos en la democracia vacía. En: Luis Pásara y Jorge Parodi (1988) *Democracia, Sociedad y Gobierno en el Perú*. Lima: CEDYS.

Partido Unificado Mariateguista

1984 La estrategia de poder popular. Lima: PUM.

1984a El camino hacia el poder popular. Lima: PUM

Pásara, Luis.

1993 El Ocaso de los Partidos. *El Poder en el Perú*. Alfredo Torres editor. Lima: Editorial Apoyo.

Pasquino, Gianfranco.

1982 Crisis. En: *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI editores.

Perelli, Carina.

1995 "La personalización de la política. Nuevos caudillos, "outsiders", política mediática y política informal" In: *Partidos y Clase Política en América Latina en los 90*. San José: IIDH and CAPEL.

Piqueras, Manuel; G. Espinoza y C. Sotomarino (Editores)

1989 *Comisión Investigadora de grupos paramilitares. Una lucha cívica contra la impunidad*. Lima.

Pitkin, Hanna Fenichel

1967 *The Concept of Representation*. University of California Press

Pizzorno, Alessandro

1981 "Interests and parties in pluralism" En: Suzanne Berger ed. *Organizing Interests in Western Europe: Pluralism, Corporatism and Transformation in Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Planas, Pedro.

1994 *La República Autocrática*. Lima: Fundación Friedrich Ebert

Ramos Jiménez, Alfredo

1995 *Los partidos políticos en las democracias latinoamericanas*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes-Consejo de Publicaciones.

Rochabrún, Guillermo.

1994 "Crisis de representatividad o crisis de intermediación?" *Cuestión de Estado*. Año 2, No.7. Lima.

Rueschemeyer, Dietrich y Evelyn Huber Stephens and John D. Stephens.

1992 *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: The Chicago University Press.

Sagasti, Francisco, Pepi Patrón, Nicolás Lynch y Max Hernández.

1995 *Democracia y buen gobierno*. Proyecto Agenda: Perú. Lima: Editorial Apoyo.

Sartori, Giovanni.

1994 *Ingeniería constitucional comparada*. México: Fondo de Cultura Económica.

1992 *Partidos y Sistemas de partidos*. Segunda edición ampliada. Madrid: Alianza Universidad.

1968 *The sociology of parties: a critical review*. *Party Systems, party organizations and the politics of new masses*. Otto Stammer editor. Berlin: Institute for Political Science. Free University at Berlin.

Schattschneider, E.E.

1942 *Party Government*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Schmitter, Philippe.

1992 La consolidación de la democracia y la representación de los grupos sociales. En: *Revista Mexicana de Sociología*. Año LV, No. 3.

Schumpeter, Joseph A.

1942 *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper and brothers.

Stepan, Alfred

1988 *Rethinking Military Politics. Brazil and the Southern Cone*. Princeton: Princeton University Press.

1978 *The State and society. Perú in comparative perspective*. Princeton: Princeton University Press.

Tanaka, Martín.

1995 *El colapso de la democracia en el Perú (1980-1992)*. Manuscrito. FLACSO-México.

Tapia, Carlos.

1997 *Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final*. Lima: IEP.

1995 *ABalance de la lucha contrasubversiva durante el primer gobierno de Fujimori@. Socialismo y Participación N170*. Lima: CEDEP.

Thelen, Kathleen and Sven Steinmo

1992 *AHistorical Institutionalism in comparative compalitics@. Structuring Politics.*

Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Touraine, Alain.

1987 *Actores Sociales y sistemas políticos en América Latina*. Chile: PREALC, OIT.

Tuesta, Fernando.

1995 *Sistema de partidos políticos en el Perú, 1978-1995*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Vergottini, Giuseppe

1981 *AConstitución@. Diccionario de política*. México: Siglo XXI editores.

Ware, Alan

1996 *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press.

1988 *Citizens, Parties and the State*. Princeton University Press.

Weber, Max.

1979 *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica

Zermeño, Sergio.

1989 "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden". *Revista Mexicana de Sociología*. Año LI, No.4, 1989. UNAM, México.

Zolezzi, Mario.

1988 ALa Asamblea Nacional Popular: parto en el arenal@. *Quehacer* No. 59, enero-febrero. Lima.